

Las nuevas derechas

Un desafío para las democracias actuales

Omar Alejandro Bravo
Editor académico



Editorial
Universidad
Icesi

Las nuevas derechas

Un desafío para las democracias actuales

Omar Alejandro Bravo
Editor académico

Las nuevas derechas: un desafío para las democracias actuales

© Omar Alejandro Bravo (editor académico) y varios autores.

Cali. Universidad Icesi, 2020.

pp. 194; 17 x 21,5 cm

Incluye referencias bibliográficas

ISBN: 978-958-5590-48-9 / 9978-958-5590-50-2 (PDF) / 978-958-5590-49-6 (ePub)

DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/ee.10.2020>

Palabras Clave: 1. Democracia | 2. Derecha política | 3. Brasil |

4. Colombia | 5. Bolivia

Clasificación Dewey 321.4-ddc 21

© Universidad Icesi

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Primera edición / Noviembre de 2020

Rector: Francisco Piedrahita Plata

Secretaria General: María Cristina Navia Klemperer

Director Académico: José Hernando Bahamón Lozano

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: Jerónimo Botero Marino

Coordinador Editorial: Adolfo A. Abadía

Diseño de Portada y Diagramación: Ladelasvioletas - Johanna Trochez B.

Revisión de Estilo: Patricia Urbina Rivera

Editorial Universidad Icesi

Calle 18 No. 122-135 (Pance), Cali – Colombia

Teléfono: +57 (2) 555 2334 | E-mail: editorial@icesi.edu.co

<http://www.icesi.edu.co/editorial>

Publicado en Colombia – *Published in Colombia*

La publicación de este libro se aprobó luego de superar un proceso de evaluación doble ciego por dos pares expertos.

La Editorial Universidad Icesi no se hace responsable de la ideas expuestas bajo su nombre, las ideas publicadas, los modelos teóricos expuestos o los nombres aludidos por el(la) autor(es). El contenido publicado es responsabilidad exclusiva del(la) autor(es), no refleja la opinión de las directivas, el pensamiento institucional de la Universidad Icesi, ni genera responsabilidad frente a terceros en caso de omisiones o errores.

El material de esta publicación puede ser reproducido sin autorización, siempre y cuando se cite el título, el autor y la fuente institucional.

ÍNDICE

Prólogo	5.	Rafael Huertas
Introducción	9.	Omar Alejandro Bravo
Explorando las bases. Opinión pública y los sentidos de la derecha en Brasil y Colombia	13.	Juan Albarracín
El discurso del miedo como herramienta política e identitaria: los casos de Brasil y Colombia	43.	Omar Alejandro Bravo
El derecho contra el “miedo”: apuntes históricos y políticos sobre herramientas jurídicas contra “comunistas” y “disidentes” en Colombia	65.	Mario Alberto Cajas Sarria
Neoliberalismo, nueva extrema derecha y el sufrimiento psíquico	101.	Manuel Desviat
Simón Rodríguez y Paulo Freire: entre el amor y el entusiasmo en tiempos hostiles a una educación popular	127.	Maximiliano Durán y Walter Omar Kohan
Para que los “salvajes” no vuelvan al poder: Anatomía de la extrema derecha boliviana	149.	Tathagatan Ravindran y Tatiana Lizondo Diaz
¿“Brasil por encima de todo”? los nuevos rumbos de la política de acción afirmativa en Brasil	173.	Hildeberto Vieira Martins
Sobre los autores	191.	

PRÓLOGO

Rafael Huertas

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Madrid)

Cuando en la década de 1970 hablábamos de la Nueva Derecha nos referíamos a la actualización que Alain Benoist y el Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne (GRECE) realizaron en Francia de los principios de la llamada revolución conservadora (*Konservative Revolution*) del primer tercio del siglo XX. La influencia de este movimiento conservador y nacionalista ha sido diversa y ha tenido múltiples desarrollos, algunos muy alejados de sus planteamientos originales. En la actualidad, sin embargo, cuando aludimos a la Nueva Derecha estamos pensando en un fenómeno mucho más reciente y, en ocasiones, desconcertante: la irrupción de fuerzas políticas en Europa y América, que se sitúan en una franja ideológica ambigua y se presentan como una derecha moderna, diferente y regeneradora. Recogiendo cierta herencia intelectual de aquel ideario inicial, al menos en algunos casos, la Nueva Derecha ha llegado a suscitar debates académicos sobre su adscripción doctrinal, pues con frecuencia se argumenta, siempre desde sus propias filas, que esa Nueva Derecha ha logrado establecer un nuevo paradigma teórico-político capaz de superar la distinción entre derechas e izquierdas. De este modo, y a estas alturas, ya no tendría sentido identificar a la derecha con inmovilismo y con tradiciones conservadoras, ni a la izquierda con progreso y cambio social. Afirmaciones falsas y tramposas que no hacen sino maquillar un discurso, unas prácticas y unos objetivos de claro corte neofascista.

Tras la segunda guerra mundial, un sentimiento antifascista muy extendido deslegitimó a la extrema derecha durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. De ahí que esta nueva propuesta ultraconservadora se presente a veces con cautos discursos que intentan adaptarse a los tiempos presentes y esconder nostálgicas conexiones con la derecha más rancia y tradicional. Pienso que los ideólogos de la Nueva Derecha comparten con el fascismo clásico una misma visión del mundo. Con referentes culturales muy similares, consideran la existencia de una situación generalizada de decadencia de la sociedad que debe ser corregida mediante una “revolución” (conservadora) con el propósito de conseguir el “renacimiento nacional”, una suerte de “ultranacionalismo pa-

lingenético” —en palabras de Roger Griffin— que define el núcleo central del pensamiento fascista. Otros elementos de continuidad pueden identificarse en la similar concepción del ser humano (agresivo, jerarquizado y territorializado) y en la defensa de una concepción belicista de la existencia que recuerda un renovado darwinismo social.

Es cierto que en el fascismo clásico el papel del Estado (protector y autoritario) era fundamental pero la nueva extrema derecha ha sabido adaptarse bien a la actual fase del capitalismo. El comienzo de los años ochenta coincidió con la llegada al poder de una serie de gobiernos conservadores que, tanto en Europa como en Estados Unidos, marcaron el comienzo de una etapa política y económica en las que las exigencias del individualismo liberal y el mercado primaron sobre consideraciones sociales o necesidades colectivas. Las crisis del Estado del Bienestar, con el fin de las propuestas keynesianas, trajo consigo la puesta en marcha de reformas diversas, que se denominaron neoliberales y que no son sino la expresión inmediata de la reacción del sistema ante las crisis sociales y económicas de los años setenta. Como es sabido, la mayoría de los países se plegaron a las exigencias de las instancias supranacionales de un nuevo orden capitalista, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.

En este contexto, debemos destacar que las políticas neoliberales no han sido ni son exclusivas de gobiernos de derechas, sino que buena parte de la socialdemocracia ha asimilado y aceptado sus principios. No conviene olvidar que la enorme crisis intelectual y política de la izquierda, en cualquiera de sus variantes (comunista, socialdemócrata, etc.), no es ni mucho menos ajena al actual auge de la derecha más radical. En todo caso, el combate no solo es económico, sino fundamentalmente político y cultural.

Los representantes de la Nueva Derecha se ven a sí mismos como redentores o como salvadores de patrias y pueblos en decadencia, y se autoadjudican la misión de desvelar las causas de esa decadencia (la democracia entre otras) y liderar a una sociedad capaz de “regenerarse” y de reconstruir un pasado identitario supuestamente “auténtico”. Una sociedad en la que las diferencias sociales son naturalizadas y la desigualdad aparece como una categoría ontológica y axiológica que viene a definir no solo quién es quién en la jerarquía social, sino cuánto valen las personas. Se trata, en definitiva, de un retorno a los “valores trascendentes” que la izquierda no comparte y que, según lamentan, la derecha convencional no ha sabido mantener.

La Nueva Derecha oferta un nacionalismo pertinaz, y hasta fanático, que se apoya en la exaltación exagerada y contumaz de valores patrióticos y cristianos, siempre con un sentimiento de clase y de etnia que deja fuera de su “patria” a los desposeídos

y a los diferentes, a indígenas y emigrantes, a adversarios políticos y otros “traidores”. Racismo, xenofobia, incitación al odio o tentaciones autoritarias y antidemocráticas terminan aflorando, indefectiblemente, en esta nueva e intransigente extrema derecha.

Así la cosas, ¿por qué se ha producido ese impresionante viraje en el voto popular de muchos países hacia estas nuevas fuerzas políticas?, ¿por qué en los barrios obreros europeos, con un pasado de izquierda reivindicativa, la derecha populista obtiene tan buenos resultados electorales?, ¿por qué en Estados Unidos los condados más pobres optan masivamente por el Tea Party y por Donald Trump?, ¿por qué Jair Bolsonaro ha llegado a ocupar la presidencia brasileña tras un holgado triunfo electoral, a pesar de su discurso autoritario, ultraconservador y partidario de la dictadura militar?

Naturalmente, para un viejo marxista esto puede resultar hasta cierto punto incomprensible, pero es necesario ampliar el análisis. Antonio Gramsci podría darnos claves importantes para entender no solo la importancia de los medios materiales y las relaciones de producción, sino también de las ideologías y las creencias. Incluso en un sentido weberiano podríamos decir que la Nueva Derecha no aspira a cubrir las necesidades materiales de la población, lo que sería incompatible con la obtención de plusvalía y su adscripción capitalista, sino los vacíos existenciales de los votantes. Muchos ciudadanos parecen sentir que, con la crisis económica, la inestabilidad laboral, los recortes en servicios públicos, etc., no solo están perdiendo bienestar, sino también identidad. Con la Nueva Derecha la identidad colectiva (de patriotas, blancos, cristianos y respetuosos con las tradiciones) se eleva a la categoría de fetiche y se equipara con una especie de “orgullo nacional” frente a “los otros”.

Como reza el título de este libro, que me honro en prologar, las nuevas derechas desafían gravemente las democracias actuales. En las páginas que siguen Omar Alejandro Bravo ha sabido rodearse de un solvente grupo de científicos sociales que han sido capaces de analizar, a través de estudios de caso muy bien elegidos, algunas de las peligrosas consecuencias del ascenso de la extrema derecha y del (neo)fascismo en todo el mundo y, en el caso que nos ocupa, en América Latina. Solo así puede desenmascarse la falsa ambigüedad con que a veces se presenta, contribuyendo a un pensamiento crítico y a una conciencia crítica —aquella *conscientização* propugnada por Paulo Freire en su *Pedagogía del oprimido*— que resulta hoy de una necesidad imperiosa para sustentar y reforzar un imprescindible y militante sentimiento antifascista.

Septiembre de 2020

INTRODUCCIÓN

Omar Alejandro Bravo

Universidad Icesi

El libro que aquí se presenta fue posible, en parte y en lo que refiere a escenarios formales, por diversos debates y ponencias producidas en eventos académicos desarrollados en Colombia, Brasil y Rusia, principalmente, donde la cuestión del crecimiento y consolidación de las aquí denominadas nuevas derechas ocupó un volumen particular. Estos debates se trasladaron también a espacios informales de diálogo y discusión con colegas de varios países y disciplinas, siendo el denominador común la preocupación que este fenómeno político generaba, así como las varias preguntas, de orden académico – investigativo que posibilitaba.

De esta manera, fue madurando la propuesta de este libro que, por esto, tiene un carácter fundamental y declaradamente político: el de expresarse de manera crítica frente a esa situación, entendida como una amenaza al orden democrático y contribuir a entender su funcionamiento, sentido, proyección posible, aspectos discursivos y mecanismos de interpelación social, entre otras cuestiones a ser pensadas.

No se intentó aquí de construir certezas definitivas al respecto de estos varios aspectos señalados, mucho menos se pretendió ofrecer un análisis completo y abarcativo de este fenómeno; quizás, y probablemente sea ésta la pretensión mayor de este libro, se trató de abrir espacios de debate, de construir preguntas y, en algunos casos, mostrar respuestas parciales a las mismas.

En el proceso de producción del texto, muchas de las situaciones que aquí se consideran han ido cambiando: en Bolivia se impuso por amplio margen electoral un gobierno progresista, desplazando a los sectores golpistas en el poder; en Argentina se produjo también un cambio de gobierno, después del desastre económico-social provocado por las políticas neoliberales del gobierno de Macri y, en el preciso momento en que este libro entra en su etapa final de edición, sucede la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Todos estos hechos están fuertemente atravesados por un acontecimiento que interpeló y obligó a reformular políticas de gobierno y formas de relación social, como la pandemia provocada por el virus del Covid-19.

Este escenario cambiante e incierto no le quita actualidad ni sentido a los varios textos que componen esta obra; por el contrario, ese propósito ya señalado de construir interrogantes, de abrir nuevos espacios de reflexión en torno al crecimiento de las nuevas derechas (y sus eventuales avances y retrocesos) torna su lectura más pertinente, en alguna medida necesaria.

De esta manera, y en la perspectiva interdisciplinaria ya mencionada, en lo que hace a su composición, este texto abre con el prólogo del colega español Rafael Huertas, que con extrema precisión conceptual y política sitúa los temas de interés y las polémicas en torno al tema general de este libro.

El primer capítulo, de autoría de Juan Albarracín, muestra desde las Ciencias Políticas la relación compleja entre identificación ideológica y opinión en torno a ciertos temas, como el rol del Estado, la economía o la seguridad pública en Brasil y Colombia, entre otros. Los resultados de esta investigación indican que la opinión de sectores de la población de ambos países, en relación a esos aspectos señalados no pueden encuadrarse en los registros tradicionales del pensamiento de izquierda o derecha, mostrando una complejidad mayor que abre también la posibilidad de pensar las identidades políticas desde otras coordenadas e interrogantes.

El capítulo siguiente, de mi autoría y realizado desde el campo de la psicología, considera escenarios políticos similares (Brasil y Colombia), para intentar entender, a partir de discursos producidos por el uribismo en su campaña contra el plebiscito por la paz con las Farc y de Bolsonaro en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Brasil, qué mecanismos interpelativos plantea cada discurso y sus coincidencias en lo que refiere a la producción de un enemigo social imaginario y amenazante, frente al cual se presentan como única alternativa política y defensa de la sociedad.

El tercer capítulo, titulado “El derecho contra el “miedo”: apuntes históricos y políticos sobre herramientas jurídicas contra “comunistas” y “disidentes” en Colombia”, fue producido por Mario Alberto Cajas Sarria, quien desde el campo del derecho analiza la manera en que la legislación colombiana, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, respaldó la persecución a sectores políticos (definidos como comunistas, terroristas o “castrochavistas”, de acuerdo a cada época y conveniencia) con decretos y leyes que le daban formalidad jurídica y apoyo a estas acciones. Este capítulo se inscribe entonces en un espacio de reflexión de interés y actualidad, que propone un debate más amplio entre derecho, política y sociedad.

Manuel Desviat, psiquiatra español, desde la perspectiva de la salud mental, incorpora un aspecto más a este debate: el de la posible relación entre ese crecimiento de las nuevas derechas y el sufrimiento psíquico, siendo la medicalización de buena parte

de las sociedades actuales un aspecto relacionado a las políticas de control del nuevo capitalismo contemporáneo. Contra esto, se propone “una “clínica” de la resistencia, buscando aliados en los usuarios, familiares y ciudadanos para conseguir cambios en la asistencia a contracorriente y profundizar las grietas del sistema, en pos de un horizonte donde sea posible el cuidado de la salud mental, una sociedad de bienestar.”

Maximiliano Durán y Walter Omar Kohan proponen, desde su texto titulado “Simón Rodríguez y Paulo Freire: entre el amor y el entusiasmo en tiempos hostiles a una educación popular”, un retorno al pensamiento de estos dos autores pioneros y referencia de la educación popular latinoamericana, tomando distancia de cualquier repetición ritual de sus principios y actualizando su pensamiento desde la exigencia ética de enfrentar el hostigamiento que, sobre todo Freire, viene sufriendo desde sectores de poder que temen a la potencia política de su teoría.

La perspectiva antropológica se hace también presente en este texto, en el capítulo de autoría de Tathagatan Ravindran y Tatiana Lizondo Diaz, donde se analiza a la extrema derecha boliviana y sus formas de intentar evitar que los “bárbaros” vuelvan al poder. Se describen aquí con rigor y precisión aspectos económicos, raciales y religiosos, entre otros, propios de ese campo político. Cabe destacar aquí la frase final de este capítulo, que parece anunciar el cambio político que acaba de producirse en ese país: “La wiphala continúa flameando en los fuertes vientos del altiplano andino como nunca, ya que Bolivia se encuentra nuevamente en la encrucijada de la historia.”

El último capítulo, producido por el psicólogo brasileño Hildeberto Vieira Martins, analiza la situación de la política de cuotas raciales en el gobierno Bolsonaro y la manera en que los ataques que las mismas sufrieron en este gobierno hacen parte también de una política más amplia, propia de este gobierno de ultraderecha. Este capítulo incorpora entonces a este libro la cuestión racial, en una perspectiva amplia que la relaciona con aspectos sociales y políticos más generales, lo que se señala claramente en este párrafo: “El objetivo principal de este artículo es ampliar la discusión de un tema tan relevante y actual para el campo de la psicología y reflexionar sobre los efectos negativos que el retroceso de tales políticas puede acarrear para una parte significativa de la sociedad brasileña en un momento de pérdida o disminución de derechos sociales y políticos.”

De esta forma, desde estos diferentes enfoques, disciplinas y preguntas se propone este libro que, esperamos, sea del interés de los lectores y lectoras y, principalmente, contribuyan a alimentar un pensamiento crítico, necesario a los tiempos actuales.

Quedan también algunas deudas, que es preciso señalar, siendo la principal la perspectiva de género, que no pudo incorporarse a pesar de la invitación realizada a algunas colegas que trabajan en este campo. En próximas producciones relacionadas a las cuestiones y debates que este texto propone, esperamos que esta deuda pueda ser saldada, dejando sentada así la suposición pesimista de que estos fenómenos continuarán ocupando la escena política de forma significativa, mas afirmando también la necesidad y voluntad de seguir dando respuesta a los mismos.

EXPLORANDO LAS BASES. OPINIÓN PÚBLICA Y LOS SENTIDOS DE LA DERECHA EN BRASIL Y COLOMBIA*

Juan Albarracín

Universidad Icesi | jgalbarracin@icesi.edu.co

* Agradezco al *Latin American Public Opinion Project (LAPOP)* de la Vanderbilt University por darme acceso a los datos necesarios para realizar este capítulo, así como a los evaluadores anónimos por sus comentarios.

Introducción

La victoria en las elecciones presidenciales de Jair Bolsonaro en Brasil y del “No” en el plebiscito sobre la ratificación del acuerdo de paz en Colombia sorprendió a muchos analistas. En el caso brasileño, se esperaba que el fenómeno Bolsonaro se diluyera con el tiempo y diera paso a un candidato de derecha más tradicional. En Colombia, la expectativa era que un “valence issue” —es decir un tema sobre el que se supone existe un relativo consenso social— llevará a una fácil victoria del sí en el plebiscito. Sin embargo, en ambos casos la derecha más radical logra atraer, activar y movilizar a partes del electorado y ganar las elecciones.

En estos procesos electorales, es posible observar que muchos votantes que apoyaron las opciones de derecha más radicales no representan un bloque unitario, sino que se aproximan por distintas razones a estos políticos. Mientras que unos están motivados por mayor resentimiento o miedo, un sentido de pérdida relativa de la jerarquía social, o inseguridad frente a cambios sociales y culturales de las últimas décadas,¹ otros responden más a tradicionales patrones autoritarios. En esta maraña aparentemente incomprensible, es importante reflexionar sobre cómo se relacionan las opiniones sobre temas políticamente relevantes con la forma como las personas se auto-identifican en el continuo izquierda-derecha.

En este capítulo exploro el sentido que tienen en la opinión pública el ser de “derecha” o “izquierda” utilizando datos de encuestas representativas nacionales realizadas por el *Latin American Public Opinion Project* (LAPOP) en Brasil y Colombia. Aunque es común asumir que las personas tienen ideas formadas, coherentes y entre sí consistentes (ideologías) a través de las cuales interpretan el mundo político, en realidad son muy pocas las personas que alcanzan este nivel de estructuración ideológica. Más que asumir lo que debe significar ser de “izquierda” o de “derecha”, este capítulo indaga cuáles opiniones políticas pueden predecir el auto-posicionamiento de las personas en el continuo izquierda-derecha. En el texto analizo si las posiciones que tienen los encuestados frente a temas económicos (el rol del Estado en la economía), socio-culturales (apoyo al matrimonio igualitario), de seguridad pública (apoyo a penas más severas), políticos (el apoyo a la democracia liberal) y contextuales (apoyo al acuerdo de paz en Colombia y al *impeachment* de la presidenta en Brasil) tienen una relación con el auto-posicionamiento ideológico.

1. Esto se puede ver en algunos electores rurales y del “rust” belt de los Estados Unidos. Sobre esto ver el excelente libro de Cramer (2016).

En mi análisis encuentro que, contrario a lo que comúnmente se piensa pero que ha sido confirmado por estudios de opinión pública en América Latina, la posición ideológica tiene muy poca relación con posiciones sobre estos temas. En el caso de Colombia, el único factor que está significativamente asociado con la identificación ideológica son las posiciones frente a temas socio-culturales, medidas en este caso con el nivel de apoyo al matrimonio igualitario. En Brasil, el apoyo al proceso de *impeachment* de la presidenta Dilma Rousseff es el único predictor significativo de la posición en el continuo izquierda-derecha: a mayor apoyo al *impeachment*, mayor afinidad en promedio con la derecha.

Estos resultados indican que la idea de “izquierda” o “derecha” presente en la opinión pública de los dos países no refleja ideas abstractas e interconectadas sobre como entender la política. Lo que significa ser de izquierda varía mucho por contexto y puedo reflejar más un sentido de pertenencia y apego psicológico a un grupo social, en forma análoga a las identidades partidarias, que la adhesión a un conjunto de ideas. En este sentido, es poco probable que los éxitos electorales de la derecha en América Latina actualmente reflejen un cambio en las opiniones políticas de los votantes o su “derechización”.

En la siguiente sección presentaré una definición operacional de ideología —como generalmente se entiende en los estudios de opinión pública— así como un resumen del conocimiento existente sobre la relación entre las posiciones ideológicas y las opiniones políticas. Al presentar los resultados de estos estudios de opinión pública, haré especial énfasis en el estudio de la opinión pública latinoamericana. Posteriormente presentaré tanto los fenómenos de la “ola” de gobiernos de izquierda como la “contra ola” de gobiernos de derecha en América Latina. En esta sección se reflexionará sobre la diversidad de izquierdas y derechas que existen en la región, como también sobre las causas subyacentes de estas olas. Se mostrará como, por ejemplo, la ola de gobiernos de izquierda desde inicios del siglo XXI no surgió por cambios ideológicos en la opinión pública y más como respuesta a las crisis económicas en los países de la región y los percibidos pobres resultados de las políticas de ajuste. Finalmente exploro —utilizando datos de opinión pública— la relación entre posiciones frente a temas sociales y políticos trascendentales y la posición ideológica que declaran los encuestados en Colombia y Brasil.

Ideología y la opinión pública

En los estudios empíricos de la ideología existe una dificultad para acordar una definición común (Federico, 2012), en parte porque el concepto de ideología ha tenido diversos significados a través del tiempo (Knight, 2006). En el estudio de la

opinión pública, la ideología se entiende como un conjunto de valores y creencias interrelacionadas. En este sentido, es un esquema mental de amplio alcance que refleja la visión de un grupo sobre la forma ideal de organización política y social (Lewis-Beck et al., 2008; Federico, 2012; Feldman, 1988; Zaller, 1992). Comúnmente, la ideología se conceptualiza en términos espaciales en el continuo izquierda-derecha (Downs, 1957; Knight, 2006).² Sin embargo, el contenido específico de lo que se asocia con izquierda o derecha pueden variar de un país a otro.

Las ideologías proveen un marco que le permite a las personas conectar ideas sobre áreas temáticas diversas y un conjunto de principios para desarrollar opiniones. En este sentido, se puede considerar que una persona es “ideológica” cuando organiza todo su pensamiento sobre la política alrededor de este marco (Jacoby, 1991). A pesar de la ubicuidad del concepto de ideología en la ciencia política, la idea de un electorado que orienta la totalidad de sus decisiones electorales y políticas (en un sentido más general) por consideraciones abstractas y conjuntos de ideas interconectadas y en si consistentes ha sido desvirtuada por muchos estudios en el campo de la opinión pública. La evidencia sugiere que la mayoría de los individuos no expresa ideas consistentemente de “izquierda” o “derecha” o que opiniones sobre temas políticos estén interconectados (Converse, 1964; Lewis-Beck et al., 2008). Es común encontrar, por ejemplo, una alta asociación entre la necesidad psicológica por seguridad y certidumbre con el conservatismo social, pero no con posiciones favorables al libre mercado (Federico y Malka, 2018).

2. A pesar del uso común de un continuo uni-dimensional (izquierda-derecha) para conceptualizar el espacio ideológico, hay desacuerdos sobre si es posible juntar todos los temas políticamente relevantes en esta dimensión. Conover y Feldman (1981), por ejemplo, sugieren que la ideología es multi-dimensional y, por ende, el significado de lo que significa “izquierda” o “derecha” puede variar por individuo. Adicionalmente, ellos asumen que el auto-posicionamiento ideológico es el reflejo de un apego psicológico a un grupo social. Carmines et al. (2012) sugieren que la ideología en Estados Unidos debe ser pensada en dos dimensiones –una económica y una social– resultando en cuatro grupos “ideológicos”: liberales (izquierda), conservadores, libertarios y comunitarios. Si bien se puede pensar que la ideología es multi-dimensional y compleja a nivel individual, en este capítulo continuo conceptualizándola en un sentido uni-dimensional. Con esto no quiero decir que el espacio ideológico izquierda-derecha solo se define por temas económicos, como tradicionalmente se piensa. Dependiendo del contexto, otros temas sociales, culturales y políticos pueden tener un rol importante. En este sentido, la habilidad de las élites políticas de unir temas “dispares” y transfórmalos en objeto de disputa política (conflict extension, ver Layman y Carsey, 2002) bajo rótulos ideológicos uni-dimensionales es clave. Este capítulo, de carácter más exploratorio, trata de evaluar si ciertas posiciones sobre temas políticos están consistentemente asociadas con rótulos comúnmente utilizados para pensar la ideología (izquierda y derecha) y no otro menos presentes en la opinión pública (libertario y comunitario).

Sin embargo, en algunos casos se han encontrado relaciones entre la auto-identificación ideológica (en el continuo izquierda-derecha), la decisión del voto y a posiciones sobre algunas políticas públicas (Jacoby, 1991; Zechmeister y Corral, 2012). En los Estados Unidos, por ejemplo, se encuentra que entre electores muy educados y con altos niveles de conocimiento político se puede detectar posicionamientos consistentemente ideológicos frente a políticas públicas (Layman y Carsey, 2002; Zaller, 1992) y estos exhiben una mayor estructura ideológica en el desarrollo de sus opiniones políticas (Jacoby, 1991; Lewis-Beck et al., 2008). En este sentido, no es sorprendente que personas con alto grado de información y interés en la política exhiban fuertes correlaciones entre su auto-posicionamiento ideológico y posiciones frente a temas económicos, políticos y sociales (Zaller, 1992). Las élites políticas, militantes de partidos o movimientos sociales o personas con fuertes afinidades a partidos políticos tienden a pensar en términos más ideológicos. Adicionalmente, son estas élites las que conectan temas aparentemente dispares (por ejemplo, posiciones frente a los impuestos y el aborto), dándole así un sentido a etiquetas ideológicas y extendiendo así las líneas de disputa política o *conflict extension* (Layman y Carsey, 2002).

El contexto en el cual transcurre la política también importa. Nie et al. (1979) encuentran que la exposición a contenidos políticos, en particular a opciones de política pública contrastantes, posibilitan mayores niveles de estructuración ideológica de las opiniones y el comportamiento político. Se debe observar un mayor “ordenamiento” ideológico en el electorado en ambientes polarizados donde las élites políticas ofrecen señales (“*cues*”) claras a los ciudadanos sobre su alineamiento político. Son estas élites las que definen qué significa ser de “izquierda” o de “derecha”. Además de la polarización, otras características de la competencia política tienden a afectar el grado en el cual el auto-posicionamiento ideológico es un buen predictor sobre posiciones políticas o la decisión del voto. Zechmeister y Corral (2012), por ejemplo, encuentran que la institucionalización de los sistemas de partidos —es decir el nivel de volatilidad entre las opciones partidarias en contienda— y la fragmentación de estos sistemas —donde existen muchos partidos que efectivamente disputan el poder público mediante elecciones— afectan la utilidad de las etiquetas ideológicas para explicar opiniones y comportamientos políticos, como el voto.

Recientemente, ha habido un creciente número de análisis sobre la ideología y el posicionamiento ideológico de las élites latinoamericanas (por ejemplo, Power and Zucco 2009) y en la opinión pública. El estudio de la ideología en la opinión pública latinoamericana ha sido en gran parte posible por la realización frecuente de encuestas de opinión pública apropiadas para el análisis académico, como los proyectos LAPOP

(*Latin American Public Opinion Project*) y Latinobarómetro. Los resultados derivados del análisis de estas encuestas muestran que, en muchos casos, se pueden identificar grupos ideológicos en la opinión pública que se distinguen por opiniones sobre el rol del estado en la economía y como garante de una mayor igualdad social. De la misma manera que ocurre en democracias del norte global, la derecha política tiende a estar asociada con el apoyo a un estado menos intervencionista en la economía y a la izquierda con un mayor apoyo a la acción estatal en la economía y para la reducción de la desigualdad (Wiesehomeier y Doyle, 2012; Zechmeister y Corral, 2012). Esta relación se puede observar en una mayoría de los 18 países latinoamericanos. Sin embargo, existen casos significativos –como Brasil, Colombia y Ecuador– donde no hay una relación fuerte entre opiniones sobre el rol del Estado en la economía y el auto-posicionamiento ideológico en la opinión pública (Zechmeister, 2015).

Adicionalmente, estudios sobre la opinión pública latinoamericana han reafirmado la importancia de factores individuales y contextuales para entender los efectos que pueda tener la ideología en el comportamiento y las opiniones políticas. Como es el caso en otras regiones globales, el nivel de educación y sofisticación política impacta la habilidad de utilizar la ideología como una heurística para definir opiniones acerca de temas de relevancia política: las personas con mayor nivel educativo y mayor conocimiento político tienden utilizar rótulos ideológicos para entender y actuar en el mundo político (Zechmeister and Corral 2012).

El contexto político en el cual se desenvuelven también afecta la efectividad de las posiciones ideológicas para formar opiniones. Mientras que la polarización política tiende a fortalecer la relación entre el auto-posicionamiento ideológico y posiciones frente a temas políticamente relevantes y de política pública, la desinstitucionalización y fragmentación de los sistemas de partidos afectan negativamente esta relación (Zechmeister y Corral, 2012). La asociación entre el auto-posicionamiento ideológico y la forma como las personas votan es más fuerte con altos niveles de polarización y cuando la competencia política es altamente programática y mucho menor cuando el clientelismo es el modo predominante de relación entre ciudadanos y políticos (Zechmeister, 2015). En el contexto latinoamericano esto tiene sentido: la intermediación clientelista se basa en el intercambio de un bien privado por apoyo político. Si este es el modo de relación entre ciudadanos y políticos, el auto-posicionamiento ideológico no tiene cabida. Por el contrario, en contextos de polarización, las diferencias de posición más marcadas presentadas por las élites políticas hacen que los rótulos ideológicos sean más claros y útiles para el electorado.

Esto último ocurre aún más cuando las mismas élites hacen mayor uso de elementos retóricos que hacen referencia a las categorías izquierda y derecha en su discurso. Zechmeister (2006), por ejemplo, muestra cómo los significados atribuidos por las élites políticas a las categorías izquierda y derecha tienen un impacto sobre el contenido específico asociado a ellas en México y Argentina. En este sentido, el significado particular dado al continuo izquierda-derecha por la opinión pública variará dependiendo de las particularidades de cada país (ver también Wiesehomeier y Doyle, 2012).

De los gobiernos de izquierda al regreso de la derecha en América Latina

Después de la década perdida de los años ochenta y las sucesivas políticas de ajuste –aperturas comerciales, privatizaciones, desregulación, entre otras– hubo un giro hacia la izquierda a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Rápidamente, fueron elegidos gobiernos de izquierda en buena parte de los países latinoamericanos. Aunque en cada país hubo factores específicos que llevaron a la elección de presidentes y presidentas de izquierda, generalmente se apunta a las crisis económicas de finales de los noventa e inicios del siglo XX (Levitsky y Roberts, 2011) y el asociado desgaste del “modelo neoliberal” como la causa de este fenómeno. Las promesas de una prosperidad generalizada como resultado de las reformas de los noventa evidentemente no se cumplieron para una parte importante de la población y generaron una gran frustración en ésta (Weyland, 2010).

Frente a la denominada “ola roja” es importante realizar dos apuntes importantes que también nos ayudan a entender el creciente éxito electoral reciente de la derecha. Por un lado, existía una gran diversidad en los gobiernos de izquierda en la región, tanto en el tipo de políticas públicas (económicas, sociales) que buscaban implementar, como en las estrategias políticas para lograrlas. Definir que es “ser de izquierda” es un debate extenso al cual no puede dedicar mucho espacio, pero siguiendo a Roberts y Levitsky (2011: 5) se puede plantear una definición operacional donde nos referimos a actores de izquierda como “actores políticos que buscan, como un objetivo programático central, reducir la desigualdad económica y social”. Esto abre el espacio para entender como gobiernos “moderados” –por ejemplo, Michelle Bachelet en Chile o Lula da Silva en Brasil y sus programas de inclusión social manteniendo los pilares de la política macroeconómica de sus predecesores– son de izquierda, aunque contrasten notoriamente con las políticas económicas y sociales de “radicales” como Hugo Chávez en Venezuela (Weyland, 2010). Muchos de los moderados mantuvieron además

un fuerte compromiso con la democracia liberal representativa y buscaron realizar reformas en alianza con otras fuerzas políticas de centro y derecha, como fue el caso en Brasil. En otros casos, gobiernos de izquierda fomentaron procesos de erosión de las instituciones democráticas liberales –Venezuela y Nicaragua, por ejemplo– que llevaron a transiciones hacia regímenes autoritarios (Gamboa 2017).

Por otro lado, aunque pareciera que el surgimiento de gobiernos de izquierda estuviera asociado a cambios de posiciones ideológicas en la opinión pública en países latinoamericanos, el giro a la izquierda no estuvo asociado a esto. Es decir: la entrada de la izquierda al gobierno no estuvo relacionada a un creciente rechazo a las políticas “del ajuste” económico causado por cambios en la opinión pública sobre sus convicciones ideológicas acerca del rol del Estado en la economía. El apoyo mayoritario hacia gobiernos de izquierda resultó del desgaste de gobiernos de centro y derecha con pobres resultados económicos. Los votantes, en este sentido, se comportaron más como actores guiados por una racionalidad instrumental y sancionaron a aquellos gobernantes que “produjeron” políticas que redujeron su bienestar y apoyaron a sus contendores (Ross Arnold y Samuels, 2011). La capacidad que tuvieron los gobiernos de izquierda de sostenerse en el poder posteriormente tampoco estuvo asociada a cambios “ideológicos” en el electorado. De hecho, no hay evidencia –en general– que los gobiernos de izquierda hayan generado un incremento en la relevancia de los rótulos de “izquierda” o “derecha” para predecir la opinión y comportamiento político de las personas (Zechmeister, 2015). La re-elección de gobiernos de izquierda en la región respondió a electorados que recompensaron a gobiernos de izquierda que gobernaron en momentos de crecimiento económico –en buena medida por el boom de los *commodities*– permitiéndoles implementar variadas políticas sociales (Levistky y Roberts 2011).

Sin embargo, la ausencia de una “estructuración ideológica” de las opiniones y el comportamiento político del electorado no quiere decir que no hubo un impacto en algunos votantes de los gobiernos de izquierda y sus políticas. En algunos casos –por ejemplo, en Venezuela– se puede observar cómo se crearon identidades partidarias o *partisanship* (Handlin y Collier, 2011). Estas identidades no necesariamente se fundamentan en posiciones ideológicas–aunque puedan serlo. En el fondo, son un apego psicológico a un grupo social (en este caso, un partido) más que una identidad ideológica (Green et al. 2002).

De la misma manera que un partido puede fomentar estas identidades partidarias en el tiempo –por ejemplo, el caso del *Partido de los Trabalhadores* (PT) en Brasil– es posible también generar identidades sociales en contraposición a una opción partidaria. En este mismo caso, el surgimiento del PT también fue creando una fuerte identidad

social (*anti-partisanship*) contraria al PT que no se cristalizaba necesariamente en una opción partidaria contrapuesta (Samuels y Zucco, 2018) pero sí podía manifestarse como una identificación social en contra de “la izquierda”.

Analíticamente, los mismos retos que teníamos al analizar la “ola” de gobiernos de izquierda, los tenemos al analizar los nuevos gobiernos de derecha que han llegado al poder recientemente. Aunque en general se puede pensar en actores “de derecha” como aquellos que defienden los intereses de unas elites en contra de presiones redistributivas, esto se puede manifestar por medio de múltiples estrategias y posiciones (Roberts, 2014). Algunas fuerzas de derecha pueden hacer uso de posiciones conservadoras frente a temas morales y culturales para movilizar a las clases populares. Otras pueden enfatizar políticas de seguridad (la denominada “mano dura”) para buscar apoyo entre los votantes. Inclusive, dentro de la derecha no siempre se tienen posiciones comunes frente a políticas económicas. Mientras algunos grupos de derecha favorecen políticas ortodoxas fiscalmente y de apertura comercial, otros sectores (por ejemplo, sectores industriales enfocados en el mercado local) pueden favorecer políticas proteccionistas y de nacionalismo económico (Roberts, 2014). En el electorado, tampoco se encuentra un patrón consistente entre opiniones sobre temas económicos, sociales o políticos para personas de derecha (Doyle y Wiesohomeier, 2014).

En el periodo durante el cual los gobiernos de izquierda contaron con un ambiente económico favorable en la mayoría de países en la región, las fuerzas políticas de derecha tuvieron poco éxito electoral y, por consiguiente, tuvieron que buscar otros temas –más allá de conflictos distributivos– para buscar nichos en el electorado. Dependiendo del país, el tema específico que enfatizaban los políticos de derecha podía variar por país (Doyle y Wiesohomeier, 2014). Sin embargo, con el alto nivel de violencia criminal observado en muchos países de la región, el tema de la seguridad pública ha adquirido mayor relevancia en la opinión pública y ha sido adoptado por muchos partidos y políticos de derecha para atraer sectores del electorado con sus propuestas de “mano dura” (Doyle y Wiesohomeier, 2014; Zechmeister, 2015).

Ante las fuertes crisis económicas que vivieron muchos países latinoamericanos recientemente –asociados en gran medida a las caídas de los precios de los *commodities* y las limitaciones para sostener gastos por parte de los gobiernos de la región– la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de izquierda fueron reemplazados por gobiernos de derecha. Es previsible que el ascenso de la derecha, tal como sucedió a inicios de siglo con la izquierda, no esté ocurriendo por cambios ideológicos en el electorado y sí como un intento de sancionar a gobiernos (de izquierda) que están presidiendo en situaciones económicas precarias y crisis políticas (por ejemplo, escándalos de corrupción).

En este sentido, es importante en una primera instancia y como objetivo central de este capítulo, explorar si el auto-posicionamiento del público general está asociada a sus opiniones frente importantes temas económicos, políticos y sociales. A continuación, analizaremos –ahora en el contexto de gobiernos de derecha– a dos países: Colombia y Brasil.

Opinión pública y auto-posicionamiento ideológico en dos casos latinoamericanos

En esta sección analizaré la relación entre el auto-posicionamiento ideológico y las posiciones frente a temas comúnmente asociados a posiciones ideológicas en dos países, Colombia y Brasil. La selección de estos países sigue la siguiente lógica: ambos países han experimentado recientemente un incremento en los niveles de polarización política. En el caso de Colombia, el conflicto central era la negociación y posterior acuerdo de paz entre el gobierno y la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En Brasil, el proceso que llevó a la destitución (*impeachment*) de la presidenta Dilma Rousseff y las elecciones presidenciales del 2018 mostraron fuertes divisiones entre personas políticamente activadas y entre élites políticas. Mientras la polarización debería favorecer una mayor relevancia y congruencia entre el auto-posicionamiento ideológico y opiniones frente a temas políticos en estos países, la naturaleza de los sistemas de partidos en ambos debería tener un efecto negativo sobre la estructuración ideológica de las opiniones políticas.

Si bien el sistema de partidos brasileño logro niveles aceptables de estabilidad hasta el 2014 (Mainwaring et al. 2018), la crisis política reciente llevó –por lo menos temporalmente– a altos niveles de volatilidad electoral. Esto se ve con gran claridad a través de la elección de un presidente apoyado por un partido anteriormente microscópico y que pertenecía a los denominados *partidos de alugel*³ (Hunter y Power, 2019). En el caso colombiano, desde mediados de los años noventa inició un proceso de desinstitucionalización del sistema de partidos, que desde entonces se ha caracterizado por altos y persistentes niveles de inestabilidad (Albarracín et al., 2018). La ausencia de

3. Los partidos de alugel (partidos de arriendo) son pequeños partidos que ofrecen avales a candidatos sin esperar un compromiso programático o de fidelidad a la organización partidaria. Jair Bolsonaro se inscribió por el Partido Social Liberal (PSL) a la presidencia. Luego de disputas con miembros del partido, Bolsonaro –ya siendo presidente– lo abandonó y está en proceso de crear su propio partido.

opciones partidarias estables en ambos casos reduce la posibilidad que tienen las élites políticas para poder señalar efectivamente y consistentemente a la opinión pública que constituyen ideas de “izquierda” y de “derecha”.

Para realizar el análisis se utilizó datos de las encuestas del *Latin American Public Opinion Project* (LAPOP), liderado por Vanderbilt University (EE.UU.). Los datos de las encuestas utilizadas para Colombia y Brasil fueron levantadas en el 2012 (ambos países), 2016 (Colombia) y 2017 (Brasil). Siguiendo la estrategia trazada por Zechmeister (2015), escogí preguntas de la encuesta que me permiten medir el auto-posicionamiento ideológico de cada encuestado, así como sus opiniones frente a temas económicos (el grado de intervención deseable del Estado en la economía), sociales (apoyo al matrimonio igualitario), de seguridad y legislación penal (apoyo a penas más severas para criminales) y políticos (grado de apoyo a la democracia). Igualmente, para cada caso escogí temas de gran relevancia contextual. Para Colombia, busco relacionar el apoyo al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC con el auto-posicionamiento ideológico. En el caso de Brasil, se explorará si existe una asociación entre la posición frente al *impeachment* de Dilma Rousseff con la posición que toma el encuestado en la escala ideológica.

En ambos casos se realiza un análisis de la distribución de opiniones por grupo ideológico (izquierda, centro y derecha). Esto se complementa con regresiones que estiman la relación entre el auto-posicionamiento ideológico y posiciones frente a temas políticamente relevantes. En ningún caso, este análisis empírico pretende establecer relaciones causales entre estas variables. Sin embargo, como se verá a continuación, si nos muestra la poca asociación que hay entre opiniones y el auto-posicionamiento ideológico.

Colombia: la continuidad de la derecha

Colombia fue una excepción en la región. Mientras gobiernos de izquierda fueron electos desde finales de los años noventa, gobiernos de derecha y centro-derecha han controlado el poder ejecutivo en Colombia y la izquierda no ha tenido una opción real de ganar las elecciones presidenciales, con la debatible excepción de las elecciones de 2018. La longevidad del conflicto armado entre el Estado, grupos guerrilleros y paramilitares, así como las visiones opuestas de como superarlo han sido el clivaje central de política en Colombia. Particularmente a partir de 2002 con la elección de Álvaro Uribe, las opiniones frente al conflicto armado empezaron estar fuertemente asociadas con el auto-posicionamiento ideológico. Personas que se identificaban como

cercanas a la izquierda tendían a apoyar una resolución negociada al conflicto, mientras que personas que afirmaban ser de derecha expresaban que el conflicto debía resolverse por medios militares.

Antes de la elección presidencial de 2002, los partidos tradicionales en Colombia (Liberal y Conservador) no habían dado señales consistentes al electorado, expresando apoyo y llevando a cabo tanto a acciones armadas como a negociaciones como potenciales soluciones al conflicto armado. Sin embargo, después de la elección del 2002, las elites políticas empezaron a indicarle a la opinión pública con más claridad que la posición que se tomará frente al conflicto reflejaba el ser de “izquierda” o “derecha”. Figuras claves de la izquierda como los candidatos presidenciales Luis Eduardo Garzón (2002) o Carlos Gaviria (2006) basaron sus campañas a la presidencia en la defensa de la opción negociada al conflicto. Representantes de la derecha política, en particular el presidente Álvaro Uribe, defendían inequívocamente una resolución militar al conflicto armado (Albarraín, 2013).

El conflicto armado era el eje central de la política en Colombia. No es sorprendente entonces que las posiciones frente al conflicto armado estuvieron fuertemente asociadas a el auto-posicionamiento ideológico y que predijeran el comportamiento electoral de los votantes (Olivella y Rodríguez Raga, 2009). A pesar de que el conflicto armado y el acuerdo de paz siguió siendo el clivaje central de la política colombiana (Milanese y Serrano, 2019) la clara alineación entre la posición ideológica y la posición frente al conflicto se diluyó en el gobierno de Juan Manuel Santos. El hecho de que un representante de la política de seguridad democrática del presidente Uribe y una figura de la élite tradicional bogotana buscará y lograra un acuerdo con las FARC rompió con las claras señales que enviaban las elites políticas a la opinión pública: por lo menos para una parte de ésta, se le indicaba que se podía ser de centro o centro-derecha y apoyar la negociación como salida al conflicto.

La cuestión de que no hubiera un alineamiento claro entre la posición ideológica y las opiniones sobre la solución al conflicto armado no quiere decir que este último no continuará siendo el eje central de la política en Colombia—la elección presidencial del 2014 y el plebiscito de 2016 muestran claramente la centralidad de este tema. Pero sí muestra que la coherencia entre posición ideológica (por lo menos para algunas partes de la derecha) y la posición hacia el conflicto se fue perdiendo.

La importancia del conflicto armado como eje central de la política colombiana también desplazó a otros temas económicos y sociales como clivajes de la competencia política. Posiciones sobre cuestiones socio-culturales (el aborto, el consumo de drogas, el divorcio, el matrimonio igualitario) y económicas (el rol del estado en la economía)

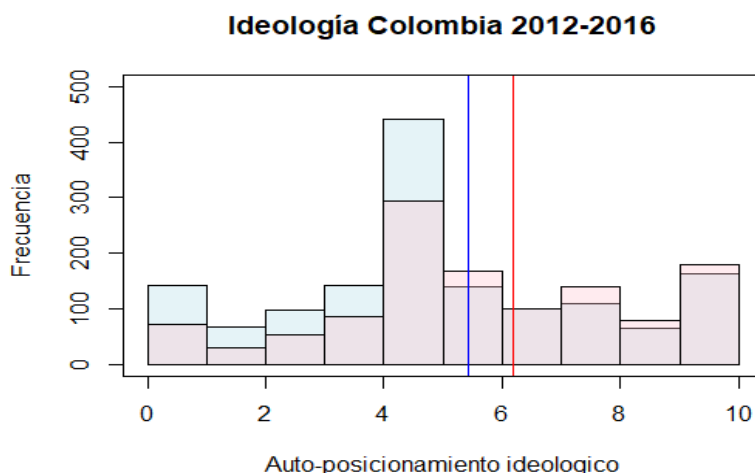
generalmente no estaban asociadas a la posición ideológica que decía tener una persona (Albarracín, 2013). La poca asociación entre posiciones económicas y sociales e ideología también puede resultar de la distribución misma de las élites políticas y el consenso en la política económica moderada entre estas. Hasta recientemente, no había diferencias económicas fundamentales entre las fuerzas políticas electoralmente relevantes. En tema socio-culturales, los partidos políticos podían albergar políticos que representaban visiones radicalmente diferentes. El Partido Liberal, por ejemplo, tenía una senadora como Vivian Morales que se oponía al matrimonio igualitario y defendía restricciones al derecho de parejas del mismo sexo a adoptar, mientras que compañeros de su bancada expresaban opiniones diametralmente opuestas.

Mientras las élites políticas no se organicen coherentemente, es poco probable que la opinión pública lo haga. Las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia pueden mostrar un punto de inflexión en esta tendencia en Colombia. Por lo menos en la segunda ronda cuando se enfrentaron visiones más marcadas de izquierda (Gustavo Petro) y derecha (Iván Duque), el tema del conflicto no era la única consideración de los electores. Diferencias notables sobre la política económica fueron de gran importancia, sobre todo en la segunda vuelta. Durante estas elecciones también se percibió una distribución más consistente en las élites políticas: políticos con tendencias conservadoras en términos sociales y económicos se aglutinaron alrededor de Duque.

Si analizamos los datos de opinión pública a la luz de los triunfos de grupos políticos claramente identificados con la derecha en el plebiscito sobre el acuerdo de paz en el 2016 y las elecciones presidenciales de 2018, resulta interesante que en Colombia ha habido un leve movimiento en dirección a la izquierda. Como lo muestra la figura 1, si bien el promedio del auto-posicionamiento ideológico de los colombianos sigue de derecha, el promedio de 2016 (línea azul), esta más hacia el centro que el promedio de 2012 (línea roja). Esto se da en buena medida por un mayor número de personas identificándose con el centro político y menos con la derecha.

Figura 1.

Distribución del auto-posicionamiento ideológico en Colombia 2012 y 2016



En las siguientes figuras (2-7) se explora la distribución de opiniones sobre temas políticamente relevantes por grupos, definidos por auto-posicionamiento ideológico (izquierda, centro y derecha). Las gráficas a la izquierda muestran toda la muestra de la encuesta, mientras que las gráficas a la derecha solo para encuestados con un alto nivel educativo (personas con al menos un año de estudios superiores). En esta última muestra más selectiva deberíamos esperar, como muestran los estudios de opinión pública descritos anteriormente, un mayor grado de correspondencia entre la posición ideológica y las posiciones frente a temas centrales en la política.

Lo más interesante de este análisis es que en la mayoría de las gráficas no hay diferencias significativas entre las opiniones de personas que se identifican con la izquierda, centro o derecha. Por ejemplo, frente al rol del Estado en la economía, sólo hay diferencias muy leves entre los grupos, incluso para personas de alto nivel educativo, entre el apoyo (o no) al intervencionismo del Estado—sea como propietario de empresas estratégicas o reduciendo la desigualdad. En algunos casos, la relación es la opuesta a la esperada. Personas que se auto-identifican como afines a la izquierda tienden—relativamente—a apoyar menos el acuerdo de paz (figura 2A) que personas de centro o derecha. Este resultado persiste, aunque algo matizado, para personas con

estudios universitarios (figura 2B). Dada la importancia del conflicto armado para definir a la izquierda y la derecha en el país y el histórico apoyo de la derecha a la solución militar del conflicto, este resultado es más que sorprendente.

El único tema donde se observa alguna diferencia entre grupos ideológicos y opiniones políticas es el matrimonio igualitario (figuras 6A y 6B). Aunque hay en general poco apoyo para el matrimonio igualitario, las personas que se auto-identifican de izquierda tienden a apoyarlo más, en particular cuando tienen estudios superiores.

Figura 2A.

Apoyo al acuerdo de paz por posición ideológica (todos)

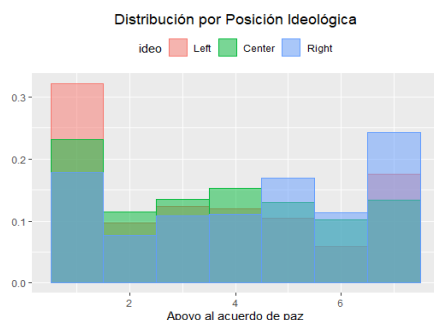


Figura 2B.

Apoyo al acuerdo de paz por posición ideológica (universitarios)

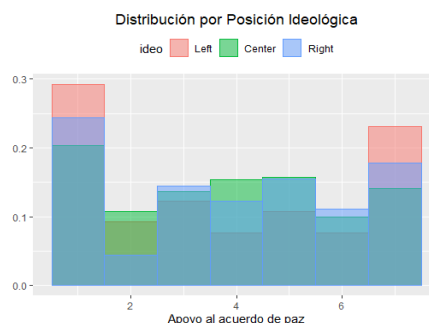


Figura 3A.

Apoyo a la democracia por posición ideológica (todos)

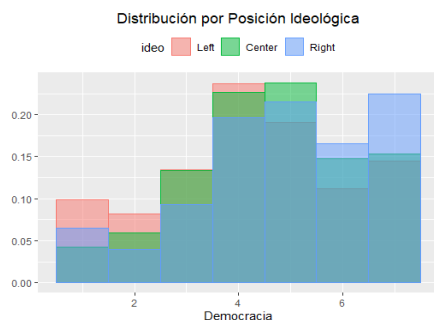


Figura 3B.

Apoyo a la democracia de paz por posición ideológica (universitarios)

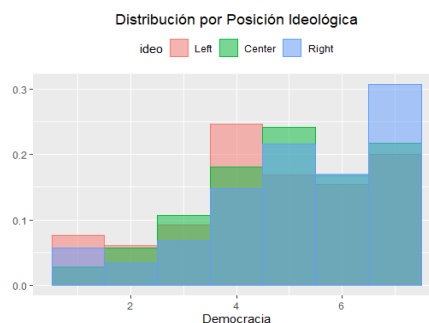
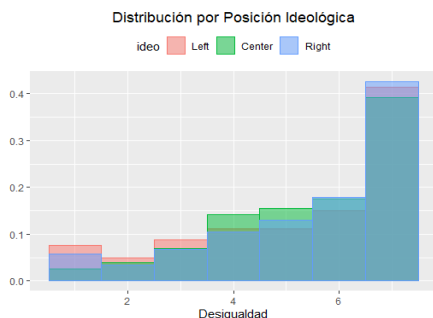
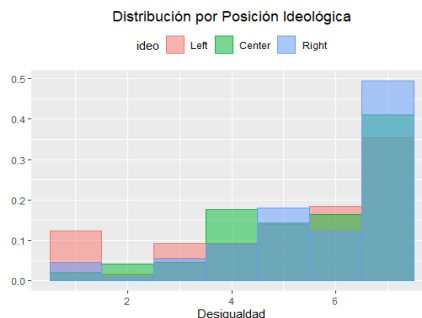


Figura 5A.

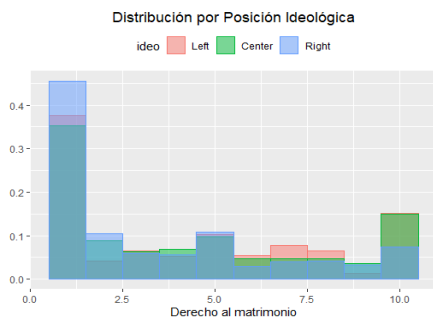
Apoyo a la función del Estado para reducir la desigualdad (todos)

**Figura 5B.**

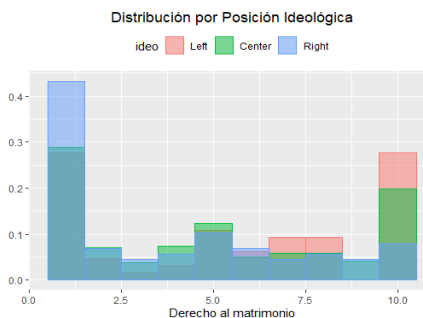
Apoyo a la función del Estado para reducir la desigualdad (universitarios)

**Figura 6A.**

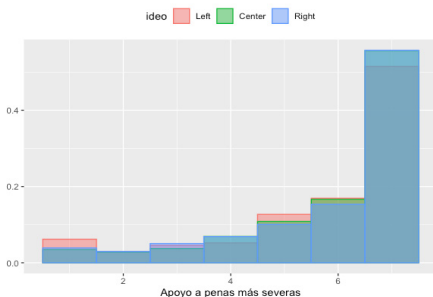
Apoyo al matrimonio igualitario (todos)

**Figura 6B.**

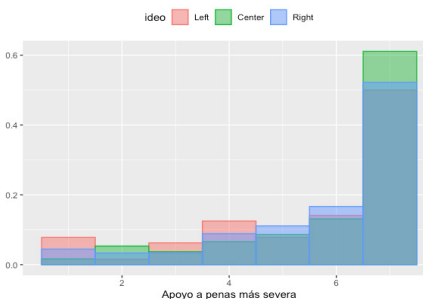
Apoyo al matrimonio igualitario (universitarios)

**Figura 7A**

Apoyo penas más severas (todos)

**Figura 7B.**

Apoyo penas más severas (universitarios)



Para analizar más sistemáticamente la relación entre la posición ideológica (variable dependiente) y opiniones políticas y sociales (variables independientes), realicé una regresión lineal, cuyos resultados se presentan en la tabla 1. Reflejando los resultados de los histogramas anteriores, las opiniones sobre el rol de estado en la economía o sobre la severidad de las penas para actos criminales no tienen una asociación estadísticamente significativa con la posición ideológica. Personas tanto de derecha como de izquierda expresan, en promedio, opiniones similares sobre la intervención del estado en la economía y la política penal.

En cambio, el apoyo a la democracia, al proceso de paz, y el matrimonio igualitario sí están relacionados con la posición ideológica, pero no siempre en la dirección esperada. En general, un mayor apoyo a la democracia está asociado a identificarse con la derecha. Pero, el resultado más sorprendente es la relación entre el apoyo al proceso de paz y la posición ideológica. La figura 8 ilustra esta relación: a mayor apoyo al proceso de paz, mayor identificación con la derecha. Este resultado solo es significativo para la muestra general (línea sólida) y desaparece cuando se analizan solo las personas con alto nivel educativo (línea punteada). Sin embargo, no deja de asombrar que en el tema donde históricamente se ha presentado mayor coherencia con la posición ideológica y que ha estructurado la política colombiana de las últimas décadas, se encuentre un resultado completamente contrario a la relación esperada. Finalmente, la posición frente al matrimonio igualitario es un buen predictor y el único consistente de la posición ideológica en Colombia. Esto se ve en la figura 9: a mayor apoyo al matrimonio igualitario, más se identifica la persona con la izquierda. Esta relación es aún más clara —la pendiente estimada es mayor— para la muestra de personas con estudios universitarios (línea punteada).

El análisis de la relación entre opiniones sobre temas políticamente relevantes y posiciones ideológicas para Colombia, en general, muestra relaciones muy débiles entre estos. Personas de izquierda o derecha no expresan opiniones diferentes sobre temas donde muchos esperarían que existieran diferencias: seguridad y economía. Frente a temas socio-culturales, sí aparecen diferencias significativas. Estos resultados replican hallazgos similares de otros trabajos. Para Colombia, por ejemplo, Zechmeister (2015) encuentra que solo la importancia atribuida a la religión diferencia a personas de derecha e izquierda. Es muy probable que haya una fuerte correlación entre las personas que creen que la religión es importante y su apoyo al matrimonio igualitario. En resumen, los resultados para Colombia muestran que las posiciones ideológicas en la opinión pública no están definidas por contenidos temáticos, por lo menos no los que tradicionalmente se asumen.

Tabla 1.

Resultados de los modelos de regresión (Colombia, 2016)

	Modelo 1 (general)	Modelo 2 (universitarios)
Intervención del Estado en la economía	-0.007 (0.034)	-0.084 (0.054)
Apoyo al matrimonio igualitario	-0.107*** (0.020)	-0.126*** (0.032)
Apoyo a la democracia	0.16*** (0.041)	0.161* (0.070)
Apoyo al acuerdo de paz	0.18*** (0.032)	0.050 (0.054)
Apoyo a penas más severas	0.0530 (0.041)	0.050 (0.067)
Constante	4.15*** (0.32)	4.95*** (0.53)
Observaciones	1409	389
R cuadrado ajustado	0.055	0.047

 Errores estándar en paréntesis. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Figura 8.

Relación entre el apoyo al acuerdo de paz y la posición ideológica

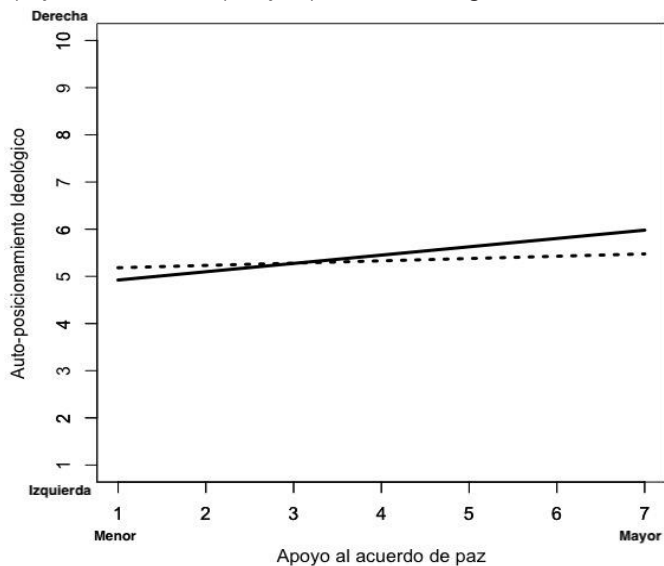
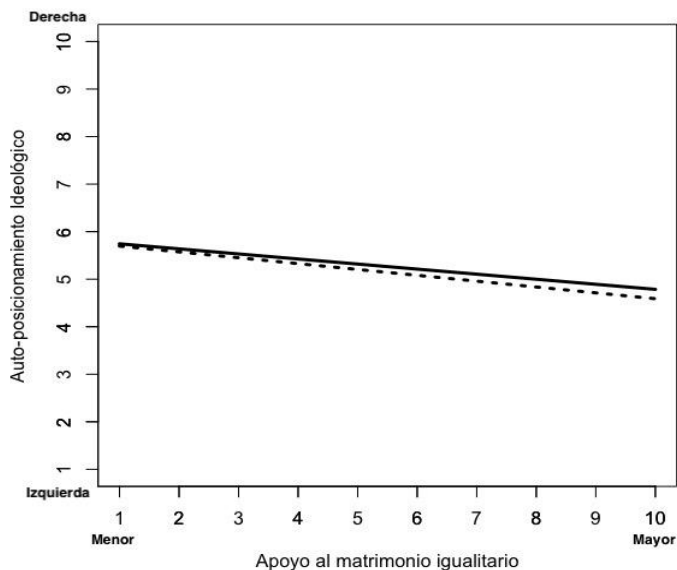


Figura 9.

Relación entre el apoyo al matrimonio igualitario y la posición ideológica



Brasil: del Partido dos Trabalhadores y la direita envergonhada a la ultraderecha

La política brasileña desde la redemocratización del país (1985) ha sido indudablemente impactada por el surgimiento, ascenso y crisis del *Partido dos Trabalhadores* (PT). Como se discutió anteriormente, las identidades políticas, por lo menos desde los años noventa, están fuertemente marcados por la afinidad (*petismo*) o rechazo (*antipetismo*) al PT (Samuels y Zucco 2018). Mientras que la afinidad con el PT, un partido que se declaraba de izquierda, encontraba una manifestación organizacional en este partido, el antipetismo se encontraba partidariamente disperso, un reflejo de la fragmentación de la derecha en Brasil. La consolidación de esta última identidad política encontrará su manifestación más clara en la polarización política asociada al proceso de *impeachment* de Dilma Rousseff y la elección de Jair Bolsonaro en 2018.

El ascenso y abierta presencia de la (ultra-)derecha brasileña puede llegar a parecer sorprendente, si se tiene en cuenta que hasta hace unos pocos años, políticos de derecha, a pesar de favorecer políticas asociadas con la derecha, se negaban públicamente asumirse como de derecha. Este fenómeno, conocido como a *direita envergonhada* (la derecha avergonzada) fue común desde el inicio de la nueva república (1988) hasta la polarización que rodeó el proceso de *impeachment* (Power y Rodrigues-Silveira, 2019). Esto no quiere decir que la derecha haya sido políticamente irrelevante. Fuerzas políticas de derecha –en particular partidos como el PFL, que sucedieron a los partidos conservadores que apoyaron el régimen militar– fueron importantes actores en las políticas de ajuste de los años noventa. Estas fuerzas, divididas en varios partidos, tenían como “centro de gravedad” al mayor partido de la centro-derecha, el Partido de la Social Democracia Brasileña o PSDB (Santos, 2008). También existían partidos de derecha y con políticos de derecha –como el Partido Popular (PP), el Partido Liberal (PL), el Partido Laborista (PTB) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)– que buscaban participar de los gobiernos para tener acceso a cargos y recursos, sin importar si eran liderados por partidos de centro-izquierda o centro-derecha. En un sistema de partidos altamente fragmentado como el brasileño, su apoyo era decisivo para cualquier partido que ganara la presidencia y aspirara a gobernar efectivamente.

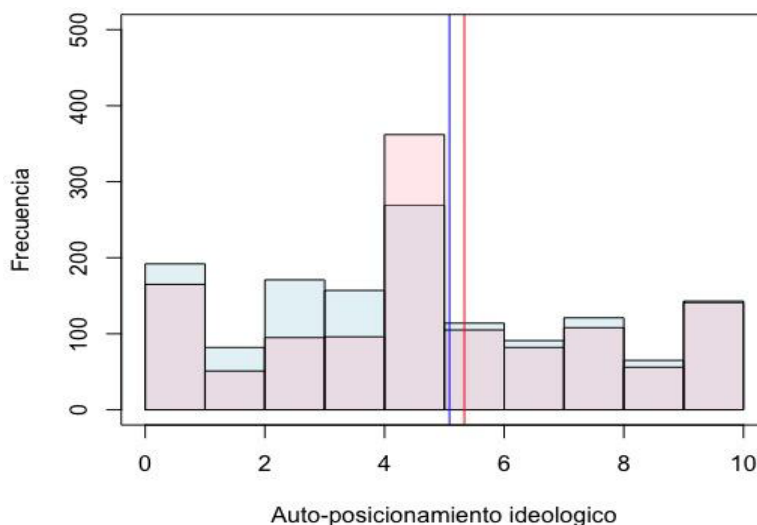
El reemplazo (¿temporal?) del PSDB como principal fuerza política en la derecha por un político que por muchos años fue una presencia irrelevante en el congreso, Jair Bolsonaro, fue en parte resultado de espacios abiertos por el mismo establishment de la derecha antes y durante el proceso de *impeachment* para debilitar al gobierno del PT, combinado con un debilitamiento de estas fuerzas tradicionales de la centro-derecha y

derecha durante el breve gobierno de Michel Temer. Este se caracterizó por un anémico crecimiento económico y múltiples escándalos de corrupción que hicieron mella en los partidos tradicionales de la derecha y centro-derecha. Bolsonaro supo aprovechar la insatisfacción que existía en significativos sectores del electorado hacia el PT –a quien asociaban con la crisis económica y escándalos de corrupción– combinado con grupos antipetistas que históricamente habían expresado su vehemente rechazo contra el PT. Para muchos electores del “centro” y la “derecha”, Bolsonaro se volvió la opción electoral más viable, por encima del PSDB (Hunter y Power, 2019). En este contexto, resulta importante analizar, si auto-identificarse con la derecha (o la izquierda) en Brasil está asociado con opiniones claras sobre temas políticamente relevantes.

En primer lugar, es interesante como más personas se identifican con la izquierda en el 2017 en comparación con el 2012 (año donde el PT y la presidenta Dilma aun gozaban de un apoyo considerable en la opinión pública). Es decir, más personas se identifican con la izquierda durante los años de mayor rechazo al PT. La figura 10 muestra como el promedio de la auto-identificación ideológica se mueve hacia la izquierda de 2012 (línea roja) al 2017 (línea azul). En parte, esto puede ser el resultado de un movimiento de personas del centro hacia la izquierda y refleja de esta manera la fuerte polarización en las élites y la opinión pública.

Figura 10.

Distribución del auto-posicionamiento ideológico en Brasil 2012 y 2017



En segundo lugar, y de forma similar a lo que identificamos en el caso colombiano, no parecen existir diferencias entre los grupos ideológicos en la opinión pública y sus opiniones frente a temas económicos, sociales y políticos. Solo hay un tema donde hay marcadas diferencias entre los grupos ideológicos: su posición frente al *impeachment*. Las personas que se identifican como pertenecientes o cercanas a la izquierda consideran que el *impeachment* de la presidenta Dilma Rousseff fue injusto. En contraste, personas identificadas con la derecha evidentemente lo consideran justo. La fuerte relación que encontramos aquí se confirma con la regresión lineal cuyos resultados presento en la tabla 2.

Figura 11A.

Apoyo al impeachment (todos)

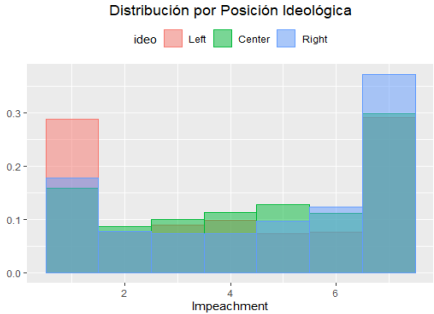


Figura 11B.

Apoyo al impeachment (universitarios)

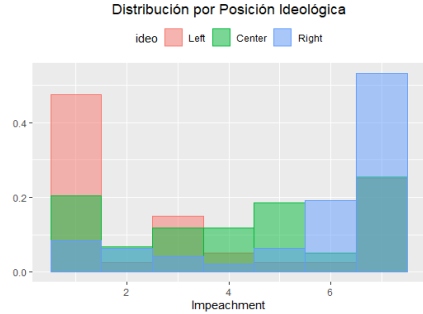


Figura 12A.

Apoyo a la democracia por posición ideológica (todos)

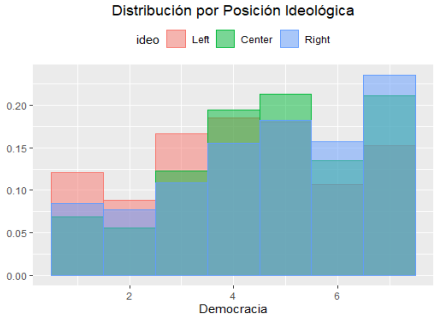


Figura 12B.

Apoyo a la democracia de paz por posición ideológica (universitarios)

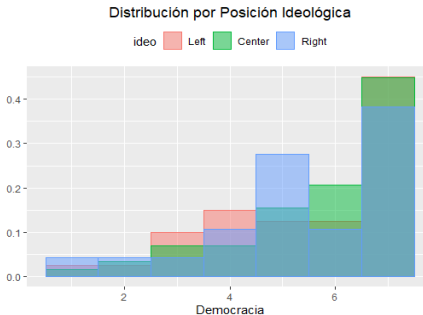
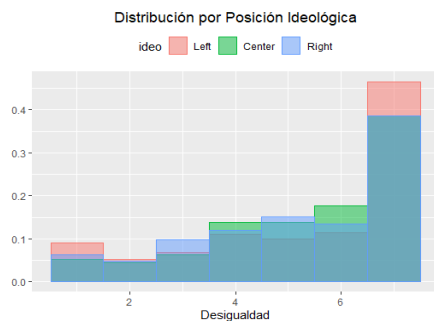
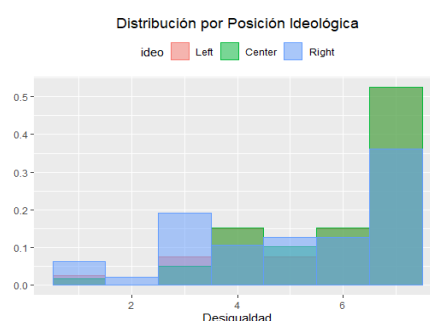


Figura 14A.

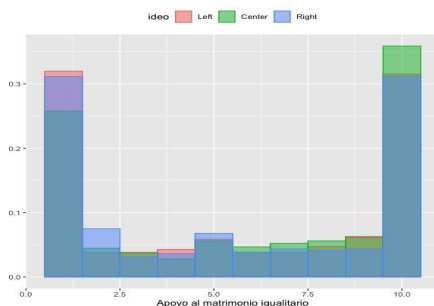
Apoyo a la función del Estado para reducir la desigualdad (todos)

**Figura 14B.**

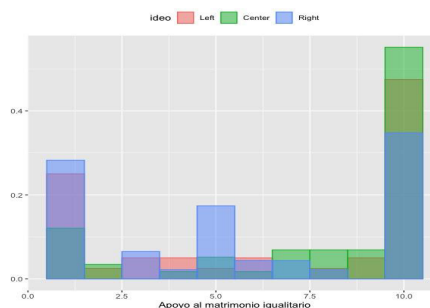
Apoyo a la función del Estado para reducir la desigualdad (universitarios)

**Figura 15A.**

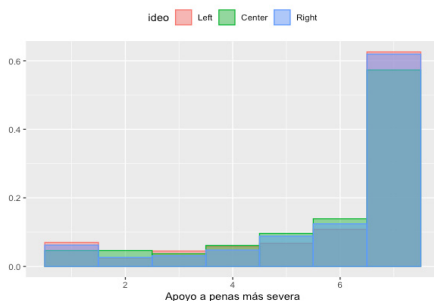
Apoyo al matrimonio igualitario (todos)

**Figura 15B.**

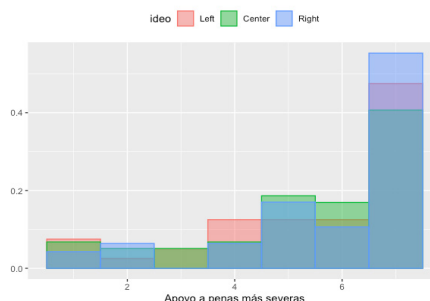
Apoyo al matrimonio igualitario (universitarios)

**Figura 16A.**

Apoyo penas más severas (todos)

**Figura 16B.**

Apoyo al matrimonio igualitario (universitarios)



Los resultados de la regresión confirman que el auto-posicionamiento ideológico poco o nada se relaciona con opiniones sobre el rol del estado en la economía, sobre castigos penales, posiciones frente a la democracia o al matrimonio igualitario. De pronto, sorprendentemente, un mayor apoyo a la propiedad estatal de empresas estratégicas está asociado a una mayor identificación con la derecha en la muestra general. En el análisis que incluye solo a personas con educación superior, no se identifica ninguna relación entre estas variables (ver figura 15).

Tabla 2.

Resultados de los modelos de regresión (Brasil, 2017)

	Modelo 3 (general)	Modelo 4 (universitarios)
Intervención del Estado en la economía	0.113** (0.038)	-0.132 (0.108)
Apoyo al matrimonio igualitario	-0.015 (0.019)	-0.086 (0.059)
Apoyo a la democracia	0.114** (0.04)	0.066 (0.126)
Apoyo al impeachment	0.12*** (0.032)	0.37*** (0.086)
Apoyo a penas más severas	-.016 (0.042)	0.058 (0.11)
Constante	3.75*** (0.35)	3.893** (1.20)
Observaciones	1364	142
R cuadrado ajustado	0.023	0.12

Errores estándar en paréntesis. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Los resultados de la regresión confirman que la posición frente al *impeachment* es un buen predictor de la posición ideológica. Esa asociación es más robusta para la muestra de personas con estudios superiores. Como los ilustra la figura 16, a mayor apoyo al *impeachment*, mayor afinidad con la derecha tanto en la muestra general (línea

solida) como en la muestra de personas con algo de educación superior (línea punteada). Este resultado puede indicar que la identificación con la izquierda o la derecha, más que estar asociada con posiciones frente a temas políticamente relevantes, parece reflejar identidades políticas o apegos psicológicos a grupos sociales de una manera análoga al *petismo* y el *antipetismo*. En este sentido, la elección de una persona como Bolsonaro que representa posiciones conservadoras extremas frente a muchos temas, puede no necesariamente reflejar afinidades temáticas con todos sus votantes. Esto puede ser visto, por algunos, como la representación de un grupo social por el cual se tiene un apego o como aquel grupo que permite desmarcarse de otro (el PT), más allá de lo que este pueda representar substantivamente.

Figura 15

Relación entre el apoyo a la intervención del Estado y la posición ideológica

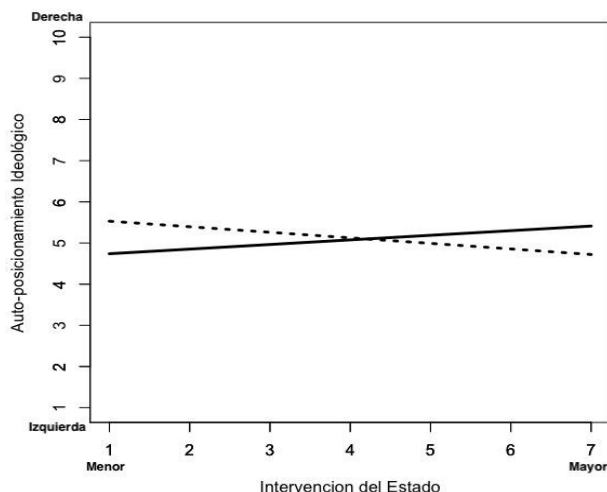
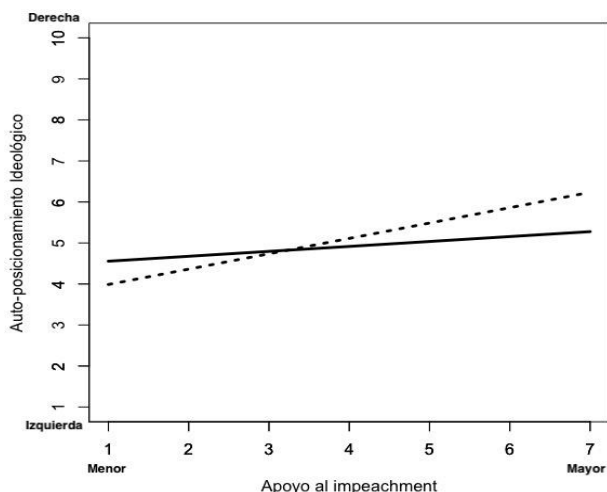


Figura 16

Relación entre el apoyo al *impeachment* y la posición ideológica



Conclusiones

La fuerte polarización que ha caracterizado la política colombiana y brasileña en los últimos años puede llevar a pensar que ésta resulta de fuertes convicciones ideológicas en la opinión pública basadas en principios abstractos, sofisticados e interconectados. Esta ideología debería entonces influir y orientar la formación de opiniones políticas. Este capítulo confirmó para el caso de estos dos países que probablemente no existe esta forma de razonar y comprender la política para el grueso de la opinión pública, ni siquiera con aquellos que tienen un alto nivel educativo. La posición que una persona en promedio toma en el espectro izquierda-derecha tiene muy poca relación con las opiniones que esta expresa sobre temas políticamente relevantes en campos económicos, sociales, culturales y políticos. Esto, como lo discutí, no ocurre solamente en estos dos países o en América Latina. También es una característica de la política en otras regiones globales.

Lo anterior no quiere decir que ser de “derecha” o “izquierda” no signifique nada en Brasil o Colombia, solo que las ideas que se asocian a estas etiquetas ideológicas pueden variar significativamente dependiendo del contexto y pueden no representar

ideas abstractas (como comúnmente se entiende la ideología). En el caso de Brasil, por ejemplo, pareciera que el ser de “derecha” o “izquierda” adquiere el carácter de una emergente identidad política que refleja más la afinidad o apego con un grupo social (o el rechazo a un grupo) y menos la alineación con un conjunto de ideas. En este sentido, la relevancia del uribismo en Colombia o el apoyo del que goza Bolsonaro en una parcela del electorado no necesariamente es *solo* por afinidad programática. Puede reflejar también la simpatía de algunas personas de pertenecer a un grupo. Se requiere entonces entender mejor las bases psicológicas y no solo programáticas del apego a estas fuerzas políticas.

Las ideas y la evidencia presentadas en este capítulo son apenas un inicio para entender a la “izquierda” o la “derecha” en las bases, es decir en la opinión pública. A medida que se van desarrollando los gobiernos de derecha que ahora llegan al poder en América Latina, no solo es importante explorar de qué manera estos reflejan cambios, no necesariamente ideológicos, en la opinión pública, sino también cómo estos gobiernos van a influir la construcción de identidades y posiciones políticas en esta.

Referencias bibliográficas

- ALBARRACÍN, Juan (2013). Ideological self-placement and issue attitudes in Colombian public opinion. Paper presentado en el 7° Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Bogotá.
- ALBARRACÍN, Juan, GAMBOA, Laura y MAINWARING, Scott (2018). “Deinstitutionalization without Collapse: Colombia’s Party System.” En Scott Mainwaring (Ed.) *Party Systems in Latin America. Institutionalization, Decay, and Collapse*. New York: Cambridge University Press, pp. 227–254.
- CARMINES, Edward, ENSLEY, Michael, y WAGNER, Michael (2012). Political ideology in American politics: One, two, or none? *The Forum*, 10: 1–18.
- CONOVER, Pamela y FELDMAN, Stanley (1981). “The Origins and Meaning of Liberal/Conservative Self-Identifications. *American Journal of Political Science*, 25 (4): 617-645.
- CONVERSE, Philip (1964). “The Nature of Belief Systems in Mass Publics.” In *Ideology and Discontent*, ed. David Apter. New York: Free Press, pp. 206-261.
- CRAMER, Katherine (2016). *The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker*. Chicago: University of Chicago Press.

- DOWNS, Anthony (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper.
- FEDERICO, Christopher (2012). "Ideology and Public Opinion." In *New Directions in Public Opinion*, ed. Adam Berinsky. New York: Routledge, pp. 79-100.
- FEDERICO, Christopher y MALKA, Ariel (2018). The Contingent, Contextual Nature of the Relationship Between Needs for Security and Certainty and Political Preferences: Evidence and Implications. *Advances in Political Psychology*, 39: 3-48.
- FELDMAN, Stanley (1988). "Structure and Consistency in Public Opinion: The Role of Core Beliefs and Values." *American Journal of Political Science* 32 (2): 416-440.
- JACOBY, William G. (1991). "Ideological Identification and Issue Attitudes". *American Journal of Political Science* 35 (1): 178-205.
- LAPOP 2012. The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Project (Brazil and Colombia Surveys), www.LapopSurveys.org.
- LAPOP (2016). The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Project (Brazil and Colombia Surveys), www.LapopSurveys.org.
- GAMBOA, Laura (2017). "Opposition at the Margins: Strategies against the Erosion of Democracy in Colombia and Venezuela." *Comparative Politics*, 49(4): 457-477.
- GREEN, Donald, BRADLEY, Palmquits, y SCHICKLER, Eric (2002). *Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters*. New Haven, CT: Yale University Press.
- HANDLIN, Samuel y COLLIER, Ruth (2011). "The Diversity of Left Party Linkages and Competitive Advantages" En Levistky, Steven y Kenneth M. Roberts (eds.) *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 139-161.
- HUNTER, Wendy y TIMOTHY J. Power (2019). "Bolsonaro and Brazil's Illiberal Backlash." *Journal of Democracy*, 30 (1): 68-82.
- KNIGHT, Kathleen (2006). "Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century". *American Political Science Review*, 100 (4): 619-626.
- LAYMAN, Geoffrey y CARSEY, Thomas (2002). "Party Polarization and "Conflict Extension" in the American Electorate". *American Journal of Political Science* 46 (4): 786-802.
- LEVISTKY, Steven y ROBERTS, Kenneth (2011). Latin America's "Left Turn". A Framework for Analysis. En Levistky, Steven y Kenneth M. Roberts (eds.) *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 1-28.

- LEWIS-BECK, Michael, JACOBY, William, NORPOTH, Helmuth y WEISBERG, Herberth (2008). *The American Voter Revisited*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- MAINWARING, Scott POWER, Timothy y BIZARRO, Fernando (2018). “The Uneven Institutionalization of a Party System: Brazil.” En Scott Mainwaring (Ed.) *Party Systems in Latin America. Institutionalization, Decay, and Collapse*. New York: Cambridge University Press, pp. 164–200.
- MILANESE, Juan y SERRANO, Camilo (2019). “Consistencia espacio-temporal de los apoyos electorales. Un análisis ecológico de la transferencia de votos en las dieciséis fallidas circunscripciones de paz en Colombia.” Paper presentado en el X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), Monterrey, México.
- NIE, Norman, VERBA, Sidney y PETROCIK, John (1979). *The Changing American Voter*. Cambridge: Harvard University Press.
- OLIVELLA, Santiago y RODRÍGUEZ RAGA, Juan Carlos (2009). “Lo espacial es especial: La decisión de voto por proximidad en Colombia.” En ¿Juntos pero no revueltos? Partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006 en Colombia, ed. Felipe Botero. Bogotá: Universidad de los Andes, pp. 107-124.
- POWER, Timothy y RODRIGUES-SILVEIRA, Rodrigo (2019). “The Political Right and Party Politics.” En Barry Ames (ed.) *Routledge Handbook of Brazilian politics*. New York: Routledge, pp. 251–268.
- POWER, Timothy y ZUCCO, César (2009). “Estimating ideology of Brazilian Legislative parties, 1990-2005: a research communication. *Latin American Research Review*, 44 (1): 218-246.
- ROBERTS, Kenneth (2014). “Democracy, Free Markets, and the Rightist Dilemma in Latin America. En Luna, j. y Rovira Kaltwasser, C. (eds), *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 26-47.
- RODRÍGUEZ RAGA, Juan Carlos (2007). “Izquierdas y derechas en Colombia. Una mirada rápida a los razgos sociodemográficos del espectro ideológico del país.” *Colombia Internacional*, 66 (July-December):184-193.
- ROSS ARNOLD, Jason y SAMUELS, David (2011). Evidence from Public Opinion. En Levistky, Steven y Kenneth M. Roberts (eds.) *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 31–51.
- SAMUELS, David y ZUCCO, César (2018). *Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans. Voting*

- Behavior in Brazil*. New York: Cambridge University Press.
- SANTOS, Fabiano (2008). Brazilian democracy and the power of “old” theories of party competition. *Brazilian Political Science Review*, 2(1), 57–76.
- WEYLAND, Kurt (2010). “The Performance of Leftist Governments in Latin America. Conceptual and Theoretical Issues.” En Kurt Weyland, Raul Madrid y Wendy Hunter (eds.) *Leftist Governments in Latin America. Successes and Shortcomings*. New York: Cambridge University Press, pp. 1–27.
- WIESEHOMER, Nina y DOYLE, David (2012). “Attitudes, Ideological Associations and the Left-Right Divide in Latin America”. *Journal of Politics in Latin America*. 4 (1): 3-33.
- WIESEHOMER, Nina y DOYLE, David (2014). Profiling the Electorate Ideology and Attitudes of Rightwing Voters. En Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira Kaltwasser (eds), *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 48–72.
- ZALLER, John (1992). *The Nature and Origins of Mass Opinion*, New York: Cambridge University Press.
- ZECHMEISTER, Elizabeth (2006). “What’s Left and Who’s Right? A Q-method Study of Individual and Contextual Influences on the Meaning of Ideological Labels”. *Political Behavior*, 28: 151-173.
- ZECHMEISTER, Elizabeth (2015). “Left-Right Identifications and the Latin American Voter”. En Ryan Carlin, Matthew Singer y Elizabeth J. Zechmeister (eds.) *The Latin American Voter. Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*. Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 195-226.
- ZECHMEISTER, Elizabeth y CORRAL, Margarita 2012. “Individual and Contextual Constraints on Ideological Labels in Latin America”. *Comparative Political Studies*, 46 (6): 675-701.

EL DISCURSO DEL MIEDO COMO HERRAMIENTA
POLÍTICA E IDENTITARIA: LOS CASOS DE BRASIL Y
COLOMBIA

Omar Alejandro Bravo
Universidad Icesi | oabravo@icesi.edu.co

Introducción

En los últimos años se produjo un fenómeno político particular: el crecimiento de grupos y partidos políticos ideológicamente vinculados a una derecha de carácter radical y, en algunos casos, la llegada al poder de los mismos. Pueden mencionarse aquí al gobierno de Orban en Hungría, al de Trump en Estados Unidos, Duterte en Filipinas, Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina o el de Duque en Colombia, aunque en este último caso, éste representaría una continuidad de los gobiernos anteriores de Uribe, su mentor y jefe político. Al mismo tiempo, principalmente en países europeos, se registró un crecimiento significativo de grupos de ultraderecha, en algunos casos de asumida filiación neonazi. No obstante, se coincide con Traverso (2018) en que denominar estos grupos como fascistas puede resultar un error de análisis, entre otras cosas, porque los mismos sostienen políticas económicas próximas a los modelos neoliberales, a diferencia del rol preponderante del Estado que el fascismo defendía.

Por esto, su proximidad con los gobiernos neoliberales de la década de los 90' es parcial, ya que los discursos de esta nueva derecha se caracterizan en general por su agresividad y frontalidad, así como por la identificación obsesiva y repetida de enemigos sociales diversos contra los cuales proclama dirigir su acción de gobierno, perdiendo de este modo el tema económico su centralidad discursiva.

Esa caracterización de un otro social anómalo, ajeno y amenazante varía de acuerdo a cada país y conveniencia política, aunque mantiene ciertos criterios comunes donde se destacan atributos ideológicos, aspectos relativos a la sexualidad (sea en lo que hace a la identidad sexual y/o a las políticas que propongan, por ejemplo, educación sexual de carácter inclusivo) o cuestiones relacionadas al origen social o étnico de ciertos grupos, entre otros. Hecha esa identificación del enemigo social a enfrentar, el discurso contra el mismo es agresivo y directo, siendo con frecuencia este carácter destacado como un supuesto mérito de sinceridad y frontalidad.

Por esto, esos discursos pueden definirse genéricamente como discursos del miedo, dado que basan parte de su efectividad en despertar ese sentimiento defensivo frente a esas amenazas imaginarias, lo que habilita que figuras autoritarias vengan a conjurar esa amenaza supuesta. En ese sentido, se vinculan a la teoría del pánico moral, originalmente propuesta por Cohen (2017) en el contexto de la Inglaterra thatcheriana, para explicar las reacciones de parte de la población británica frente la presión mediática que estigmatizaba a grupos y sujetos.

Este crecimiento de las nuevas derechas, la manera en que el mismo posibilita una reconfiguración de discursos, prácticas sociales y formas de convivencia política, debe ser analizado en una perspectiva transdisciplinaria que exceda el campo de las ciencias políticas y la sociología, para abarcar el de la psicología social y la lingüística, entre otras áreas de conocimiento. Así mismo, constituye también una exigencia ética direccionada a dar respuesta a esta amenaza al orden democrático.

En el caso de este texto en particular, se pretende analizar los mecanismos de interpelación que estos discursos utilizan y sus efectos políticos, lo que implica discutir también el vínculo entre formas discursivas y prácticas sociales. Para este propósito, se considerarán dos contextos y situaciones particulares: los discursos producidos durante el plebiscito convocado para decidir la aprobación al proceso de paz desarrollado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc – EP en el año 2016, por parte de los opositores a este acuerdo (a partir de cuyo resultado, favorable a estos grupos, la derecha representada por el uribismo accedió al poder dos años más tarde), y los discursos de Bolsonaro, presidente brasileño ganador de las elecciones en el año 2018 y uno de los representantes de la derecha más dura y agresiva. A continuación, se destacan sus principales aspectos y el contexto donde se produjeron.

Brasil y Colombia: la derecha en pie de guerra

La llegada a la presidencia de Brasil de Jair Bolsonaro en el año 2018 estuvo precedida de una serie de hechos políticos significativos que facilitaron, de manera algo impensada, que los sectores de poder que este candidato representa ganaran las elecciones del país más grande de América Latina.

En primer lugar, es necesario destacar que los últimos cuatro gobiernos brasileños electos democráticamente habían pertenecido, desde el año 2003, al progresista Partido de los Trabajadores (PT), en coalición con otras fuerzas de diversa composición ideológica, entre ellas el PMDB. Lula, su líder histórico y presidente de estos dos primeros gobiernos, consiguió desarrollar políticas inclusivas que permitieron que amplios sectores de la población tuviesen un mayor acceso a bienes de consumo y a educación. Estas políticas no implicaron una confrontación política o afectación económica con los sectores de mayor poder económico ni con los grandes medios, que no obstante mantuvieron una actitud con el PT que oscilaba entre la tolerancia y la oposición.

Dilma Rousseff, la mandataria que sucedió a Lula, enfrentó una oposición más declarada y abierta, sobre todo a partir de su segundo mandato. Entre otros motivos, se atribuye el origen de esta situación al deterioro económico producido por la situación

internacional, al descubrimiento de enormes yacimientos petrolíferos en la plataforma marítima brasileña, cuya explotación el gobierno pretendía dejar en manos del estado, y al oportunismo de sectores de la oposición, de la prensa y de integrantes de la propia coalición de gobierno (principalmente el PMDB mencionado) que vieron la oportunidad de promover la destitución de la mandataria e impulsar a partir de allí un plan de reformas de carácter conservador.

Este proceso destituyente culminó en el año 2016 con la votación de diputados y senadores que permitió el alejamiento de la presidencia de Rousseff, por un motivo banal, y la asunción de su vicepresidente Michel Temer, un oscuro personaje de la política brasileña que rápidamente abandonó la coalición y asumió la tarea de promover esos cambios mencionados, amparado en un discurso de combate a la corrupción.

Al mismo tiempo, sectores del poder judicial, con un gran apoyo de la prensa, abrieron procesos contra Lula por delitos de corrupción que llevaron a la prisión del exmandatario en el año 2016, en el momento en que encabezaba las preferencias de voto en las futuras elecciones presidenciales. En este escenario político confuso, con el principal candidato impedido de participar de los comicios, comienza a ganar consenso y visibilidad la figura de Bolsonaro, un ex – militar hasta aquí integrante de un partido de escasa relevancia, el PSL, y que había transitado su larga carrera como diputado ejerciendo un discurso estridente y agresivo contra la izquierda, los movimientos sociales, las poblaciones afro e indígenas y la diversidad sexual, reivindicando la dictadura militar y el presunto orden social y económico que la misma sostuvo.

El apoyo a este candidato aumentó rápidamente, contando con el respaldo declarado de militares, iglesias evangélicas, terratenientes, parte de la prensa y sectores de la población que lo reivindicaron como aquel capaz de enfrentar a la corrupción, a la clase política tradicional y garantizar principalmente el orden social. En su campaña apeló con frecuencia a imitar el disparo de un arma, reivindicando el libre uso de las mismas. El atentado en su contra, un apuñalamiento por parte de un sujeto con problemas mentales, le dio más impulso a su carrera política, que lo llevó finalmente a ganar las elecciones y, una vez en el poder, a transitar la primera parte de su mandato entre una notable incapacidad política de gestión, acusaciones de corrupción, y el mismo discurso de odio y segregación que venía sosteniendo.

En Colombia, por otra parte, la historia del conflicto armado, que ha involucrado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, carteles de narcotráfico y fuerza pública, ha marcado significativamente la vida del país en los últimos cincuenta años, con episodios de violencia particularmente significativos, que derivaron en una extensa cantidad de muertos y desaparecidos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

Con la intención de poner coto a este ciclo de violencia política, inició el 26 de agosto del año 2012 un proceso de paz con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), extendiéndose hasta el 24 de agosto del 2016. El mismo se organizó en torno a varios temas: reforma rural, participación política, cese al fuego con verificación, drogas ilícitas y reparación a víctimas.

La Corte Constitucional aprobó la realización de un referéndum aprobatorio de este acuerdo de paz, a realizarse el día 2 de octubre del 2016. Se debía responder aquí a una sola pregunta: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Para su validez, la votación debía alcanzar el 13% del censo electoral (cerca de 4.400.000 votos).

Después de una tensa campaña de difusión de las propuestas de ambos sectores, caracterizada por un uso intensivo de las redes sociales y la utilización de argumentos falsos e intimidatorios acerca de las consecuencias de la victoria del Sí, los partidarios del No se impusieron por estrecho margen: 50,2% contra 49,8 de los defensores de la aprobación de los acuerdos. Aquí resultó significativo para este resultado el apoyo de sectores evangélicos, que argumentaron que estos acuerdos alcanzados propiciaban una denominada ideología de género, que pondría en riesgo a la familia tradicional.

Esto puso en crisis al proceso de paz, que debió pasar por nuevas negociaciones y reformulaciones, hasta su posterior firma definitiva. No obstante, los sectores opuestos a ese acuerdo manifestaron su inconformidad con las modificaciones realizadas, insistiendo con que por ese camino se le estaba entregando el país a la subversión.

De esta manera, a pesar de la puesta en vigencia del acuerdo de paz, algunos hechos de violencia se mantienen (entre ellos, la persecución y el asesinato de ex - guerrilleros y líderes sociales) y los territorios abandonados por la guerrilla están siendo ocupados por otros grupos armados y organizaciones criminales de diverso orden.

Como ya fue mencionado, el objetivo de este trabajo es analizar los aspectos comunes de los discursos producidos en estos contextos, por parte de los actores políticos referenciados para este propósito (el uribismo en Colombia, Bolsonaro en Brasil) y las formas de interpelación que les otorgan poder de convencimiento y seducción de distintos grupos sociales. Para esto, es necesario considerar la relación entre discursos, realidad y poder, y la forma y mecanismos con que estos procesos autoritarios consiguen seducir y convencer a amplios sectores sociales.

Discursos, poder, verdad e identidad política

La discusión en torno a las formas de interpelación y convencimiento que los discursos adoptan podría remontarse al clásico debate establecido entre sofistas y estoicos, por un lado, y el platonismo por otro, que atravesó a la filosofía griega y marcó posteriormente a toda la filosofía y las ciencias occidentales (García-Roza, 1994).

Los sofistas en particular, afirmaron que un argumento se impone por su poder de convencimiento y las relaciones de poder y saber que lo sostienen. No obstante, esta corriente filosófica quedó históricamente relegada, imponiéndose el platonismo y su noción de modelo. En esta perspectiva, así como era necesario distinguir las copias de los simulacros, era posible establecer una diferencia entre los decires y el discurso, este último enunciador de una verdad universal.

Este paradigma dominó todo el desarrollo posterior de las ciencias y el pensamiento occidental. La posmodernidad vino a poner en cuestión estos paradigmas. Entre otros representantes de estas nuevas corrientes de pensamiento, Foucault (1999), desde un retorno al pensamiento de Nietzsche (2002), colocó en discusión estos principios de objetividad y verdad, hasta aquí propios del discurso científico pero también presentes, al menos como expectativa ética, en el ámbito de la política. En buena medida, las tendencias posmodernas que afirman la supremacía del lenguaje, donde la realidad es una construcción social mediada por un orden lingüístico, encuentran legitimación en la teoría foucaultiana. El denominado giro narrativo, secuencialmente posterior a los giros lingüísticos y discursivos, es el que con mayor radicalidad propone esta noción, siendo quizás Derrida (1989) el autor más representativo a este respecto.

En este marco, y para definir una posición al respecto de la relación entre un discurso y las condiciones materiales en que el mismo se produce, cabe afirmar aquí que éste no es un efecto superestructural de relaciones de poder que se expresa de manera directa y lineal, como por ejemplo algunas versiones más rudimentarias del marxismo postularon, sino que posee una autonomía relativa. Ese carácter relativo implica también que no puede ser considerado de forma independiente en relación a dichas condiciones estructurales, con las cuales mantiene una relación dialéctica. De esta forma, se toma distancia de las corrientes actuales antes mencionadas que consideran solamente esa dimensión discursiva como campo de análisis e intervención, ocasionalmente destacando el carácter ontológicamente mudo de su teoría, como es el caso de Gergen (1991).

A manera de ejemplo de esta relación entre discurso y realidad, enmarcada en el contexto de una situación histórica específica, puede considerarse el fenómeno del nazismo, sus formas discursivas y efectos políticos. El discurso nazi no expresó (sola-

mente) una formación discursiva que articuló varios discursos concurrentes, expresados en parte en una máquina de propaganda eficiente; fue también el resultado de un proceso históricamente más extenso y anterior, donde se combinaron la derrota alemana en la primera guerra mundial, la crisis hiperinflacionaria posterior, y el fracaso de la revolución socialista. El discurso racista, por otra parte, ya se había difundido en varios países de Europa y Estados Unidos, pero en Alemania cobra más fuerza probablemente por la relación entre la hiperinflación y la acusación dirigida a la comunidad judía de lucrar con la especulación financiera, por parte de la ultraderecha.

Las técnicas y experimentos que se aplicaron más tarde en los campos de concentración y exterminio también registraban numerosos antecedentes, en este caso, revestidos de una pretensión científicista, pudiendo destacarse aquí a Lombroso (2016) y la teoría del atavismo que, como parte de una extensa genealogía, intentaba situar en ciertas formas físicas y grupos sociales el origen de las conductas consideradas socialmente anómalas, como las infracciones a la ley o el comportamiento de los pacientes mentales, ambos grupos posibles de reunir en una misma dimensión explicativa a partir de esta perspectiva. De esta manera, los discursos legitimadores del nazismo, que movilizaron a buena parte de la sociedad alemana, encontraron su legitimidad y potencia en la situación socioeconómica de la época, configurándose de una manera particular.

El nazismo fue, en una perspectiva más amplia, lo que impulsó la consideración de la dimensión subjetiva de los procesos políticos autoritarios, tanto en lo que hace a su génesis como a sus formas de legitimación social, y en particular en lo que refiere a la manera en que los sujetos se identifican con ciertas ideologías y partidos y las conductas que de aquí se originan, dirección ésta de análisis iniciada en buena medida por el Holocausto y, en particular, por la obra de Arendt (2012), donde se describe la personalidad del criminal nazi Eichman durante su juicio en Jerusalén.

La célebre descripción arendtiana sobre el carácter gris, opaco de la personalidad de Eichmann y la manera en que éste ingresa y asciende en el sistema de poder nazi, abre un campo de análisis que, entre otras cosas, le otorga una complejidad mayor a la relación entre la adhesión política a este tipo de procesos y la condición del sujeto que opta por esta identidad ideológica.

Desde una inquietud próxima, Eco (1998) analizó los mecanismos político-comunicacionales que legitimarían los discursos fascistas y les darían cierto poder de seducción y convencimiento. Para este propósito, destacó:

- La definición de un enemigo omnipotente y difuso, a quien se le achaca la responsabilidad por los problemas de la sociedad (por ejemplo, los judíos en la Alemania nazi),
- La intolerancia frente al pensamiento crítico y las diferencias, partiendo de la necesidad de construir una sociedad homogénea en cuanto a pensamientos y propósitos,
- La exaltación del uso de la violencia, en lugar del diálogo,
- El nacionalismo y la xenofobia, como pilares de esa identidad nacional única,
- El principio de guerra permanente, que permite postergar garantías y derechos en nombre de la urgencia en el combate,
- La creación de figuras de liderazgo, en las que se delegan todas las decisiones,
- El machismo y el populismo anti-institucional, que reforzarían la delegación del poder.

Con matices y particularidades, esta clase de mecanismos se ha repetido en procesos políticos como el nazismo, algunas dictaduras latinoamericanas y, en un contexto más próximo, en los gobiernos anteriores de Alvaro Uribe en Colombia (2002-2006 y 2006-2010), entre otros. En estos últimos, el Estado persiguió a opositores, defensores de derechos humanos, jueces y sindicalistas, bajo el pretexto de ser colaboradores de la guerrilla, acusaciones nunca comprobadas pero que avalaron encarcelamientos, amenazas y asesinatos. No obstante estas acciones, el ex – presidente Uribe mantiene actualmente un alto índice de popularidad, sin haber variado su discurso o cambiado su perfil ideológico, constituyendo lo que se ha denominado como un embrujo autoritario (CINEP, 2003).

Este tipo de fenómenos lleva a preguntarse por los mecanismos ideológicos y las formas discursivas que permiten la legitimidad de estas políticas y sus representantes. En este sentido, Martín-Baró (1998; 2003) fue un pionero en el campo de la psicología latinoamericana a la hora de intentar entender la relación entre los mecanismos de opresión y violencia propios del capitalismo periférico y sus efectos psicosociales, entre ellos, la legitimación social de los opresores. La guerra civil en El Salvador operó como contexto para su producción teórica, en el marco de la extrema violencia que caracterizó el conflicto en ese país durante los años 80’.

El sentido político de su trabajo, de la propia comprensión del rol de la psicología en contextos de explotación, estuvo distante de cualquier pretensión de supuesta objetividad o distancia en relación a los hechos considerados. Este compromiso político se expresa en la siguiente afirmación:

Se trata de poner al saber psicológico al servicio de la construcción de una sociedad donde el bienestar de los menos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la deshumanización de todos (Martín-Baró, 1998: 77).

Desde esta ética e intención política, consideró que el rol de la mentira y la distorsión informativa realizada por los sectores dominantes operaba al servicio de la reproducción del sistema de explotación de amplios sectores de la población (en este caso en particular, la salvadoreña). De esta forma lo que denominó como mentira social, constituía una elaboración ideológica de la realidad, para tornarla “compatible con los intereses de la clase dominante, fijando así los límites en que se puede mover la conciencia colectiva” (Martín-Baró, 1998: 188)

Blanco, De La Corte y Sabucedo (2018) relacionan esta noción de ocultamiento de la realidad con el concepto de ideología considerando, a partir de Manheim, la función de la misma en la mistificación de la realidad social. Esta forma de interpretar la realidad social desde un cierto sentido común se aproxima a la manera en que la teoría de las representaciones sociales entiende este vínculo, a partir de considerar que ese sentido común está socialmente construido y expresa formas de relación social y conflictos epocales (Jodelet, 2001).

De esta manera, el poder se entiende desde una perspectiva psicosocial, no sólo como un fenómeno puramente social y político, sino como una forma de relación social con efectos subjetivos. El rol de la ideología, en esta perspectiva, sería el de la mediación psíquica del poder según Martín-Baró.

Los procesos políticos de carácter democrático y participativo, que permitirían exponer este tipo de mecanismos y, eventualmente, modificar su función de ocultamiento de la realidad y sus efectos políticos, se ven dificultados en los contextos de extrema polarización, donde se crean representaciones en torno a un otro político entendido como enemigo, con quien no puede haber puntos de acuerdo o diálogo.

De esta forma, “el enemigo político sirve para encarnar la causa de todos los males sociales y para justificar aquellas acciones en su contra que de otro modo resultarían éticas y políticamente inaceptables” (Martín-Baró, 2003: 143).

El rol de los medios de comunicación es de vital importancia para que estos procesos se reproduzcan, dentro de lo que Martín-Baró consideró como la institucionalización de la mentira. Esta institucionalización le da un carácter regular y permanente

a esa situación de violencia, obligando a que muchas personas deban mantener un discurso y una apariencia social que les permita ocultar su forma de pensar, sobre todo si la misma es contraria a los valores y el discurso dominante.

De esta manera, estos procesos de polarización social se afirman y reproducen sobre tres principios: la polarización social, la mentira institucionalizada y la militarización de la vida social. En lo que hace a los efectos de los mismos en la salud mental de los sujetos involucrados, se puede considerar que la dificultad de lidiar con la diferencia, de establecer lazos sociales de carácter amplio, atenta contra la posibilidad de transitar el día a día con el menor grado de sufrimiento psíquico posible. La vida social correría el riesgo de volverse un escenario de disputa permanente, limitando los espacios de circulación e integración social cotidianos.

Los dos procesos políticos descritos, el brasileño y el colombiano, son la expresión de sociedades caracterizadas por esta forma de entender a un otro social, siendo la polarización política un fenómeno significativo que atravesó a todos los espacios sociales en ambos países, lo que hace a su análisis pertinente a los objetivos de este trabajo.

Análisis de la información

Para poder analizar el material aquí considerado, la teoría del análisis del discurso resulta de particular utilidad. El análisis de discurso nace en los años 70, siendo Pêcheux (1978) su primer y principal exponente. Esta teoría se propone analizar las dimensiones ideológicas y sociales presentes en un discurso o texto que, por su vez, se integra en formaciones discursivas de carácter más amplio.

Para este fin, se basa en tres conceptos principales: el discurso, principalmente en la lectura que Foucault realiza del mismo; la ideología, inicialmente en la perspectiva althusseriana (2005) y la noción del uso social del lenguaje enunciada por Saussure (2008).

De esta forma, el discurso es entendido como “una práctica social, una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito.” (Casalmiglia Blancáfort y Tusón Valls, 1999: 15).

La impronta estructuralista que esta teoría mantuvo inicialmente se transforma más tarde, principalmente a partir del último trabajo de Pêcheux *Discurso, estrutura ou acontecimento?* (1990), donde se critica la noción anterior de discurso entendida como una máquina estructural cerrada.

De esta manera, el concepto de ideología de Ricouer (1994) se incorpora a este marco teórico, incluyendo la función de cohesión de grupo que la misma posibilitaría, más allá de su caracterización anterior como falsa conciencia.

A partir de esta nueva perspectiva, se entiende que el discurso puede transformarse en la interacción social, considerando no solo el tipo de mensaje emitido sino también la posición social de quien lo enuncia y su lugar de poder.

En su aspecto metodológico, el análisis de discurso considera tres momentos analíticos: el que trabaja sobre la estructura sintáctica del discurso o texto, apuntando a analizar las formas discursivas y sus efectos; un segundo momento, que considera la relación de un discurso con otros discursos o textos y un tercero, donde estas formaciones discursivas se relacionan las condiciones sociales, culturales y políticas de cada época.

Fueron considerados, para este trabajo, discursos de Alvaro Uribe y un video producido por Marcos F. Suárez, concejal uribista de la ciudad de Bogotá, ambos partidarios del No en el referéndum por la paz en Colombia, y dos discursos de Bolsonaro en Brasil, el primero pronunciado en un evento organizado por grupos evangélicos, poco después de su victoria electoral, y el segundo en su posesión en el cargo ejecutivo. La elección de este material se realizó a partir de una búsqueda en youtube, hecha de manera aleatoria, que tuvo como criterios de búsqueda las palabras *Discursos del No en Colombia* y *Discursos de Bolsonaro en Brasil*.

A partir de este material analizado, se pueden considerar tres categorías de análisis. La primera tendría que ver con la temporalidad política entendida como amenazante e incierta, la segunda con la forma en que se define una identidad común frente a una amenaza externa y la tercera se relaciona con el discurso de la libertad, donde la cuestión económica aparece de forma secundaria.

La primera categoría mencionada se relaciona discursivamente con un futuro en donde un posible gobierno de izquierda acabaría con las bases económicas y morales de cada sociedad, y eventualmente a un pasado donde las condiciones para ese riesgo fueron establecidas. En ambos casos, esa amenaza se presenta como externa, en tanto el comunismo representado por el PT brasileño y el castrochavismo, en el caso colombiano (en ambos casos, atravesados por la denominada ideología de género), serían ideologías foráneas que amenazarían a las sociedades brasileña y colombiana y contra las cuales es preciso defenderse.

Esto se pone de manifiesto en las siguientes expresiones, comenzando por los discursos de Colombia:

A nosotros nos parece que lo que han acordado el gobierno de Santos y las Farc no construye paz, sino que le crea a Colombia el enorme riesgo de ser otra Cuba, otra Venezuela (CRS MOVL, 2016, 2:51).

Tus violadores pueden ser elegidos. Diputados aquí en Villanueva, concejales en la Guajira, gobernadores, congresistas, aún presidente de la república. Y la niña pregunta: mamá, ¿se arrepienten, piden perdón? Y la mamá le dice: no, en ninguna parte (CRS MOVL a, 2016, 1:50).

Esa bebidita que nos dan, en un frasco que dice paz, y por dentro tiene un peligroso líquido venenoso de Socialismo siglo XXI (CRS MOVL b, 2016, 0:10).

Con el adecuado nombre Enfoque de género, la ideología de género ha infiltrado todo el proceso de acuerdos entre el gobierno y las Farc-EP (Ramírez, 2016, 3:40).

Bueno, es un hecho: si votamos Sí al plebiscito, estaríamos aceptando que en Colombia se implemente la ideología de género a través de los acuerdos con las Farc (Ramírez, 2016, 6:50).

En el contexto brasileño, estas representaciones de u otro amenazante y ajeno se expresan de la siguiente manera:

Los tentáculos de la izquierda jamás serían arrancados sin la mando de Dios (Trader por necesidad, 2018, 0:40).

Liberaremos a Brasil y al Itamarati de las relaciones internacionales con carácter ideológico a la que fueron sometidas en los últimos años (El derecho, 2019, 9:43).

No podemos dejar que ideologías nefastas vengan a dividir a los brasileños. Ideologías que destruyen nuestros valores y tradiciones, destruyen nuestras familias, cimiento de nuestra sociedad (Trader por necesidad, 2018, 3:36).

Tenemos el gran desafío de enfrentar los efectos de la crisis económica, del desempleo, de la ideologización de nuestros niños, del desvirtuamiento de los derechos humanos, de la deconstrucción de nuestra familia(Trader por necesidad, 2018, 5:25).

Por mucho tiempo el país fue gobernado atendiendo a intereses partidarios que no son lo de los brasileños. Vamos a restablecer el orden en este país (Trader por necesidad, 2018,7:13).

Cabe destacar que el término restablecer se usa con una cierta frecuencia, refiriendo a la necesidad de devolver el país a un pasado mítico de orden y paz, nunca bien situado en tiempo e historia.

La segunda categoría engloba los recursos discursivos que apuntan a definir una pertenencia e identidad común, tanto entre los seguidores y votantes de Bolsonaro en Brasil como entre los partidarios del NO colombiano, entendidos como representativos de un supuesto ser nacional (ser brasileño, ser colombiano, siempre utilizando un genérico masculino) o de una institución social, la familia, amenazada por un otro difuso e impreciso. También se apeló con frecuencia, en ambos casos considerados, a utilizar la imagen y opinión de personas presentadas como “gente del común”, sin afiliación política ni ideología.

Se pueden citar algunas expresiones producidas en los discursos colombianos aquí considerados,

Nos oponemos a que se le entregue este país a la ideología de las Farc (CRS MOVL b, 2016, 6:15).

No afecte a la familia tradicional, que es la que tiene que recuperar valores y es la que tiene que garantizar la permanencia cuantitativa y cualitativa de la especie humana (CRS MOVL b, 2016, 4:25).

Ya sabemos lo que es el enfoque de género para este gobierno. Nosotros somos de la idea de que hay que crear un sentimiento de respeto a la intimidad, la intimidad hay que respetarla, pero es que este gobierno, con su enfoque de género, no respeta a la familia ni a los niños (CRS MOVL b, 2016, 3:10).

No como este gobierno, que quiso imponer un manual dejando a un lado a la familia, a los educadores y a las buenas costumbres (CRS MOVL b, 2016, 4:00).

Su tarea y la nuestra, como defensores de la familia es leerlo todo, ya que si aprobamos una sola página de lo que dice este texto, estaríamos aprobando todo el acuerdo (Ramírez, 2016, 5:50).

Bueno, es un hecho: si votamos Sí al plebiscito, estaríamos aceptando que en Colombia se implemente la ideología de género a través de los acuerdos con las Farc (Ramírez, 2016, 6:50) Pastor

Todos los colombianos quisiéramos la paz, y nosotros los colombianos también, pero jamás votaríamos a favor de un plebiscito y un acuerdo de paz que pisotee los principios bíblicos y que pretende atacar la familia (Ramírez, 2016, 7:11).

En el contexto brasileño, y en relación a la misma categoría, cabe destacar estos trechos discursivos:

Nunca estuve solo, siempre sentí la presencia de Dios y la fuerza del pueblo brasileño. Oraciones de hombres, mujeres, niños, familias enteras, que ante la amenaza de seguir por un camino que no es el que los brasileños desean y merecen, colocaron a Brasil, nuestro amado Brasil, por encima de todo (Trader por necesidad, 2018, 3:40).

Como defensor de la libertad, voy a guiar un gobierno que defienda y proteja los derechos de los ciudadanos que cumplen sus deberes y respetan las leyes (El derecho, 2019, 5:50).

Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos (El derecho, 2019, 11:34).

Podemos, yo, tú, nuestras familias, todos juntos, restablecer padrones éticos y morales que transformarán nuestro Brasil (El derecho, 2019, 3:54).

Nuestra preocupación será con la seguridad de las personas de bien y la garantía del derecho de propiedad y de la legítima defensa (El derecho, 2019, 6:20).

La tercera categoría reúne aquellos discursos que aparecen de forma más velada, como un subtexto, y que refieren a la libertad económica como un principio fundamental para el progreso y el desarrollo colectivos. Estos discursos se mezclan con los que defienden las libertades individuales, intentando asemejar un tipo de libertades con otras.

En el caso colombiano, cabe destacar estas expresiones:

Le está yendo mal a las empresas, mal a los trabajadores. Las empresas tienen miedo. Si no se expanden las empresas, ¿Cómo se va a generar buen empleo? Y en este proyecto hay deseos expropiatorios...dejan a esta país sin comida, como los Castro en Cuba y Chávez en Venezuela (CRS MOVL, 2016, 12:20).

Presidente, no acabe la empresa privada, no acabe las libertades (CRS MOVL b, 2016, 1:48).

En relación a los discursos brasileños aquí considerados:

Ese futuro, del que hablo y creo, pasa por un gobierno que cree condiciones para que todos crezcan, y significa que el gobierno federal dará un paso atrás reduciendo su estructura y burocracia, cortando desperdicios y privilegios, para que las personas puedan dar muchos pasos adelante. Nuestro gobierno va a quebrar paradigmas, vamos a confiar en las personas, vamos a desburocratizar, simplificar y permitir que el ciudadano, el emprendedor, tenga más libertad para crear y construir su futuro(Trader por necesidad, 2018, 6:26).

El Estado democrático y de derecho tiene como uno de sus pilares el derecho de propiedad privada. Reafirmamos aquí el respeto y la defensa de ese principio (Trader por necesidad, 2018, 8:26).

Y me coloco ante toda la Nación, en este día, como el día en que el pueblo comenzó a liberarse del socialismo, a liberarse de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto (Trader por necesidad, 2018, 1:04).

A manera de complemento de la información aquí considerada, cabe recordar las declaraciones del jefe de campaña del uribismo sobre las tácticas propagandísticas utilizadas, donde destacó la forma en que se interpelaba a cada público: a los pensionados, se les decía que se les iba a quitar el 7% del salario para financiar a los ex guerrilleros; a los asalariados, que también sufrirían descuentos salariales con el mismo propósito; a los pobres, que se les iban a retirar los subsidios; a los ricos, que les iban a quitar sus propiedades; a los grupos religiosos, que iban a tornar homosexuales a sus hijos. Esto indica que estos discursos se construyen a partir de una táctica, no son una mera expresión de las representaciones sociales y/o convicciones políticas de quien los emite.

Teniendo en cuenta el material considerado, en lo que hace a la primera etapa del análisis de discurso, la que destaca marcas discursivas a nivel de vocabulario y gramática y sus efectos, varios aspectos pueden ser destacados en ambos ejemplos.

En primer lugar, puede mencionarse el recurrente uso del paralelismo y la naturalización, herramientas estas que pretenden darle un carácter natural a una aproximación realizada con cierto propósito e intención política, asimilando dos fenómenos diferentes. Podemos destacar aquí la naturalización de la relación entre izquierda, caos y desintegración social, presentes sobre todo en la primera categoría. Así mismo, la supuesta identidad colectiva, destacada en la segunda categoría, opera en el mismo sentido.

En el caso colombiano, el recurso del paralelismo, sirve para promover la asociación entre el proceso de paz y un supuesto peligro encarnado en las políticas de género que este traería como consecuencia, ambas amenazantes del orden social.

El maniqueísmo, recurso este destacado también en el análisis de discurso, sirve en ambos casos para trazar una línea social demarcatoria entre un nosotros genérico (gente buena, inocente, del común) y eso otro amenazante, sin rostro ni identidad clara. Este elemento de convencimiento, presente sobre todo en la segunda categoría, permite también que opere el recurso de la complicidad argumentativa, basada en el uso de un nosotros que incluye al primer grupo mencionado.

El silenciamiento, destacable sobre todo en la tercera categoría de análisis, que opera en el sentido de recortarle volumen discursivo a un tema ideológicamente central a ambas propuestas políticas, como es el principio de defensa de una economía neoliberal, sirve también, como ya fue dicho, para dejar esta dimensión en un conveniente segundo plano, subordinada a otro tipo de mensajes.

De esta manera, en el análisis conjunto de las tres categorías, se percibe como el discurso de la seguridad predomina, siendo el supuesto progreso económico una consecuencia natural de la eliminación de ese otro social anómalo y del orden social alcanzado bajo la tutela de una figura política fuerte, lo que constituye una formación discursiva clásica de los gobiernos y propuestas políticas autoritarias.

Esta formación discursiva puede alcanzar cierta hegemonía en condiciones sociales particulares, donde hay una marcada tensión entre sectores y clases sociales, producto de una estructura social injusta, pero en la que esas tensiones no consiguen articularse en propuestas y acciones políticas de carácter progresista, por lo que las manifestaciones derivadas de esa situación se pueden reducir a un problema de seguridad pública, responsabilidad de grupos y sujetos de una perversa condición.

De esta forma se encuentran, en los dos ejemplos considerados, aquellos aspectos destacados por Martín-Baró como propios de contextos donde existe una acentuada tensión social: la polarización política, la mentira institucionalizada y la militarización de la vida social.

Así mismo, el modelo que Eco plantea para entender el fenómeno del fascismo muestra su vigencia. Las figuras de liderazgo, encarnadas en este caso en Bolsonaro y Uribe, tienen un carácter delegativo, producido en el nombre de la guerra permanente que sostienen contra ese enemigo invisible y al mismo tiempo omnipresente. La intolerancia, también patrimonio de los discursos analizados y de las formaciones políticas que los producen, se ampara en la defensa social ya destacada, en donde ese enemigo, por su carácter peligroso y amenazante, perdería el derecho a la palabra y a la propia pertenencia social.

El tono paternalista que la delegación de poder en figuras autoritarias produce facilita disimular en parte estos mecanismos y sus efectos, ya que esas caracterizaciones sociales y políticas son hechas por otro al que se le incumbe un saber al respecto, eximiendo a quien apoya estos procesos de cualquier responsabilidad al respecto.

Conclusiones

Estos procesos aquí analizados indican que ciertas formas discursivas y sus efectos se repiten en gobiernos autoritarios, sean estos dictatoriales o derivados de procesos de democracia formal. Estas formas discursivas adquieren poder de convencimiento cuando se articulan con condiciones sociales y económicas donde los sectores sociales excluidos tienen una débil organización política y el miedo opera como disuasorio para muchos sujetos y sectores críticos de dichos procesos.

Las consideraciones realizadas en torno a estos dos ejemplos pueden extenderse a otros procesos políticos contemporáneos. En el marco general de América Latina, en este momento particular de pérdida del poder por parte de los gobiernos de la región considerados progresistas (cabe mencionar aquí al Ecuador de Correa, la Argentina kirchnerista, el Brasil de Lula y el gobierno de Bachelet en Chile, principalmente), el orden jerárquico y la composición de los discursos se modifica, tomando volumen un cierto discurso anticorrupción enunciado en general desde un carácter antipolítico (asociando la política con el robo y la mentira y a la ideología con el sectarismo).

El discurso jurídico adquiere un mayor volumen y funcionalidad social, en estos casos, para marcar un límite político, donde los gobiernos progresistas encuentran un coto para sus acciones, cuya transgresión implica el riesgo de una judicialización futura.

La legitimación social de estas prácticas jurídico – políticas se adquiere asimilando progresismo y populismo con corrupción y desmanejo, naturalizando así un vínculo de carácter ideológico. En lo que hace al término populismo en particular, su uso reiterado e indiscriminado lo torna un significante vacío, cuya reiteración le permite adquirir un tono peyorativo.

Esos discursos que se presentan desde esa identidad antipolítica y, al menos en su forma, antisistémicos, han sido hegemonizados en general por los partidos de derecha, lo que se refleja en la victoria electoral de Trump en estados Unidos, junto a los dos ejemplos aquí considerados.

En parte, estos fenómenos se apoyan también en los procesos de exclusión social que permiten que los trabajadores formales y la clase media se sientan amenazados por las masas crecientes de desempleados e inmigrantes, que vendrían a quitarles sus conquistas sociales y afectar su calidad de vida. En algunos casos, las formas de interpelación que los gobiernos progresistas sostuvieron, donde se reiteraba el discurso del ascenso social y la capacidad aumentada de consumo que sus políticas posibilitaban, abrió el espacio para que se produzcan estas tensiones sociales, ya que es esta una forma de referirse a individuos y no a clases o sectores sociales, lo que debilita la conciencia política y las prácticas asociadas.

Para poder recuperar la hegemonía y el poder, el desafío para esos movimientos progresistas pasa por conseguir una articulación entre estos sectores mencionados, lo que implica también definir una estrategia discursiva que permita desmontar los supuestos aquí considerados. La psicología en general, más allá del recorte subdisciplinario en el cual este texto se instala, tiene un compromiso a este respecto, en la senda que Martín-Baró marcó.

Referencias bibliográficas

- ALTHUSSER, Louis (2005) *Ideología y aparatos ideológicos del estado*. Buenos Aires: Nueva Visión argentina.
- ARENDT, Hanna (2012) *Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal*. Buenos Aires: Lumen.
- BARRERO CUELLAR, Edgar (2012) *Del discurso encantador a la praxis liberadora. Psicología de la liberación. Aportes para la construcción de una psicología desde el sur*. Bogotá: Ediciones Cátedra Libre.
- BLANCO, Amalio; DE LA CORTE, Luis y SABUCEDO, José Manuel (2018) Para una psicología social crítica no construccionista: reflexiones a partir del realismo crítico de Ignacio Martín-Baró. *Universitas Psychologica*, vol. 17, núm. 1.
- CALSALMIGLIA BLANCAFÓRT, Helena y TUSÓN VALLS, Amparo (1999) *Las cosas del decir, manual de análisis del discurso*. Barcelona: Ariel.
- CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (2014) *Archivo de graves violaciones a los DDHH. Elementos para una política pública*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- CINEP (2003) *El embrujo autoritario: primer año de gobierno de Alvaro Uribe Vélez*. Bogotá: Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo.
- Cohen, Stanley (2017). *Demonios populares y "pánicos morales": delincuencia juvenil, subculturas, vandalismo, drogas y violencia*. Barcelona: Gedisa.
- CRS MOVL (2016, setiembre, 5) *Discurso de Alvaro Uribe por el no al plebiscito en bello parte 1 [video]* Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rFYM4gOk54E>
- CRS MOVL a (2016, setiembre, 5) *Discurso de Alvaro Uribe por el no al plebiscito en bello parte 2 [video]* Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=fuC4ajGjAfc>
- CRS MOVL b (2016, setiembre, 5) *Discurso de Alvaro Uribe por el no al plebiscito en bello parte 3 [video]* Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Ipi7JEhq7Mg>
- DERRIDA, Jacques (1989) *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos.
- EL DERECHAZO (2019, enero, 2) *Primer discurso de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Subtítulos en español [video]* Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zywjfgCm2X0&t=539s>

- ECO, Umberto (1998) *Il fascismo eterno*. Roma: La nave di Teseo.
- FOUCAULT, Michel (1974) *Nietzsche, la genealogía, la historia*. Valencia: Editorial Pre-textos.
- FOUCAULT, Michel (1999) *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- FOUCAULT, Michel (2013) *El orden del discurso*. México: Tusquets.
- GARCÍA-ROZA, Alfredo (1994) *Freud e o inconsciente*. Rio de Janeiro: Zahar.
- GERGEN, Kenneth (1991) *El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo*. Barcelona: Paidós.
- JODELET, Denise (2001) *As representações sociais*. Rio de Janeiro: Eduerj.
- LACLAU, Ernesto (2004) *Psicoanálisis y filosofía*. Buenos Aires: Escuela de la Orientación Lacaniana - EOL.
- LOMBROSO, Cesare (2016) *Los criminales*. Santiago, Chile: Ediciones jurídicas Olejnik (Original publicado en 1893).
- MAINGUENEAU, Dominique (1980) *Introducción a los métodos del análisis de discurso*. París: Hachette.
- MANHEIM, Karl (1973) *Ideología y utopía: Introducción a la sociología del conocimiento*. México: Fondo de Cultura Económica.
- MARTÍN-BARÓ, Ignacio (1998) *Psicología de la liberación*. San Salvador: UCA.
- MARTÍN-BARÓ, Ignacio (2003) *Poder, ideología y violencia*. Madrid: Trotta.
- MONTERO, Maritza (1991) *Acción y discurso: problemas de psicología política en América Latina*. Texas: BPR Publishers.
- NIETZSCHE, Friedrich (2002) *La gaya ciencia*. México: Edaf (Original publicado en 1882)
- PECHEUX, Michel (1978) *Hacia un análisis automático del discurso*. Barcelona: Gredos.
- PECHEUX, Michel (1990) *Discurso, estrutura ou acontecimento?* Campinas: Pontes.
- PECHEUX, Michel (2016) *Las verdades evidentes. Lingüística, semántica, filosofía*. Buenos Aires: Ediciones del CCC. Colección Historia del Presente.
- PLUT, Sebastián *UCES*. Contribución del análisis de discurso a la psicología política. Subjetividad y procesos cognitivos. 2007. 10, pp 207-234.
- RAMÍREZ, Marco (2016, agosto, 27) *(Alerta) Ideología de género en los acuerdos con las Farc*.

[video] Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WiQG1koMr5g&t=80s>

RICOEUR, Paul (1994). *Ideología y utopía*. Barcelona: Gedisa Editorial.

SAUSSURE, Ferdinand (2008) *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Losada (Original publicado en 1913)

TRADER POR NECESIDAD (2018, octubre, 30) *Primer Discurso Jair Bolsonaro Subtitulado en español* [video] Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=gjgVUuusrQ0&t=2s>

TRAVERSO, Enzo (2018) *Las nuevas caras de la derecha*. Buenos Aires: Siglo XXI.

EL DERECHO CONTRA EL “MIEDO”: APUNTES
HISTÓRICOS Y POLÍTICOS SOBRE HERRAMIENTAS
JURÍDICAS CONTRA “COMUNISTAS” Y “DISIDENTES”
EN COLOMBIA*

Mario Alberto Cajas Sarria
Universidad Icesi | mcajas@icesi.edu.co

* Este trabajo retoma aspectos tratados en: *La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991*; *El juicio al Estatuto de Seguridad de 1978 o uno de los “peores casos” en la historia de la Corte Suprema de Justicia*; *Haciendo memoria de una Corte que le temía a la revolución: a propósito de un juicio de constitucionalidad bajo la hegemonía conservadora*; y *El derecho contra el comunismo en Colombia 1920-1956*.

Introducción

El miedo parece un elemento común de los enfrentamientos discursivos entre la “izquierda” y la “derecha” en la región, en particular por la “amenaza” de la expansión del “Castro-Chavismo” o el *Socialismo del Siglo XXI*. Esto se ha avivado en buena parte por la agudización de la crisis política y social venezolana con el éxodo de millones de sus nacionales¹, y de modo reciente por las fuertes protestas y movilizaciones urbanas en varios países suramericanos.² En el caso de Colombia también concurren factores como: las disputas por el cumplimiento del *Acuerdo Final* firmado entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc en el año 2016, luego de que un primer acuerdo obtuviera el voto negativo en un plebiscito que estuvo rodeado de noticias falsas y campañas movidas por el miedo (Fórum, 2018); así como también la campaña presidencial del año 2018 que estuvo marcada por las continuas alusiones al peligro de que el país se convirtiera en “otra Venezuela” si ganaba un determinado candidato (Semana, 2017).

Un ejemplo contemporáneo de estos “miedos” podría apreciarse en las reacciones del ministro de Defensa ante las movilizaciones y protestas de mediados del año 2019, en las que se presentaron algunos hechos de vandalismo, cuando propuso la urgencia de una regulación legal de la protesta social (El País, 2019). Unos meses atrás había afirmado que los grupos armados financiaban las manifestaciones y por eso debían combatirse. El asunto no se quedó en el discurso y se agudizó con las movilizaciones del *Paro Nacional* que inició el 21 de noviembre,³ a tal punto que el Congreso tramita un proyecto de ley estatutaria para regular las protestas, que incluye la prohibición del uso de “capuchas”, así como también las marchas en algunos lugares (Senado de la República, 2019; Cámara de Representantes, 2019). Por supuesto que la iniciativa

1. El representante de Colombia ante la OEA, afirmó que Venezuela lideraba una “agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI” y que “la migración, y las alianzas transcontinentales” conformaban “esta estrategia”. Luego la cancillería desautorizó lo dicho por el diplomático. *El Tiempo*, 2 de mayo de 2019.

2. El presidente venezolano Nicolás Maduro atribuyó el éxito de las protestas a un “éxito del Foro de Sao Paulo”, que agrupa a movimientos izquierdistas de varios países: “El foro de São Paulo, podemos decir desde Venezuela que estamos cumpliendo el plan (...) Todas las metas que nos hemos propuesto (...) las estamos cumpliendo una por una”. “América Latina incendiada: ¿fue Nicolás Maduro el que prendió la mecha?”, *El Nuevo Herald*, Miami, 21 de octubre de 2019.

3. El paro empezó como una jornada pacífica de amplia protesta ciudadana, se presentaron algunos hechos de vandalismo; hubo zozobra en algunos sectores urbanos y se denunciaron abusos de la fuerza pública. En varias ciudades del país se decretó el toque de queda. “Así terminó la jornada en las ciudades donde la noche fue densa”. *El Tiempo*, 22 de noviembre de 2019.

ha generado preocupación: juristas, defensores de derechos humanos y líderes sociales temen que este tipo de medidas terminen cercenando las libertades y restringiendo las posibilidades de ejercer la oposición y el disenso (Botero, 2020).

De este modo, en la coyuntura actual parece que resurgieran algunos temores que en sus tiempos dieron lugar a la persecución jurídica y política de sectores políticos catalogados como de “izquierda”, así como también de voces “disidentes”; principalmente de movimientos sociales. Esas reacciones estatales pretendían preservar la seguridad y el orden público, y en muchas ocasiones aparecían justificadas por las amenazas o acciones de grupos violentos, pero también suponían la severa limitación de derechos y libertades. Además, en algunos casos fueron evidentes los excesos de la fuerza pública y la violación grave de los derechos humanos en nombre de la preservación del orden público.

Este capítulo, entonces, busca hacer memoria de una perspectiva que ha sido poco explorada por la literatura: el uso del Derecho para enfrentar algunos de esos temores o amenazas, como fue el caso del “comunismo internacional”, así como también las voces de protesta social y los opositores en distintos momentos de la historia política del país (De Figueiredo Jr. y Weingast, 2019). Para esto, examina las herramientas jurídicas que cumplieron esos fines en cuatro momentos bien diferenciados.

Los primeros tres momentos se sitúan bajo la Constitución de 1886. El primero de ellos se ubica entre 1926 y 1930, cuando la hegemonía conservadora tomó medidas que justificó con el temor de la expansión de la “Revolución bolchevique” en tiempos de agitación social, huelgas protagonizadas por el ascendiente movimiento obrero y el surgimiento de las primeras organizaciones políticas socialistas. El segundo ocurre en el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), cuando la ANAC reformó la Constitución y se dictaron decretos con el fin de prohibir el “comunismo internacional” y frenar la expansión de la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, pero que al final sirvieron para perseguir a la prensa y a los opositores. El tercero es la lucha antsubversiva, cuyo mayor símbolo es el Estatuto de Seguridad de 1978.

El cuarto y último momento se sitúa bajo la garantista Constitución Política de 1991, en el marco del conflicto armado que enfrentó al Estado, grupos paramilitares y guerrillas. Para esto se examina el caso de la reforma constitucional del Estatuto Antiterrorista del año 2003, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en el año 2004.

El trabajo se divide en cuatro secciones, que abordan cada una de las coyunturas propuestas, y luego ofrece unas consideraciones finales.

La lucha jurídica contra los “bolcheviques” colombianos, 1926- 1930

El Partido Conservador dominó las tres ramas del poder público entre 1914 y 1930, al tiempo que también crecían las movilizaciones y protestas del movimiento obrero en contra de las precarias condiciones laborales. De igual modo, surgían movimientos socialistas y grupos de anarco socialistas, que en muchos casos recibieron influencia y apoyo de extranjeros que migraron al país: en 1926 se fundó el Partido Socialista Revolucionario (PSR) con distintas tendencias y matices en tensión sobre lo que significaba el “socialismo”; incluyendo la que pretendía establecer un partido comunista que fuera reconocido por la III Internacional (Vega Cantor, 2002).

Así, ante el auge de la “cuestión social”, los gobiernos de la “hegemonía conservadora” veían con gran preocupación la expansión “bolchevique”. El mayor grado de agitación social se registró en el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), que reprimió tanto al movimiento obrero como a las organizaciones políticas socialistas en medio de numerosas huelgas. Al mismo tiempo, el PSR formuló su política “insurreccional” que se levantaba en contra de la represión del gobierno conservador (Vega Cantor, 2002) y “planeó un levantamiento nacional” para 1929, que contaría con el apoyo de algunos liberales. Hubo numerosas manifestaciones insurreccionales y huelgas de obreros en varios departamentos, pero el gobierno las neutralizó, en parte porque se adelantó a los hechos, pero también por la falta de organización y estructura del PSR (Sánchez, 1984).

En suma, la “cuestión social”, que se manifestaba en la exclusión política, social y económica de obreros, campesinos y artesanos, al igual que el naciente socialismo político, fueron enfrentados por el gobierno de Abadía con represión. Como veremos, el Derecho y las tres ramas del poder público contribuyeron a la empresa anti comunista, y en parte “anti obrera”.

El decreto “anticomunista” de 1927

El ministro de Guerra Ignacio Rengifo difundió una campaña de “miedo” que denunciaba los planes conspirativos “comunistas” en el país, y hasta acusaba a sectores del partido Liberal de aliarse con el “bolcheviquismo local” (Vega Cantor, 2002: 246). Según Rengifo, en el país había “focos bolcheviques” y se tejía un plan de “toma” con motivo de la celebración del Día del Trabajo, el 1 de mayo de 1927. Con el fin de contrarrestar esos peligros, el presidente Abadía expidió el Decreto 707

de 1927 o de “Alta Policía”, que le encargaba a la Policía la función de “prevenir” los actos delictivos y hechos de turbación del orden público. Aun cuando la celebración del Día del Trabajo transcurrió con calma (El Tiempo, 1927), el decreto también fue usado para perseguir a los dirigentes socialistas y obreros, que luego fue secundada por la “ley heroica” de septiembre de 1928.

El decreto 707 fortalecía el papel de la Policía Nacional en contra de los “comunistas”. Así lo reconoció con contundencia su director en 1928, cuando señaló que el comunismo o bolcheviquismo revolucionario buscaba derrocar al gobierno, “destruir el régimen constitucional y arrebatar la propiedad a sus legítimos dueños” (El Tiempo, 1927: 1), y que por tanto había que actuar en contra de quienes mediante

toda clase de medios realiza propaganda de los principios filosóficos, económicos y políticos para atraer a su seno a las masas de obreros y campesinos señalando al Gobierno como opresor injusto del pueblo, a los propietarios como usurpadores ilegítimos de la riqueza, a la Iglesia como instrumento servil de la tiranía (El Tiempo, 1927: 1).

De este modo, estimaba que el decreto 707 permitiría “salvar a la sociedad del peligro comunista revolucionario que ha venido incubándose bajo el patrocinio de una legislación inocente, de un Poder Judicial candoroso (...)” que muy en breve podían “sorprender a la República con el aniquilamiento de sus instituciones, con el destroz de las libertades, con la ruina de su riqueza, con el asesinato de sus mejores hijos y aún con la pérdida absoluta de su soberanía” (Revista de la Policía Nacional, 1928: 96.)

Pablo Emilio Sabogal González, abogado y miembro del Comité Ejecutivo del PSR,⁴ demandó ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del Decreto de Alta Policía. La Corte se pronunció un año después de que el decreto entró en vigor y decidió que la mayoría de sus medidas se ajustaban a la Constitución. Sabogal le había manifestado a la Corte que el decreto violaba la Constitución porque se había dictado sin que el gobierno tuviera la competencia legal, y que además desconocía “los derechos y garantías sociales que la Constitución consagra y deja a las personas residentes en Colombia a merced y voluntad de funcionarios de policía, las más de las veces ignorantes y arbitrarios”; le transfería funciones judiciales a la policía; quebrantaba “las formalidades y procedimientos legales propios de cada juicio para juzgamiento y

4. Una historia política del decreto y del fallo de la Corte en nuestro trabajo citado: “Haciendo memoria de una Corte que le temía a la revolución: a propósito de un juicio de constitucionalidad bajo la hegemonía conservadora”. *Revista de Derecho* No. 49.

castigo de los juicios criminales” (Corte Suprema de Justicia, 1928: 193); le permitía a la policía hacer detenciones y allanamientos, así como cerrar lugares de reunión; y por último porque restringía la libertad de tránsito (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 1928).

La Corte consideró que si bien el Ejecutivo se había equivocado al fundar el decreto 707 en la ley 51 de 1925, pues esta solo lo facultaba para reorganizar el Ejército y la Policía Nacional, las medidas dictadas cabían dentro de las competencias que la Constitución le atribuía al Presidente de la República para garantizar la seguridad y el orden público. El tribunal también se refirió a la alerta del Secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la propaganda “bolsheviki” y cómo las operaciones de los “centros bolsheviki” habían logrado “encender el resentimiento de los países de la América Latina y del Extremo Oriente contra el Gobierno y pueblo de los Estados Unidos” (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 1928: 197), de modo que no solo había suficientes pruebas de las “proporciones magnas que en todo el mundo presenta el problema de la propaganda comunista de la cual no está exenta Colombia”, sino de que estas sobrepasaban la capacidad de la policía y las autoridades locales.⁵

La ley de defensa social o “heroica” de 1928

La campaña jurídica anticomunista, que como dijimos sirvió para reprimir a obreros y a sectores “socialistas”, continuó con la aprobación de la ley de Defensa Social o “ley heroica”. Se trataba de una iniciativa del gobierno Abadía que fue presentada por la mayoría conservadora en el Senado. Inicialmente la propusieron como “unas autorizaciones al gobierno”, que buscaban atacar los “síntomas de intranquilidad social, que han aparecido en los últimos tiempos en varias regiones del país”, por lo cual se hacía necesario dotar al gobierno nacional de herramientas que no desvirtuaban “las libertades y las garantías de los derechos” sino que tendieran a “consolidar su imperio

5. “Que aquellos peligros existen, es un hecho innegable. Pueden no tener todavía en Colombia la intensidad que en otras naciones, pero despuntan ya amagos y manifestaciones de ellos; y es lo cierto, con evidencia, que un partido político social existe hoy en el mundo, con organización vasta y robusta, con programas definidos, con centros poderosos, como la Unión Soviet, con proselitismo ardoroso y pujante, cuya acción universal no respeta fronteras, sino que penetra en todas las naciones (...) Sus doctrinas no se ocultan ni disfrazan, sino que son pregonadas como un nuevo evangelio que ha de derribar la autoridad constituida, destruir el régimen de la familia y de la propiedad y borrar en el alma humana la dulce, gloriosa, y consoladora noción de la patria”. *Ibid.* p. 197.

y eficacia” (Anales del Senado, 1928: 185). No obstante, el proyecto le ampliaría al gobierno las facultades para reformar la legislación penal, procesal y de policía “por vía de decreto” (Anales del Senado, 1928: 185).

Según la bancada conservadora, la iniciativa buscaba defender los principios que forman las bases de proceso y la civilización

ante la creciente ola de socialismo revolucionario que pugna por dominar el mundo, todos los Estados, aun aquellos que se rigen por estatutos esencialmente radicales, están dictando y han dictado providencias preventivas y punitivas, enderezadas a afianzar el orden social existente e impedir que se menoscaben los principios en que reposa la organización jurídica de los Estados y que se lleve a cabo la destrucción revolucionaria que los Soviets predicán y propagan” (Anales del Senado, 1928: 184).

Además, estimó como imperioso que un país culto y “cristianamente constituido” sujetara al poder policivo los

actos de propaganda contra cualquiera de los fundamentos de la idea de patria; como el irrespeto a las creencias religiosas de los ciudadanos; como los intentos contra la organización constitucional de los poderes públicos, contra la organización disciplinaria y la moral de la fuerza armada y contra la existencia misma de la República; como el desconocimiento de la célula vital de la sociedad, que es la familia, y de su atributo natural, que es la propiedad; y como el sostenimiento de huelgas ilegales que entorpecen la marcha regular del país y perturban su movimiento económico (Anales del Senado, 1928: 185).

Asimismo, denunciaron los peligros que entrañaba el comunismo:

El programa del socialismo revolucionario o del bolcheviquismo no presenta en verdad un porvenir halagüeño para la Nación (...) El comunismo acaba con las instituciones democráticas para sustituirlas por una dictadura absurda y violenta; remueve los fundamentos de la religión y de la moral católica, para dejar ancho campo al libertinaje y la corrupción; desconoce la propiedad privada, cegando en sus fuentes, de manera definitiva, todo el espíritu de progreso, de adelanto y de economía (Anales del Senado, 1928: 185).

La propuesta conservadora consistía en enfrentar el bolcheviquismo con:

medidas encaminadas a establecer procedimientos y penas para castigar todos aquellos actos que tiendan a extinguir o desconocer el sagrado concepto de patria, la legitimidad del derecho de propiedad, la institución de la familia, y en fin, aquellos que se encaminen a alterar el orden constitucional o perturbar el orden público (Anales del Senado, 1928: 185).

Esas medidas debía aplicarlas la policía y no las autoridades judiciales, dado que se trataba de prevenir los mencionados actos. Además, que serían empleadas “contra los revoltosos que no pueden aspirar a ser considerados como opositores de un gobierno, sino como enemigos de todo orden constitucional, legal y moral.” (Anales del Senado, 1928: 185).

Al mismo tiempo, la mayoría conservadora consideraba que todo aquello que se relacionara con “el mejoramiento de las clases sociales obreras.” (Anales del Senado, 1928: 185) era responsabilidad del Estado y que esta tarea se podría cumplir siguiendo la doctrina de la Iglesia Católica, que en la Encíclica *Rerum Novarum* del Papa Leon XIII condenaba al “socialismo”, pero al mismo tiempo reconocía la “cuestión social”: “La Iglesia católica ha dado un altísimo ejemplo al reprobar el socialismo, pero a la vez aconsejando y ejercitando los medios para el mejoramiento del proletariado” (Anales del Senado, 1928: 186). De este modo, señalaban que el Ejecutivo conservador era el llamado a emprender las reformas sociales para que “dentro de las normas católicas”, y “por su propia voluntad”, las clases obreras alcancen el “mejoramiento moral y material al que justamente aspiran” (Anales del Senado, 1928: 186).

La minoría liberal se opuso al proyecto con contundencia. No encontraba necesaria la concesión de más facultades al gobierno, ya que el Congreso estaba reunido y podía expedir las leyes que se requirieran: revisaron una a una las medidas que se proponían y encontraron que todas estaban reguladas por leyes que les conferían atribuciones a las autoridades judiciales, de modo que el proyecto lo que hacía era despojar a los jueces de esas funciones y se las pasaba a la Policía (Anales del Senado, 1928).

Un ejemplo de las voces liberales opositoras fue de la del senador Pedro Alejandro Gómez Naranjo, quien en la sesión del 21 de junio de 1928 negó la existencia de una “agitación revolucionaria” en el país, pues los obreros estaban dedicados a su trabajo y a “aumentar el patrimonio de los patrones, que en la mayoría de los casos no corresponde al esfuerzo creciente del proletariado” (Anales del Senado, 1928: 263).. El senador también manifestó que los partidos nuevos realizaban sus actividades dentro del orden constitucional, que los obreros pedían

leyes sociales justas y equitativas que mejoren su precaria situación, que se regulen las relaciones entre ellos y los patrones, que se reglamente el trabajo de la mujer y del niño; que se construyan habitaciones higiénicas y baratas; que se mejore la situación de los trabajadores agrícolas, explotados sin conciencia por latifundistas afortunados (...)” (Anales del Senado, 1928: 263).

Por su parte, el destacado jurista y senador conservador, Antonio José Uribe Gaviria, defendió el proyecto de ley y recordó que la oposición era similar a la expresada en contra del proyecto sobre inmigración y expulsión de extranjeros perniciosos de 1927. Dijo que en aquel entonces él citó los casos de países, como Inglaterra o Francia, que aprobaron leyes para “restablecer la paz interior” y limitar la actividad política y el derecho de huelga como mecanismos para enfrentar la “falange comunista”; o el de Estados Unidos, que en los últimos cuatro años había aprobado leyes de una “severidad extrema” para defenderse de “iguales peligros”. También señaló que a pesar de semejante contexto global el proyecto estuvo a punto de hundirse en el Congreso”. A su juicio el proyecto de la ley de Defensa Social permitía (...) defendernos contra las amenazas de la tiranía, la más odiosa y la más sangrienta que ha registrado la historia” (Anales del Senado, 1928: 377).

El senador también se refirió al “programa destructor” del bolcheviquismo:

La internacional comunista combate toda influencia burguesa sobre el proletariado y su lucha: contra toda la religión; Contra toda la filosofía distinta de la del marxismo integral; contra todas las doctrinas que predicen la unión entre capital y el trabajo; Contra el oportunismo socialista. Ella predica la lucha interminable de las clases”. Por esto, decía el senador, se explicaba “que, al cabo de diez años de haberse iniciado aquel régimen monstruoso, en Rusia se hayan fusilado dos millones de sus mejores ciudadanos, que existan siete millones de niños abandonados, dos millones de hombres sin trabajo, que el hambre haya diezmando la cuarta parte del pueblo ruso, que la agricultura haya vuelto al arado de madera, que las fábricas estén abandonadas, que no haya suficientes cárceles y prisiones, y que los obreros duerman en el espacio de un ataúd (Anales del Senado, 1928: 377).

Luego de intensos debates, que enfrentaron a liberales y conservadores, el proyecto fue aprobado como la ley 69 del 30 de octubre de 1928. La ley de Defensa Social establecía como delito:

agruparse, reunirse o asociarse bajo cualquiera denominación, para alguno o algunos de los siguientes propósitos: 1o. Incitar a cometer cualquier delito de los previstos y castigados por las leyes penales de Colombia; 2o. Provocar o fomentar la indisciplina de la fuerza armada, o provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad o de la institución de la familia, tales como están reconocidos y amparados por la Constitución y leyes del país; 3o. Promover, estimular o sostener huelgas violatorias de las leyes que las regulan, y 4o. Hacer la apología de hechos definidos por las leyes penales como delitos (Anales del Senado, 1928: 377).

De igual modo, determinaba que todo individuo que ejecutara

alguno o algunos de los hechos delictuosos enumerados en el Artículo anterior, sea por medio de discursos, gritos o amenazas proferidos en lugares o reuniones públicos, o con escritos o impresos vendidos, distribuidos o expuestos en esos mismos lugares o reuniones, o por cualquiera otra forma de publicidad, será castigado con la pena de cuatro meses a un año de confinamiento en una colonia penal (Anales del Senado, 1928: 377).

Por último, le atribuía la competencia para juzgar los delitos mencionados a los Jueces de Prensa y Orden Público y fijaba medidas de censura a los periódicos (Congreso de Colombia, 1928).

La llamada “ley heroica” se aplicó para reprimir y perseguir a movimientos de obreros, campesinos, militantes del PSR, e incluso a la oposición liberal acusada de tener vínculos con los “bolcheviques”. Contrario a lo esperado por el legislativo y el ejecutivo, la ley heroica generó un amplio rechazo e incluso alimentó los levantamientos insurreccionales entre 1928 y 1929.

Derecho y represión bajo la ley heroica y el estado de sitio, 1928-1929

La empresa estadounidense *United Fruit Company* (UFC) dominaba la producción de banano del país que se ubicaba en el Departamento del Magdalena. La “región bananera” fue epicentro de varias movilizaciones de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales. La mayor de ellas inició el 6 de octubre de 1928 y fue alentada por el PSR (Jeifets, L y Jeifets, V., 2001): ante el rechazo de la compañía a negociar

un pliego de peticiones que buscaba mejores condiciones laborales, los trabajadores bloquearon los trenes que permitían transportar la cosecha de banano, lo cual hacía prever la pérdida total de la misma por la UFC. El ministro Rengifo opinaba que se trataba de un levantamiento infiltrado por “agitadores comunistas” y “bolcheviques” y ante la solicitud de la UFC de garantizar la seguridad de sus empleados y propiedades, se enviaron tropas a la zona (Cajas Sarria, 2018).

El 5 de diciembre de 1928 el gobierno declaró el estado de sitio bajo el argumento de que en la región bananera había un “desconocimiento de las autoridades legalmente constituidas; se había atacado a fuerzas del ejército y a personas y propiedades particulares”, por lo que era necesario “tomar medidas enérgicas” y acudir a la “ley marcial” (Decreto Legislativo 1, 1928). Se designó al general Carlos Cortés Vargas como jefe civil y militar de la zona, quien el mismo día dictó los decretos 01, por el cual se “disolvería toda manifestación de más de tres personas”; y el 04 que declaraba “cuadrilla de malhechores” a los “revoltosos, incendiarios y asesinos que pululan en la actualidad en la Zona Bananera” (Decreto Legislativo 4, 1928), ordenaba perseguir y reducir a prisión a los “dirigentes, azuzadores, cómplices, auxiliadores y encubridores” (Decreto Legislativo 4, 1928), y también establecía que los miembros de la fuerza pública quedaban “facultados para castigar con las armas a aquellos que se sorprendan en in fraganti delito de incendio, saqueo y ataque a mano armada” (Decreto Legislativo 4, 1928).

Al día siguiente de entrar en vigencia el estado de sitio, los huelguistas estaban concentrados en Ciénaga esperando al Gobernador del Magdalena, que al parecer ayudaría a negociar el conflicto, pero este nunca llegó. El general Cortés rodeó con sus tropas el lugar en donde se encontraban los huelguistas, leyó los decretos que ordenaban el inmediato retiro de toda la multitud, pero nadie acató la orden. Rápidamente se exacerbaron los ánimos y la tropa disparó causando la muerte de un número indeterminado de personas. Durante los días siguientes a la masacre se produjeron numerosas capturas y el movimiento huelguista fue desarticulado por la fuerza pública. Uno de los instrumentos legales que sirvieron a ese propósito fue el decreto legislativo 02 del 31 de diciembre de 1928, según el cual todas las personas sindicadas “de delitos cometidos por causa o con motivo del “movimiento subversivo” (Decreto Legislativo 02, 1928); así como los que en lo sucesivo fuesen detenidos en relación con esas mismas causas, pasaban a ser juzgados por la justicia penal militar.

El dirigente socialista Julio Navarro T. acudió a la Corte Suprema de justicia el 13 de marzo de 1929 y le pidió que declara inconstitucional el decreto, pues estimaba que este quebrantaba varias normas constitucionales relacionadas con: (i) el debido

proceso, (ii) el principio de legalidad, (iii) la favorabilidad, y (iv) la irretroactividad de la ley penal. Luego de más de dos años de presentada la demanda, el 27 de agosto de 1931 la Corte decidió que no podía pronunciarse: el tribunal, integrado por siete magistrados conservadores y cinco liberales justificó su fallo en que el decreto ya había dejado de existir, pues un día después de que Navarro presentó la demanda el gobierno declaró restablecido el orden público en la región del Magdalena mediante el decreto legislativo No. 04 de 1929. Así, en el fragor del conflicto de las bananeras, el tribunal dilató por dos años el examen de la constitucionalidad el decreto que sirvió para reprimir a los huelguistas, y al final no determinó si el gobierno había respetado o no la Carta Política bajo el estado de sitio (Cajas Sarría, 2015).

Por su parte, en el Departamento del Tolima surgieron levantamientos en varios municipios, siendo el más notable el de El Líbano. Así, dentro de la campaña insurreccional del PSR se movilizaron de artesanos y campesinos que por primera vez en América Latina intentaba tomarse el poder por la vía armada para realizar una revolución socialista como la rusa: el 28 de julio de 1929 grupos de campesinos armados ingresaron a la cabecera del municipio, pero la guardia Civil y habitantes armados repelieron el ataque, mientras que otros corregimientos fueron tomados por asalto por campesinos que ondeaban banderas rojas. Luego de varios días de enfrentamiento, la fuerza pública neutralizó a los insurgentes. Más de 300 campesinos y obreros fueron puestos presos. Se denunciaron hechos de represión y torturas bajo el estado de sitio (Sánchez, 1984).

Tanto la aplicación de la ley heroica como la represión del gobierno conservador al movimiento obrero y las organizaciones políticas socialistas, fueron continuamente denunciadas. Por ejemplo, a propósito de la agitación social de 1929, el PSR emitió una declaración el 31 de julio en la que denunciaba la política económica y monetaria de la “clase gobernante”, por estar alejada de la vida de los proletarios, que perseguía a sus organizaciones y reaccionaba con la fuerza a las “peticiones pacíficas”, “negándoles el derecho de elegir y ser elegidos”, convirtiéndolos en “esclavos políticos y económicos, en “siervos sin pan”. Para el PSR, todo esto había causado que los obreros se levantaran “desesperadamente en armas” y que el gobierno los combatiera como una “cuadrilla de malhechores”, cuando los levantamientos habían ocurrido en distintos departamentos y “tendían a generalizarse”, de modo que todo el país tendría que ser tratado indignamente como tal “cuadrilla” (El Tiempo, 1929: 5).

La declaración del PSR defendía a los levantados en armas e insistían en que se trataba de “trabajadores enceguecidos por las persecuciones y lanzados a la muerte por el hambre” (El Tiempo, 1929: 5), y que por tanto debían considerarse como “ad-

versarios” a quienes se les debían ofrecer reformas inmediatas y eficaces “*que solucionen de una vez por todas, esta inseguridad, esta esclavitud, esta miseria que por tantos años se les ha forzado a vivir y a soportar*” (El Tiempo, 1929: 5). Además, consideraba que “la tranquilidad vendría inmediatamente” con “la reforma electoral, la fijación de salarios mínimos; asegurando el estado a los sin trabajo, en proporción al mínimo de su existencia; con la supresión de la ley heroica; asegurando una absoluta libertad para las organizaciones sindicales” (El Tiempo, 1929: 5). Por último, manifestaba que la tranquilidad se lograría si se hacía una reforma agraria y una reforma tributaria.

Por su parte, el Ministro de Guerra, general José Joaquín Villamizar, afirmó en su “Memoria al Congreso de 1929”, que a pesar de las “incomprensiones” de la prensa, que “estimulaba a los propagandistas” y “alentaba a las masas a aceptar las doctrinas disociadoras”, el Ministerio había cumplido una “misión patriótica” a propósito de las amenazas al orden público en ese año. Además, dijo que con los “episodios de Santa Marta” comprobaron la necesidad de contar con la “ley de defensa social”, “que corresponde eficazmente a las medidas *precautelativas* que debían amparar a la sociedad colombiana y poner a cubierto sus intereses de la desmedida ambición de los revoltosos” (Memoria del Ministerio de Guerra al Congreso Nacional 1929). No obstante, lamentó que las “opiniones del Ministerio” no hubieran sido atendidas previamente.

El ministro Villamizar también se refirió al informe del general Cortés Vargas sobre “los atentados cometidos en la zona bananera del departamento del Magdalena por una masa muy numerosa de incautos trabajadores, llevados a franca rebeldía contra las autoridades constitucionales, y a toda clase de comisión de delitos comunes so pretexto de huelga” (Memoria del Ministerio de Guerra al Congreso Nacional, 1929). Con respecto a la actuación del ejército en la masacre de las bananeras de Ciénaga, dijo:

La intervención de las fuerzas del ejército en estos sucesos y en los que se desarrollaron en los días siguientes (...) donde los revoltosos atacaron a mano armada a los habitantes pacíficos (...), donde los soldados colombianos actuaron con patriotismo, convicción y lealtad encomiables, ha sido reconocida dentro y fuera del país como salvadora de un alzamiento general y de sus secuelas de crímenes y devastación ineludibles. Memoria del Ministerio de Guerra al Congreso Nacional, 1929, XIII)

De igual modo, el general Villamizar habló del mencionado “levantamiento de El Líbano” y dijo que una “guerrilla comunista” había atacado la población con “bombas explosivas” e intentado tomarse otras poblaciones del Tolima, frente a lo cual

el Ejército había enviado tropas y enfrentado a los “bandoleros. Señaló que cerca de 300 “socialistas revolucionarios” habían sido capturados y que se habían decomisado granadas y “bombas explosivas”. Cerró su informe afirmando que:

[Todos] estos acontecimientos subversivos, producto de la incompreensión y desmedidas ambiciones de unos pocos promotores de ninguna representación y valimiento, han sido reprochados a toda hora y lugar por casi la totalidad de la población, que está aprestada para la defensa social, y que en tal sentido se dirige a este Ministerio ofreciendo su contingente personal y pecuniario (Memoria del Ministerio de Guerra al Congreso Nacional, 1929, XII).

En suma, el último gobierno de la hegemonía conservadora enfrentó el “miedo” a la revolución bolchevique con la represión al movimiento obrero y no abordó la cuestión social. Para esto se sirvió de distintas herramientas jurídicas que veían la protesta únicamente como un asunto de orden público. No obstante, ni el uso de la fuerza ni el derecho detuvieron las manifestaciones populares y las movilizaciones sino que por el contrario fortalecieron el descontento social. Esto en parte contribuiría al derrumbamiento de la hegemonía conservadora tras el triunfo del Partido Liberal en las elecciones presidenciales de 1930.

II. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla contra el “comunismo internacional”, 1954-1956.

El presidente conservador Laureano Gómez inició su mandato en 1950, en medio de una creciente violencia bipartidista que enfrentaba a liberales y conservadores. El Congreso dominado por el conservatismo convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) en 1952, cuya misión era reformar la Constitución para instalar un régimen ultraconservador de corte falangista. El proyecto de reforma alcanzó a ser elaborado por una comisión y en él quedaba plasmado su anticomunismo, pues este señalaba que “El Estado colombiano condena la lucha de clases y promueve la armonía social al amparo de la justicia”.⁶ La enmienda nunca vio la luz, pues por quebrantos de salud, Gómez cedió temporalmente el poder al Designado a la Presidencia, Roberto Urdaneta: Con el apoyo de una facción

6. “Proyecto de Reformas presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios Constitucionales”, Bogotá, febrero 11 de 1953. En: *Revista de Derecho*, Universidad Pontificia Bolivariana, Vol. 3, 9-12, Medellín, 1953. Pp. 85-123. P. 92

conservadora, así como de sectores empresariales y la oposición liberal, el general Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Armadas, se tomó el poder el 13 de junio de 1953.

En el gobierno del general Rojas transcurrieron los primeros años de la Guerra Fría, que enfrentaba a la Unión Soviética con los Estados Unidos de América. Este último impulsó una alianza hemisférica en contra del “comunismo internacional”, que se materializó en la X Conferencia Panamericana realizada en Caracas entre el 1 y el 18 de marzo de 1954. Estados Unidos propuso unir esfuerzos regionales para detener la propagación del comunismo, cuando varios países de la región contaban con gobiernos que simpatizaban con el socialismo o que habían llegado al poder gracias a alianzas con partidos comunistas. Así, logró que los países participantes en la conferencia, incluyendo el de Colombia, adoptaran la “declaración de Solidaridad para la preservación de la integridad política de los estados americanos contra la intervención del comunismo internacional” (Proyecto de Reformas presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios Constitucionales, 1953: 85), en cuyo texto se afirmaba que “el “comunismo internacional, por su naturaleza antidemocrática y por su tendencia intervencionista, es incompatible con la concepción de la libertad americana” (Proyecto de Reformas presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios Constitucionales, 1953: 92), y por tanto era necesario adoptar las “medidas necesarias” para “desarraigar e impedir acciones subversivas”. De igual modo, denunciaba que el

carácter agresivo del movimiento comunista internacional sigue constituyendo una amenaza especial e inmediata para las instituciones nacionales, para la paz y seguridad de los Estados americanos y para el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica (Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1954, p 363).

Pocos meses después, el presidente de los Estados Unidos sancionó el *Communist Control Act* (CCA) del 24 de agosto de 1954, que proscribía al partido comunista, y lo acusaba de “conspirar” contra el gobierno; demandando sus propósitos de instalar una dictadura autoritaria; de atentar contra las libertades. Así mismo, el CCA señalaba que el Partido Comunista recibía “influencia secreta” del comunismo internacional para sus programas políticos. Por último, que ese partido no respetaba los límites constitucionales y que buscaba destruir el país incluso recurriendo a la fuerza (The Communist Control Act of 1954: 713).

La reforma constitucional de la ANAC que prohibió el comunismo en 1954

La ANAC que se había establecido en el gobierno de Laureano Gómez no solo legitimó la toma del poder por el general Rojas mediante un acto legislativo sino que se convirtió en órgano legislativo durante el régimen militar. Con la influencia de la Conferencia “anticomunista” de Caracas y el “CCA” de los Estados Unidos, en el segundo semestre de 1954 tramitó una reforma constitucional que prohibía el comunismo internacional.⁷ El proyecto de acto legislativo se presentó el 13 de agosto de 1954 y la exposición de motivos manifestaba que se trataba de combatir a los partidos internacionales

que actualmente ponen en peligro la estabilidad interna de los países y atentan contra la soberanía internacional”, pues nadie ignoraba “que el comunismo es un partido internacional, que por su afán ecuménico de proselitismo rebasó las propias fronteras de su experimento esclavista, y pretende, con sus programas de expansión, sojuzgar la conciencia política de los pueblos libres, a fin de cumplir sus planes económicos de imperialismo mundial (Cajas Sarría, 2020: 16).

De igual modo, que

La táctica y la estrategia de su organización universal, fijadas en los Congresos plenos de la organización comunista soviética, señalan muy a las claras su gigantesco plan de dominación, por medio de quintas columnas y de células incrustadas en todos los países de la tierra (Cajas Sarría, 2020: 16).

Por último, afirmaba que tal defensa era necesaria porque “el destino de América está ligado espiritual e históricamente a la cultura cristina y la civilización de occidente” (Anales de la Asamblea Nacional Constituyente, 1954: 68.)

Diputados en minoría objetaron la reforma con argumentos como: (i) la inconveniencia de reformar la Constitución solo para prohibir un partido; (ii) que la prohibición podría fomentar las actividades clandestinas del mismo o que se amparara en otro partido; (iii) que toda medida represiva podría ir más allá de lo previsto; (iv) y que la Declaración de Caracas no obligaba a Colombia a reformar su Constitución para

7. Mario Alberto Cajas Sarría, “El derecho contra el comunismo en Colombia”, 1920-19562, Izquierdas 49, enero 2020, p. 16.

prohibir el comunismo (Anales de la Asamblea Constituyente, 1954). Por su parte, el Ministro de Gobierno insistió en que se trataba de evitar la “destrucción de Colombia” y dotar al Ejecutivo de instrumentos para enfrentar la amenaza comunista, pues la

teoría marxista de la lucha de clases se convierte en incitación de odio y de vindicta; la idea de que la “religión es el opio del pueblo” se toma de tea que incendia iglesias y conventos; la expresión de que los “proletarios no tienen patria”; el ideal de la dictadura del proletariado, señala el derrumbamiento de la libertad y la democracia” (Anales de la Asamblea Constituyente, 1954: 224).

Pocas semanas después de que se había propuesto la reforma constitucional, la ANAC aprobó el acto legislativo No 7 de 1954, “por el cual se decreta la prohibición del comunismo internacional”. El artículo primero estableció: “queda prohibida la actividad política del comunismo internacional”, y determinó que la ley reglamentaría “la manera de hacer efectiva esta prohibición” (Anales de la Asamblea Constituyente, 1954).

El decreto “anticomunista”

Cuando avanzaba el año 1956 el general Rojas ya había decidido conformar un “tercer partido”, buscaba la reelección por la ANAC para el período 1958-1962; había perdido el apoyo de los liberales así como también de sectores conservadores, crecía la oposición a su gobierno, y había impuesto la censura a la prensa (Diario Oficial, 1955). En ese contexto dictó el decreto 434 del 1 de marzo, que reglamentaba la prohibición del comunismo internacional en cumplimiento de la reforma aprobada casi dos años atrás. Según el decreto, era necesaria tal regulación, pues “dicha actividad atenta contra la tradición y las instituciones cristianas y democráticas de la República, y perturba la tranquilidad y el sosiego públicos” (Decreto 434, 1956). Además, contemplaba una amplia gama de actividades políticas de índole comunistas:

quienes obedezcan órdenes, instrucciones o consignas de partidos o entidades comunistas extranjeros, o por cualesquiera medios preconicen o traten de implantar en la organización de la familia, de la sociedad o del Estado las doctrinas y métodos del comunismo internacional, o asistan con conocimiento de causa a juntas o reuniones de ese carácter, bien sea éste manifiesto o encubierto (Decreto 434, 1956).

Dentro de las medidas se imponía la pena de “relegación a colonia agrícola penal” de 1 a 5 años a quien tomara parte “en actividades políticas de índole comunista”; la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; y la incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo”. Si se trataba de un extranjero, este sería expulsado del país luego de cumplir su condena. De igual modo, le asignaba a la justicia penal militar el conocimiento de estos delitos. Por último, determinaba una lista amplia de quienes podrían presumirse “responsables” de participar en actividades comunistas:

a) Quien figure, con su conocimiento y sin protestar por ello, como miembro inscrito de una organización comunista, en cualquier libro, registro, lista, correspondencia u otro documento; b) Quien contribuya económicamente mediante cuotas, donaciones, préstamos, aportes u otra forma similar al desarrollo de planes u objetivos comunistas; c) Quien se someta accidental, temporal o permanentemente a la disciplina de una organización comunista; d) Quien ejecute proyectos o cumpla instrucciones u órdenes de personas u organizaciones comunistas; o las divulgue o comunique por cualesquiera medios; e) Quien actúe como dirigente, organizador, corresponsal, mensajero, agente, propagandista o en calidad similar de una organización comunista; f) Quien redacte documentos, panfletos, hojas volantes, libros o cualquier otro tipo de publicaciones en apoyo de los fines u objetivos del comunismo, o los distribuya, embarque o remita como propaganda; g) Quien exprese la decisión de cumplir los proyectos, planes, instrucciones u órdenes de personas u organizaciones comunistas tendientes a la realización de los fines u objetivos del comunismo. (Decreto 434, 1956)

La reforma de 1954, el decreto 404 de 1956, así como otras medidas del Ejecutivo que castigaban la “injuria y calumnia”, eran instrumentos jurídicos para la censura de prensa que también fueron usadas para perseguir a las organizaciones políticas de izquierda, al sindicalismo; al igual que al liberalismo en la oposición. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió “quejas” de la Confederación de Trabajadores de América en noviembre de 1956, en las que manifiestan que el gobierno de Rojas “ha instaurado una política de represión en violación de los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, política que implica atropello a los derechos esenciales de los trabajadores”, y que trataba de impedir que los trabajadores lucharan por sus reivindicaciones económicas, en especial con medidas que destruían completamente el derecho de huelga.

Rojas rechazó las acusaciones provenientes “*de una organización de tendencia comunista, empeñada sistemáticamente en desacreditar a los gobiernos democráticos*” y agregó que la queja era por la prohibición del comunismo, cuyo propósito era la “*defensa de la democracia y la civilización cristiana*”, pero que de ninguna manera se buscaba perseguir a las organizaciones sindicales libres, nacionalistas, alejadas del comunismo “y de toda suerte de funestas doctrinas”; es decir de “un sindicalismo respetuoso del sentimiento católico de los colombianos”. La OIT finalmente le recomendó al Estado proteger los derechos sindicales.

La lucha “anticomunista” y “antisubversiva” en los setenta: el caso del estatuto de seguridad de Turbay, 1978.

En la década de los sesenta, en el marco de la Guerra Fría, la Unión Soviética, Cuba y China, eran consideradas “exportadoras del comunismo”. En particular, se acusaba a la Revolución Cubana comandada por Fidel Castro de buscar la expansión comunista con el apoyo y promoción de distintos movimientos subversivos que operaban en América Latina. La respuesta de los países de la región a esas amenazas, con el impulso de los Estados Unidos, fue la adopción de un conjunto de instrumentos, políticas e ideologías que se manifestaron tanto en lo militar, como en lo político y lo “jurídico”: la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN). Con la DSN, que amalgamaba las estrategias de contrainsurgencia y guerra irregular perfeccionadas por las academias militares estadounidenses, así como también las tácticas del ejército francés, se adiestraba a la fuerza pública para ejercer el “control político interno” (Leal Buitrago, 2002: 54).

En Colombia, las antiguas guerrillas liberales se habían convertido en una guerrilla marxista-leninista y habían fundado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. Para la década de los setenta también operaban: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), la Autodefensa Obrera (ADO) y el Movimiento 19 de Abril (M-19), había un notable incremento de las acciones subversivas, principalmente en las zonas rurales, y empezaba a crecer el temor en las ciudades. Para enfrentarlos, los sucesivos gobiernos recurrieron a la declaratoria del estado de sitio, que amparaba decenas de medidas que limitaban gravemente las libertades y garantías ciudadanas (Cajas Sarría, 2017).

De este modo, la Guerra Fría, los efectos de las dictaduras militares que en nombre de la seguridad nacional dominaban gran parte de la región, así como el deterioro del orden público en Colombia hacia finales de los años setenta provocaban que

sectores políticos y económicos justificaran la necesidad de incrementar el poder de la fuerza pública; incluso limitando el poder civil, y sacrificando los derechos y libertades ciudadanas. Precisamente en 1978, cuando el país soportaba olas de secuestros de civiles, homicidios, atentados contra personal militar, así como contra propiedades públicas y privadas, surgió el Estatuto de Seguridad, que encarnaría uno de los más terribles instrumentos de violación de derechos humanos.

El Estatuto de Seguridad fue anunciado por el gobierno del presidente Liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982) como un paquete de medidas “anti subversivas”, pues “(...

se han venido reiterando y agudizando las causas de perturbación del orden público, que crean un estado de inseguridad general [y también] practicas terroristas dirigidas a producir efectos políticos encaminados a desvirtuar el régimen republicano vigente o en la apología del delito, actos estos que atentan contra los derechos ciudadanos (...) (Decreto Legislativo 1923, 1978).

El decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978 incrementaba drásticamente las penas para los delitos de secuestro, extorsión, incendio voluntario y ataque armado. De igual modo, asignaba nuevas funciones de control y hasta de “judicialización” de civiles a los comandantes militares y de policía; que terminaron por juzgar acciones colectivas, huelgas y paros como si fuesen delitos políticos (Jiménez, 2009). También extendía la noción de “subversión” de manera imprecisa, de modo que cubría diversos actos y conductas susceptibles de ser castigadas con penas de prisión. Por ejemplo, se consideraba una infracción penal la exhibición de “propaganda subversiva”, de igual modo se calificaba como subversivo el pintar dibujos que incitaran a la subversión. Asimismo, se establecía un amplio elenco de contravenciones que podían ser sancionadas por autoridades subalternas, militares, policiales o civiles, sin derecho de apelación; de modo que se excluía a la rama judicial. Por último, imponía restricciones a los medios de comunicación, limitando severamente la libertad de información: el artículo 13 ordenaba que

no podrán transmitirse por las estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión informaciones, declaraciones, comunicados o comentarios relativos al orden público, al cese de actividades o paros o huelgas ilegales o noticias que inciten al delito o hagan su apología” (Decreto Legislativo 1923, 1978).

La Corte Suprema de Justicia, que debía examinar la constitucionalidad del estatuto, prácticamente declaró constitucionales todas las medidas. Según el tribunal las disposiciones del Estatuto se clasificaban como aquellas que: a) reestructuraban o creaban nuevas figuras delictivas o contravencionales; b) decretaban penas, las aumentaban o las agravaban, c) atribuían competencias jurisdiccionales a las autoridades militares y policivas y que les señalaban procedimientos especiales, y d) sobre control de las comunicaciones. Por su parte, varios ciudadanos y abogados de distintas vertientes políticas acudieron al tribunal para argumentar que el decreto era inconstitucional por estos cargos: a) falta de conexión entre las disposiciones y la perturbación; b) exceso en el ejercicio de los poderes del Ejecutivo; c) ruptura del principio de separación de poderes; d) violación de las garantías de la libertad física de las personas, de los derechos de propiedad, reunión, huelga y de defensa; e) infracción de las garantías de la libertad de prensa, y f) desconocimiento de tratados internacionales sobre tutela de los derechos humanos (Corte Suprema de Justicia, 1978).

Según la Corte, el decreto contenía medidas que, en su gran mayoría, no vulneraban la Constitución. Así, por ejemplo, sobre la acusación de que se “desvertebraba” la organización constitucional del Estado”, dijo que la Constitución permitía que excepcionalmente se asignaran o trasladaran funciones de una rama a otra, lo cual facultada a la justicia penal militar para juzgar delitos comunes de los civiles. A su juicio, el Gobierno también podía endurecer las penas y sanciones para enfrentar nuevas formas de delincuencia. En cuanto a las acusaciones sobre afectaciones graves de los demás derechos, como el de reunión o el de la libertad de prensa, y recordó que todas esas restricciones temporales estaban autorizadas por la Constitución. No obstante, estimó que quebrantaban la Carta Política aquellas disposiciones como la que suprimía la posibilidad de libertad condicional a los sindicatos y condenados por secuestro para el caso de las mujeres embarazadas; o para quienes se encontraran en peligro de muerte. Así mismo, determinó que las sanciones por *dibujos ultrajantes o subversivos* o *propaganda subversiva* eran imprecisas y no objetivas, de modo que se vulneraba el debido proceso, pues las personas debían conocer con certeza el contenido de las leyes prohibitivas.

El fallo fue criticado duramente por cinco de los magistrados que salvaron su voto y consideraron que la Corte había fallado al no imponer límites al Ejecutivo ante medidas que desbordaban su poder y afectaban derechos y libertades ciudadanas. Por ejemplo, los magistrados José María Velasco y Gustavo Gómez expresaron que las medidas despojaban a los jueces de competencias fundamentales en un estado de derecho, de modo que más bien parecían buscar

una severa represión a las protestas sociales, al sindicalismo activo, a la agitación estudiantil legítima, a los esfuerzos por promover una toma de conciencia y acción respecto de los problemas que sacuden al país, etc. (Salvamento de voto de los magistrados José María Velasco Guerrero y Gustavo Gómez V. a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de octubre de 1978).

El Estatuto tuvo su pico más alto de aplicación con motivo de los operativos militares dirigidos en contra del M.-19, luego de que sustrajera miles de armas de una custodiada base militar, en un operativo espectacular, en enero de 1979. El ejército reaccionó de inmediato con centenares de acciones encubiertas, allanamientos y detenciones arbitrarias, capturaron a los guerrilleros y recuperaron las armas. Los detenidos fueron procesados por la justicia penal militar y se denunciaron vejámenes, torturas y vulneraciones a sus derechos y garantías (Cajas Sarría, 2017).

Los excesos de la fuerza pública bajo el estatuto también generaron una importante movilización ciudadana en favor de los derechos humanos. Por ejemplo, logró que se realizara el Primer Foro por los Derechos Humanos, en el que participaron centenares de personas, entre familiares de detenidos y desaparecidos, víctimas de los militares; intelectuales, académicos, sindicalistas, estudiantes, profesores, así como importantes jerarcas de la Iglesia Católica. El evento, realizado en el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, fue un espacio para hacer visibles los numerosos casos de allanamientos, detenciones ilegales y torturas. Ahí también surgió el *Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia* conformado por prestigiosas personalidades de la vida política y académica del país, que representaban distintos orígenes políticos y diversas ideologías. El Comité promovió el debate público sobre los excesos de la aplicación del Estatuto y sirvió de enlace para impulsar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales.

El estatuto también recibió la crítica de organizaciones e instituciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, *Amnistía Internacional* denunció las violaciones a los derechos humanos en su “Informe de 1980”. De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó el caso en su “Informe sobre la situación de los derechos humanos” del 30 de junio de 1981, en el que le pidió al Estado colombiano investigar y esclarecer los casos de violaciones de derechos humanos; sancionar a los responsables, y además, levantar el estado de sitio a la mayor brevedad.

En suma, durante el Estatuto de Seguridad de Turbay, que buscaba combatir la subversión y la “revolución comunista” y estuvo vigente hasta el 9 de junio de 1982, se registraron centenares de violaciones a los derechos humanos, producto de los excesos de los organismos de seguridad del Estado y de la fuerza pública (Decreto 1674, 1982).

El Estatuto Antiterrorista del 2003

Ya en tiempos de la garantista y progresista Constitución Política de 1991, el período presidencial de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) corría en medio de un ambiente de temor generalizado y la percepción de que las guerrillas y el crimen organizado le estaban ganando la guerra al Estado (Gacharná Castro, 2014). Esto después de derrotas militares propinadas por grupos armados al margen de la ley y de una fallida negociación de paz con la poderosa guerrilla de las Farc en la que se desmilitarizó una extensa zona del Departamento del Caquetá (Ríos Sierra, 2015).

En el año 2001 el Congreso aprobó la ley 684 de 2001 sobre “Seguridad y Defensa Nacional”, cuya vigencia fue corta, pues fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-251 del 11 de abril de 2002. Según el tribunal, la ley violaba la autonomía de los ciudadanos al subordinarlos al poder ejecutivo y la fuerza pública, además de vulnerar la independencia de los poderes públicos –Legislativo y Judicial–, al aunar las tres ramas en un solo consejo presidido por el gobierno. De igual modo, la Corte consideró que al tratarse de una regulación que limitaba derechos, la Constitución ordenaba que debía tramitarse una ley estatutaria y no una ordinaria. De ese modo, un fallo de la Corte frenaba los intentos gubernamentales por endurecer las medidas de orden público y seguridad.

Al finalizar el cuatrienio de Pastrana, en un ambiente de zozobra ciudadana, surgió vertiginosamente un aspirante presidencial que proponía una salida militar al conflicto armado: Álvaro Uribe Vélez, ex gobernador del Departamento de Antioquia, quien finalmente ganaría la presidencia en el 2002 y después lograría la reelección en el 2006, tras una reforma constitucional que puso fin a la prohibición de reelección presidencial fijada por la Carta de 1991 (Leal Buitrago, 2006).

El presidente Uribe llegó al poder con un amplio respaldo de una ciudadanía atemorizada por la subversión y la acción de la delincuencia organizada (Gacharná Castro, 2014).⁸ Su política de *Defensa y Seguridad Democrática* (Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, 2003) empezó a ejecutarse tan pronto se posesionó y la primera muestra fue la declaratoria del estado de conmoción interior mediante el decreto 1837 del 11 de agosto del 2002. Estos eran algunos de los considerandos del decreto:

Que la Nación entera está sometida a un régimen de terror en el que naufraga la autoridad democrática y hace cada vez más difícil y azarosa la actividad productiva, multiplicando el desempleo y la miseria de millones de compatriotas”(...) Que es ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir actos de terrorismo semejantes o peores a los que para sorpresa del mundo entero se han presentado durante las últimas semanas en diferentes lugares del país, así como la amenaza a que está sometida nuestra democracia por los actos de coacción de que vienen siendo víctimas los mandatarios locales y nacionales y sus familias en todo el país (...) (Decreto, 1837, 2002).

Por su parte, el ministro del Interior de la época explicó que el decreto era necesario, pues el país pasaba “por momentos excepcionales debido a las acciones de los grupos terroristas, que “cada vez tiene mayor capacidad destructiva” (Semana, 2002). La primera medida dictada bajo ese estado de excepción fue crear el “impuesto al patrimonio”, que gravaba con el 1,2% a quienes tuvieran patrimonio superior a los 150 millones de pesos y cuyo principal fin era fortalecer a los organismos de seguridad (Decreto 1832, 2002).

Dentro de la política de *Defensa y Seguridad Democrática* (Leal Buitrago, 2006) formulada por el gobierno, se planteó una herramienta jurídica para enfrentar la difícil situación de orden público: el “Estatuto Antiterrorista”. Se trataba de una propuesta

8. “La estrategia política y mediática incentivó la aceptación de la Seguridad Democrática e hizo a la gran mayoría de los colombianos permisivos ante las extralimitaciones del Estado como actor garante de la seguridad de los ciudadanos (...). Esta búsqueda por lograr la legitimación del miedo se materializó en: la modernización de la Fuerza Pública y en el aumento de uniformados y, por ende, la intensificación de operativos contra el narcotráfico y la guerrilla; la creación de zonas de rehabilitación; la entrega de funciones judiciales a la Fuerza Pública; la implementación del denominado Impuesto de Guerra (1.2% al patrimonio de los colombianos de clase alta), como una manera eficaz de financiar a la Fuerza Pública en su tarea de combatir el terrorismo; la creación de redes de informantes; la recuperación de las carreteras a través del programa “Vive Colombia, Viaja por ellas”, y por último, el diseño de un estatuto antiterrorista”. Diana María Gacharná Castro, “La política de defensa y seguridad democrática en Colombia (2002-2004): ¿promoción del miedo o profundización democrática”? (2014: 56).

reforma constitucional que incrementaba el poder de la fuerza pública, en medio de una campaña que promovía el temor al terrorismo generalizado en el país (Gacharná Castro, 2014). El Acto legislativo 02 de 2003 restablecía algunas de las medidas que fueron declaradas inconstitucionales en sentencias de la Corte Constitucional del año 2002, cuando juzgó la constitucionalidad de decretos expedidos por el gobierno Pastrana al amparo del estado de Conmoción Interior; al igual que la mencionada C-251 de 2000.⁹

La reforma constitucional del Estatuto Antiterrorista generó gran controversia. Algunos abogaban por su constitucionalidad con el fundamento de la necesidad de dotar de herramientas jurídicas al gobierno nacional para la lucha antiterrorista. Sin embargo, otros sectores, incluso organismos internacionales de protección de los derechos humanos, consideraban que la reforma afectaba ostensiblemente los derechos fundamentales y las libertades públicas consagrados en la Constitución de 1991.¹⁰ Esto informó la *Revista Semana* sobre la “historia” del Estatuto:

9. (...) De ahí que la última reforma constitucional, efectuada por el Acto Legislativo 02 de 2003, responda al intento de frenar los excesos garantistas de la Corte Constitucional colombiana, para dar rango constitucional al conjunto de medidas de excepción para combatir el terrorismo que había rechazado la Corte en la sentencia C-1024 de 2002, en cumplimiento de sus funciones de control constitucional del Decreto 2002 de 2002, y también, en relación con la concesión de facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, por la sentencia C-251 de 2002 relativa a la Ley 684 de 2001 de seguridad y defensa nacional”. Miguel Revenga Sánchez y Emilia Girón Rivera, “La Corte Constitucional colombiana ante las medidas de seguridad y defensa nacional del gobierno de Uribe”, *Estud. Socio-Jurid*, Bogotá, 6(1): 29-57, enero-junio de 2004: 56.

10. El Director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia remitió una carta a la Corte Constitucional el 1 de julio de 2004 en la que hizo observaciones a la reforma: “El Acto Legislativo en cuestión fue aprobado contrariando igualmente una recomendación específica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, que señalaba: “El Alto Comisionado solicita al Gobierno y al Congreso de la República que, al adoptar políticas y al elaborar normas, presten la debida atención a las obligaciones asumidas por Colombia como Estado parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario (...) “Cabe destacar que, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la aprobación del “llamado “Estatuto Antiterrorista” (...) que prevé dotar de facultades de policía judicial a las fuerzas armadas, así como autorizar allanamientos, detenciones administrativas y otras diligencias sin previa orden judicial. Asimismo, se disponen restricciones al derecho a la intimidad y al derecho a interponer recursos. Dichas disposiciones no parecerían compatibles con las garantías enunciadas en el Pacto (arts. 9, 14 y 17).” También el Comité contra la Tortura manifestó su inquietud “por el hecho de que diferentes medidas adoptadas o en vía de adopción por el Estado Parte en materia antiterrorista o contra grupos armados ilegales podrían favorecer la práctica de la tortura. En este sentido, el Comité expresa su preocupación, en particular, por: (...) b) El proyecto de Ley N° 223 de 2003 de reforma constitucional, el cual, de adoptarse, parecería otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares y permitir detenciones e interrogatorios, en principio hasta un período de 36 horas, sin control judicial”.

El estatuto antiterrorista fue durante los primeros dos años del gobierno de Uribe el caballito de batalla entre los partidarios del Presidente y sus más enconados opositores. Después de un difícil trámite en el Congreso, y de haber estado a punto de hundirse, el Congreso aprobó en diciembre de 2003 el acto legislativo que reforma la Constitución para concederles facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, un viejo anhelo del estamento castrense. Ex constituyentes, columnistas como Antonio Caballero, ONG de derechos humanos y la ONU cuestionaron desde el empadronamiento hasta las capturas sin orden judicial incluidas en la ley. Este proyecto, pese a haber sido presentado días después del ataque terrorista al Nogal, cuando los partidos políticos proponían un Frente Común contra el Terrorismo, muy pronto polarizó a la opinión pública entre quienes creían que era una apuesta de la derecha dura, que restringía los derechos inútilmente, y quienes consideraban que era necesario dotar a la Fuerza Pública de mayores herramientas para evitar el terrorismo. Pese a toda la polémica, agravada por los errores militares de Guaitarilla y Cajamarca, el Congreso aprobó con una amplia mayoría la Ley Estatutaria que reglamentaba la reforma constitucional (Semana, 2014).

La Corte Constitucional admitió varias demandas de inconstitucionalidad en contra del acto legislativo 02 de 2003, cuando ya había “estrenado” su doctrina de la “sustitución constitucional”, según la cual el Congreso podía modificar pero no sustituir la Constitución, pues esto último solo le competía al pueblo (Cajas Sarría, 2008). De este modo, varios de los cargos de los demandantes del estatuto planteaban que la reforma sustituía la Constitución, en la medida en que destruía el garantismo y el respeto por los derechos y las libertades que era de la esencia de la Carta de 1991. Así las cosas, la tensión política sobre el estatuto se desplazó del Congreso hacia la Corte.

El estudio de las demandas no fue fácil, los propios magistrados parecían dividirse entre opiniones favorables y desfavorables a la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2003. La sala plena de la Corte Constitucional primero examinó si hubo extralimitación de la competencia del Congreso y sustitución de la Constitución, sin embargo no se logró un acuerdo para tomar la decisión, que requería 5 de los 9 votos. Entonces recurrieron a analizar los cargos por vicios en el trámite de la reforma constitucional, que también habían planteado los ciudadanos demandantes. Esto dijo la Corte:

(...) en el presente caso, la Corte comenzó por una discusión de los eventuales vicios de competencia planteados por las demandas, pero no fue posible llegar a un acuerdo que permitiera, dentro de un término razonable, tomar una deci-

sión al respecto. La Corte examinó entonces los fundamentos de cada una de las acusaciones por vicios de trámite (...) y consideró que debía entrar en el análisis detallado de uno de estos cargos, a saber el relacionado con la presunta irregularidad presentada al aprobar el informe de ponencia previo a la votación del articulado del proyecto de acto legislativo en el sexto debate de la segunda vuelta (...) esta opción metodológica de entrar a analizar y decidir directamente los cargos que tienen mayor potencialidad de prosperar, aun cuando pueda parecer más lógico estudiar otra acusación previamente, no es una invención de esta sentencia ni de esta Corte (Corte Constitucional, 2004, Fundamentos jurídicos 9 y 10).

Esta postura “minimalista”, como la propia Corte reconoció, permitía resolver la demanda con base en asuntos “estrictamente” procedimentales y no entrar en el debate sobre si el contenido del estatuto suponía un cambio constitucional de tal dimensión que “transformaba” la Constitución de 1991. Es decir que el tribunal optó por un camino en el que había un mínimo acuerdo en la mayoría de magistrados que se requería para tomar una decisión, en lugar de aquél asunto que producía una intensa disputa: la aplicación de la doctrina de la “sustitución de la Constitución”.

Como dijimos antes, la reforma era altamente controversial: el estatuto prefería la seguridad y el orden público y ponía en riesgo la vigencia de varios derechos humanos. El resultado del fallo era que por el momento el gobierno se quedaba sin la herramienta que había propuesto como esencial para la lucha “antiterrorista”. Pero si bien desaparecía del orden jurídico un importante paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo, la derrota parecía parcial pues al haberlo declarado inconstitucional por un error de procedimiento al gobierno le quedaba la opción de presentarlo de nuevo ante el Congreso. De este modo, el fallo parecía escuchar las voces nacionales e internacionales que denunciaban los peligros de la reforma para los derechos y libertades, pero sin comprometerse con una decisión que definitivamente impidiera aprobar un nuevo estatuto en el inmediato futuro. Precisamente, la prensa de la época dio cuenta del “polémico trámite” de la reforma, así como también de las distintas reacciones de los actores políticos frente a la sentencia C-816 de 2004:

Contra los rumores de los últimos días que aseguraban que la Corte Constitucional devolvería la Reforma Antiterrorista al Congreso para enmendar sus vicios de forma, el alto tribunal decidió ayer tumbar todo el paquete aprobado por el legislativo y considerado como una herramienta estratégica para la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe. De esta manera se impuso la interpretación del sector de magistrados considerado de línea dura con el Gobierno, (...) El fallo de la Corte

fue bastante reñido: 5 contra 4. Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba, Jaime Araujo, Clara Inés Vargas y Rodrigo Uprimny votaron a favor de declararla inexecutable (El Tiempo, 2004).¹¹

El Tiempo también recordó los principales aspectos que fueron esgrimidos en su momento por distintos actores de la política nacional, tanto a favor como en contra de la reforma. Así, dijo que el gobierno había afirmado que no contaba con suficientes instrumentos jurídicos para enfrentar eficazmente el terrorismo y que tenía dificultades para perseguir a los autores e instigadores de esos hechos, lo cual se buscaba remediar con:

[L]a reforma de cuatro artículos de la Constitución, como soporte de su política de seguridad democrática y pidió que se les concedieran facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, sobre todo en zonas apartadas del país donde no había presencia permanente de la Fiscalía”, para así hacerle frente a “varias amenazas: El terrorismo; el negocio de las drogas ilícitas; las finanzas ilícitas; el tráfico de armas, municiones y explosivos; el secuestro y la extorsión; y el homicidio”. De igual modo, hizo memoria de que la reforma había surgido luego de que la Corte Constitucional “limitó varias disposiciones dictadas al amparo del Estado de Excepción, entre otras, la posibilidad de que la Fuerza Pública censara poblaciones en zonas afectadas por el conflicto interno y utilizara bienes de particulares, como motonaves, helicópteros y vehículos para perseguir en caliente a grupos de delincuentes (El Tiempo, 2004).

De igual modo, el periódico reconstruyó una parte de la historia del trámite del acto legislativo:

[Desde] su presentación y tránsito por el Congreso, el paquete antiterrorista (...) provocó fuertes polémicas y como resultado de esos forcejeos en varias oportunidades estuvo en la cuerda floja y a punto de hundirse: Tuvo la oposición de los congresistas liberales oficialistas, de algunos independientes, de la bancada del Polo Democrático Independiente y de la coalición de Alternativa Democrática. Incluso las Naciones Unidas enviaron varios mensajes en los que señalaron que esa iniciativa violaba normas de carácter internacional (...). La ONU también se opuso a la entrega de facultades a las autoridades administrativas para que puedan, sin previa

11. También dijo que esta era “la segunda norma de este tipo que se le cae al presidente Uribe en la Corte. La primera fue la declaratoria de inexecutable de las Zonas de Rehabilitación, de Arauca y la Costa Caribe”. “Corte tumbó paquete antiterrorista”, *El Tiempo*, 31 de agosto de 2004.

orden judicial, interceptar o registrar la correspondencia y demás comunicaciones privadas. Y alegó que la competencia en materia de interceptaciones y registros debe estar en cabeza de servidores públicos de la rama Judicial (El Tiempo, 2004).

En cuanto a las reacciones al fallo, esto reseñó *El Tiempo*:

Germán Vargas Lleras (Senador uribista): es lamentable e increíble que luego de haberse tramitado la reforma constitucional, se caiga en la Cámara por vicios de trámite este estatuto (...) - Wilson Borja (Alternativa Democrática): era una violación de los derechos humanos (...) - Antonio Navarro, (Polo Democrático): primero, hay que respaldar a la Corte porque ha dado señales de seriedad e independencia, sobre todo en los fallos más recientes. Segundo, el error es culpa del Congreso que es muy descuidado en el trámite de las leyes y actos legislativos (...) Tercero, es mejor que no haya estatuto a que haya, pero el camino de vicios de trámite no era el camino. Y por último, que el Gobierno no vaya a tomar represalias contra la Corte. - Claudia Blum (Senadora uribista): este fallo lo acato pero no lo comparto, porque es una decisión grave. Hay que evaluar ese pronunciamiento porque se ha perdido la oportunidad de dotar al Estado colombiano de herramientas para enfrentar el terrorismo (...) -Luis Camilo Osorio Fiscal general: estoy sorprendido. Es un fallo que limita la capacidad de respuesta del Estado frente a la criminalidad (...) (El Tiempo, 2004).

La Corte Constitucional luego completó la tarea de poner freno al llamado “paquete antiterrorista” con la declaratoria de la inconstitucionalidad (Las Dos Orillas, 2017) del proyecto de la ley estatutaria que desarrollaba la reforma constitucional del A.L. 02 de 2003. En la sentencia C-1119 del 9 de noviembre de 2004 la Corte expresó que al haberse declarado inconstitucional la reforma constitucional del estatuto antiterrorista, no procedía pronunciarse sobre un proyecto de ley estatutaria que buscaba desarrollarla.¹²

En suma, los fallos de la Corte Constitucional impidieron reformas que, bajo el propósito de garantizar la seguridad y restablecer el orden público, amenazaban con vulnerar derechos y garantías ciudadanas. De nuevo, como en los momentos previos

12. “Por todo lo anterior, la Corte concluye que existe una relación general de conexidad inescindible entre el texto íntegro del Proyecto de ley estatutaria y el Acto Legislativo 02 de 2003, que hace que, con la expedición de la Sentencia C-816 de 2004, aquel haya perdido su fundamento lógico y constitucional. En tal virtud, dadas las circunstancias del caso, a la fecha del presente pronunciamiento no tiene sentido que la Corte se pronuncie respecto de la constitucionalidad formal o material de la normativa sujeta a revisión, por carencia actual de objeto.” Corte Constitucional, sentencia C-1119 del 9 de noviembre de 2014, M.P. Marco Gerardo Monroy. Tan solo uno de los nueve magistrados salvó el voto porque consideró que la Corte debió tomar una decisión de fondo.

de la historia política que hemos examinado en este capítulo, la compleja tensión entre la seguridad y los derechos parecía inclinarse hacia la primera, solo que en esta ocasión la intervención de una Corte independiente cambió la balanza y permitió preservar la integridad de la Constitución de 1991.

Consideraciones finales

Los cuatro momentos examinados en esta trayectoria muestran que distintos gobiernos, tanto civiles como militares y bajo diferentes constituciones, plantearon la necesidad de garantizar la seguridad y el incremento del poder de la fuerza pública aún a costa de la limitación y vulneración de derechos; y en muchos casos hasta la represión de las voces disidentes.

Este capítulo ha dado cuenta de diferentes herramientas jurídicas bajo la Constitución de 1886: en el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930); en el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982); y ya bajo la Constitución de 1991 en los primeros años del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Esta breve reconstrucción ha puesto de presente las continuidades en el recurso al miedo como justificación de diversas herramientas jurídicas, que no solo parecían destinadas a perseguir la insurgencia y garantizar la seguridad, sino que también en algunos casos sirvieron para reprimir a la oposición política, las organizaciones de izquierda, al movimiento obrero, y otras organizaciones sociales; así como también para la violación de derechos humanos.

Por último, esta memoria sobre el uso del derecho contra “el miedo” o las “amenazas” de comunistas, disidentes y opositores podría dar luces en torno a los límites de las medidas necesarias para garantizar la seguridad, pero también acerca de los retos que suponen los nuevos modos en que se expresa la “cuestión social” en el siglo XXI.

Referencias bibliográficas

ANALES DEL SENADO, *Proyecto de ley presentado por los senadores Carlos Jaramillo Isaza, Luís Ignacio Andrade, Ignacio R. Piñeros, Diógenes A. Reyes y Ernesto Cifuentes* D. Sesiones extraordinarias de 1928, Bogotá, miércoles 20 de junio de 1928, número 36.

ANALES DEL SENADO, *Informe de Mayoría de la Comisión que estudió para segundo debate el proyecto de ley sobre “autorizaciones al Gobierno”*. Sesiones extraordinarias de 1928,

Bogotá, miércoles 20 de junio de 1928, número 36.

ANALES DEL SENADO, *Informe de Minoría de la comisión que estudió para segundo debate el proyecto de ley “sobre autorizaciones al Gobierno”*. Sesiones extraordinarias de 1928, Bogotá, miércoles 20 de junio de 1928, número 36.

ANALES DEL SENADO, Intervención del senador Pedro Alejandro Gómez Naranjo en la sesión del de 1928, sesiones extraordinarias de 1928, Bogotá, martes 3 de julio de 1928, número 46.

ANALES DEL SENADO, *Intervención del senador Antonio José Uribe en la sesión del 19 de julio de 1928, debate del proyecto de ley “sobre autorizaciones al gobierno”*, viernes 27 de julio de 1928, No. 66.

ANALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, *Acto Legislativo 06 de 1957*, Bogotá, martes 21 de septiembre de 1954, Año 1, No. 23.

ANALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. *Exposición de motivos del proyecto de Acto legislativo “por el cual se dictan medidas sobre el comunismo y demás partidos internacionales”*, Bogotá, martes 17 de agosto de 1954.

ARCHILA, Mauricio, et al. *Violencia contra el sindicalismo, 1984-2010*, Cinep, Bogotá, 2012.

BERGQUIST, Charles “La izquierda colombiana: un pasado paradójico, ¿un futuro promisorio?”, *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 44-2, 2017. Pp. 263-299.

BOTERO, Catalina “¿Usted está de acuerdo con la protesta pacífica?”, *Ámbito Jurídico*, 08 de enero de 2020: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/constitucional-y-derechos-humanos/usted-esta-de-acuerdo-con-la-protesta>

FLACSO-sede Ecuador. Ediciones Alfaomega, CESO, Universidad de los Andes, 2002.

CAJAS SARRÍA, Mario Alberto, *La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991*, Tomos I y II, Universidad de los Andes y Universidad Icesi, Bogotá, 2015.

CAJAS SARRÍA, Mario Alberto, “El juicio al Estatuto de Seguridad de 1978 o uno de los “peores casos” en la historia de la Corte Suprema de Justicia”, en: *Gaceta Judicial: 120 años de historia jurisprudencial colombiana*, Marcela Castro (Coord.) Universidad de los Andes y Temis, Bogotá, 2017, Pp. 264-298.

CAJAS SARRÍA, Mario Alberto, “Haciendo memoria de una Corte que le temía a la revolución: a propósito de un juicio de constitucionalidad bajo la hegemonía conservadora”. *Revista de Derecho Universidad del Norte*, No. 49, 2018.

- CAJAS SARRÍA, Mario Alberto, “El derecho contra el comunismo en Colombia”, 1920-19562, *Izquierdas* 49, enero 2020, 1-22.
- CARDONA ZULETA, Luz, *La culebra sigue viva: miedo y política: el ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)*, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2016.
- CARDONA ZULETA, Luz y LONDOÑO, César, “La retórica del miedo como estrategia política. El plebiscito por la paz en Colombia”. *Fórum. Rev.* 14, julio-diciembre de 2018.
- CÁMARA DE REPRESENTANTES, *Proyecto de ley No. 216 de 2019*, “Por medio del cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales”: <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2019%20-%202020/PL%20216-19%20Protesta%20Pacifica.pdf>
- COMMUNIST CONTROL ACT OF 1954, U.S. Statutes at Large, *Public Law* 637, Chapter 886: 775-780.
- CORTE CONSTITUCIONAL, *Sentencia C-251 del 11 de abril de 2002*, C-816 de 2004 y C-1119 de 2004.
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Plena: Bogotá, 27 de agosto de 1931, *Gaceta Judicial*, No. XXXVI de 1931.
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Plena: Bogotá, 13 de noviembre de 1928, *Gaceta Judicial*, No. 1832, Tomo XXXVI, 28 de enero de 1931.
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 30 de octubre de 1978, M.P. Luís Carlos Sáchica, G.J. No. 2397.
- DE FIGUEIREDO Jr. Rui y WEINGAST, Barry “Rationality of Fear: Political Opportunism and Ethnic Conflict”, En: *Civil Wars, Insecurity and Intervention*, Bárbara Walter y Jack Snyder, Eds., Columbia University Press, 1999.
- DÉCIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA, Caracas, 1954. Acta Final: 363. http://biblio2.colmex.mx/coinam/coinam_2_suplemento_1945_1954/base2.htm
- DECRETO LEGISLATIVO No. 01 de 1928, *Diario Oficial* Año LXIV, No. 20962, 5 de diciembre de 1928.
- DECRETO LEGISLATIVO No. 2535 de 1955. *Diario Oficial*, Año XCII No. 28859, No. 22.
- DECRETO LEGISLATIVO No. 434 del 01 de marzo de 1956.

DECRETO LEGISLATIVO No. 1923 del 6 de septiembre de 1978. *Diario Oficial* No. 35.101, Imprenta Nacional. 21 de septiembre de 1978.

DECRETO LEGISLATIVO No. 1674 del 9 de junio de 1982 “por el cual se declara restablecido el orden público y se levanta el estado de sitio en todo el territorio nacional, *Diario Oficial* Año CXIX, No. 36038, 5 de julio de 1982.

DELGADO, Antonia. “América Latina esté incendiada. ¿Fue Nicolás Maduro el que prendió la mecha? *El Nuevo Herald*, 21 de octubre de 2019: *El Nuevo Herald*, <https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article236486048.html>”

EL PAÍS, “¿Regular o no la protesta social?: Responde el Consejero de Derechos Humanos” <https://www.elpais.com.co/colombia/regular-o-no-la-protesta-social-responde-el-consejero-de-derechos-humanos.html>, Cali, 20 de octubre de 2019.

EL TIEMPO, Bogotá: 2 de septiembre de 1924, 4 de mayo de 1925; 27 de abril, 1 y 2 de mayo de 1927; 4, 15, 17 de noviembre y 10 de diciembre de 1928; 31 de julio y 5 de diciembre de 1929, 28 de agosto de 1931; 3 de mayo de 1948, 8 de febrero de 1979; 31 de agosto de 2004; y 2 mayo y 22 de noviembre de 2019.

EL TIEMPO. Declaración del Partido Socialista Revolucionario sobre los últimos sucesos”. Firmado por Moisés Prieto, Paulo E. Sabogal González y R. Baquero (Miembros del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Revolucionario de Colombia), *El Tiempo*, 31 de julio de 1929.

FALLA, Jonathan. “El miedo a la muerte como mecanismo político: análisis crítico del discurso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2002-2006”, trabajo de grado para optar al título de Magister en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2017.

GACHARNÁ CASTRO, Diana, “La política de defensa y seguridad democrática en Colombia (2002-2004): ¿promoción del miedo o profundización democrática?”, *Trabajo de grado para obtener el título de Magister en Estudios Políticos*, Universidad del Rosario, Bogotá, 2014.

GONZÁLEZ JÁCOME, Jorge, *Revolución, democracia y paz: trayectorias de los derechos humanos en Colombia, 1973-1985*, Tirant Lo Blanch y Universidad de los Andes, 2019.

GORRITI, Gustavo, Las intensas protestas de 2019 cerraron una década de ciudadanía insatisfecha”, *The Washington Post* 7 de enero de 2020, <https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/07/las-intensas-protestas-de-2019-cerraron-una-decada-de-ciudadania-insatisfecha/>

Informe del Director General de la Policía Nacional al Ministro de Gobierno, Bogotá, 23 de

marzo de 1928. *Revista de la Policía Nacional, órgano oficial de esta entidad*. Año XVI, Número 90, Bogotá, marzo de 1928.

INTERVENCIÓN DEL SENADOR PEDRO ALEJANDRO GÓMEZ NARANJO, en la sesión del de 1928, *Anales del Senado, sesiones extraordinarias de 1928*, Bogotá, martes 3 de julio de 1928, número 46.

JEIFETS, Víctor y JEIFETS, Lázar, “El partido comunista colombiano, desde su fundación y orientación hacia la “transformación bolchevique”: varios episodios de la historia de las relaciones entre Moscú y el comunismo colombiano”, *Anuario Colombiano de Historia Social y la Cultura* 18, 2001.

JIMENEZ, Catalina. “El Estatuto de Seguridad, la aplicabilidad de la doctrina de la seguridad nacional en Colombia: efectos en materia de derechos humanos”, *Colección 2*, 2009.

LA FM, “Mindefensa vuelve a poner sobre la mesa regular protesta ante vandalismo por paro transportador”, <https://www.lafm.com.co/politica/mindefensa-vuelve-poner-sobre-la-mesa-regular-protesta-ante-vandalismo-por-paro>. *La FM*, 25 de septiembre de 2019. <https://www.rcnradio.com/politica/mindefensa-respalda-proyecto-del-conservatismo-para-regular-la-protesta-social>.

LA NACIÓN, “Protestas, polarización y elecciones cruciales: “qué le espera a América Latina en 2020”, y *La Nación*, 27 de diciembre de 2019: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/protestas-polarizacion-elecciones-cruciales-que-le-espera-nid2318967>.

LEAL BUITRAGO, Francisco. La seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría. *Anal. político*, Número 46, p. 200, 2002.

LEAL BUITRAGO, Francisco. “La política de seguridad democrática”, *Anal. político*, Vol. 19, Número 57: 3-30, 2006.

LEY 69 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1928. *Diario Oficial*, Año LXIV. N. 20934. 2 de noviembre de 1928.

LEY 21 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 1929, *Diario Oficial*, Año LXV. No 21230, del 30 de octubre de 1929.

LEY 48 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1929, *Diario Oficial* No. 17392 y 17393 de 1929.

MEMORIA DEL MINISTERIO DE GUERRA AL CONGRESO NACIONAL, Imprenta del Estado Mayor General, Bogotá, 1929.

NASSAU, Julieta “Las intensas protestas de 2019 cerraron una década de ciudadanía insatisfecha”,

<https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/07/las-intensas-protestas-de-2019-cerraron-una-decada-de-ciudadania-insatisfecha/> . *The Washington Post*, 7 de enero de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. “Política de Defensa y Seguridad democrática, 2003: <https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>

PROYECTO DE REFORMAS PRESENTADO AL MINISTERIO DE GOBIERNO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, Bogotá, febrero 11 de 1953. En: *Revista de Derecho*, Universidad Pontificia Bolivariana, Vol. 3, 9-12, Medellín, 1953. Pp. 85-123.

SÁNCHEZ, Gonzalo. *Ensayos de historia social y política del siglo XX: los bolcheviques del Líbano, las ligas campesinas en Colombia, las raíces históricas de la amnistía*. El Áncora Editores, 1984.

SEGUNDA CONFERENCIA INTERAMERICANA, “Tratado de Extradición y protección contra el Anarquismo”, 15 de marzo de 1902, Buenos Aires.

SEMANA, “Gobierno declara el estado de conmoción interior”, 12 de agosto de 2002: <https://www.semana.com/noticias/articulo/gobierno-declara-estado-conmocion-interior/53560-3>

SEMANA, “El fantasma del castrochavismo: la mitad del país cree que Colombia está en peligro de convertirse en la próxima Venezuela. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda?”, 6 de octubre de 2017. <https://www.semana.com/nacion/articulo/colombianos-creen-que-el-pais-se-puede-convertir-en-venezuela/528035>.

SEMANA, “Prohibir capuchas y marchas cerca a hospitales, dice proyecto de ley para regular la protesta social”, 12 de diciembre de 2019: <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-polemico-proyecto-de-ley-para-regular-la-protesta-social/644548>

SENADO DE LA REPÚBLICA, *Proyecto de ley estatutaria No. 281, 2019*, “Por el cual se regula el artículo 37 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”: <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2019-2020/1758-proyecto-de-ley-281-de-2019>.

THE COMMUNIST ACT OF 1954, *The Yale Law Journal*, Vol. 64, No. 5: 713.

VEGA CANTOR, Renán *Gente muy rebelde: protesta popular y Modernización capitalista en Colombia. 4, Socialismo, Cultura y protesta popular* Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002.

NEOCAPITALISMO, NUEVA EXTREMA DERECHA Y EL SUFRIMIENTO PSÍQUICO

Manuel Desviat

Universidad Nacional de Educación a Distancia | desviatm@gmail.com

Confundimos libertad con "libre mercado". Así desconocíamos nuestra implacable condena como mercancías.

Francisco Pereña(Pereña, 2014)

El neocapitalismo está incubando con su devaluación de la democracia, el incremento de la desigualdad y la demolición de las políticas sociales, un nuevo fascismo que se beneficia del descontento de las clases medias y de la precariedad y pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores. Como anunciaba Joaquín Estefanía en *Estos años bárbaros* (2015) la salida de la Gran Recesión ha convertido en estructural lo que durante la gestión de la crisis financiera se vendía como secuelas transitorias: el incremento de la desigualdad, la precariedad laboral, la desregulación de los mercados, la privatización de los bienes públicos, arrasando con los antaño derechos constitucionales en educación, sanidad, pensiones, prestaciones sociales. El neoliberalismo completa con la conquista del Estado en beneficio de unos pocos la revolución conservadora iniciada con Reagan y Thatcher en los años ochenta del pasado siglo. De un Estado que, como apunta Varoufakis (2013) fue capturado primero por los barones ladrones, luego por los magnates corporativos y poco después por Wall Street, La City de Londres o el BCE.

El diseño del plan donde se establecieron las leyes del fundamentalismo de mercado fue concebido en un encuentro en 1989, conocido como el Consenso de Washington, por los grandes *lobbies* financieros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la reserva federal de EE. UU. y especialistas pagados por la administración estadounidense. Para el fundamentalismo neoliberal, una vez dueños del mundo tras la caída del muro de Berlín, las leyes sociales surgidas tras la crisis de 1929 y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial (que no fueron tanto como se dice fruto de una mayor sensibilidad humanista, sino una estrategia defensiva del poder financiero ante los amplios movimientos reivindicativos de clase, el peso de los partidos comunistas en Europa fortalecidos por su lucha en la Resistencia a la ocupación nazi y la propia disyuntiva comunista de la Unión Soviética), son un obstáculo, un residuo a suprimir, como lo son las políticas sociales de algunos estados latinoamericanos (Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela...) iniciadas a contracorriente. Esta vez no son, o no lo son todavía, golpes de estado militares; para el poder financiero y la inteligencia estadounidense, bastan los bancos, la compra de jueces y políticos, el poder intoxicador de los medios que controlan. Ahí tenemos el *impeachment* a Dilma o el encarcelamiento de Lula (Desviat, M; Bleicher, 2018).

Se juega con el mito de la mejor eficacia de los mercados y el necesario adelgazamiento de las cuentas públicas, cuando la toma de los gobiernos nacionales por el capital financiero, por ese 1% de la población mundial, no supone el adelgazamiento del gasto público, ese minimalismo del que hacen gala sus próceres; supone su desplazamiento a la industria del armamento, al refuerzo de los ejércitos interiores y exteriores, policías, servicios de seguridad e inteligencia para garantizar la sumisión de la ciudadanía, cuando no al rescate de los bancos fraudulentamente en quiebra, como ha sucedido en la reciente gran crisis. Supone la venta del erario a los fondos buitres internacionales, hospitales, pensiones, universidades. Supone la acumulación ilimitada del capital, como previó Marx, más la también ilimitada invasión de la vida toda. La lógica del mercado configura subjetividades, cosifica las relaciones humanas, convirtiendo todo en consumo, competencia y, en definitiva, mercancía. Estrategia totalizadora, que pretende ir más allá del control de la economía, buscando imponer una cultura y un pensamiento único a nivel mundial. Un pensamiento que borre en el imaginario colectivo los grandes relatos que configuraron el sujeto de ayer, la ilustración, el freudismo, el marxismo. Se trata de forjar un sujeto neoliberal cuya ideología esté procurada por la publicidad y su deseo copado por el consumo.

La desigualdad como factor de riesgo social

El caso es que la acumulación infinita del capital supone el aumento irreductible y exponencial de la desigualdad, con el incremento de la tensión social. La cólera contra los ricos se visualizó en los movimientos de indignación que ocuparon las plazas en las ciudades, desde España a Nueva York o el Cairo, al grito de “no nos representan” en denuncia a unos gobiernos que rescataban bancos fraudulentos con dinero público mientras imponían una política socialmente austericida, culpabilizando a gobiernos y ciudadanos por haber vivido por encima de sus economías (una nueva falacia pues, como exhaustivamente demuestra Mark Blyth, lo que se nos ha vendido como una crisis provocada por los excesivos desembolsos del sector público ha sido en realidad una crisis generada por el abuso del crédito por parte del sector privado, siendo todos los ciudadanos, sin embargo, los que hemos pagado la cuenta, obligados al rescate tanto de los bancos como de los banqueros (Blyth, 2014). Cólera social que se manifiesta en la lucha de los chalecos amarillos, en su asalto a los barrios buenos, a los templos emblemáticos de los ricos, tiendas y restaurantes de lujo de las élites parisinas. La destrucción e incendio de Fouquet’s, el exclusivo restaurante de los Champs Élysées, muestra la rabia, la cólera de un pueblo humillado por los más ricos, pero también la

impotencia de unas protestas que no tienen agenda política. No adoptan una unidad organizada en la lucha, una exigencia política colectiva, no hay un diseño de futuro. Menos aún una perspectiva utópica. Al igual que los disturbios que incendiaron los suburbios de París durante el otoño de 2005, no prendió la llama más allá, tan solo quedaron los rescoldos.

Una cólera social que ha sido aprovechada por la extrema derecha, lo que viene a explicar el triunfo de Trump en 2016 y de Bolsonaro en 2018 y su entrada en los gobiernos y parlamentos en Italia, Austria, Eslovaquia, Bulgaria, España y Rusia. Una “nueva” extrema derecha que sofistica su discurso edulcorando la nostalgia nazifascista en busca de un electorado transversal y que se acomoda a los imperativos del neoliberalismo. Un nuevo fascismo que se erige en defensor de la patria y los valores nacionales, frente a un enemigo que se construye electoralmente, alimentando el miedo. Miedo al desempleo, que pretendidamente los emigrantes favorecen; miedo a las ideologías de género, capitalizando el recelo de los varones que sienten amenazado su rol familiar social patriarcal, miedo a la diversidad, a las minorías, a los pobres. La existencia de un enemigo que les permite deshumanizar al oponente, estigmatizarlo o criminalizarlo. Cuando las últimas elecciones presidenciales en Brasil, circuló un WhatsApp de la candidatura del ultraderechista Bolsonaro, cuya traducción literal decía: “vagabundos, negros y discapacitados, van a morir” (CECH VAI 17 VAGABAS, PRETO, ALEJADOS VAO A MORRER). Que podía haber sido escrito en tiempos del comercio de esclavos y de la “esclavización” de los indígenas de medio planeta.

Y ahí tenemos en Brasil, hasta hace poco la promesa de una vía progresista en América Latina, a Bolsonaro con su desfasado anticomunismo, pretendiendo cerrar las universidades públicas, en especial las facultades de humanidades, que, según él y sus aliados evangelistas, están atestadas de marxistas, corrompiendo a la juventud y a la sociedad con sus ideas libertarias contra el orden, la familia y la religión.¹ En el fondo, como dice Manuel Loff, historiador portugués experto en regímenes autoritarios, la tesis es que todas las ciencias sociales son comprometidas, militantes y, por tanto, todas pretenderían, desde hace décadas, minar los fundamentos de la naturaleza, de

1. Por no hablar de su política criminal respecto a la pandemia de covid-19, que muestra a las claras la idiocia moral que le caracteriza, más Bolsonaro no es lo que más importa, lo que de verdad importa es la dinámica social que ha hecho presidente de Brasil a un sociópata, como también es el caso de Trump u otros dirigentes de esta nueva derecha. Líderes nostálgicos de las dictaduras, que la gestión de la crisis financiera de 2008 aupó en el poder. Al neocapitalismo en su versión más radical, le sobra la democracia. Es un estorbo para convertir en mercancía lo que todavía son derechos constitucionales: la salud, las prestaciones sociales, la educación.

la comunidad, del orden social de la nación (Loff, 2019). Desfachata proyección de lo que ha sido y es su propio hacer, a través de iglesias y movimientos políticos, como el hoy llamado Escuela sin Partido, en Brasil, o el ultraderechista Vox en España. Una deshumanización de la Escuela y las Universidades que ya está presente desde hace décadas en el discurso conservador, que viene apostando, como bien analiza Marina Garcés, por el conocimiento biológico, físico y digital, ligado a la empresa, productivo, en última instancia y menospreciando las ciencias sociales y “de letras”, hasta el punto que en la Universidad Complutense, la mayor Universidad de Madrid se ha intentado suprimir la filosofía (Garcés, 2017). Como estaba presente un uso de la democracia que permite derogar las medidas que protegían la Amazonia o promulgar leyes como la llamada Ley Mordaza en España que restringe las libertades de manifestación y expresión identitarias de una democracia, al tiempo que se alzan banderas patrias y se ingenian enemigos, dando entrada al ideario fascista de la extrema derecha.

Imposible no recordar lo sucedido entre las dos guerras mundiales del siglo XX, el desenlace de la República de Weimar. Imposible no volver a Marx, al fetichismo de la mercancía, la falsa conciencia y la alienación.

“El nosotros es un pronombre peligroso”

Los dueños de los medios seducen a la población con el ideal privatizador, convirtiendo la precarización del trabajo en un aliciente emprendedor, individualismo competitivo del que depende la persona y la sitúa siempre en continuo riesgo. Empresario de uno mismo, se pierde el vínculo social. El nosotros se convierte en un pronombre peligroso, como escribe Richard Sennet en su estudio sobre las consecuencias subjetivas del trabajo en el neocapitalismo (Sennet, 2000). La vida se vuelve una competición en la que ya están definidos los ganadores, los detentadores del poder patrimonial y meritocrático y también los perdedores, los nadie, los desechos poco meritorios, los excluidos, el sobrante social del sistema productivo. Los determinantes sociales lo atestiguan. Por poner unos ejemplos: la renta media de los estudiantes de la Universidad de Harvard corresponde a la renta media del 2% de los estadounidenses más ricos. En Francia las instituciones educativas más elitistas reclutan a sus miembros en grupos sociales apenas más amplios (Piketty, 2015). O las desigualdades en la esperanza de vida, entre una clase social y otra; en un barrio u otro de la misma ciudad en cualquier parte del mundo. En Barcelona, la esperanza de vida en barrios como Torre Baró, en Nou Barris, es 11 años menor que en Pedralbes. En el barrio de Calton, un barrio pobre de la ciudad de Glasgow, la población tiene una esperanza de vida de 54 años, una de las más bajas del

mundo; a pocos kilómetros, en la rica zona de Lenzie, la esperanza de vida es de 82 años, una de las más altas de Europa (Angeles Maestro, 2017). Pero en la ideología de la época, el estilo de vida —del que se hace responsable al ciudadano—, se impone a los determinantes sociales, al modo de vida. Hay sujetos frágiles, vulnerables, pero poco se habla de la *vulnerabilización*, como bien dice Antonio Madrid Pérez, pues se oculta con esto de la responsabilidad personal, el diseño y funcionamiento de las estructuras y lógicas de la explotación, las causas de la vulneración (Madrid Pérez, 2018).

El ‘nosotros’ se quiere reducir a unas pocas personas cuando no a uno mismo. O a la comunión de los estadios de fútbol. De otra forma es peligroso. Lo que supone despojar al sujeto de la ancestral protección del lazo social. Esa interdependencia que ha permitido la supervivencia de la especie humana. Ahora, en un presente sin historia, sin una ética de lo común, el ciudadano, ciego a los avatares colectivos, encadena su vida al delirante y *kitsch American dream*, entre la hipoteca del piso y la póliza de la funeraria.

Las consecuencias en el sufrimiento psíquico son el incremento de los problemas mentales y sobre todo un estrés generalizado que se traduce en malestar, en infantil desesperanza, frustrado un deseo que nunca fue construido, que nunca tuvo el forjado necesario para perdurar.

El mantra de la socialdemocracia. “Una derecha llamada izquierda”²

En este presente, ante estas circunstancias, la pregunta de entrada, según el sociólogo Jesús Ibáñez, estaría en si es posible en un sistema capitalista hacer una política de gobierno no capitalista (J. Ibáñez, 1997). Llevada a la asistencia sanitaria y social, la pregunta es ¿si es posible una sanidad universal y equitativa, una salud colectiva en el contexto neoliberal? Su viabilidad es la apuesta (retórica) de la socialdemocracia, la izquierda hoy hegemónica, una vez que acepta como el menos malo de los sistemas el capitalista;³ viabilidad que es el mantra que venden electoralmente y no practican cuando gobiernan, al menos en todo cuanto entorpece a los mercados. En su discurso, la vuelta a un Estado de Bienestar actualizado por la gestión privada. Pero la cuestión

2. “Una derecha llamada izquierda” es el título de capítulo del libro *Contracorrientes* de Jesús Ibáñez.

3. Jesús Ibáñez atribuye esta frase a Felipe González, presidente del gobierno de España desde 1982 a 1996 (Ibem, pág...). Su actuación, en cualquier caso, tanto en el gobierno como posteriormente aliado a las elites del capital confirmaría este dicho.

es ¿cuál es el precio de esta actualización, que por lo que sabemos hoy desvirtúa completamente los principios comunitarios y salubristas en los procesos llevados a cabo en Europa?(Desviat, 2016).⁴ Estudiosos de la evolución de los servicios sociosanitarios, como Rafael Huertas o Ángeles Maestro(2013), entre otros, creen que no es posible reformular hoy el Estado del Bienestar sin cuestionarse el eje de la política económica. Por muchos giros sobre el mismo eje que se den no parece tener mucho sentido “porque mantener islas de justicia retributiva (como los servicios sanitarios públicos) rodeadas por aguas infectadas de tiburones neoliberales resulta un contrasentido evidente” ? (Huertas, 2013:9). No ven posible que el neoliberalismo que hoy se sabe hegemónico acepte un desarrollo democrático que no defienda a ultranza sus intereses de clase.

En cualquier caso, en esta contradicción se encuentra la ambigüedad y la insuficiencia de los Servicios Nacionales de Salud, de las propias leyes que los crearon en tiempos del Estado del Bienestar, dejando siempre la puerta abierta a la privatización de los servicios. En realidad, aún en los años de mayor protección social, la sanidad pública estuvo siempre condicionada a una financiación que privilegiaba a las grandes empresas farmacéuticas, tecnológicas y constructoras. Los gobiernos conservadores, pero también los socialdemócratas, mantuvieron la sanidad pública en sus programas, lo que además les permitía disminuir costes y acercar los recursos a la población atendida con un claro beneficio político electoral, más al tiempo protegieron las infraestructuras de poder de la medicina conservadora y empresarial. La reforma sanitaria, y de la salud mental comunitaria, en sus logros de mayor cobertura y universalidad, se desarrolló siempre a contracorriente del poder económico, fueran ministros conservadores o socialistas.

De hecho, las ayudas económicas del Banco Mundial se acompañaron de la exigencia a los países de la reducción de la participación del sector público en la gestión de actividades comerciales y la disminución de los servicios sociales, convirtiendo en objetivo prioritario la privatización de la sanidad y las pensiones, al estilo de EEUU. Algo que queda claro en el informe de 1989 del Banco Mundial sobre financiación de los servicios sanitarios, donde se plantea introducir las fuerzas del mercado y trasladar a los usuarios los gastos en el uso de las prestaciones (Akin, 1987). Y en la pronta asunción de esta política por los Estados, empezando por el Reino Unido, que fue durante tiempo referencia por su Sistema Nacional de Salud, como puede verse en documentos recientemente desclasificados del Gabinete de Margaret Thatcher (Archivos Nacionales del Reino Unido, documento del año 1982), donde en un informe del Banco Mundial

4. Tema que he tratado ampliamente en *Cohabitar la diferencia. De la reforma psiquiátrica a la salud mental colectiva*.

se dice textualmente que se deberá poner fin a la provisión de atención sanitaria por el Estado para la mayoría de la población, haciendo que los servicios sanitarios sean de titularidad y gestión privada, y que las personas que necesiten atención sanitaria deberán pagar por ello. Aquellos que no tengan medios para pagar podrán recibir una ayuda del Estado a través de algún sistema de reembolso (Lamata, Fernando; Oñorbe, 2014).

La violencia ultraliberal y nula sensibilidad social de este informe hizo que el Banco Mundial elaborara uno posterior donde suaviza el tono pero mantiene los mismos objetivos: ubicar la salud en el ámbito de lo privado y disminuir el gasto social público, incluyendo el de salud que debería limitarse a acciones de bajo costo destinadas sobre todo a población pobre. Acciones que se reducen a programas de inmunizaciones, salud escolar (enseñanza sanitaria), de educación/información (planificación familiar, nutrición, autotratamiento/búsqueda de asistencia, vigilancia de enfermedades, lucha contra vectores), para reducir el consumo de alcohol y drogas y la prevención del SIDA (Banco Mundial, 1993). La filosofía es transparente: la salud es responsabilidad de la persona, del cuidado o no cuidado que haga con su vida, por tanto, deben pagar por los servicios que consume. La sanidad deja de ser un bien público al que todas las personas tienen, por tanto, derecho.

La quiebra de la universalidad deja fuera del sistema sanitario a colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, inmigrantes sin papeles, discapacitados, ancianos...), al tiempo que los recortes presupuestarios deterioran los servicios asistenciales, reducen la “cesta básica”, introducen el copago en medicamentos y suprimen prestaciones de apoyo (transporte, aparatos ortopédicos...). El Estado desplaza a los mercados la decisión de quien tendrá acceso a “hacer(se)vivir y quien, por el contrario, va “dejar(se) morir”. Lo que puede convertirse en una suerte de regulación eugenésica en base al poder adquisitivo de cada cual para proveerse de los cuidados necesarios para mantener su vida (Jordana Lluch, 2018). El paciente pasa a ser un cliente que puede ser rentable o no.

En este trastoque de las funciones del Estado, los lobbies económicos y sus representantes políticos buscan alianzas con las instituciones y agencias internacionales encargadas de normativizar la eficiencia de las prestaciones públicas, en una colonización progresiva a través de ayudas a la financiación, como puede verse en la evolución de la agencia especializada de Naciones Unidas para la salud, la Organización Mundial de la salud (OMS), donde la innovación y la propiedad intelectual, fue financiada con fondos públicos provenientes de las cuotas de sus 193 países miembros. Pero en las últimas décadas, según informa Germán Velásquez, ex director del Secretariado de la OMS para la Salud Pública, se ha producido una privatización progresiva de la agencia

dejándola en manos de fundaciones privadas, donaciones para fines específicos y la gran industria alimentaria y farmacéutica (el presupuesto regular público es menor del 20%) (Velásquez, 2016). Huelga hablar del evidente conflicto de intereses. Al final, de ser un organismo normativo encargado de establecer políticas y estrategias internacionales vinculantes, la OMS puede terminar en una agencia humanitaria que implementa proyectos financiados por la “caridad” internacional.

La medicalización de la sociedad.

Pero hay otro fenómeno que hay que considerar al referirnos al sufrimiento singular y colectivo. Otro fenómeno al que enfrentar aparte de la falta de soporte social de los Estados y de la hegemonía del discurso conservador, la sustancial medicalización de la sociedad. En realidad, tanto la existencia de un Estado privatizador, como la ausencia de una doctrina de salud y servicios sociales orientada al bien común, van a posibilitar el proceso de la mercantilización de la medicina, convertida en una importante fuente de riqueza, y consecuente medicalización y psiquiatrización de la población. Este proceso que viene denominándose “medicalización” tiene tres aspectos básicos, tal como enuncian Isabel del Cura y López García: uno, referir como enfermedad cualquier situación de la vida que comporte limitación, dolor, pena, insatisfacción o frustración (lo que podríamos definir como enfermedades inventadas); otra, la equiparación de factor de riesgo con enfermedad; y, por último, la ampliación de los márgenes de enfermedades (que sí lo son) aumentando así su prevalencia. Todo ello origina intervenciones diagnósticas y/o terapéuticas de dudosa eficacia y eficiencia (del Cura, Isabel; López García Franco, 2008). Hacer medicamentos para personas sanas era un viejo deseo de los laboratorios farmacéuticos, ahora el complejo médico-técnico-farmacéutico, aliado con los medios y con el poder político va más allá, con la fabricación de enfermedades. Ahora la estrategia funciona vendiendo no sólo las excelencias del fármaco sino, sobre todo, vendiendo la enfermedad.

La depresión es un buen ejemplo, convertida en una pandemia mundial gracias a los antidepresivos. La cosa es simple, buscamos o creamos un malestar (el síntoma), le otorgamos un diagnóstico (precoz) y comercializamos un medicamento o una nueva indicación para un medicamento ya en uso (un antidepresivo para la timidez o un ansiolítico para circunstancias adversas) o costosas pruebas de alta tecnología completamente innecesarias. Robert Whitaker, un estudioso del fenómeno del aumento de consumo de los de los psicofármacos en EE. UU., describe rigurosamente en su libro *Anatomía de una epidemia* la implicación de las instituciones sanitarias, profesionales

y de usuarios en la elaboración del relato que les ha convertido en el tratamiento psiquiátrico dominante tanto de trastornos mentales graves como de síntomas comunes de malestar psíquico, cuando no han servido para la creación de falsas enfermedades. Preguntándose, y ese es el origen de la investigación que da lugar al libro, ¿cómo es posible que los problemas mentales se hayan incrementado desde los años 90 del pasado siglo, cuando precisamente por esas fechas aparecen lo que se propaga por asociaciones científicas y autoridades sanitarias como el mejor, sino único, remedio para atenderlos: los nuevos, más eficientes y mucho más caros antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, estimulantes y ansiolíticos? (Whitaker, 2015 y Desviat, 2017).

La introducción de nuevos medicamentos, no necesariamente mejores, pero sí mucho más caros en los años ochenta del pasado siglo (antidepresivos como el publicitado Prozac, o antipsicóticos como la Risperidona), colonizan el discurso psiquiátrico. En EE. UU. durante los años setenta para ser jefe de servicio de un gran hospital era preciso ser psicoanalista, con la entrada a todos los niveles de la empresa farmacéutica, el perfil cambia a farmacobiologicista. Es paradigmático a este respecto el caso del que fuera jefe del Center for Studies of Schizophrenia del National Institute of Mental Health de EE. UU. entre 1968 y 1980, conocido por su orientación comunitaria y su proyecto alternativo Soteria, que se preciaba de un bajo uso de psicofármacos. Fue despedido, con el cambio hacia una orientación biofarmacológica producido en la psiquiatría norteamericana. En una carta donde justifica su renuncia a la American Psychiatric Association, dice que la razón principal de esa acción se debe a que en realidad está renunciando a la American Psychopharmacological Association (Mosher, 1998). El fármaco, respaldado por las Clasificaciones y Protocolos Internacionales de las Asociaciones científicas, se convierte en la bala de plata, en la panacea de los tratamientos del malestar, un atajo acorde con la cultura de la época, pragmática, intrascendente y apresurada. La psiquiatría se introduce en la gestión biopolítica de la vida por el resquicio de la insatisfacción, del vacío, la vida líquida que describe Bauman (Bauman, 2006), ofertando soluciones a los problemas de la existencia: del amor, el odio, el miedo, la tristeza, la timidez, la culpa.

Se medicaliza el sufrimiento social –desahucios, desempleo, pobreza– y se psiquiatriza el mal; así cuando leemos en la prensa un caso criminal, vandálico, y se atribuyen sus actos a un trastorno mental, experimentamos cierta tranquilidad al imputar como una cuestión médica lo que es un mal social. Convertido en una cuestión genética o de anómala personalidad, no existe la responsabilidad de la sociedad en la

que convivimos de una manera u otra, sostenemos. Al fin al cabo, no hace tanto que se vinculaba científicamente la criminalidad a la degeneración orgánica, hereditaria e inscrita en el cuerpo y en la mente.

En el año 2002 el *British Medical Journal* dedicó un número monográfico al tema de la medicalización con el objetivo explícito de “atraer la atención sobre la tendencia a clasificar como enfermedades los problemas de la gente”. (Moynihan, 2002) En él se publica los resultados de una votación sobre cuáles son en nuestro entorno las principales “no-enfermedades”, aquellos procesos cuya inclusión en el campo de actuación de la medicina resulta menos obvia (tabla 1) (Smith, 2002).

Top 20 de no-enfermedades en orden descendente de "no-enfermedades" (votación lectores BMJ)	
1. Envejecimiento	11. Parto
2. Trabajo	12. Alergia al siglo XXI
3. Aburrimiento	13. Jet lag
4. Bolsas en los ojos	14. Infelicidad
5. Ignorancia	15. Celulitis
6. Calvicie	16. Resaca
7. Pecas	17. Ansiedad por el tamaño del pene
8. Orejas grandes	18. Embarazo
9. Canas, pelos gris	19. Cabreo al volante
10. Fealdad	20. Soledad

Estas respuestas no se diferencian mucho de algunos de los “nuevos motivos de consulta” en atención primaria: las disputas familiares, los problemas estéticos, la negativa a envejecer (aunque parezca ciencia ficción hay proyectos de clonación o transferencia de nuestro “software” mental a un soporte cualquiera, en los que están involucradas personas poderosas y grandes cantidades de dinero (Peteiro Cartelle, 2010), los conflictos laborales, la soledad, la astenia y las post-vacaciones, entre otros. Ni tampoco de los síntomas de siempre que, sobredimensionados, han pasado a adquirir la categoría de enfermedad como la andropausia, la menopausia, la timidez o la fobia social. Sobreabundan cuestiones que no pueden y, en otros casos, no deben encontrar su respuesta en el sistema sanitario (del Cura, Isabel; López García Franco, 2008).

En cuanto a la prescripción de medicamentos las estimaciones del consumo en la población que acude a Atención Primaria en España varían entre un 20% -78%, con una media en torno al 30% (I, 1999; V. Ibáñez, 2013), superior a la prevalencia

esperada de trastornos que justifiquen su uso. El consumo de estos medicamentos es significativamente superior en las mujeres, en las amas de casa, en los desempleados y en las personas con bajo nivel educativo, con una clara relación inversa entre consumo de psicofármacos y nivel formativo- a mayor formación, menor consumo (del Cura, Isabel; López García Franco, 2008).

El escándalo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es ilustrativo de la fabricación de una enfermedad que ha multiplicado por cientos de miles la venta de estimulantes en pocos años para *tratar*, en la inmensa mayoría de los casos, comportamientos habituales en la infancia y adolescencia: distraerse fácilmente y olvidarse cosas con frecuencia; cambiar frecuentemente de actividad; soñar despiertos/fantasear demasiado, corretear mucho; tocar y jugar con todo lo que ven; decir comentarios inadecuados, pueden ser diagnosticados de TDH con el aval técnico Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIMH).

Estimaciones recogidas por Sami Timimi (Timimi, 2015) sugieren que aproximadamente el 10 % de los niños en las escuelas de Estados Unidos se les ha pautado o tienen pautado un estimulante. En el Reino Unido la prescripción ha aumentado de 6000 recetas al año en 1994 hasta más de 450.000 en 2004; un asombroso aumento del 7000 % en solo una década (Department of Health, 2005). El crecimiento es espectacular en los últimos años, pero viene de antiguo. En 1996 más del 6 % de los niños americanos en edad escolar tomaban medicación estimulante, habiendo niños de solo dos años a quienes se les recetaban estimulantes de manera creciente. En estudios de los años noventa del pasado siglo se observaba que en algunos colegios de los Estados Unidos cerca del 17% de los niños tomaban medicación estimulante.

La medicina se ha convertido en una gran generadora de riqueza, en cuanto la salud y el cuerpo se convierten en un objeto de consumo. En manos de la publicidad, es decir de los mercados, la medicina es una herramienta de normalización. Entendiendo por normal aquello que dictan los intereses del capital. Qué comer, qué vestir, qué tomar, como o con quien juntarnos. Las normas estandarizadas se multiplican al tiempo que avanza el proceso que Foucault denominó de “medicalización indefinida”. La medicina se impone al individuo, enfermo o no, como acto de autoridad, y ya no hay aspecto de la vida que quede fuera de su campo de actuación. El cuerpo se convierte en un espacio de intervención política. Este tiempo donde los poderes económico-políticos se inmiscuyen y regulan cada ámbito de nuestra vida, donde la vida es cualquier cosa menos algo espontáneo (Foucault, 2008).

En la medicalización de la sociedad juega un papel importante la empresa farmacéutica, no solo por su potencial financiero —el volumen de ingresos a nivel mundial supera el billón de dólares— y su capacidad de influencia en los Estados, sino también a la manera del *soma* (la droga con la que mantienen “contentos para no poner en peligro la estabilidad de la Metropolis” en la distopía de Aldous Huxley: “Una dictadura perfecta (...) sería una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo [de soma] y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre” (Huxley, *Un mundo feliz*, 1932). Los psicofármacos pueden permitir al ciudadano no plantearse el por qué de su malestar, no ahondar en las causas de su desasosiego, en su propia responsabilidad en inestabilidad.

La atención de la Salud Mental al sufrimiento psíquico

El fetichismo de la mercancía es el infierno, un sistema cerrado, global y totalitario que oculta el conflicto psíquico y social, que supone que quien produce la mercancía sea a su vez mercancía(Pereña, 2014: 65)

Los cambios las formas de gestión y en el pensar de la época van a repercutir en las respuestas técnicas de la comunidad psi profesional. Hay una vuelta a la enfermedad como contingencia, que reduce a lo biológico el malestar. El sujeto, su biografía, queda fuera. Protocolos y vademécums sustituyen a la clínica psicopatológica, al tiempo que se producen cambios profundos en la demanda de prestaciones, que no tienen por qué corresponder con las necesidades de la población. *El Libro Blanco de la Psiquiatría Francesa* (editado en 2003 por una federación que agrupa a las diferentes asociaciones de psiquiatría y salud mental de ese país) (Fédération Française de Psychiatrie, 2003) habla de una crisis que está cuestionando la misma supervivencia de la psiquiatría. Alerta del riesgo que supone la pérdida de su razón de ser ante el avance de una ideología que reduce la enfermedad mental a las ciencias moleculares del cerebro y a una demanda social protéica, medicalizada en busca de un remedio para todo. Manera de entender la práctica psiquiátrica que hace borrón y cuenta nueva con toda la historia de la psiquiatría, de la construcción psicopatológica de la enfermedad mental; una supuesta mirada científica en la que debemos desprendernos, por pre-científicas, de las obras de Pinel a Kraepelin, de Jaspers a Freud.

En el esfuerzo por reducir la psiquiatría al hecho físico, a la medicina del signo, tenemos marcadores biológicos, predictores de respuesta, spect cerebral, protocolos, escalas, meta-análisis randomizados y una propedéutica que ha convertido en datos toda la semiología psiquiátrica, estableciendo criterios diagnósticos en base a ítems agrupados binariamente (presencia/ausencia) o según intensidad o gravedad, escogidos por consenso o por votación de unos pocos que reducen la complejidad de la persona. Uno ya no delira con lo relacionado con su propia biografía. El contenido del delirio es “ruido” producido por la falla neuronal. No hay lenguaje, sujeto ni deseo. Solo cuerpo, enjambre químico neuronal. Mas, y he aquí la insustancialidad de la propuesta, es que los datos por sí solo, como bien saben los propios publicistas de los mercados, poco valen, hay que interpretarlos.

La estrategia es obvia, se trata de homogeneizar, en torno a unos cuantos criterios, una propedéutica y un vademécum común para diagnosticar y tratar a las personas aquejadas de problemas de salud mental, en beneficio de las empresas farmacológicas y tecnológicas. Un único sentido para el mundo. Un solo lenguaje, lema del Congreso Mundial de Psiquiatría celebrado en 1996, en una década que se quiso llamar en salud mental, década del cerebro. El trastorno mental sería el mismo en China que en Costa Rica, en Noruega que en Mali, lo que facilitaría el mismo tratamiento. Algo tan disparatado, premeditadamente ignorante de la antropología, de la idiosincrasia de los pueblos, que sería irrelevante sino fuera porque la credibilidad de un hecho o de una visión determinada de los hechos está condicionada al aval de universidades, centros de investigación y a publicaciones de gran impacto que suelen depender directa o indirectamente de la financiación de los mercados. En psiquiatría sabemos que el exponencial crecimiento de las publicaciones no se corresponde con un mejor conocimiento clínico o psicopatológico ni con mejoras terapéuticas; sino, en ocasiones, a todo lo contrario por las distorsiones a las que obliga la empresa farmacéutica. Lo que hace decir a autores como Richard Smith y Ian Roberts: que “la forma en que las revistas médicas publican los ensayos clínicos se ha convertido en una seria amenaza para la salud pública” (Smith and Roberts, 2006). Algo que no puede sorprender a ningún profesional de la medicina honesto.

Hay un control de la producción científica y de su difusión, de cómo llega a través de los medios a la gran mayoría de la población alimentando prejuicios en el imaginario colectivo. O los mensajes de absoluta banalidad de los libros de autoayuda, inoculando un buenismo y cuerdisimo de telenovela, que dificulta la construcción de una demanda que responda a la realidad de las necesidades. En una sociedad que además fomenta la fragmentación. En salud mental tenemos asociaciones de bipola-

res, esquizofrénicos, límites, trastornos de la conducta alimentaria, entre otras, que compiten en sus demandas, dejándolas a merced de aquellos *lobbies* societarios que tengan mayor capacidad de influencia en el poder político. Algo que puede pervertir la asignación de recursos tanto en la asistencia como en la investigación (véanse la proliferación de unidades de fibromialgia o trastornos de la conducta alimentaria en los países desarrollados, fagocitando recursos de la atención a la psicosis o las neurosis graves, a la vez que sitúa a las personas con problemas de salud mental en identidades definidas por diagnósticos que los etiquetan de por vida). A lo que debemos añadir como grave amenaza el marketing de las multinacionales farmacéuticas, financiando asociaciones de familiares e intentando comprar a sus líderes al igual que vienen haciendo con los psiquiatras.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), al que ya me he referido anteriormente, es buena prueba de esta alianza de la industria farmacéutica con las asociaciones de familiares y de su capacidad de presión sobre instancias gubernamentales. Una prueba de ello la tenemos en la Children and adults with attention/deficit/hiperactivity disorder (CHADD) una de las asociaciones más reconocidas a nivel mundial, que solo en 2002 recibió medio millón de dólares de las compañías farmacéuticas (Hay estudios que indican que por lo menos nueve entidades brasileñas de defensa de los derechos de usuarios de salud son financiadas por la empresa farmacéutica (Vasconcelos, 2010).

Entre la aceptación y la resistencia.

La acumulación irrefrenable descrita por Marx se aceleró con el fin del capitalismo industrial y no se sabe cual va a ser el acontecimiento que precipitará el choque final pronosticado por el autor de *El capital*, el momento en el que las fuerzas productivas entrarían en contradicción con las relaciones de producción, ni si ese acontecimiento tendrá lugar. El derrumbe disruptivo del fracasado socialismo de Estado en 1989 parecería haber agotado, como dice Enzo Traverso (Traverso, 2019), la trayectoria histórica del propio socialismo, de los movimientos que lucharon por cambiar el mundo con el principio de la igualdad como programa al reducir la historia toda del comunismo al hundimiento del totalitario régimen soviético. Una caída a la que se unía además los cambios profundos en las formas de producción que estaban acabando con el capitalismo industrial, en el que la izquierda forjó su identidad. Las grandes fábricas que concentraban a la clase obrera donde surgieron los sindicatos y los partidos políticos de izquierdas estaban siendo sustituidas por los nuevos modos de producción del

neoliberalismo, la deslocalización, la precarización, la fragmentación y robotización de la producción. El sistema de partidos políticos surgidos con la industrialización en la confrontación obreros empresarios perdió su esencia política, convirtiéndose en aparatos electorales.

En el caso de la derecha, los empresarios, sobre todo la empresa familiar y localizada territorialmente, fueron sustituidos por los lobbies financieros, sin perder la esencia de su identidad: la defensa de sus intereses de clase. En el caso de la izquierda revolucionaria, el resultado fue la pérdida de un escenario que constituía su campo de batalla y su conexión con la izquierda civil. Por otra parte, el fracaso del socialismo autoritario no supuso la construcción de un socialismo democrático, como en un principio algunos imaginaron, sino que la caída de la URSS supuso la rápida transición a regímenes de un capitalismo salvaje, con el nacionalismo como identidad y en muchas ocasiones, infiltrado por criminales mafias. Algunos de los logros sociales del socialismo de Estado, como la sanidad universal y el pleno empleo, se derrumbaron, lo que llevó en pocos años a la reducción de la esperanza de vida y la precariedad o la indigencia para buena parte de la población. En la otra orilla, un capitalismo sin trabas, desalojadas las narraciones y utopías del siglo que acababa, se afianzaba un presente que se quería sin pasado y sin futuro. No es el fin de la historia como preconizaba Fukuyama, sino el fin de la política. El mercado va a sustituirla, en un presentismo, donde no cabe la utopía, y por tanto, el futuro; ni cabe el pasado, perdida la memoria, en una historia huera, vacía de sentido.

Adentrados en el siglo presente, afianzada la revolución neoliberal, podría pensarse que efectivamente tal como se nos dice que no hay otro mundo posible, un afuera más allá de las normas que impone el mercado. No se vislumbra el fin del neoliberalismo, sino al contrario, su discurrir hacia formas cada vez más autoritarias y antidemocráticas con políticas que ponen el riesgo la existencia misma del planeta, por su explotación de la naturaleza y corrupción del medio ambiente, sin olvidar la locura armamentista; un mundo en las manos de unos impredecibles idiotas morales que pueden hacer posible antes el fin de la existencia humana que el fin del capitalismo.

Frente a todo este descalabro, hay gritos de resistencia, como decía al principio, voces que surgen en las grietas del sistema, como el amplio movimiento de ocupaciones de plazas al grito de no nos representan, somos el 99%, en plena crisis financiera, la primavera árabe o las movilizaciones contra la guerra de Irak; acontecimientos que nos hacen ver que ese fin de la historia y de la política todavía no ha llegado.

La indignación salta a la calle

Entre 2010 y 2011 la indignación ocupa las plazas de las ciudades de las dos orillas del mediterráneo. En España, varios grupos se hacen visibles en la red: precarios, activistas, jóvenes con estudios y sin trabajo, pensionistas, afectados por los desahucios (PAH), ATTAC. Un frente de rechazo, de hartazgo, de indignación ciudadana empieza a ocupar calles y plazas. La ocupación de plazas se hace estable en muchas ciudades de España, y se propaga a otras en Europa y EEUU. La Puerta del Sol de Madrid y La Plaza de Cataluña, se convierten en escaparates mundiales de la protesta, con nuevas formas de organización, autogestionada, en las que se mira el mundo. En Nueva York la ocupación llega a Wall Street. *We are the 99%* [Somos el 99%]. Hay movilizaciones en todo el mundo en apoyo a los movimientos de ocupación. Una protesta, luego diseminada por barrios periféricos, que sirvió para tomar conciencia de que otras formas de hacer política eran posibles, que la defensa de los derechos de la mayoría no debía quedar en manos de unas cúpulas políticas y sindicales esclerotizadas y en muchos casos corruptas, obedientes interesadas de los bancos y el capital financiero internacional. De ese uno por ciento en el mundo. Toma de conciencia y ensayo de otras formas de organización, que volvían la mirada a experiencias anteriores autonomistas (de nuevo, Rosa Luxemburgo y los espartaquistas, Gramsci, los consejos obreros). El Foro Social, Porto Alegre. Una democracia participativa. Asambleas ciudadanas en las que se votaron propuestas que reflejaban un espíritu renovador y esencialmente social. Entre otras, en España, la reivindicación de una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, el derecho constitucional a una vivienda digna; educación pública y laica; implantación de la Tasa Tobin y supresión de los paraísos fiscales; defensa del movimiento feminista (“la revolución será feminista o no será”, rezó una de las pancartas). Entre las declaraciones de los distintos movimientos de *okupación*, *Ocuppy London* hizo la que para mí es la crítica más frontal y rigurosa al sistema neoliberal, y lo hizo asumiendo la necesaria diversidad: “somos de todas las etnias, antecedentes, géneros, sexualidades, dis/capacidades y creencias” (Taberner Guasp, 2014). Estos movimientos marcan un camino cuando parecía que no existía un afuera del neoliberalismo. Dan sentido a una lucha de clases que se creía perdida. Las de una gran mayoría de la población frene a ese 1% y sus adláteres que nos explota. Otro mundo es posible, pero, el poder ha sabido hacernos creer que entraña el caos, inocularnos el miedo al cambio. A salir del nicho que nos explota pero dicen que nos da seguridad.

En *El hombre rebelde*, Camus escribe, “Yo me rebelo, luego somos”. La rebelión de uno supone un nosotros y un límite. En la experiencia de la absurdidad del mundo, escribe el autor de *El extranjero*, el sufrimiento es individual, a partir del momento de la rebelión, tiene conciencia de ser colectivo, es la experiencia de todos (p. 39). Y añade un límite donde la rebelión se alza: un esclavo que ha recibido órdenes toda su vida juzga de pronto inaceptable una nueva orden ¿Cuál es el contenido de ese “no”? Significa, por ejemplo, “las cosas han durado ya demasiado”, “hasta ahora sí; en adelante, no”. (p 39). Es Calibán, el esclavo negro, enfrentándose a Próspero, el amo, en *La tempestad* de Aimé Césaire: “Y me mentiste tanto,/me mentiste sobre el mundo,/ me mentiste sobre mí mismo,/ que finalmente me impusiste/una imagen de mí mismo:/un subdesarrollado, como decís vos,/un in-capaz,//es así como me obligaste a verme,/¡yo odio esa imagen! ¡Y es falsa!” (Aimé Césaire, 2011, p. 147). “En estas palabras, en ese descubrimiento, cuando la mirada del amo ya no fulmina al colonizado, se introduce una sacudida esencial en el mundo, toda la nueva y revolucionaria seguridad del colonizado se desprende de esto”, escribe Fanon en *Los condenados de la Tierra* (p. 40).

Más dentro de lo cotidiano, a la contra del mercado y la competencia, están los foros sociales, el cooperativismo popular, la economía solidaria o la democracia participativa que esbozan otro horizonte, un mundo afuera de las normas que imponen los mercados. Islas de utopía en un mundo distópico. Sin duda, no todos representan un riesgo para el neoliberalismo, y si quizás una válvula de seguridad para el sistema en cuanto ocupa a los antisistema, como lo hacen muchas ONG, aliviando de paso las insanias que produce el funcionamiento de los mercados. Eso sí, muestran, como lo hace el devenir de la historia, que en las sociedades e interacciones humanas, hay de todo. Hay egoísmo y generosidad, hay compasión y también depravación y violencias que espantan a la razón, pero igualmente hay solidaridades y humanidades que han permitido la supervivencia y el progreso de la sociedad. Una historia que sobre todo manifiesta la necesidad del prójimo, del otro. Una historia que nos hace ver que siempre ha habido amos y esclavos, pero también esclavos que se rebelaron contra los amos. Siempre hay un campo de posibilidades, por reducido que sea. Pues si hoy no podemos revertir el sistema, sí podemos ir construyendo experiencias alternativas, movimientos que demuestren las posibilidades de otra realidad, aprovechando las grietas, los márgenes y las propias irregularidades de los mercados. Al menos conseguiremos encontrar un sentido a nuestra experiencia de vida.

Incluso entre quienes defienden el sistema capitalista, se buscan alternativas. Frente a la filosofía del FMI, el Banco Mundial e incluso el Consejo Europeo, que condena a la dependencia, considerando que los sistemas de protección al desempleado

fomentan ciudadanos parásitos del Estado (Crespo, Eduardo; Serrano Pascual, 2016), los empresarios de Silicon Valley, conscientes de que sus avances tecnológicos ponen en peligro miles de puestos de trabajo, plantean la conveniencia de la renta básica para que todas las personas sigan disponiendo de capacidad adquisitiva. Es decir, para seguir manteniendo el sistema. Trabajos de generación de renta, y las distintas modalidades de economía solidaria, que se veían como procedimientos de los pobres de los países periféricos, que se están incorporando al llamado primer mundo, en cuanto como hemos expuesto anteriormente, la precarización ya no es un fenómeno marginal que puede ser arrinconado en los espacios socio-geográficos de la periferia (Lorey, 2016). Experiencias comunitarias de generación de renta, promovidas fundamentalmente por grupos de mujeres en los países periféricos, los micro créditos en la India, las mini-empresas solidarias con el reciclaje de retales u otras sobras de la gran industria en América Latina, y otros muchos proyectos autosostenibles en el marco de la economía solidaria, que han servido para sobrevivir a la extrema pobreza a poblaciones desfavorecidas, al tiempo que para dignificar a grupos vulnerables, discriminados en el empleo por su género, raza o etnia, o discapacidad.

Como consultor europeo en programas de salud mental he podido ver al entrar en contacto con estas experiencias en países periféricos que buena parte del trabajo comunitario está hecho, que al contrario que en países altamente desarrollados, existen vínculos, redes formales e informales que han permitido a buena parte de estas poblaciones sobrevivir a situaciones extremas, catástrofes naturales y violencias política. Se muestra aquí el peso de la política en la gestión del malestar, si entendemos la política como la participación y autogestión de la necesidad, la organización de lo común por las propias comunidades. Es en esa riqueza donde podemos empezar a pensar que otra Política es posible, rescatando el ideario de los movimientos de autonomía de los trabajadores, marginados por la institucionalización burocrático-profesional de los partidos hegemónicos en la derecha y en la izquierda. Como también se puede anudar el conocimiento tecnológico médico-psicológico-social, con frecuencia atrapado en guías y protocolos, muchas veces consensos hechos en laboratorios alejados de la asistencia, forjando una nueva praxis en el modelo de la salud mental colectiva. Por más que nos obligue a redefinir lo que hoy llamamos comunitario; hay que empezar a trabajar con conceptos que sean capaces de contener a la multiplicidad social, que pueda actuar en común conservando las diferencias, en el horizonte un mundo, tal como plantea Marc Augé en *La communauté illusoire* (2010) donde todas las fronteras sean reconocidas, respetadas y franqueables. Sin falsas identidades societarias.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, el movimiento del colectivo de los sufridores psíquicos, de los diagnosticados como se suelen llamar, eludiendo al estigma que suponen las etiquetas psiquiátrico-psicológicas, que están transformado el asociacionismo de familiares y usuarios que reclamaba mejores servicios, en un movimiento que agrupa colectivos de activistas en salud mental que exigen por una parte su incorporación como expertos de primera persona, expertos en su dolencia, en el proceso terapéutico y por otra parte la abolición de todas las medidas restrictivas, como las sujeciones mecánicas y la medicación contra la voluntad. En sus reivindicaciones, cada vez con más presencia pública, están la conquista de los derechos civiles y la ciudadanía plena para las personas con problemas de salud mental. Movimientos que enlazan con otros activismos como los LGTB y otras minorías, y exigen el respeto a la diferencia. Y está la exigencia de una psiquiatría, de una salud mental otra, que parta de la dignidad de la persona.

Planteaba en *Cohabitar la diferencia* (Desviat, 2020) que la Reforma Psiquiátrica, cuyo primer objetivo fue sacar a los pacientes mentales de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios, y situar servicios de atención en la comunidad, creó en su devenir nuevas situaciones, nuevos sujetos, nuevos sujetos de derechos. La locura se hizo visible y con ella la intolerancia, el estigma, la exclusión de la diferencia. Hizo ver que el proceso desinstitucionalizador atravesaba toda la formación social, desvelando prejuicios y representaciones sociales que iban mucho más allá del trastorno psíquico, una reordenación asistencial, y que situaban a los alienados juntos con otros de la exclusión social. Destapó la parte oculta en nuestra sociedad por la dictadura de la Razón, de la podredumbre de la razón en palabras de Antonin Artaud, en la que los locos son las víctimas por excelencia (Artaud, 1959), un imaginario colectivo poblado de los mitos, las leyendas y los sueños que nos constituyen. Nos acerca a lo que en verdad teje el síntoma singular y social, pues el síntoma se forja en la historia colectiva, en los deseos y miedos ubicados en la trastienda de nuestra cultura. Un proceso desinstitucionalizador que enfrenta a la Reforma de la Salud Mental con la miseria social y subjetiva, en un escenario en el que no se puede ser un simple observador un impotente teórico de la marginación, la alienación y el sufrimiento. Donde el hacer comunitario hace del profesional un militante de la resistencia al orden social que instituye la enajenación en la miseria, donde la acción terapéutica, necesariamente experta en los entresijos técnicos de la terapia y el cuidado, se colorea políticamente.

Este estar en la comunidad por el que se define la salud mental comunitaria supone considerar a la población de las áreas de referencia no solo como potenciales usuarias de los servicios, implica adentrarse en los deseos y frustraciones de sus barrios,

hacerles cómplices de la gestión de su malestar. El fracaso de la medicina social es semejante al de la política gobernante que padecemos, y la razón de este fracaso está en la ausencia de comunidad, de los intereses, anhelos, frustraciones y ensueños, de las poblaciones que se atiende o se representa. Es frecuente la existencia de políticos que no han estado nunca en las circunscripciones que representan más allá de los días de la campaña electoral y es igualmente frecuente planificaciones, programas y actividad profesional de salud mental, sin haber pisado el barro o las aceras de los barrios que comunitariamente se atiende.

En salud y más concretamente en salud mental hablamos de participación, de la necesidad de contar con los ciudadanos, con las comunidades y los propios usuarios a la hora de la planificación y programación, más sin embargo, la participación se reduce, si existe, a encuentro a nivel directivo con sindicatos para temas laborales y el trabajo comunitario a situar centros de consulta en la comunidad. Luego puede extrañarnos que la población no defienda los modelos que más podrán beneficiarles, de confundir las necesidades reales en sus demandas, de dejarse llevar por engaños electorales que propician la privatización como modelo sanitario, en contra de una salud colectiva que puedan hacer suya.

Concluyendo. El hecho es que hoy, como nunca hasta ahora en la historia parece que no hay un afuera del sistema neoliberal, donde el fascismo hace presente el planteamiento de George Kennan, en un informe secreto, hoy accesible, cuando aconsejaba que había “que dejar de hablar de objetivos vagos e irreales, como los derechos humanos, el aumento de los niveles de vida y la democratización, y operar con genuinos conceptos fuerza que no estuviesen entorpecidos por eslóganes idealistas sobre altruismo y beneficencia universal, aunque estos eslóganes queden bien, y de hecho sean obligatorios, en el discurso político” (Chomsky, 2000). Una situación que puede conducirnos al “esto es lo que hay” y “al todo vale”. Un esto es lo que hay y en esta situación todo vale al que se suma la desgana por falta de perspectivas de los profesionales, el queme o la renuncia o la aceptación de la derrota. Un es lo que hay y todo vale que nos lleva a una permanente insensibilidad, nos lleva a eludir nuestra parte de responsabilidad, nuestra ciega complicidad en el transcurrir de los hechos, nuestra parte de culpa. Algo que, según Cornelius Castoriadis, nos ha convertido en cínicos profesional, social y políticamente, pues encerrados en un nosotros, en un mundo personal privatizado, hemos perdido la capacidad de actuar críticamente (Castoriadis, 2011).

Quizás lo más frecuente, como escribía en el libro antes citado (Desviat, 2020) es el considerar que lo que sucede es lo natural de la sociedad humana, que ha sido siempre, la iniquidad, la desigualdad, la competitividad canalla y la desatención de

los más frágiles, asumiendo las funciones cosméticas y de control social que impone el orden social; en el mejor de los casos cobijando la conciencia profesional y cívica en preservar ciertas cuotas de dignidad, calidad y eficacia. Pero queda otra postura, una opción partisana, militante que trata de mantener una “clínica” de la resistencia, buscando aliados en los usuarios, familiares y ciudadanos para conseguir cambios en la asistencia a contracorriente y profundizar las grietas del sistema, en pos de un horizonte donde sea posible el cuidado de la salud mental, una sociedad de bienestar.

Luchar por otro futuro desde nuestros oficios de la salud da sentido y dignidad a nuestro trabajo, nos arma con algo más que las meras herramientas tecno-científicas de las especialidades sanitarias. El cuidado de sí, el cuidado del cuidador es imprescindible cuando uno se enfrenta con el sufrimiento psíquico, la miseria y la exclusión. Y en este empeño, está el conocimiento, pero también la conciencia de la eticidad que da razón de ser a la labor comprometida socialmente. Nos permite, cuando menos, salir de la mediocridad que crea la servidumbre. Porque la cuestión está no solo, como dice Francisco Pereña, en el desamparo en la que quedan las personas con problemas de salud, sino en la servidumbre a la que obliga un mundo privatizado. Una fatal servidumbre por miedo al despido o a no prosperar que obliga al trapicheo y crea “un clima de mediocridad y humillación que hará de todo desacuerdo un conflicto de poder (Pereña F, 2008). Ahora la tan traída evidencia será el credo que establezca el mercado.

El fracaso del socialismo autoritario ha dejado el mundo bajo el imperio del capitalismo, un mundo donde se ha borrado la historia de las luchas revolucionarias. La historia del comunismo queda reducida a su dimensión totalitaria, tachadas del imaginario de la izquierda las luchas por un comunismo democrático, las experiencias de autonomía y autogestión revolucionarias. Sin embargo, ya antes de la caída del Muro de Berlín en 1989, el totalitarismo de la unión soviética obligó a repensar el estado socialista y la misma revolución. No podemos saber, como escribió Rosa Luxemburgo, qué nos deparará el futuro. El socialismo es tan posible como la caída en la barbarie. Pero sí estamos obligados, desde la izquierda, a desear y diseñar un socialismo democrático que parta de la igualdad como eje central de su discurso y tarea; una igualdad que trascienda la explotación en una sociedad de iguales sin jerarquías de clase ni de género, y dónde se reconozcan y convivan todas las diferencias. Inmersos en la distopía del neocapitalismo y el auge en su seno de un nuevo capitalfascismo, puede parecer una descomunal utopía, pero podemos consolarnos con el hecho de que las revoluciones, como bien dice Enzo Traverso, nunca son “puntuales”: llegan cuando nadie las espera (Traverso, 2019, p. 55).

Posdata (acerca de la Covid-19, Madrid, 9 de junio 2020)

Si había alguna duda del efecto pernicioso de la política neoliberal de las últimas décadas, y de su brutal embestida austericida tras la Gran Recesión, sobre la salud y el bienestar humano, la pandemia de la Covid-19, ha dejado al descubierto el precio que la mayoría de la población está pagando y el que deberá pagar tras la pandemia. Ha dejado al descubierto la fragilidad de los servicios públicos sanitarios y sociales, la tremenda precariedad de la protección sociosanitaria de los Estados, que dejan la salud y el bienestar de la humanidad a la lógica del beneficio empresarial, que actúa con esa frialdad burguesa de la que hablara Adorno, que no contempla la compasión y pervierte el lazo social con la competencia y el consumo; e intenta ocultar, buscando unos u otros enemigos, la tremenda desigualdad en las posibilidades de vida. Ha dejado al descubierto, en suma, la necedad política y desalmada de los líderes de esa nueva extrema derecha, en sus campañas contra las medidas proteccionistas, mamporreros de capital especulativo; y ha desnudado la impudicia de quienes precarizan a buena parte de la humanidad y degradan la habitabilidad del planeta en pro de una desmedida acumulación de capital.

La Covid-19 ha mostrado claramente, una vez más, que por muy universales que sean las catástrofes y las pandemias, se sufre, se enferma y se muere según la clase social.

Referencias bibliográficas

AKIN, John (1987). *Financing Health Services in Developing Countries. An agenda for Reform 1997*. Washington, DC: World Bank.

ARTAUD, Antonin (1959). *Carta a los poderes*. Buenos Aires: Mundo Nuevo.

AUGE, Marc (2010). *La Communauté illusoire*. Paris: Payot & Rivages.

BANCO MUNDIAL.(1993) *Informe sobre el desarrollo mundial de 1993. Invertir en salud*.

BAUMAN, Zigmunt (2006). *Vida líquida*. Barcelona: Paidós.

BLYTH, Mark (2014). *Austeridad. Una idea peligrosa*. Barcelona: Cátedra.

CAMUS, Albert (1996). *El hombre rebelde*. Madrid: Alianza.

CÉSAIRE, Aimé (2011). *La tempestad*. Buenos Aires: El 8vo.loco.

CHOMSKY, Noam (2000). *El beneficio es lo que cuenta*. Barcelona: Crítica.

- DEL CURA, Isabel; LÓPEZ GARCÍA FRANCO, Alberto (2008). La medicalización de la vida: una mirada desde la atención primaria. *Átopos*, Salud Mental, Comunidad y Cultura, 7, 4–12.
- DESVIAT, Manuel; BLEICHER, Tais (2018). Os mercados e atenção à saúde mental. Resistência ou luta? Novos horizontes para velhos sonhos. In I. Galimberti, PA; Mont'Alv; Napoleao Albuquerque (Ed.), *Sociopolítica da saúde. Desafios e oportunidades*. Sobral: Edições UVA.
- DESVIAT, Manuel (2020). *Cohabitar la diferencia*. 2ªed. Madrid: Síntesis.
- DESVIAT, Manuel (2017). Anatomia de uma epidemia (solapas). In *Anatomia de uma epidemia. Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas eo Aumento Asobroso da Doença Mental*. Rio de Janeiro: Fiocruz.
- FOUCAULT, Michel (2008). Nascimento da Biopolítica. In *Filosofia*. Rio de Janeiro: Martins.
- GARCÉS, Marina (2017). *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Anagrama.
- HUERTAS, Rafael (2013). Prólogo. In A Maestro (Ed.), *Crisis capitalista y privatización de la sanidad*. Madrid: Cisma.
- DE LA MATA, Iván (1999). El mito de la gestión privada: el modelo catalán de salud mental. *Psiquiatría Pública*, pp. 94–101.
- HUXLEY, Aldous (1980). *Un mundo feliz*. Barcelona: Plaza & Janes.
- IBÁÑEZ, Jesús (1997). *A contracorriente*. Madrid: Fundamentos.
- IBÁÑEZ Vicente (2013). *Alternativas y modelos asistenciales desmedicalizadores*. En Ortiz Lobo, A. *Hacia una psiquiatría crítica*. Madrid: G5.
- JORDANA LLUCH, Ester (2018). Gobierno biopolítico del malestar e infraestructuras de cuidado. In A. Solé Blach, J; Pié Balaguer (Ed.), *Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad* (pp. 73–108). Barcelona: Icaria Antrazyt.
- LAMATA, Fernando; OÑORBE, Manuel (2014). *Crisis (esta crisis) y Salud (nuestra salud)*. Retrieved from <http://www.bubok.es/libros/235021/Crisis-esta-crisis-y-Salud-nuestra-salud>
- LOFF, Manuel (2019). El bolsonarismo es el neofascismo adaptado al Brasil del siglo XXI”,. Retrieved from diario.es website: diario.es. 24/08/2019-2:10]
- MADRID PÉREZ, Antonio (2018). Vulneración y vulnerabilidad: dos términos para pensar hoy la gestión socio-política del sufrimiento. In A. Solé Blanch, Jordi; pié Balaguer (Ed.),

- Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad*. Barcelona.
- MAESTRO, Angeles (2013). *Crisis capitalista y privatización de la sanidad*. Madrid: CismaEnsayo.
- Maestro, Angeles (2017). El grito: capitalismo y enfermedad mental. In I. Maestro, A; González Duro, E; Fernández Liria, A; De la Mata (Ed.), *Salud mental y capitalismo*. Madrid: CismaEnsayo.
- MOSHER, Loren (1998). Letter or Resignation from the Americam Psychiatric Association. Retrieved from disponible en web de Soteria website: <http://moshersoteria.com/articles/resignation-from-apa/> consultado en agosto 2018
- MOYNIHAN, Ray (2002). Too much medicine? *BMJ*, 324, 859–860.
- PEREÑA, Francisco (2014). La religión capitalista y el infirno. *Átopos.Salud Mental, Comunidad y Cultura*, 15, 64–84.
- PETEIRO CARTELLE, Javier (2010). *El autoritarismo científico*. Málaga: Ediciones Miguel Gómez.
- PIKETTY, Thomas (2015). *El capital en el siglo XXI*. Barcelona: RBA.
- SENNET, Richard (2000). *La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*. Barcelona: Anagrama.
- SMITH, Richard (2002). in search of non disease. *BMJ*, 883–885.
- TABERNER GUASP, José (2014). *Movimientos sociales en la era global del precariado*. Salamanca: Fundación Emmanuel Mounier.
- TIMIMI, Sami (2015). La McDonaldización de la infancia: La Salud Mental Infantil en las culturas neoliberales. *Atopos*, 16, 15–34.
- TRAVERSO, Enzo (2019). *Melancolía de izquierda*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- VAROUFAKIS, Yanis (2013). *El minotauro global* (2a). Madrid: Capitán Swing.
- VASCONCELOS, Eduardo (2010). *Desafios políticos da reforma psiquiátrica brasileira*. Sao Paulo: Hucitec.
- VELÁSQUEZ, Germán (2016). Una organización a la deriva ¿Qué remedios para la OMS? *Le Monde Diplomatique En Español*, noviembre, 17.
- WHITAKER, Robert (2015). *Anatomía de una epidemia*. Madrid: Capitan Swing.

SIMÓN RODRÍGUEZ Y PAULO FREIRE: ENTRE EL
AMOR Y EL ENTUSIASMO EN TIEMPOS HOSTILES A
UNA EDUCACIÓN POPULAR

Maximiliano Durán

Universidad de Buenos Aires | maximiliano1771@gmail.com

Walter Omar Kohan

Universidad del Estado de Río de Janeiro | wokohan@gmail.com

Introducción

Las nuevas derechas no están para nada desatentas al campo educacional. Saben bien que allí se juega buena parte de la suerte de un proyecto político. Por lo tanto, han elegido sus enemigos, a quienes hostilizar, contra quienes librar sus batallas. En Venezuela, Simón Rodríguez. En Brasil, Paulo Freire. El caso brasileño es notable. Desde las marchas de protesta contra el gobierno de Dilma Rousseff en el 2013 los manifestantes cargan banderas con la inscripción “Basta de adoctrinamiento marxista. Basta de Paulo Freire”. Un año antes, en 2012, la presidente Dilma había promulgado una ley del Congreso Federal que otorgaba a Paulo Freire el título de “Patrono de la Educación Brasileña”. Desde entonces, grupos conservadores como el *Movimento Brasil Livre* (MBL) y el Revoltados Online (RO) comenzaron a acusar a Paulo Freire como el responsable de todos los males de la educación brasileña, aun cuando esa educación refleje muy tíbiamente algún que otro aspecto de las enseñanzas del gran maestro pernambucano y él estaría de acuerdo con muchas de esas críticas. Con el Movimiento “Escuela Sin Partido” la crítica se agudiza: Paulo Freire es acusado de causar el vaciamiento del papel del profesor y la reunión entre política y educación que, para ese movimiento debería ser “apolítica”. En el fondo, lo que atacan es la función política de la escuela pública, que ella se convierta en espacio para discutir las cuestiones éticas y políticas que interesan a una sociedad; lo que defienden, al contrario, es el fortalecimiento de instituciones como la familia y la iglesia. Haciéndose eco de esos movimientos, en el programa de educación del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se afirma la necesidad de cambiar el método de gestión, modernizar el contenido o que incluye la alfabetización “expurgando la ideología de Paulo Freire” (Bolsonaro, 2018: 46).

Lo que está siendo atacado, en otras palabras, es la educación popular, del pueblo, un tema central en América Latina a lo largo de su historia. La cuestión viene de longa data. Luego de las guerras de emancipación de la corona española, políticos e intelectuales asumen la responsabilidad de pensar la educación de las masas populares en el nuevo contexto político. La relación entre el sistema político a implementar y la educación es motivo de acaloradas disputas teóricas y políticas. Bolívar, San Martín, Artigas y Santander, entre otros, dedican diversos textos públicos y privados a la educación del pueblo en el interior del sistema republicano. Independientemente de las singularidades y matices de cada propuesta todas ellas se proponen responder a un mismo interrogante: ¿qué tipo de educación es la que debe recibir el pueblo americano? ¿Una educación emancipatoria, igualitaria y plena o, por el contrario, continuar con una educación jerarquizada, segmentada y conservadora de los lugares de los distintos grupos sociales?

Pensamos que la segunda opción se impone, con puntuales discontinuidades, a lo largo de nuestra historia. Desde la colonia hasta nuestros días la mayoría de los proyectos estatales relativos a la educación de este sector tienen como objetivo principal, en los distintos países de América Latina, el disciplinamiento de las masas a los sectores oligárquicos que impulsaban dichos proyectos. Claro que el juicio es exageradamente pretencioso y generalizado. Hay notables excepciones que merecerían un estudio específico, separado: la educación de la revolución cubana, del estado Plurinacional Boliviano, entre otras. Sin embargo, también en los países donde hay un sistema predominantemente disciplinador, esta presunta linealidad sólo expresa una versión limitada y parcial de nuestra historia. Existieron y existen otras formas de pensar y practicar la educación del pueblo. Ejemplos históricos de prácticas educacionales emancipadoras. Autores como Paulo Freire y Simón Rodríguez constituyen rupturas potentes y radicales de esta continuidad. El mismo Freire fue propulsor de experiencias de educación emancipadoras en Brasil y Nicaragua, además de varios países africanos. En Angicos, Rio Grande do Norte, comenzó un proyecto de alfabetización popular que luego sería elevado Plan Nacional de Alfabetización hasta que el Golpe militar de 1964 lo canceló y obligó a Paulo Freire a exiliarse. Del mismo modo, el Colegio de Carpintería de Huérfanos y Muchachos de Carpintería creado por S. Rodríguez en 1826 es otro ejemplo de una institución que por los meses en que permitieron su existencia en una escuela de América el principio fundamental era la educación para la soberanía del pueblo.

No se trata de proyectos aislados. A lo largo de sus obras, tanto Freire cuanto Rodríguez presentan reiteradamente afirmaciones justificadas relativas a la autoconstitución colectiva del pueblo, la declaración de una igualdad indiscriminada y de la autodeterminación vital. Para ellos se trata de una educación en la que se declara la igualdad de todos los que intervienen en ella y la capacidad colectiva e individual para construir y hacerse cargo de sus propias vidas. Educación popular es el nombre con el que ellos declaran la posibilidad de otra forma de vida, a partir de la declaración de la igualdad como principio

En este trabajo nos proponemos pensar en torno a dos afectos vinculados a este tipo de educación: el entusiasmo y el amor. En función del análisis de estos conceptos intentamos sostener que una educación popular se sostiene con amor y entusiasmo. Para lograr nuestros objetivos dividiremos el trabajo en tres partes. En la primera de ellas realizamos un breve recorrido por el concepto de educación popular. En el transcurso de esta primera sección del texto intentamos mostrar los orígenes históricos de una educación del pueblo en América. Nótese que en la oración anterior escribimos “una

educación popular” y no “educación popular”. Esto se debe a nuestra decisión de hacer referencia a un tipo singular de educación del pueblo entre muchas otras posibilidades. De acuerdo con nuestro punto de vista es posible rastrear una línea común en esta forma singular de educación del pueblo que va desde la revolución de Haití a la obra de Freire. Esta línea de continuidad se apoya en los conceptos de ruptura, igualdad y vida.

La segunda parte del texto se propone pensar el vínculo entre educación popular, entusiasmo y amor. Para lograr nuestro propósito nos concentramos en las figuras de Simón Rodríguez y Paulo Freire. Apoyados en los textos y biografías de ambos autores diremos que estos afectos son elementos constitutivos de una educación popular. En otras palabras, afirmamos que una educación popular es indisociable del amor y el entusiasmo. Esto significaría que, sin amor ni entusiasmo, la educación popular no puede existir.

Por último, en las consideraciones finales, dedicamos una reflexión en torno a la potencia de sostener hoy en día una educación popular con amor y entusiasmo.

Educación popular en América

La gestión de la pobreza por parte de las autoridades es un tema que desvela a políticos e intelectuales desde los inicios de la modernidad europea. Geremek aborda este tema en detalle y profundidad en *La piedad y la Horca* (1989). De acuerdo con el autor, desde la baja edad media en adelante las masas populares constituyen un peligro latente al orden y la autoridad de las distintas villas y ciudades de los reinos europeos. El crecimiento de la población más allá de las posibilidades de manutención regional, situaciones de carestía, guerra o enfermedad conducían frecuentemente a estallidos populares que ponían en riesgo la vida y propiedad de los sectores acomodados. En este contexto los diversos reinos llevan adelante una serie de prácticas destinadas a la prevención de estos levantamientos. Se escriben y publican numerosos tratados sobre la pobreza y su lugar en la sociedad, se resignifican instituciones de amparo y formación y se sancionan políticas que tienen como objeto central a los sectores subalternos de la sociedad.

En el caso particular del Imperio español, la salida de los Habsburgo deja como resultado un imperio administrativamente desorganizado, descentralizado, atrasado económicamente y con una actividad productiva obsoleta para los intereses de la corona. A través de sus ministros, ilustrados los borbones ponen en marcha una serie de medidas para revertir el estado de cosas heredado. En este contexto la educación es concebida como la base institucional y motor del cambio deseado (Sánchez Blanco, 2007). Autores como Ward (1779), Campomanes (1774), y Rubio (1788), entre

otros, sostienen que el cambio reside en la transformación de la mano de obra ociosa del imperio en trabajadores productivos y obedientes de sus autoridades naturales. El Marqués de Ensenada, en sus *Representaciones*, expone con claridad este punto ante el rey Fernando VI (Ozanam, 1980). Allí el Marqués afirma que es imposible lograr la felicidad de la sociedad, como así también obtener mayor recaudación del erario, si no se atiende a la racionalización de los recursos, la eliminación de la ociosidad y la promoción del trabajo en el imperio (67-124). Para los funcionarios españoles la pobreza y atraso económico del imperio es un problema secular que debe ser abordado y solucionado por medio de un proyecto económico-formativo. Con este objetivo en mente se publican obras sobre educación (Campomanes, Cabarrús, Rubio), se promueve la formación y desarrollo de instituciones educativas de diverso cuño y alcance (Sociedades Económicas, Escuelas reales, movimiento de San Ildefonso) y se llevan adelante una serie de medidas políticas específicas para atender a la formación de los sectores bajos de la sociedad (secularización de los hospicios reales, ley de encierro, etc.).

La descripción y análisis de las diversas medidas llevadas adelante para tratar el tema de la administración y formación de los sectores populares en el imperio español excede los límites de este trabajo. Sin embargo, haremos una muy breve mención a una de ellas: la secularización de los hospicios. La importancia de esta medida, para nosotros, consiste en que dicha medida constituyó uno de los pasos más significativos para la educación de los sectores más bajos de la sociedad. Durante la edad media, los hospicios son concebidos como instituciones de amparo y refugio de los más necesitados. Generalmente se encuentran vinculados con algún hospital y son administrados por diversas órdenes religiosas (Gómez Trigo, 2002). El concilio de Orleans establece que una cuarta parte de los ingresos de la iglesia debe destinarse para la manutención de un conjunto de instituciones, entre las cuales figuran los hospicios. A partir del concilio de Trento (1545-1563) los hospicios, junto con los hospitales quedan dentro de la jurisdicción del Ordinario Eclesiástico bajo la autoridad del obispo (Martínez Domínguez, 2009). Con la llegada al trono de Carlos III se toma la decisión de secularizar los hospicios del reino con el objetivo de transformar estos espacios en casas de formación y educación de los marginados y desvalidos. Campomanes en 1774 escribe: “un hospicio debe ser la escuela de los expósitos y los mendigos” (Campomanes, 1774: 39).

De acuerdo con el trabajo clásico de Mervall (1979) los hospicios son concebidos como una forma de institucionalizar la atención de los vagabundos y mendigos dentro de una pormenorizada organización. Tal como sostiene el autor, estas instituciones eran concebidas fundamentalmente como un ámbito de reeducación y transformación del ocioso en mano de obra productiva (1979). A partir del siglo de las luces, estas instancias

se constituyen en el elemento intermedio entre las medidas represivas de carácter penal y las medidas asistenciales, caritativas de carácter social. Los hospicios son el depósito del último escalafón social. Allí se recogen, vagos, niños expósitos, mendigos, ancianos desamparados y niños díscolos y alborotadores (Martínez Domínguez, 2009).

En el caso del continente americano la educación de los sectores populares ocupa un lugar privilegiado. Autores como Francisco Caldas (1768), Moreno y Escaldón (1774), Cabello y Góngora, Manuel de Cuero (1787) y Simón Rodríguez (1794), entre otros, hacen de la educación de los pobres el motivo principal de sus reflexiones y escritos (García Sánchez, 2005). De la misma forma que la metrópolis, las ciudades más importantes de la colonia crean hospicios para atender y educar a los más necesitados. En el siglo XIX las repúblicas independientes piensan inicialmente la educación de los sectores populares sobre la base de las mismas instituciones que dieron acogida y formación a estos sectores durante la colonia. Se desarrollan en los distintos países americanos diversos proyectos educativos sustentados en el Método de Enseñanza Mutua de Lancaster. Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay vieron con buenos ojos la formación de los sectores populares por medio del sistema lancasteriano (Weinberg, 1995).

Como puede observarse, la educación del pueblo es problema de larga data. Más allá de las diferencias y singularidades que pueden establecerse entre las distintas etapas, proyectos y políticas, pensamos que es posible establecer algunas regularidades en relación al pueblo y su educación. En primer lugar, la educación de los sectores populares es pensada siempre en relación a la utilidad de los mismos para la sociedad. Sólo cuando este grupo representa un problema o una oportunidad para los sectores acomodados se dirige la mirada a su educación. En segundo lugar, se trata siempre de una educación destinada para un sector considerado inferior. En todos los proyectos educativos consultados, el pueblo es concebido como un sector diferenciado en el interior de una escala jerárquica. En virtud de ello, son otros sectores los que piensan y planifican esa educación. Los sectores hegemónicos son aquellos que, a lo largo de la historia han pensado, el sentido, la forma y los medios de educar al pueblo. En función de ello podríamos decir que la educación de los sectores subalternos de la sociedad suele ser pensada por otros y para los intereses de otros, a partir de la afirmación de la desigualdad y las jerarquías de aquellos que detentan el poder.

Esta forma de entender la educación del pueblo es la que se impone a lo largo de la historia. Se trata de la manera hegemónica con la que los poderosos intentaron e intentan manipular a una porción de la sociedad de acuerdo a sus propios fines e intereses. Con todo, existe otra forma de concebir la educación del pueblo que atraviesa el

devenir de los tiempos. Esa forma tiene una raíz histórica, contextualizada en tiempo y espacio y establece una suerte de huella temporal que puede ser rastreada desde la revolución de Haití hasta nuestros días. Mencionaremos tres características de esta forma de educación: a) La educación del pueblo es el producto de una ruptura, b) ella parte de la afirmación de la igualdad como principio de acción c) tiene como objetivo la creación de una nueva vida para todos los que intervienen en ella.

La aparición de esta forma de educar al pueblo tiene sus orígenes en Haití durante los primeros años del levantamiento de esclavos. La referencia histórica a la ceremonia de Bios de Cayman es un dato que suele considerarse como el inicio de la revolución de los esclavos (James, 2003). Esta ceremonia fue conducida por Dutty Boukman, tal vez el primer nombre propio que aparece en la rebelión. La mayoría de los estudios dedicados al tema suele coincidir en que este hombre era un sacerdote vudú. No obstante ello, Sylvine Diouf (1998) sugiere que el nombre de este personaje es la deformación de una palabra inglesa que constituiría su apodo. De acuerdo con esta autora, Boukman es una derivación de la palabra “bookman” hombre de libros. La autora se hace eco de una leyenda según la cual este hombre habría sido un esclavo de plantaciones jamaquinas vendido a los franceses luego de que fuera descubierto intentando enseñar a leer a los esclavos.

La potencia de esta imagen, más allá de su veracidad histórica, consiste en la caracterización que se puede realizar del gesto educativo de Dutty Boukman. Pareciera existir un vínculo entre la educación y el deseo de emancipación. La educación es afirmada como posibilitadora o herramienta en pos de la ruptura de un determinado estado de cosas. De acuerdo con Diouf, Dutty Boukman es un maestro para el que la enseñanza encierra un posible camino de emancipación, una ruptura, aunque sólo sea simbólica, de la esclavitud. Esta imagen nos muestra que existe un tipo de educación en la que, alguien que, en principio, no tiene que ocupar el lugar de enseñante le enseña a otros a los que también no hay que enseña. Un esclavo le enseña a otro esclavo para poder dejar la esclavitud y constituirse en sujetos de otro orden.

Los otros rasgos que caracterizan esta manera de concebir la educación del pueblo son la afirmación de la igualdad como un principio de acción y el compromiso con una nueva vida. Sobre este punto la misma Revolución de Haití es sumamente fértil en imágenes. Cyril James hace referencia a una situación entre los esclavos que nos permite observar ambas dimensiones (James 2003). Avanzada la revolución, el autor cuenta que los hombres de Toussaint l'Ouverture tenían una práctica muy singular cada vez que se disponían a contestar un bando de las tropas francesas. A la hora de enviar una carta al enemigo solían realizar una asamblea en la que cada uno de ellos

aportaba sus conocimientos en relación al francés. Colectivamente decidían qué palabras francesas eran las que mejor se adaptaban a lo que ellos querían responder. Esta práctica, sostiene James, obedecía a que los miembros del ejército de hombres liberados no hablaban francés, ni compartían una lengua común. La mayoría de ellos provenía de distintas regiones de África y hablaban lenguas muy dispares. En estas reuniones cada uno realizaba su aporte desde sus conocimientos e intereses. Todos tenían algo que aportar y, al mismo tiempo algo que aprender. Podría decirse que se traba de una situación en la que la posición de maestro y de alumno son asumidos colectivamente por aquellos involucrados en la escritura del bando en cuestión. Las palabras de todos y cada uno se reciben y discuten en un plano de igualdad que no precisa ser demostrado. Todos los que están allí son iguales, independientemente de su color, origen y religión. Ellos forman parte del grupo de hombres libres que una noche de 1791 decidieron declararse iguales más allá de todas las desigualdades a las que estaban sometidos. Esos hombres no solo se declararon iguales sino que efectivizaron esa afirmación al enfrentar cara a cara al enemigo, sin armas o preparación militar alguna y los vencieron una y otra vez (James).

La revolución en Haití para nosotros es el inicio de una forma distinta de pensar la escuela popular. Como se desprende de lo escrito, la educación forma parte de una ruptura (enseña quien no debe enseñar), afirma la igualdad (los esclavos se afirman como iguales) y supone una nueva forma de vida (primera república de ex – esclavos en la historia). En esta misma línea se gestan otras experiencias políticas y educativas en nuestra América. Entre ellas nos interesa destacar la escuela popular de Chuquisaca. En 1826 Rodríguez abre las puertas de una escuela sin precedentes. La institución escolar de la naciente república de Bolivia posee los mismos rasgos destacados en la Revolución de Haití. En ella se lleva adelante una educación como ruptura, afirma la igualdad y crea una nueva vida.

En relación al primer punto la escuela de Chuquisaca puede considerarse como la irrupción de un espacio que rompe con una tradición. El mundo escolar latinoamericano de los primeros años de la república no presenta grandes variaciones en relación al de la colonia. En todo el territorio americano preexisten desde la dominación española diversas escuelas destinadas para cada grupo social. En ellas los saberes y prácticas educativas se articulan en función de la población escolar a la que están destinadas. Cada niño y niña es enviado y aceptado por una institución determinada acuerdo a su origen. Este complejo cuadro de escuelas para ricos y escuelas para pobres se ve alterado con la aparición de la escuela de Chuquisaca. A diferencia de las escuelas existentes, el nuevo espacio recibe a todos y a cualquiera sin observar. Por primera vez

una institución educativa no se preocupa por el origen y el lugar de procedencia de sus alumnos y alumnas. En este sentido, la escuela de Chuquisaca es una escuela que aparece como una ruptura con el mundo existente de aquel entonces.

De la misma forma que Haití, la escuela popular de Chuquisaca afirma la igualdad como un principio que se sustenta en una práctica. La bienvenida que da la escuela popular a sus alumnos sin exigencia identitaria es la materialización de esa práctica. Allí la igualdad no es un programa, un objetivo a ser conseguido, sino una realidad a partir de la cual se despliega la cotidianeidad educativa de este nuevo espacio. La igualdad de la escuela popular no es un concepto a ser demostrado sino una experiencia práctica que se legitima en la existencia de una escuela que se dirige a todos y todas.

Por último, la escuela popular es un lugar que apuesta a una nueva vida a partir de la creación de otro presente. La escuela popular es un espacio que hace pueblo. Ella invita a la popularización de esos espacios en los que el ofrecimiento irrumpe. Esto se debe a que es dirigida a todos sin ningún tipo de restricción. De esta manera cualquiera puede acoger y aceptar la invitación a crear su propio presente.

Ahora bien, ¿por qué el hacer pueblo estaría vinculado con esta invitación incondicionada de Simón Rodríguez? Pues bien, en la medida que la invitación a crear el propio presente es ofrecida a todos más allá de cualquier tipo de condición podemos decir que la misma es la manifestación y despliegue de la igualdad. Es decir, todos somos iguales ante esta invitación. Se trata de un ofrecimiento igualitario. Es igualitario ante las identidades, las sexualidades, los saberes, a las fortunas, a los lugares sociales, a las religiones, etc.

Pueblo, en este contexto, es el colectivo compuesto por todos los seres humanos dispuesto a ser parte activa en la creación del propio presente a partir del despliegue de una invitación igualitaria. Esta idea está presente en los textos de Rodríguez y en su práctica política y educactiva. Según su punto de vista, la constitución de un pueblo está asociado a la capacidad de todos y todas de hacerse cargo de su vida (Rodríguez, 1999:314). Esta capacidad se despliega y desarrolla en la escuela popular (Rodríguez, 1999: 365). Allí niños y niñas actúan, viven, piensan y sienten como pueblo. Lo popular de la escuela de Rodríguez consiste, entonces en esta vivencia de ser y constituirse como pueblo en la práctica. Un pueblo en el que todos son invitados y nadie es excluido (Rodríguez, 1999, p 326-327).

Para nosotros educación popular no sólo es ruptura, afirmación igualitaria e invitación a crear una nueva vida, sino algo más. El despliegue de estos tres rasgos provoca en las personas que participan de ella una serie de afectos que nos interesa trabajar: entusiasmo y amor. Para nosotros la educación popular como ruptura, afir-

mación igualitaria e invitación a una nueva vida producen amor y entusiasmo. En las próximas líneas intentaremos mostrar que la educación popular produce y se sostiene como amor y entusiasmo.

Educación popular: amor y entusiasmo

El concepto de entusiasmo tiene una larga historia en la filosofía occidental. En esta sección del trabajo realizamos una breve comparación de la utilización de este concepto en las figuras de Platón y Alain Badiou. Según nuestro punto de vista, algunas similitudes y diferencias en la utilización de este concepto por estos autores pueden ser proyectadas hacia la escuela popular. Estamos convencidos que las personas que participan de la escuela popular experimentan colectivamente el sentimiento de entusiasmo a partir de sus acciones, decisiones y pensamiento. Se trata de un afecto cuyas características son indisociables de la escuela popular en la que irrumpen y de las personas que intervienen en ella. Por este motivo decimos que la escuela popular genera y se sostiene en todo tiempo y lugar con entusiasmo.

Platón trabaja el concepto de entusiasmo en varios diálogos. Aquí hacemos una muy breve y superficial referencia al *Íón* (Platón, 2019). En este punto es importante dejar en claro que recurrimos a este diálogo, simplemente como un punto de partida para pensar el entusiasmo en la obra de Badiou. Somos conscientes que la presentación que aquí realizamos no refleja ni da cuenta de la complejidad de texto platónico. Simplemente nos apoyamos en algunos rasgos muy generales del texto para pensar, a partir de ellos, otra forma de concebir el entusiasmo. En función de ello nos interesa destacar que dicho concepto se pone en relación con la inspiración poética. De acuerdo con la lectura platónica, el entusiasmo no es el resultado de un aprendizaje o conocimiento, sino el objeto de una predisposición, de un arrebatado producto de una intervención divina (*Íón*, 535c). Desde una postura crítica respecto de la poesía tradicional, Platón se opone al carácter externo del entusiasmo, a su falta de racionalidad. Considera que ella es el producto de una acción divina en nosotros, que nos transporta y nos saca fuera de nosotros, de lo racional e inteligible.

En Su Etimología, El Entusiasmo Es Considerado Como Una Suerte De Exaltación Que Se Apodera De Nosotros Por La Intervención De Un Dios. Literalmente Significa “Dios En Nosotros” (Bailly 1950: 679). De Acuerdo Con Esta Definición, El Entusiasmo Es Un Afecto Determinado A Partir De La Acción De Una Divinidad Que Se Apodera De Nosotros Y Nos Transporta Más Allá De Nosotros Mismos.

En función de lo escrito podríamos destacar tres características del entusiasmo en el interior de la filosofía platónica. Se trata de: a) una afección, b) cuyo origen es la actividad de una divinidad externa al sujeto y c) de una dimensión extraña a la racionalidad.

En los últimos años, el filósofo Alain Badiou vuelve a utilizar este concepto desde una perspectiva filosófica. Fuertemente influenciado por la filosofía platónica, conserva una serie de elementos propios de la visión clásica de este concepto. Entre las características que Badiou mantiene de la visión clásica podemos destacar: a) la condición de afecto o sentimiento, b) la fuerza que invade en quien lo experimenta y c) una cierta pérdida de sí, en tanto descentramiento de lo uno. A partir de estas similitudes el autor explora otras características de este concepto que lo diferencian de la filosofía platónica. Así, afirma que el entusiasmo es un afecto que nos hace experimentar una fuerza superior al incorporarnos a un proceso de creación colectiva en los que la voluntad y el pensamiento ocupan un lugar central.

Para Badiou el entusiasmo es el afecto que vive un individuo cuando se incorpora a un proceso de cambio radical. Es decir, es la emoción, la fuerza que invade a todo aquel que decide transitar las consecuencias de un hecho que supone una nueva posibilidad creadora. En *la Hipótesis Comunista* agrega el adjetivo “revolucionario” al concepto de entusiasmo (2012). A lo largo del texto este concepto se asume como una consecuencia directa de una transformación política. Más específicamente, se trata del sentimiento provocado en todos aquellos que se incorporan, por ejemplo, a la Comuna de París, La revolución cultural China y el Mayo Francés en tanto procesos de transformación de la realidad en la que irrumpen (Badiou, 2012).

De la misma forma que en la antigüedad griega, el entusiasmo es considerado un sentimiento que nos invade y provoca cierta exaltación, fuerza y arrebató que nos lleva a actuar de una determinada manera. Esta fuerza se ve claramente en la convicción de Rodríguez en la escuela popular. Para el maestro caraqueño la escuela popular es la posibilidad de transformación radical de un determinado estado de cosas. A pesar de una tradición de más de cuatrocientos años apoyada en la segmentación jerárquica de la sociedad, Rodríguez cree en la escuela popular como elemento desarticulador y creador de una realidad muy distinta. Así al final de la Defensa de Bolívar escribe: “de la gente nueva no se sacarían pongos para la cocina, ni cholas para llevar la alfombra de las señoras – al entrar en las ciudades no se dejaría agarrar por el pescuezo (por falta de camisa) para ir por orden de los asistentes a limpiar las caballerizas de los oficiales, ni a barrer las plazas...” (Rodríguez, 1999, TII:361). Rodríguez quiere, desea y está convencido en la posibilidad de otra realidad en América.

Su incorporación a la escuela popular le permite escribir con entusiasmo: “En los 4 años que han corrido desde enero de 26, en que se dio principio al establecimiento de Chuquisaca habría (a lo menos) 25.000 personas ocupadas... instruidas en sus deberes morales y sociales ... estarían decentemente vestidos... en una palabra serían ciudadanos” (Rodríguez, 1999, TII:361).

De la misma manera que en el entusiasmo platónico habría cierta pérdida de sí en su experiencia. Un ir más allá de nosotros mismo dado por la incorporación en un cuerpo colectivo de transformación. Los personajes de las oligarquías criollas acostumbran tildar de loco al maestro que sostiene y vive de acuerdo a la escuela popular. El Mariscal de Ayacucho incapaz de comprender el entusiasmo de Rodríguez escribe a Bolívar en dos ocasiones para informarle de las conductas alocadas de su maestro. Así el 27 de mayo de 1826, escribe: “...vea usted si es de sorprenderse que un hombre tan bueno, de tanto talento y de tanta instrucción como don Samuel, haga tales disparates” (Lozano y Lozano, 1913: 99). Y, unos meses más tarde, el 10 de julio de ese mismo año Sucre se refiere a Rodríguez como un “cabeza alborotada con ideas extravagantes y con incapacidad para desempeñar el puesto que tiene...” (p.106). Por su parte, Rodríguez bromea ante las acusaciones realizadas por sus detractores. En su último escrito publicado en vida sostiene: “Hace 24 años que estoy hablando y escribiendo pública y privadamente sobre el sistema Republicano y, por fruto de mis buenos oficios, he conseguido que me traten de Loco. “Los niños y los locos dicen las verdades”” (Rodríguez, 1999, TI:225). A pesar del fracaso político de sus ideas y proyectos educativo sigue convencido en la fuerza de los mismos. Un dato interesante y que ilustra este sentimiento de Rodríguez se encuentra en la nota al pie de página de este escrito. Allí el editor del periódico El Neogranadino, escribe: “damos a la luz el extracto de una rara e interesante obra de Educación hecho por su autor SIMÓN RODRÍGUEZ, hombre extraordinario que obtuvo la merecida fortuna de ser el maestro del LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, y que vive anciano y retirado en una de nuestras provincias, consagrando el resto de sus días a la enseñanza de los niños” (Nota de Editor In: Rodríguez, 1999, TI: 225). Anciano, con más de setenta años, olvidado y abandonado, continúa fiel a la escuela popular.

La pérdida de sí implícita en el entusiasmo que nos interesa destacar aquí nada tiene que ver con la locura, la fusión o apagamiento de las singularidades propias de cada uno de los integrantes de la escuela popular. La individualidad se suma al conjunto, lo construye y lo potencia. Se trata de la inclusión en un conjunto novedoso más amplio y potente que la suma de individualidades que lo componen. No

se trata de un todo sin partes sino de un cuerpo colectivo con partes heterogéneas establecen relaciones entre sí propias del colectivo que constituyen. En este sentido el educador venezolano escribe: “es consiguiente que las partes ESTEN opuestas, porque quedan unas enfrente de otras, hasta haberse separado o apartado, pero no que SEAN opuestas: porque entre las partes que componen un todo no puede haber REPULSIÓN” (Rodríguez, 1999, TII. p. 383). Para Rodríguez, la incorporación en un colectivo supone la posibilidad de múltiples relaciones entre las partes que lo componen, menos la repulsión ya que significaría la salida o posible disolución del colectivo. Así, el entusiasmo acompaña la incorporación de un individuo a una instancia mayor, sin que ello suponga la pérdida de su individualidad. En el caso de la educación popular el enunciado “escuela para todos, porque todos son ciudadanos” (Rodríguez, 1999, TI: 284) permite a las personas identificarse con el hecho novedoso que constituye la apertura de la escuela de Chuquisaca; toca a las personas y las hace comprometerse en cuerpo y mente en una escuela popular como elemento de creación.

La escuela popular genera en sus miembros un entusiasmo que acompaña su decisión de incorporarse a una aparición novedosa que abre las puertas para una transformación de la realidad. Se trata de la emoción que se produce y sustenta en “las acciones, creaciones, organizaciones, pensamientos que aceptan la nueva y radical posibilidad de aquello cuya imposibilidad era una ley del mundo” (Badiou, 2017:77). Es un afecto que surge a posteriori de la aparición novedosa, cuando las personas se incluyen en la organización y estabilización de las formas capaces de soportar ese elemento de más en el mundo que escapa a todas las leyes del mismo (Badiou 2017: 78). El entusiasmo se despliega a partir de la intervención de una dimensión del pensamiento sumamente potente asociada al entusiasmo. Así, el entusiasmo en la escuela popular es el sentimiento compartido por todos aquellos que se incorporan a ella en tanto nueva posibilidad creativa. Se encuentra presente y se instala en cada una de las prácticas que hacen posible la escuela popular. La afirmación igualitaria, la hospitalidad incondicionada y la posibilidad de una nueva vida generan y contagian al individuo del entusiasmo colectivo de la escuela popular. En este punto nos parece importante aclarar que no se trata de una afección que viene de afuera para instalarse en los individuos, sino que se trata de una emoción propia de la escuela popular. Los individuos sienten entusiasmo en tanto y en cuanto forman parte de la escuela popular. Por ello pensamos que es imposible vivir y transitar en la escuela popular sin entusiasmo.

Paulo Freire y el amor

El amor es tal vez lo más irrenunciable en la educación para el gran educador pernambucano. En su obra más conocida, la tercera más leída en el mundo en el campo de las ciencias sociales¹, la *Pedagogía del oprimido*, el amor es una condición de verdad de los actos tanto de los opresores cuanto de los oprimidos. En el caso de los opresores, el amor mide la verdadera solidaridad de sus acciones (2018/1970: 56/404); en el caso de los oprimidos, su rebelión amorosa inaugura una vida verdadera, libre, un paso del amor a la muerte para el amor a la vida (2018/1970: 39/131). El amor a la vida, al mundo y a los seres que lo habitan es también una condición del diálogo y de la propia pronunciación del mundo (2018/1970, págs. 2-3 / 187-9), en la medida en que son actos de creación y recreación del mundo (2018/1970: 3/189). Más aún, el amor es diálogo como expresión de coraje y compromiso con los demás seres (2018/1970:3 / 189). Finalmente, el amor es un acto de compromiso con la liberación de los oprimidos que, al mismo tiempo, hace posible el propio amor, pues el amor no es posible cuando hay opresión (2018/1970: 3/189). De modo que hay allí un círculo en el que el amor es a la vez condición y sentido de una educación emancipadora. Citando al Che Guevara, Freire recuerda en ese mismo libro que toda verdadera revolución nace del amor y sólo puede ser un acto amoroso (2018/1970, n. 45: 189).

Recordemos el final de la *Pedagogía del oprimido*, sus últimas líneas: “Si nada queda de estas páginas, algo, al menos, esperamos que permanezca: nuestra confianza en el pueblo. Nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en que sea menos difícil amar”. Aquí está presente el tema principal de nuestro texto: la confianza de Freire en el pueblo que es el sujeto principal de la educación en el doble sentido de quien es educado y al mismo tiempo educa. El pueblo es el sujeto de la revolución educativa, la que permitirá un mundo sin opresores ni oprimidos. Prestemos atención al sentido principal del libro: la fe y la confianza en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Esta es la pasión vital, irrenunciable, el sentido más profundo de toda la obra y la vida educadoras de Paulo Freire. Su credo pedagógico más íntimo, su método, su teoría, su filosofía, su vida: la creencia en la posibilidad de que, a través de la educación, sea posible inventar un mundo menos injusto, excluyente y opresor.

1. La investigación es de Elliot Green de 2017, según citaciones en el Google Scholar: <http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/12/what-are-the-most-cited-publications-in-the-social-sciences-according-to-google-scholar/>, leído el 2 de noviembre de 2017. Un dato curioso es que la obra es más citada en castellano y en inglés que en el portugués original.

Y es también su fuerza política innegociable, irrenunciable: es por ello principalmente que el capitalismo es inaceptable; lo es por muchas otras razones, pero la principal de ellas es, tal vez, la forma en que hace imposible amar de verdad.

En su vida Paulo Freire experimentó muchas veces el amor y de muy diversas formas. Desde su primera infancia, fue educado amorosamente (Freire, 2015/1994; 2013/1995). Amó dos mujeres con mucha intensidad: Elsa y Ana María (Anita). Con Elza dice haber experimentado las mayores alegrías de su vida, cuando nacieron sus cinco hijos, y haber experimentado el aprendizaje más fundamental: “haber aprendido con ella que, cuanto más se ama, tanto más se ama” (Freire. In: Gadotti (org., 2001): 54).

Prestemos atención: “Cuanto más se ama, tanto más se ama.” El amor es una fuerza autogenerativa que se multiplica a sí misma. Basta con afirmarlo, que él se encarga del resto. Paulo Freire experimenta esa potencia del amor desde su primera infancia. Y lo hace en el contexto de su propia educación en la que su relación con el mundo de las letras, de las palabras, del lenguaje y del arte de enseñar y aprender se potencia, crece, se expande (FREIRE, 2013/1995). Es ese amor experimentado en la propia entrada al mundo de las letras que crece en él y se convierte en marca y condición insustituible de su pensamiento y práctica educadoras para toda la vida. Es el amor que hace del aprendizaje de la lectura de las palabras el aprendizaje de la lectura del mundo.

Paulo Freire proyecta, a partir de la amorosidad de su educación, el amor como fuerza motora de una educación del pueblo. Es preciso amar a quien se educa, amor lo que se educa, amar la posición de quien enseña y de quien aprende. Es preciso amar el mundo y confiar en la fuerza revolucionaria del amor pedagógico para transformarlo en un mundo sin oprimidos y opresores, en un mundo donde sea menos difícil amar.

Vale notar que esa amorosidad pedagógica tiene un componente político, militante, guerrero. Ella exige lucha, compromiso, osadía como lo poetiza Thiago de Mello, poeta amazonense, en “La canción del amor armado” (1966). Thiago de Mello es compañero de exilio de Paulo Freire, agregado cultural de Brasil en Santiago, donde Paulo escribió la *Pedagogía del Oprimido* en su exilio después del Golpe militar de 1964. Son los años de las utopías revolucionarias en el sur del continente americano. Es también el tiempo de la represión y de las dictaduras. Tiempos de resistencia y de lucha por un mundo menos injusto, menos opresivo, menos atroz. Tiempos de amor político, comprometido, militante. El amor está armado en defensa del derecho de amar, como dimensión inexcusable de una vida humana que merezca ese nombre. El amor es un arma de quien enseña en defensa del derecho a tener una educación digna.

Paulo Freire piensa de esta forma la situación de las y los educadores en Brasil, enfrentados a una serie de despojos: las injusticias, la exclusión, la arbitrariedad dentro y fuera del sistema escolar; sus pésimas condiciones de trabajo y salariales, el descuido del poder público con la educación pública, la represión constante contra la militancia y cualquier forma de resistencia. Ante este estado de cosas, la realidad educativa exige una especie de amorosidad guerrera que parece tan imposible como necesaria; tan filosófica como política; una forma de lucha, de amor armado, amor de compromiso irrenunciable para quien quiere honrar la tarea de educar enfrentando aquello que, cotidianamente, la niega como tal. Educar es amar luchando, cuestionando, dialogando, pensando, aprendiendo.

Casi nada de ese cuadro cambió en el Brasil actual: condiciones cada vez más asfixiantes en la educación pública, en todos sus niveles; represión constante a las manifestaciones públicas pacíficas de educadores; políticas públicas regresivas y autoritarias, promotoras de más desigualdad; la mercantilización de la vida y de las prácticas educativas. Lo más chocante en la actual realidad política brasileña es el lugar en que, como anticipamos, se ha colocado a Paulo Freire como responsable de la situación educativa en Brasil - cuando, en realidad, es, en líneas generales, contraria a las definidas por el educador pernambucano.

Al mismo tiempo, el amor es viajante, errante: marcha dentro del propio país para trabajar a favor de una educación junto a los oprimidos y oprimidas, y también para militar en favor de ellos, denunciando lo inaceptable del mundo compartido. Por eso, la vida errante de Paulo Freire no puede dejar de elogiar y emocionarse por las movilizaciones populares, en particular por la Marcha de los Trabajadores sin Tierra, expresión de su amor errante que revela “el ímpetu de la voluntad amorosa de cambiar el mundo”. Paulo Freire viaja amorosamente con esos hombres y mujeres, con las manos, con el corazón, aún con los ojos cansados cuando, en su última entrevista, exalta su Marcha y expresa el deseo de las marchas se multiplican por todo Brasil. Se necesitan muchas marchas: “Marcha de los que no tienen escuela, marcha de los reprobados, marcha de los que quieren amar y no pueden, marcha de los que se niegan a una obediencia servil, marcha de los que se rebelan, marcha de los que quieren ser y están prohibidos de ser ...” (Freire, 1997: 61)

De este modo, expurgar la ideología de Paulo Freire -esté o no presente en las escuelas de Brasil- significa expurgar una ideología del amor. Porque es el amor que da inicio a una vida filosófica en la educación: un amor de resistencia a aquello que niega una educación para todos, a lo que la máscara, la aleja y la diluye. La ideología amorosa de Paulo Freire predica que cada vez que el poder público hace una política

antieducativa perversa, educadores y educadoras cuidan las armas de un amor que entrega un tiempo propio para que los educandos puedan ser lo que son y, al mismo tiempo, resiste y cuestiona las fuerzas de una antieducación.

Así, el amor es tal vez el valor principal, insustituible, de la vida entera de Paulo Freire. Por ejemplo, cuando muere su primer amor conyugal, Elza, parece que el mundo se acaba. Paulo Freire está a punto de morir de desamor. El mundo parece imposible de ser vivido sin ese amor que lo acompaña por tanto tiempo, en las condiciones más difíciles. Un amor comprometido, de lucha, solidario. El amor parece único, personificado, insustituible. La muerte del ser amado parece significar la muerte del amor. Pero el amor renace en otra persona (Ana María, Anita) y Paulo Freire parece renacer con él. El nuevo amor es una alumna, hija de un amigo-protector, el director de la escuela que permitió que él pudiera hacer la gimnasia en Recife. El nuevo amor es, por tanto, amigo. Es posible amar otra vez. Es posible volver a amar. Al final, el gran amor de Paulo Freire es el mundo. Es, por lo tanto, posible - y necesario - volver a vivir, para seguir amando y manifestando el amor por el mundo.

En su última entrevista, Paulo Freire afirma que quisiera ser recordado como alguien que, antes que nada, amó profundamente todo lo que estaba a su alrededor, “el mundo y las personas, los bichos, los árboles, las aguas, la vida ...” (FREIRE, 1997), todas las formas de vida como vida. Parece coherente, esperable, lógico: amar la vida como expresión primera y última de sentido para una presencia amorosa en el mundo.

A juzgar por el testimonio del hijo Lutgardes, Paulo Freire fue muy exitoso en ese deseo. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó qué más importante aprendió en la vida con su padre, Lutgardes responde: “el amor a la vida. El amor a los pájaros, el amor al sol, el amor a la naturaleza, el amor a la gente” (Kohan, 2019). Paulo Freire vivía una vida amorosa en casa y fuera de ella, en cualquier lugar. Respiraba amor a la vida. Inventó y re-inventaba, en su vida amorosa, una nueva temporalidad. Otro tiempo, presente, para vivir en educación. Un tiempo necesario para unos, insostenible para otros. De ese amor de otro tiempo, Paulo Freire vivía y moría, por ese amor y por ese tiempo será recordado tanto por los que le aman y por los que lo odian.

Consideraciones finales

A lo largo del texto abordamos una posibilidad, entre muchas, relativa a la educación popular. Para nosotros es posible establecer una continuidad que nos permita pensar en una educación que sea ruptura, afirme la igualdad y nos invite a crear nuestra propia vida. Apoyados en una serie de figuras históricas decidimos nombrar a esa educación

como filosófica y popular. La educación filosófica y popular que nos interesa pensar tiene momentos específicos de aparición histórica. Estos momentos no pretenden ser destacados como elementos de un proceso, ni como instancias evolutivas de aparición. Simplemente son momentos que se sostienen a partir de las consecuencias que ellas producen. Así es posible hablar de una educación filosófica popular que irrumpe en Haití, entre el ejército de hombres que se enfrenta a las superpotencias de su época para afirmar su igualdad. Hay educación filosófica y popular en Chuquisaca entre esos niños y niñas que ingresan a una escuela que promueve una nueva vida. Freire también afirma una educación filosófica y popular en su educación amorosa y trashumante. Los tres momentos son distintos, pero generan efectos igualmente potentes, rupturistas, igualitarios y creativos. La condición de posibilidad de estos efectos reside en aquellos que deciden sostenerlos en una práctica concreta.

Esto nos invita a pensar en dos cosas. La primera de ellas es que la escuela popular no es, necesariamente, una institución. No es del orden de los monumentos, de los edificios, sino del orden de las prácticas de vida que un colectivo de personas está dispuesto a sostener. Podríamos decir que ella es, ante todo, acción. En este sentido, lo que identifica a una escuela popular no son las reglas de un discurso determinado, sino la singularidad de un acto. El acto de una escuela que afirma amorosamente y con entusiasmo la igualdad de todos con todos. Ella es la posibilidad de rechazar toda sumisión ciega a las opiniones dominantes y la apertura creativa a nuevas realidades. Esta apertura supone el inicio de un camino que le permita a sus integrantes cambiar su posición en relación a las normas sociales. La escuela de Chuquisaca modifica todas las reglas sociales del período colonial en su interior. Es un espacio en el cual las jerarquías, las castas, los orígenes y el género propias de la colonia no tienen valor, son suspendidos. Allí se despliega otra realidad muy diferente a la dominante y se da lugar a nuevas prácticas educativas sociales y política. La afirmación igualitaria de una escuela filosófico popular es un acto que permite la sustitución de la imitación, la aprobación y la ciega obediencia por la discusión, la crítica y la creación. En este sentido la acción constitutiva de la escuela filosófico popular es una revuelta colectiva y creativa y las consecuencias de sus principios constitutivos se ofrecen a todos, a cualquiera. La revuelta creativa de una escuela filosófico popular consiste, entonces, en una reorganización de las experiencias teóricas y prácticas mediante la discusión colectiva de aquello que trastoca un orden intelectual, social y político.

La revuelta de la escuela filosófica popular es un colectivo que se sostiene con la militancia de sus integrantes. Es, por tanto, una escuela de militantes de la revuelta o lo que es lo mismo una escuela de militantes revoltosos. Ella está abierta a todos. Cual-

quiera, en cualquier momento histórico puede constituirse en un militante revoltoso de la escuela filosófica popular. Así, la segunda cuestión que nos interesa destacar tiene que ver con la posibilidad permanente de una nueva aparición. Siempre es posible que una educación filosófica y popular advenga a nuestro presente con igual fuerza que las anteriores. Más allá del contexto y de las adversidades que puedan presentarse, una educación filosófica popular puede surgir en y por la fuerza de los que participan en ella. Tal vez por ello Paulo Freire es considerado un enemigo por los que (des)gobiernan actualmente Brasil: porque su pedagogía amorosa y errante afirma valores contrarios a la política del odio y la fijación de un orden injusto, excluyente y opresivo como el que pretende imponerse. Y esa pedagogía amorosamente errante puede ayudarnos a pensar que una educación filosófica popular no sólo es posible, sino necesaria a partir de la incorporación amorosa y entusiasta de todos los hoy están siendo sistemáticamente excluidos y atacados. Más aun, puede inspirarnos a sentir que esa escuela está de puertas abiertas para todas y todos, hoy más que nunca.

Referencias bibliográficas

- BADIOU, Alain (2017). *Metafísica de la real felicidad*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- BADIOU Alain (2014). *La Filosofía y la Política*. Una Relación Enigmática. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- BAILLY, Anatole (1950). *Dictionnaire Grec-Français*. Paris: Hachette.
- DIOUF, Sylviane (1998). *Servants of Allah*. African muslims enslaved in the Americas. New York: New York University Press.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. O manuscrito. Projeto editorial, organização, Revisão e Textos introdutórios Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão, Moacir Gadotti. São Paulo: Instituto Paulo Freire/UNINOVE/BT Acadêmica, 2018/1970.
- FREIRE, Paulo. *Cartas a Cristina*. Reflexões sobre minha vida e minha práxis. São Paulo Paz e Terra, 2ª ed., 2015/1994.
- FREIRE, Paulo. *À sombra desta mangueira*. Organização e notas de Ana Maria Araújo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 11 Ed., 2013/1995.
- FREIRE, Paulo. 1997. Última entrevista. (PUC São Paulo, São Paulo, 17/4/97). <http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/Controle?op=detalheandtipo=Videoandid=622>. Acessado

11 Oct. 2017.

GADOTTI, Moacir (org.). *Paulo Freire. Uma biobibliografia*. São Paulo: Cortez, 2001.

GARCÍA SANCHEZ, Bárbara Yadira (2005). La educación colonial en la Nueva Granada: entre lo doméstico y lo público. *Revista de Historia de la Educación Latinoamericana*. Vol. 7. Pp. 217-238

GEREMEK, Bronislaw (1989). *La piedad y la horca*. Historia de una polémica. México: FCE.

GÓMEZ-TRIGO, Gerardo (2002). *Historia humanitaria hasta el siglo XIX*. Madrid: Gómez-Trigo Ochoa.

JAMES, Cyril (James). *Los jacobinos negros*. Toussaint L' Ouverture y la Revolución de Haití. México: FCE.

LOZANO Y LOZANO, Fabio (2013). *El maestro del Libertador*. París: Ollendorff.

MARAVALL, José Antonio (1979). De la misericordia a la justicia social en la economía del trabajo: la obra de fray Juan de Robles. *Moneda y Crédito*, N° 148. Madrid: Cámara de Comercio, Pp. 57 – 81.

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, Luís Manuel (2009). Función educativa de los hospitales y hospicios en España hasta la primera mitad del siglo XIX. La Cuna de Expósitos en las Palmas de Gran Canaria: de la respuesta socioeducativa a la lucha por la supervivencia. In: *El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días*: XV Coloquio de Historia de la Educación. Pamplona, 2009, v. 2 ; p. 225-234

OZANAM, Didier (1980). Representación del marqués de la Ensenada a Fernando VI (1751). *Cuadernos de Investigación histórica*. N° 4. Pp. 67-124.

Platón (2019). *Diálogos I*. Madrid: Gredos.

RODRÍGUEZ, Simón (1999). *Obras Completas*. Tomo I y II. Caracas: Ediciones de la presidencia de la Republica Bolivariana de Venezuela.

RODRIGUEZ CAMPOMANES, Pedro (1774). *Discurso sobre el fomento de la industria popular*. Madrid: Imprenta de Antonio Sancha.

RUBIO, Juan (1788). *Prevenciones dirigidas a los maestros de primeras letras*. Madrid: Imprenta Real

SÁNCHEZ BLANCO, Francisco (2007). *La Ilustración goyesca*. La cultura en España durante

el reinado de Carlos IV (1788-1808). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

WARD, Bernardo (1779). *Proyecto económico en que se proponen varias providencias dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación*. Madrid: Joachim Ibarra.

WEINBERG, Gregorio (1995). *Modelos educativos en la historia de América Latina*. Buenos Aires: A-Z

PARA QUE LOS “SALVAJES” NO VUELVAN AL PODER:
ANATOMÍA DE LA EXTREMA DERECHA BOLIVIANA

Tathagatan Ravindran

Universidad Icesi | travindran@icesi.edu.co

Tatiana Lizondo Diaz

Asoc. Dept. de Antropólogos de La Paz, Bolivia | tatichido@hotmail.com

Introducción

El 13 de noviembre, miles de manifestantes de la ciudad de El Alto y las provincias rurales están reunidos en la Plaza San Francisco de La Paz. Un periodista de una estación de radio alternativa está filmando a una mujer de *pollera*, una falda que usan las mujeres indígenas de origen rural. Firme, determinada y enojada, dice

Me he sentido lastimada con el corazón herido. Soy una mujer valiente para poder dar mi vida por esta Bolivia. No podemos nosotros rendirnos, porque han ultrajado nuestra *wiphala* [la bandera de la autodeterminación indígena que fue quemada por los organizadores del golpe cívico-militar-policial en Bolivia]. Le pedimos a Camacho que se vaya. De lo contrario, lo echaremos porque El Alto siempre está de pie, nunca de rodillas. Si no se va ahora, se irá en su ataúd.¹

Después de amenazar a la autoproclamada presidenta Jeanine Añez con graves consecuencias si continuaba en el cargo, ella continuó diciendo: “No tememos a la muerte. Tenemos que morir de algo. Estamos listos para morir por la patria”. Cuando terminó su entrevista, los *Ponchos rojos*, miembros de una organización indígena militante de la zona rural de La Paz se unieron a los manifestantes en la Plaza gritando “¡Ahora sí! ¡Guerra civil!

Horas después, al otro lado de la plaza, una mujer que sostenía la *wiphala* fue capturada frente a un oficial de policía diciendo “Quemaron nuestra *wiphala*. Por eso he venido aquí. Estoy listo para morir por Bolivia”. Levantando los brazos, gritó “Mátame. Voy a morir con la *wiphala* en la mano. Nosotros de El Alto siempre estamos de pie, nunca de rodillas. Somos aymara y quechua” (Diario 26, 2019).

¿Por qué la quema de una bandera condujo a una explosión de ira colectiva tan intensa? ¿Por qué miles de personas en las calles estaban listas para una lucha militante contra el nuevo gobierno de transición? Los eventos que ocurrieron a finales de 2019 han colocado nuevamente a Bolivia en una encrucijada de su historia.

La lucha por el Poder

El drama comenzó a desarrollarse cuando el candidato de la oposición, Carlos Mesa, pidió a sus seguidores que se movilizaran después de sospechas de fraude electoral en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre de 2019. Las protestas estallaron en varias ciudades bolivianas.

1. Se puede encontrar la grabación de esta entrevista en la página <https://www.facebook.com/joseluis.troche/videos/3792265087466119/>

El 8 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó que se celebren nuevas elecciones ya que encontraron irregularidades en el recuento de votos. Después, los estudios del Center for Policy Research con sede en Washington, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y un grupo de investigadores del MIT cuestionaron las conclusiones de la OEA.

Sin embargo, una vez que el equipo de la OEA publicó su informe preliminar, Morales aceptó de inmediato su recomendación y solicitó a la asamblea legislativa que formara un nuevo tribunal electoral y declarara nuevas elecciones. Eso no fue suficiente para satisfacer a la oposición. Para entonces, Luis Fernando Camacho, el líder del Comité Cívico de la ciudad de Santa Cruz, un representante de la política de extrema derecha, había eclipsado a Carlos Mesa como el principal portavoz de la oposición al gobierno. Pidió la renuncia inmediata de Morales.

Inmediatamente después los Jefes de la Policía y las Fuerzas Armadas pidieron su renuncia, Morales anunció que deja su cargo declarando que se había consumado un golpe de estado en Bolivia. En el vacío de poder, los senadores de la oposición se reunieron en una sesión sin el quórum necesario y Jeanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta interina. Los senadores del *Movimiento al Socialismo*, el partido de Evo Morales, no asistieron a la sesión, ya que la mayoría de ellos estaban en clandestinidad debido a la severa persecución política que sufrieron, después de la renuncia de Morales. Algunas de sus casas habían sido quemadas y sus familiares secuestradas y torturadas.

Horas después de que Morales anunciara su renuncia, La Paz fue testigo de escenas dramáticas, se vio entrar a Luis Fernando Camacho al palacio presidencial y los golpistas retiraron la *wiphala* del mástil y la quemaron. La *wiphala*, la bandera de la autodeterminación indígena, fue incorporada oficialmente como un símbolo de la patria junto con la bandera tricolor nacional por la nueva constitución promulgada en la Asamblea Constituyente convocada durante el primer mandato de Evo Morales. Es la quema de la *wiphala* que provocó oleadas de protestas de diferentes sectores indígenas y sumergió a Bolivia en una seria turbulencia política.

¿Qué significa quemar una bandera?

¿Qué simboliza la quema de la *wiphala*? En una reunión celebrada por líderes de las comunidades de la provincia Camacho en el Departamento de La Paz, el representante del sindicato de trabajadores del sector del transporte interprovincial dijo: “para nosotros, la quema de la *wiphala* significa volver al pasado”. ¿Qué significa volver al pasado para ellos?

La respuesta de un residente del popular barrio de Chasquipampa en La Paz en una entrevista con el canal de televisión *Telesur* nos puede dar unas pistas.

Los indígenas que somos, no vamos a permitir que vuelvan *ellos*. Ahora es cuando nos estamos organizando, ahora es cuando nos han hecho despertar. El pueblo boliviano ahora sabe cómo hoy en día una mujer de *pollera* tiene el derecho de opinar, una mujer indígena tiene derecho de entrar a una oficina. Anteriormente, estábamos prohibidos. Si entrábamos teníamos que bajar nuestros sombreros, estar atrás, pero ahora gracias a un indígena que ha entrado todos tenemos derecho, el mismo nivel tenemos (Telesur, 2019a).

Otra mujer de pollera en Cochabamba hace eco de su opinión, quien dijo a un periodista argentino²:

Ellos nos ignoran, nos dicen indios, cochinos, masistas, no se trata de ser masista pero gracias a ese masista, tenemos buenas carreteras a Cochabamba, en los pueblos dobles carreteras, gracias a ese indio, una empleada que antes ganaba 150, 100 pesos el sueldo, tiene un digno sueldo y horario de trabajo. Al quemar la bandera wiphala es como si a nosotros nos estarían pisando, eso no representa al MAS, su bandera es azul y blanco, esa bandera representa a los indígenas, a la gente del campo, por eso nosotros nos hemos molestado. Nosotros protestamos, pero tienen que darse cuenta el porqué, protestamos porque a nosotros nos pisoteaban, ¿a la mujer de pollera acaso (dejaban) entrar a una oficina? No entraban éramos bien rechazadas, “hay estas indias como se van a sentar en la mesa” decía. No es por Evo, pero él ha puesto las cosas en su lugar.

Estos sectores indígenas elogian las transformaciones que vivió el país bajo el liderazgo de Morales. Ponen mayor énfasis en el hecho de que, a diferencia de antes, estaban siendo tratados con dignidad en los espacios públicos de la ciudad. También afirman haberse beneficiado de los proyectos de desarrollo implementados por el gobierno, como la construcción de carreteras e infraestructura pública.

Las narrativas orales que recolectó el primer autor de este capítulo en su proyecto de investigación sobre el fortalecimiento de la identidad indígena en la ciudad de El Alto en el siglo XXI también revelan que los aymaras viviendo en El Alto regularmente hacían distinciones entre “el pasado” y “el presente”. La gente respondió a sus preguntas sobre la persistencia de las prácticas discriminatorias con declaraciones como “¿Cómo pueden discriminarnos cuando muchos diputados son de pollera? Afirmaron

2. Se puede encontrar una grabación de esta entrevista en la página <https://www.facebook.com/joaquin.jaldin.7/videos/2508060372764786/>

que anteriormente, fueron discriminados severamente por usar la *pollera*, por hablar el idioma aymara en espacios públicos y por rasgos fenotípicos indígenas. Muchos de ellos aplaudieron las iniciativas políticas del gobierno de Morales, como el nombramiento de mujeres indígenas de pollera para puestos como ministras, embajadoras y directoras de instituciones y promulgar leyes antidiscriminatorias como la ley contra el racismo (Ravindran, 2020).

El gobierno de Morales también aumentó significativamente la inversión pública en el país al aumentar el porcentaje de regalías que las compañías petroleras transnacionales pagaban al estado. Se hicieron enormes inversiones en proyectos de desarrollo rural, construcción de carreteras, autopistas y bonos a ancianos, mujeres embarazadas y estudiantes de escuelas públicas.

El mayor papel del gobierno en la economía ayudó a la redistribución de la riqueza, tanto en términos de raza como de clase. Como los pueblos indígenas siempre han pertenecido a los peldaños más bajos de la jerarquía de clases en Bolivia, una reducción de la pobreza y la desigualdad se tradujo en una reducción de la desigualdad racial.

Farthing y Kohl (2014) señalan que aproximadamente un millón de personas escaparon de la pobreza y la clase media aumentó en un 10% de la población. Entre 2007 y 2015, la pobreza moderada y extrema disminuyó en aproximadamente un 21% y el coeficiente de Gini pasó de 0.56 a 0.47, lo que refleja una disminución en la desigualdad de ingresos (Beverinotti, 2018). En 2005, el 10% superior de la población tenía 128 veces más ingresos que el 10% inferior. En 2012, esta diferencia disminuyó a 46 veces (Pozas, 2017). Además, Bolivia ha estado registrando las tasas más altas de crecimiento económico en la región continuamente durante los últimos cinco años.

La inversión pública aumentó aproximadamente un 250% de un promedio de USD 581 millones en 1999-2005 a USD 2046 millones entre 2006 y 2012. La inversión en carreteras y autopistas cuadruplicó el número de kilómetros construidos de 885 km en el período 2001-2005 a 3874 km de 2006 a 2013 (Pozas, 2017).

El gobierno también aumentó significativamente el presupuesto educativo. La asistencia escolar aumentó. Se implementó un programa masivo de alfabetización y 500.000 personas se graduaron de las clases de alfabetización. Cuba envió 900 médicos y 800 paramédicos. 5.000 estudiantes de bajos ingresos recibieron becas para estudiar medicina en Cuba, diez veces más que las administraciones anteriores (Farthing y Kohl, 2014).

Los beneficios materiales para la población indígena fueron significativos. El estudio econométrico de Hicks (2018) señala que la población indígena de Bolivia logró una rápida recuperación de los ingresos y gastos en relación con la población

no indígena, lo que permitió a los primeros cerrar aproximadamente una cuarta parte de la brecha interracial en los ingresos en la era pre-Morales. Marta Arévalo, del Centro Cooperativo Sueco, entrevistada por Farthing y Kohl, (2014), que tiene más de 20 años de experiencia en las zonas rurales de Bolivia, confirma que los cambios en el campo fueron extraordinariamente significativos. Las entrevistas realizadas por los mismos autores con residentes rurales de todos los rincones del país también respaldan esta afirmación. Los residentes de la ciudad de El Alto y provincias rurales expresaron opiniones similares en las entrevistas que el primer autor de este capítulo realizó.

Una gran parte de la población aymara de El Alto son comerciantes del sector informal que también se beneficiaron del estímulo de la demanda generado por estas políticas redistributivas. Muchos de los interlocutores del primer autor de este capítulo tienen doble residencia en la ciudad y el campo, y se dedican a actividades comerciales en múltiples ubicaciones rurales y urbanas. La construcción de carreteras que conectan las provincias rurales con la ciudad trajo importantes beneficios materiales para estos sectores indígenas.

Sin embargo, a pesar de todo su optimismo, la gente a veces hablaba de la amenaza de que los partidos de derecha volvieran al poder. Por ejemplo, en el décimo aniversario de las movilizaciones que exigían la nacionalización del gas en 2003 en El Alto, el *Centro Cultural Wayna Tambo*, una organización juvenil organizó fogatas en varios barrios de la ciudad de El Alto en conmemoración de la rebelión y la masacre de manifestantes por parte del gobierno.

Se proyectaron dos documentales sobre la rebelión en las calles. Durante la proyección en la Extranca de Río Seco, una parte de la ciudad que fue testigo de la masacre de manifestantes, un anciano se me acercó para expresarme su preocupación de que las fuerzas de derecha pusieran en peligro los esfuerzos para transformar la nación. Continuó narrando sus experiencias como participante en la rebelión y cómo algunos de sus vecinos resultaron heridos en la acción represiva de las fuerzas armadas. Muy emocionado, dijo, “Ahora las mismas fuerzas que mataron a la gente ... el MNR, ADN (partidos principales que gobernaron Bolivia antes que Morales) quieren volver al poder (solo faltaba un año para las elecciones de 2014). Deberíamos detenerlos, de lo contrario, sucederán las mismas cosas.” Para muchas personas que estaban protestando contra el golpe del estado en las calles, esas peores pesadillas se han hecho realidad.

Genealogía de la extrema derecha boliviana

¿Quién es Luis Fernando Camacho? ¿Qué tendencias políticas tiene la UJC (Unión Juvenil Cruceñista), la organización en la cual Camacho empezó su vida política? La UJC fue fundada por Carlos Valverde quien actuó como paramilitar en el gobierno golpista de Banzer, a su vez tenía una estrecha relación con Klaus Barbie, el general nazi que es reconocido como el “carnicero de Lyon” que huyó de Alemania para llegar a Bolivia después de la segunda guerra mundial y que también fue el brazo paramilitar en el gobierno militar de Luis García Mesa en Bolivia (1980-1982). El líder del comité cívico Fernando Camacho fue dirigente de la UJC que fue pieza clave en el golpe de Estado a Evo Morales, entrando a casa de gobierno con biblia en mano. Camacho dirigió la Unión Juvenil Cruceñista en la primera gestión de Morales, cuando los paramilitares de esa organización interrumpían las marchas de las organizaciones indígenas con látigos y cadenas, iban a barrios indígenas con palos y bates para aterrorizar a la gente y rodeaban la ciudad en jeeps pintados con la esvástica (Fabricant, 2008).

Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta, no está lejos de Camacho en términos de sus inclinaciones ideológicas. Ella afirma “rasgos arios y nórdicos” (de Marval y Scelza, 2019) y como miembro de la Asamblea Constituyente, declaró de forma pública su oposición a la inclusión de la *wiphala* como bandera oficial del estado.³ Cuatro de los ministros en su primer gabinete eran miembros de la Unión Juvenil Cruceñista.

El primer mandato de la Presidencia de Morales también fue testigo de una severa reacción de varios sectores de las élites mestizas blancas y los partidos de la derecha. Cuando el gobierno de Morales convocó una Asamblea Constituyente en 2006 con varios delegados indígenas elegidos en la ciudad de Sucre, los residentes de la ciudad atacaron físicamente a los miembros indígenas de la Asamblea que pasaban por la plaza central diciendo que la plaza no era para indios. Se realizaron ataques similares en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz (Observatorio del Racismo 2008).

La masacre de Pando en 2008 fue otro de los escenarios en los que las elites echaron su veneno en un grupo de campesinos que se reunía en el poblado de Porvenir. Leopoldo López, el gobernador derechista de este departamento mandó a personal de la prefectura a abrir zanjas para evitar su llegada, pero no conformándose con eso grupos armados esperaron a los campesinos a quienes dispararon a quema ropa y quienes muchos por el miedo a morir se tiraban al río en donde seguían siendo blanco de las balas. Muchos campesinos y estudiantes de la normal de ese departamento perdieron la vida.

3. Se puede encontrar esta declaración de Jeanine Áñez en el documental *Hermana constitución*.

La intervención del Estado en Pando con la promesa de investigar no se dejó esperar. El gobierno de Morales declaró estado de sitio y el gobernador fue detenido. Un informe de la UNASUR que investigó este lamentable hecho identificó 26 muertos, 40 heridos con armas de fuego, sin descartar que haya más víctimas. Después de esta masacre de campesinos en el Departamento de Pando que condujo a la condena nacional e internacional, la oposición se quedó sin fuerzas.

Después de una década, las mismas fuerzas lograron tomar el poder por el golpe de estado. Al respecto, el caso boliviano es diferente de los otros procesos de derechización en el continente donde los partidos de la derecha ganaron las elecciones. En las elecciones generales de 2019, el partido de Añez solo ganó alrededor del 4% de los votos en el país.

A pesar de hacer reiteradas declaraciones de que su gobierno es “de transición”, la autoproclamada presidenta y su gabinete parecen tener mucha prisa por revertir todas las iniciativas importantes de la presidencia de Morales. Las secciones siguientes de este capítulo abordan las políticas y las orientaciones ideológicas del gobierno de Jeanine Añez y su base de apoyo.

Restitución neoliberal

Una de las prioridades del gobierno de Añez ha sido la restitución de las políticas neoliberales. Se han dado posiciones claras del gobierno de facto de privatizar las empresas estatales que son más de 60. El ministro de Desarrollo Productivo Wilfredo Rojo dijo en una entrevista, “Yo soy liberal creo que el gobierno debe reducirse bastante y darle un papel protagónico a la empresa privada” (Opinión, 2019b). Sabiendo que la opinión pública está en contra de esta posición, la estrategia que usaron fue hacer creer que las empresas son inviables y que no generan ingresos, para entrar con la propuesta de la privatización. La única forma que vieron de quebrar las empresas fue descarada haciendo gastos exorbitantes injustificables. Además de constituir actos de corrupción estas medidas son formas de justificar la privatización de las empresas estatales. Aun siendo un gobierno supuestamente de transición que solo debería ocuparse de llamar a elecciones se dan el poder y la atribución de tomar decisiones que no le competen porque no son electos por voto popular. A continuación, veamos algunos ejemplos.

Se posesionó a Elio Montes como gerente general de la empresa de telecomunicaciones ENTEL, persona de confianza de Fernando Camacho que entre sus primeras acciones fue subir el sueldo a 100 mil bolivianos (más que tres veces el sueldo del gerente anterior) además de pagarse hoteles de 5 estrellas para su estadía en La Paz y

vuelos privados cada fin de semana a Santa Cruz, con Camacho incluido como pasajero según fotografías, además de hacer patrocinios de 16.000 USD al corredor de Rally Eduardo Peredo. Sin embargo, el padre de este corredor aclaró que ellos no recibieron ni un centavo de dicho patrocinio. Anoticiado de un posible despido se apuró en dar un finiquito por 124 mil USD a sus más cercanos colaboradores, lo que por ley no les correspondía porque no habían ni cumplido los tres meses de prueba (Pando 2020).

Tuvo que huir hacia los EEUU, donde fue detenido por irregularidades en su visa, pero según otras versiones fue detenido por llevar una cantidad exorbitante de dinero en efectivo sin declarar, así que ya tiene procesos penales en Bolivia siendo uno de los escándalos de corrupción más grandes de este gobierno de facto. Sin embargo, según nuevas informaciones el ya no está en la lista de detenidos de Krome Detention Center de Miami.

El ministro de obras públicas Iván Arias, posesionó a Juan Carlos Ossio como gerente de Boliviana de Aviación BOA. Luego de pocos meses en el cargo el sindicato de trabajadores de BOA llamó a una conferencia de prensa para explicar la difícil situación que estaban atravesando. Ossio dijo que BOA tenía más de 50 millones de pérdida desde 2015, sin auditoría que respalde esa afirmación. Es entonces que se conoce que el nuevo gerente de BOA fue jefe administrativo financiero de Amazonas, una línea aérea privada. Esto llama poderosamente la atención ya que según trabajadores los vuelos de BOA se redujeron en la época alta en un 30 %. Claro ejemplo es la ruta de Santa Cruz – La Paz que en 2018 eran 40 vuelos y en la actualidad bajaron a 18, además de dejar sin uso varias aeronaves en detrimento de BOA, pero para ventaja de la única competencia que es Amazonas. Cuando todo eso salió a la luz, tuvo que destituir al gerente con una resolución Suprema (Los Tiempos, 2020; Eju, 2019). No contentos con llevar a la quiebra las empresas estatales vienen las reducciones del presupuesto de obras públicas en un 32.5% lo que equivale a una reducción de \$ 2.118 millones (Bedregal, 2020).

La cuestión del litio ocupa un lugar central en el proceso de golpe de estado. Se cree que Bolivia posee aproximadamente el 70% del litio mundial, la materia prima para baterías de equipos electrónicos y automóviles eléctricos. Se ve como una de las materias primas más valiosas del futuro. El plan de Morales era comenzar la exploración e industrialización del litio a través de una colaboración entre los sectores públicos y privados en la que la empresa estatal YLC tendría el 51% de las acciones, una decisión que claramente no es favorable para las corpora-

ciones multinacionales. El plan de industrializar los recursos naturales y añadirles valor fue un giro significativo en las políticas económicas de Bolivia. En la época neoliberal, se exportaban las materias primas sin industrializar.

El gobierno de Añez nombró a Juan Carlos Zuleta como gerente general de Yacimientos de Litio de Bolivia. El fue funcionario en el gobierno de Chile, trabajó en la comisión del litio, y es opositor radical a la industrialización del litio en Bolivia. También fue asesor de Marco Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, uno de los principales personajes del golpe de estado.

La gente que protestaba contra el golpe de estado era consciente de la importancia del factor de litio. Por ejemplo, una anciana de *pollera*, que participó en la marcha desde El Alto al centro de La Paz dijo a una periodista: “Queremos que ella (Añez) vaya a Chonchocorro (una prisión de alta seguridad en La Paz) con todos sus ministros, están interesados en nuestro litio. Camacho está comprando gente con dinero, están interesados en nuestra riqueza, en nuestro litio. No los vamos a dejar. Lucharemos hasta las últimas consecuencias” (Llallagua noticias, 2019). Del mismo modo, el día anterior, una joven fue filmada por el periodista del canal Russia Today con una *wiphala* y gritando “el litio no se vende” (Russia Today, 2019).

Había serias tensiones entre el gobierno de Morales y algunos sectores y organizaciones indígenas contra el modelo de desarrollo seguido por el gobierno, especialmente su dependencia de la extracción de recursos naturales (Postero 2017). Sin embargo, el hecho es que muchos otros sectores populares indígenas apoyan las mismas políticas porque el extractivismo redistributivo les ha aportado considerables beneficios materiales y también ha reducido la pobreza y la desigualdad en el país (Ravindran 2019). Por ejemplo, las movilizaciones en octubre de 2003, en lugar de exigir el fin de la extracción, exigieron la nacionalización y la industrialización doméstica del gas que dio la oportunidad a los sectores marginados del país a beneficiarse de los recursos naturales.

Por esa oposición a las políticas del gobierno de Morales, integrantes de confederaciones como la *Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas* (CONTIOCAP) decidió apoyar lo que ellos consideraron la sucesión constitucional de Jeanine Añez. Sin embargo, una semana después, el 29 de noviembre, el CONTIOCAP se declaró en estado de emergencia acusando a ciertos “sectores de poder” de negociar con el gobierno de Añez para “secuestrar la lucha unida del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”. Denunciaron la continuación de varias políticas de la Presidencia de Morales por parte del nuevo gobierno y solicitaron una reunión con la presidenta de facto Añez para presentar

propuestas de políticas alternativas que sean anticapitalistas y anti-extractivistas, enraizado en la cosmovisión indígena. En todas sus declaraciones, hicieron hincapié en el autogobierno de acuerdo con los procedimientos tradicionales, el anti-extractivismo y la defensa de la Madre Tierra.

Sin embargo, las decisiones del gobierno de Añez demostraron que no solo seguirían adelante con las políticas extractivistas sino que intensificarían el extractivismo y cambiarían a las técnicas extractivistas más ecológicamente destructivas y tratarían de regresar al extractivismo neoliberal anterior con una reducción del papel del estado en la economía. El 4 de marzo de 2020, el Presidente de YPFB, la empresa petrolera del sector público declaró que se iniciaría el fracking en el Departamento de Chuquisaca. Lo que fue solo una amenaza durante el gobierno de Morales ahora se está convirtiendo en una realidad. Las comunidades indígenas guaraníes de la región declararon una situación de emergencia en oposición a esta decisión (Fabreger, 2020).

El gobierno también liberó las exportaciones agrícolas de los certificados que garantizaban primero el abastecimiento interno de estos productos, además de eliminar los controles de los precios. Este es el comienzo de una dolarización de la economía.

Además de romper las relaciones diplomáticas con Cuba y expulsar a los médicos cubanos del país, el gobierno declaró que Bolivia se retirará del UNASUR y ALBA, la alianza de países gobernados por gobiernos de izquierda en la región contra el modelo neoliberal. Después de una década, Bolivia mandó un embajador a Estados Unidos y el gobierno declaró apoyo a las políticas abiertamente imperialistas como la amenaza bélica de Estados Unidos a Venezuela.

Terror racial

El acto simbólico de la quema de la *wiphala* también ha sido acompañado por ataques físicos contra la población indígena. La reacción racista que se había estado gestando a lo largo de los años culminó con una fuerte explosión tras las acusaciones de fraude en las elecciones y la toma del poder por las fuerzas de extrema derecha en el país. Los ataques físicos y verbales contra los indígenas, especialmente las mujeres de pollera en lugares públicos aumentaron exponencialmente en esos días. Aparecieron videos en sitios de redes sociales de los ataques a indígenas, especialmente mujeres de pollera en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija.

La racialización juega un papel central en la maquina represiva del gobierno de Añez. Una joven que protestaba contra el arresto sin causa probable de su hermano quien fue golpeado por la policía se quejó a un medio de comunicación popular con

lágrimas en los ojos: “Ahora no tenemos libertad para caminar libremente. Estamos realmente cansados porque no pertenecemos a ningún partido político para que nos hagan esto. Es solo porque somos de piel morena”.⁴ Los ataques a indígenas tachandoles de masistas sin importar su afinidad política fueron el pan de cada día.

Similarmente, en el barrio de Senkata en El Alto, una anciana de pollera le dijo a un periodista del canal ruso RT que estaba protestando en las calles porque su hijo menor de edad que se unió a las protestas en La Paz fue arrestado por la policía. Cuando fue a liberarlo, fue tratada como si fuera una criminal. Algunas mujeres reunidas allí la insultaron diciendo, “ahora estos indios no deberían estar aquí, todos los indios tienen que morir. ¡La ciudad se respeta! Indios de mierda, no van a entrar aquí”.

Particularmente terroríficos y escalofriantes fueron los videos que se publicaron de los miembros de la nueva organización paramilitar de derecha llamada Resistencia juvenil cochala en Cochabamba que circulaban en motocicletas rodeando y atacando físicamente a las mujeres de pollera. Este nuevo grupo paramilitar con el pleno apoyo de la policía estaba perpetrando descaradamente ataques violentos contra sectores indígenas.

En el período previo al golpe, la violencia de este grupo ya había dejado 90 heridos y un muerto (Primera línea, 2019). Usualmente usaban bazookas artesanales, petardos, cadenas y varillas de madera con clavos, pero se cree que tienen armas letales, incluso granadas. Cuando la Asamblea Legislativa de Cochabamba se reunió para elegir a los miembros del Tribunal Electoral Departamental, un grupo de personas se reunió afuera para prestar apoyo al proceso para que las elecciones puedan llevarse a cabo a su debido tiempo. Pronto llegaron los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala para intimidarlos. Algunos de ellos fueron amenazados con violación y asesinato, y otros fueron atacados físicamente a la vista de la policía. Un video subido a la página de Facebook Soy Cochala que recolectó información sobre múltiples actos de violencia perpetrados por el RJC en esos meses de disturbios mostró grabaciones de video de personas sangrando después de ser atacadas por el grupo fascista paramilitar. El narrador del video acusó a este último de amenazar verbalmente y atacar físicamente a las personas con piedras y petardos en la plaza central de la ciudad de Cochabamba solo por ser de piel morena (Soy Cochalo, 2019). Algunos residentes de Cochabamba también les ofrecieron apoyo material a través de donaciones, lo que les ayudó a comprar motocicletas nuevas para continuar con sus campañas de terror racial (Opinion, 2019a).

4. Se puede encontrar esta declaración en <https://www.facebook.com/watch/?v=2336500366660251>

El vínculo entre lo racial y lo espacial se exhibió por completo después de las protestas contra el gobierno de Añez. Mientras las fuerzas policiales fueron expulsadas y las estaciones de policía tomadas en El Alto y barrios predominantemente indígenas de la ciudad de La Paz como Chasquipampa, los residentes de los barrios de clase media de La Paz como Sopocachi recibieron con entusiasmo y vitorearon a las fuerzas policiales cuando pasaron por las calles.

Se debe evitar el retorno de los salvajes al poder, dijo Añez en un discurso en el cual también tacha de injusto los juicios a los responsables del acto más repudiado de racismo en Bolivia que se dio un 24 de mayo de 2008, donde gente de las comunidades indígenas que llegaban a recibir al presidente Evo Morales pero no permitieron su arribo y empezaron a perseguir, golpear y humillar a los indígenas haciendo que se arrojaran, semidesnudos. En honor a esa fecha nace la ley Nro. 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, sin embargo, Añez con un descaro y un racismo que le brota de su cara claramente con rasgos indígenas y pelo teñido que sueña con orígenes nórdicos, sale a decir que los causantes de esos vejámenes a los indígenas ahora son héroes y que los salvajes no deben volver al poder (Pagina siete, 2020).

Represión política

El gobierno de facto nos trae a la memoria la muerte, tortura, desapariciones, exiliados, amenazas, detenciones ilegales, censura de medios de comunicación, persecución política, entre otras cosas que caracterizaban las dictaduras militares de la extrema derecha del siglo veinte. Una de las peores fue la dictadura de Luis García Mesa en la cual hubo 29 desaparecidos, 150 muertos, que, sumando heridos, torturados son 500 afectados. También acallaron medios de comunicación con atentados de bomba.

La persona fuerte de este golpe fue Luis Arce Gómez, quien paso a la historia por su frase en la que amenazaba a todo quien esté en contra del decreto ley de seguridad nacional que cortaba la libertad de expresión y pensamiento. “A partir de este momento todo aquel que contravenga el presente decreto ley debe andar con el testamento bajo el brazo”, fueron sus palabras de amenaza.

En la dictadura actual de Jeanine Añez lleva muchas similitudes con las dictaduras militares como la de García Mesa. Entre sus decretos que violan derechos básicos están, el Decreto Supremo 4078 que eximia de responsabilidad penal a policías y militares si actuaban con “proporcionalidad y legítima defensa”,

aunque por la presión social e internacional de derechos Humanos este decreto fue anulado, cumplió su papel a cabalidad ya que los miembros militares y policiales dispararon sin reparos a gente civil en Sacaba y Senkata.

Al estilo de Luis Arce Gómez, el ministro de gobierno Arturo Murillo en el gabinete de Añez hace gala de su prepotencia con frases como “vamos a ir a la cacería de Juan Ramon Quintana (ex ministro de gobierno de Morales), Raúl García Linera (líder del MAS), de las FARC, cubanos, venezolanos que estén viviendo aquí” aclarando que lo llama casería porque son animales.

Según las cifras oficiales publicadas por el Defensor del Pueblo Nacional, 32 personas han muerto y 770 han resultado heridas en la represión a las protestas contra el golpe de estado. El informe de la delegación argentina de derechos Humanos desnuda un escenario de sangre, terror y violación de los derechos de niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y hombres que en noviembre negro salieron a las calles pidiendo el respeto a la democracia y la dignidad del pueblo. Como al estilo de las peores dictaduras no les importo nada y arremetieron su odio contra el pueblo humilde que una vez más puso el pecho a la bala (Crónica, 2019).

El día 15 de noviembre, en una marcha pacífica cientos de campesinos y organizaciones sociales de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba se movilizaban rumbo a la ciudad de La Paz. En principio llegaron al puente de Huayllani donde la policía y militares esperaban cerrándoles el paso, luego de un dialogo pidieron poder pasar en paz, mientras los militares les pidieron tiempo para darles dicho permiso, empezó la gasificación de la policía y los militares empezaron a arremeter con balas a la población indefensa, desde tierra y helicópteros. El saldo de esta brutal represión de la policía y militares fue de 9 muertos, 115 heridos y 200 detenidos (Telesur 2019).

El 19 de noviembre, en el barrio de Senkata de El Alto, la historia se repitió trágicamente. En 2003, cuando los residentes bloquearon la refinería de gas ubicada en el vecindario cortando el suministro de combustible a La Paz, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada envió a las fuerzas armadas para masacrarlos. Los residentes de Senkata adoptaron la misma estrategia de bloquear el suministro de alimentos y combustible en 2019 y el gobierno de Añez envió al ejército a la refinería de gas. Según los sobrevivientes de la masacre, las fuerzas armadas comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los manifestantes sin previo aviso. Las cifras oficiales indicaron 9 muertes, pero los residentes del vecindario afirmaron que el personal militar se llevó los cadáveres para esconderlos dentro de la planta y que no fueron recuperados. Justo cuando llegaban las noticias de la masacre de manifestantes indígenas, las cisternas de gas fueron llevadas inmediatamente a la Zona Sur de La Paz (la parte más rica y blanca

de la ciudad), con una fuerte protección policial y militar, donde los residentes los recibieron con grandes aplausos. Al día siguiente, los vecinos marcharon al centro de La Paz llevando los ataúdes de los muertos acompañados por miles de personas de otros barrios de El Alto, La Paz y las provincias rurales. Fueron gasificados y dispersados, lo que los obligó a huir dejando los ataúdes abandonados en las calles por un tiempo.

Diez de los detenidos el 19 de noviembre en Senkata afirmaron haber sido maltratados, encañonados, torturados, quienes fueron amenazados de muerte si denunciaban estos hechos (Izquierda Diario, 2020). Sandra Carreño del frente popular Darío Santillan, parte de la delegación de derechos humanos de Argentina cuenta que ya al llegar fueron amedrentados y amenazados de muerte, se verifico persecución política de partidarios del MAS, 34 muertos, 1000 desaparecidos, de los cuales los familiares están siendo amedrentados para no denunciar. Hay niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, mujeres y hombres que con testimonios dijeron que se los llevaron en tanques y helicópteros, cuentan que se los pudo haber llevado a la ciudad de Cochabamba para enterrarlos en una fosa común dentro de una cárcel (Archivo de los medios, 2019).

Desde la llegada del gobierno de facto se ha dado una cacería de brujas con dirigentes y simpatizantes con el Movimiento al Socialismo, una muestra de eso es que policías vestidos de civil, ingresaron a la vivienda del vicepresidente del MAS en Yapacani, profesor Marcial Escalante quien se había reunido con Evo Morales en Argentina, culpándolo de terrorista, sin embargo, por la presión social fue liberado. Otro de los ejemplos de la persecución es la asistente personal de Evo Morales Patricia Hermoso, que fue arrestado por órdenes del ministerio público por un proceso de investigación por sedición y terrorismo contra el líder indígena. También se dieron allanamientos a domicilios de exautoridades del MAS, una de estas fue la vivienda de Juan Ramos Quintana ex ministro de la presidencia, quien es acusado de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo (Roja, 2019).

La libertad de prensa ha sido severamente restringida. Dos días después de subir al poder, la Ministra de Comunicación amenazó a los periodistas de que serían juzgados por sedición, lo que tuvo el impacto de silenciar a los medios de comunicación bolivianos. Ella dijo “lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, manifestó Lizárraga, a lo que añadió que “ya se tiene (identificados a estos comunicadores) y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes” (Telesur, 2019b).

Los periodistas de Argentina que cubrían las protestas se vieron obligados a abandonar el país y un corresponsal de *Al Jazeera* recibió gases lacrimógenos en la televisión en vivo. *Telesur* y RT, que comenzó a cubrir las protestas contra el gobierno,

fueron sacados del aire. Muchos de los periodistas extranjeros que en muchos casos fueron los únicos en mostrar los hechos en los conflictos del noviembre de 2019 tuvieron que resguardarse en sus embajadas por las amenazas de los que fueron objeto.

El 5 de octubre, Rene Esteban Guarachi, el periodista de la Radio TV Bartolina Sisa fue a cubrir las protestas de la población de la ciudad de El Alto contra la presencia de la presidenta de facto Añez que vino a festejar el aniversario de esta urbe, con gran contingente de policías, militares y francotiradores que custodiaban su visita, sin embargo, la ciudad se movilizó haciendo sentir su rechazo a su visita porque aún las heridas de la masacre de Senkata no están cerradas. Este periodista subió videos de la brutal represión a los vecinos alteños por parte de la policía y militares, es por este motivo que fue detenido. El denunció que fue objeto de un arresto ilegal, tortura, amenazas contra él y su familia en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Radio TV Bartolina Sisa, 2020).

El gobierno de facto cerro 53 radios comunitarias, en muchos de los casos los policías y militares destrozaron y quemaron alguna de ellas. Estas radios tenían la tarea de organizar, comunicar y difundir diversos temas relacionados a sus comunidades, dando a conocer también noticias del mundo (Contrainformación 2019). Los grupos de choque de la extrema derecha tomaron instalaciones de la confederación campesina CSUTCB y su radio comunitario con petardos, dinamitas y Molotov, amarrando a un árbol a su director (Chungara, 2020). Los grupos de choque también tomaron la radio Patria nueva y el canal de televisión Bolivia TV.

El 21 de noviembre, en el centro de La Paz fue detenido el estudiante de cine de la Universidad Mayor de San Andrés, Alexandro Fernández Mancilla, el mismo que fue increpado por periodistas de prensas quienes cuestionaron las grabaciones que realizaba a la marcha que bajo desde la zona de Senkata al centro de La Paz. Fernández capto varios momentos en los cuales se dieron arrestos a los vecinos alteños que se movilizaban. En el momento de su arresto él dijo “soy una persona que está indignada porque la prensa no está haciendo su trabajo. No hay nadie que este cubriendo estas movilizaciones” (Noticias FIDES, 2019).

La religión en la política

La religión, mueve mucha gente y es un tema sensible, por este motivo es una nueva herramienta que utiliza el neoliberalismo para restablecer su hegemonía en la región. Fue usada por Bolsonaro en Brasil, después se dio en Bolivia durante el golpe de Estado.

La nueva constitución promulgada por el gobierno de Morales declaró al estado como laico por primera vez en la historia del país. Además de eliminar el catolicismo del estatus de religión oficial del estado, el gobierno comenzó a promover activamente las prácticas rituales indígenas. La declaración del estado como laico fue un movimiento que oficialmente colocó las creencias indígenas y el catolicismo en igualdad de condiciones. Los especialistas en rituales indígenas estaban presentes en muchos eventos oficiales del gobierno. El gobierno también comenzó a celebrar el Año Nuevo Aymara y cada año en ese día, el Presidente Morales visitaba Tiwanaku, el sitio arqueológico precolombino más importante en Bolivia para una ceremonia oficial dirigida por especialistas en rituales indígenas.

Durante el golpe de estado, se evidenció la reacción de los sectores más conservadores de la iglesia a estas políticas. Después de la renuncia de Evo Morales, Fernando Camacho entró al palacio presidencial con la Biblia y el sacerdote que lo acompañó declaró que “la Biblia ha entrado de nuevo en el palacio y la pachamama nunca volverá”. Jeanine Añez también asumió el poder con la Biblia en la mano declarando “esta Biblia es muy significativa para nosotros, nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios”. Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez levantaron la biblia al estilo de la colonia cuando los españoles sometían a los indígenas, así mismo llegaron a reprimir a los indígenas que se manifestaron en contra del golpe, quemando la wiphala símbolo de los pueblos indígenas y matando a 37 personas en Senkata y Sacaba. Por un lado, evocan a Dios y por el otro destilan su veneno racista y discriminador, muestra de ello son los tuits de Añez el 20 de junio de 2013 “que año nuevo aymara ni lucero del alba, satánicos, a Dios nadie lo remplaza” (Cereceda y Oelsner, 2019).

Añez y Camacho no fueron los únicos en utilizar la religión con fines políticos. El candidato en las elecciones de 2019 Chi Hyun Chung, pastor evangélico y fundador de 70 iglesias presbiterianas en Bolivia, que se define ideológicamente como “capitalista cristiano” también construyó su discurso político alrededor de religión. Salió al escenario de los medios gracias a sus polémicas declaraciones⁵ como: “A la mujer tienen que educar para que se comporte como mujer”, “La mujer que habrá hecho para que el hombre reaccione de esa manera” (en referencia a la violencia domestica). También se refirió a temas sobre la población LGBT diciendo que necesitan tratamiento psi-

5. Se puede encontrar estas declaraciones en la página <https://www.youtube.com/watch?v=IYVEIoN8vZo>.

quiátrico. Lanzando un ataque frontal a los rituales y creencias con raíces indígenas, llamó “artimañas del diablo” a los ritos ancestrales que se hacen a la Pachamama (El Diario, 2019).

El fenómeno Chi que dirigió los obedientes rebaños cristianos a las urnas, entre otros votos ganados por sus declaraciones machistas y homofóbicas con los que logro sacar gran porcentaje de votos en los bastiones del MAS como El Alto donde sacó un 14.5% de votos y Tacacoma en la provincia Larecaja donde sacó un 31.6%. Eso resultó en la dispersión del voto que tradicionalmente iba al MAS y fue otro factor que creó las condiciones para el golpe del estado derechista.

Conclusión

El restablecimiento del neoliberalismo ha sido la prioridad de las elites oligárquicas y sus aliados imperialistas desde el giro a la izquierda en la región en el siglo XXI. La ruta a la derechización fue diferente en cada país. Sin embargo, se puede identificar unos patrones comunes como el uso instrumental de la religión en la política, el racismo y el afán de implementar políticas neoliberales después de tomar el poder. Por ejemplo, estudios sobre la derechización en Brasil muestran el papel que jugaron las iglesias evangélicas (Cruz 2019, Almeida 2019) y el antagonismo racial (Bledsoe 2019). Los impactos económicos de la neoliberalización agresiva en el contexto de derechización también ha sido un tema importante de análisis (Hopp y Lijterman 2019; da Fonseca y Nebot 2020). Sin embargo, a diferencia de los casos de Brasil, Argentina y Uruguay, en Bolivia la derecha no pudo ganar elecciones y tenía que usurpar el poder mediante el golpe de estado y recurrir a las políticas dictatoriales de represión política para aferrarse al poder.

Sin embargo, el golpe de estado y agresiones como la quema de la *wiphala* provocó resistencia colectiva de gran escala. La característica más notable de las movilizaciones actuales es el predominio de símbolos políticos indígenas como la *wiphala* y las referencias a Tupak Katari y Bartolina Sisa, líderes indígenas que organizaron una rebelión masiva en 1781 contra la colonia española. El 14 de noviembre, en una protesta en El Alto a la que asistieron cientos de miles de personas terminó con gritos de “¡Viva Tupak Katari!” y “Viva Bartolina Sisa!”.

Los manifestantes en las calles de El Alto afirman constantemente que no son representantes de ningún partido político. Entre los manifestantes hay algunos que desean que Evo Morales regrese a Bolivia. En un video capturado por Annur

TV , una anciana dijo: “Al presidente le han entregado como Cristo. Sin embargo, estamos contentos porque el presidente Evo no está solo. Él está vivo. No lo han matado como Tupak Katari” (Annur TV, 2019).

Sin embargo, hay otros colectivos e individuos a quienes el primer autor de este capítulo conoció de cerca en el transcurso de su investigación que han sido muy críticos con el gobierno de Morales pero se han unido a la lucha contra la quema de la *wiphala* afirmando con fuerza que no es un símbolo del MAS. Por ejemplo, *Comunidad Pukara*, un colectivo de intelectuales indianistas hizo una declaración pública exigiendo una estricta sanción legal para aquellos que no respetan los símbolos políticos indígenas como la *wiphala* y afirmando firmemente que no permitirían la pérdida de derechos establecidos para las naciones indígenas en la Constitución.

A medida que las fuerzas de derecha intentan restablecer su dominio, una nueva generación de jóvenes indígenas están en proceso de radicalización. Este es un resultado inesperado de este proceso. La generación más joven que no había sido testigo de las fuertes movilizaciones políticas antineoliberales en los primeros años del siglo XXI parecía estar menos interesada en la política que sus padres y abuelos que habían vivido épocas de discriminación racial severa y participó en luchas colectivas extraordinarias contra el mismo. La crisis actual ha despertado su conciencia y las implicaciones de este proceso pueden ser de gran alcance. La *wiphala* continúa flameando en los fuertes vientos del altiplano andino como nunca, ya que Bolivia se encuentra nuevamente en la encrucijada de la historia.

Referencias bibliográficas

- ALMEIDA, Ronaldo (2019) Bolsonaro presidente: conservadorismo, evangelismo e a crise brasileira. *Novos Estudos Cebrap*, Vol. 38, num. 1, pp. 185-213.
- ANNURTV (2019) Bolivia: Las mujeres de El Alto llegaron hasta La Paz. *Annur TV*, Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.facebook.com/watch/?v=2442706082618714>
- ARCHIVO DE LOS MEDIOS de los medios. 2019. Bolivia: Denuncian que hay 1.000 personas desaparecidas por el gobierno de facto. *Archivo de los medios*, Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://youtu.be/W7Qn0dllaDU>
- BEDREGAL, Juan (2020) Nuevo golpe a la economía: Reducción a la inversión pública. *Economía y más*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1476418559188828&id=171041499726547

- BEVERINOTTI, Javier (2018). “Development Challenges in Bolivia”. *Inter-American Development Bank*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Development-Challenges-in-Bolivia.pdf>
- BLEDSON, Adam (2019) Racial antagonism and the 2018 Brazilian presidential election. *Journal of Latin American Geography*, vol. 18, no 2: 165-170.
- CERECEDA, Rafael, OELSNER, R. y Natalia (2019) Bolivia: son verdaderos los tuits insultantes con los indígenas de Jeanine Añez. *Euronews*. Consultado el 16 de julio de 2020, desde <https://es.euronews.com/2019/11/15/bolivia-son-verdaderos-los-tuits-insultantes-con-los-indigenas-de-jeanine-anez>
- CHUNGARA, Danica (2020). La democracia de Añez silencia radios comunitarios y otros medios. *La izquierda diaria*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.laizquierdadiario.com.bo/La-democracia-de-Anez-silencia-radios-comunitarias-y-otros-medios>
- CONTRAINFORMACIÓN (2019) “Censura: El gobierno golpista de Añez cierra 53 emisoras comunitarias” *Contrainformación*, Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://contrainformacion.es/censura-el-gobierno-golpista-de-bolivia-cierra-53-emisoras-comunitarias/>
- CRÓNICA (2019) “Informe argentino en Bolivia denuncia torturas a niños y ancianos” *Crónica*, Consultado el 12 de abril de 2020, desde https://www.cronica.com.ar/info-general/Informe-argentino-en-Bolivia-denuncia-torturas-a-ninos-y-ancianos-20191130-0005.html?fbclid=IwAR3QK1N7xxxNF8_TW9-a10Tw-SXkwi3Ggmq9YMduz-CGta2Uq8NcN6dSHA8
- CRUZ OLMEDA, Juan (2019) ¿Por qué ganó Bolsonaro en Brasil? *Revista mexicana de sociología*, vol. 81, num. 3: 665-675.
- DA FONSECA, Francisco y PINEDA NEBOT, Carmen. Las expresiones de la derecha en Brasil y en España: conservadurismo, neoliberalismo y fascismo. *OXÍMORA Revista Internacional de Ética y Política*, 2020, no 16, pp. 63-84.
- DE MARVAL, Valentina y SCELZA, Bruno (2019). “Estos son los agresivos tuits contra “originarios” e “indígenas” que borró la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.” *AFP Factual*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://factual.afp.com/estos-son-los-agresivos-tuits-contrainformacion-e-indigenas-que-borro-la-presidenta-interina-de>
- DIARIO 26 (2019). “El desgarrador grito de una mujer”. *Diario 26*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.diario26.com/275032--el-desgarrador->

grito-de-una-mujer-yo-muero-por-bolivia-matenme?fbclid=IwAR3runGC7_
ctPBSEZ4RsDWwO4DjzQEXmprEs0_dhheZtm-eXjRqTzfl1INM

- EJU TV (2019) “Exfuncionarios de aerolínea Amazonas lograron «acomodarse» en el gobierno de Áñez”, *Eju TV*, Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://eju.tv/2019/12/exfuncionarios-de-aerolinea-amazonas-lograron-acomodarse-en-el-gobierno-de-anez/>
- EL DIARIO (2019) “Chi puede”: un pastor de origen coreano da la sorpresa en las elecciones de Bolivia tras una campaña homófoba y misógina. *El Diario*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde https://www.eldiario.es/internacional/evangelico-sorpresa-elecciones-Bolivia-Chi_0_955405211.html.
- FABREGER, Dalila (2020). “Áñez profundiza los ataques al medio ambiente y da paso inminente al Fracking”. En: *Izquierda Diario*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <http://www.laizquierdadiario.com.bo/Anez-profundiza-los-ataques-al-medio-ambiente-y-da-paso-inminente-al-Fracking>
- FABRICANT, Nicole (2009) Performative politics: The Camba countermovement in eastern Bolivia. *American Ethnologist*, vol. 36, num 4, pp. 768-783.
- FARTHING, Linda y KOHL, Benjamin (2014) *Evo's Bolivia: Continuity and change*. Austin, Estados Unidos: University of Texas Press.
- HICKS, Daniel, et al. (2018) Identity, patronage, and redistribution: Economic inequality in Bolivia under Evo Morales. *Journal of Economics, Race, and Policy*, vol. 1, no 1, pp. 26-41.
- HOPP, Malena, & Lijterman, Eliana (2019). Trabajo, derechos sociales y protección social en Argentina de la reconstrucción neoliberal. *Revista Katálisis*, Vol 22, No 1, pp. 66-79.
- LLALLAGUA NOTICIAS (2019) EL ALTO una marcha masiva baja a la ciudad de La Paz. *LLallagua Noticias*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.facebook.com/watch/?v=385780415457901>
- LOS TIEMPOS (2020) “Ministro destituye al gerente de BoA tras negarse éste a renunciar”. *Los tiempos*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200310/ministro-destituye-al-gerente-bo-a-negarse-este-renunciar>.
- NOTICIAS FIDES (2019) “Arrestan a estudiante de Cine de la UMSA que registraba la marcha de vecinos de Senkata” *Noticias FIDES*, Consultado el 12 de abril de 2020, desde https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/arrestan-a-estudiante-de-cine-de-la-umsa-que-registraba-la-marcha-de-vecinos-de-senkata-402625?fbclid=IwAR050lJ_QNxGFuuuTyOrT0mSbwh1A1RWbox5iMcczHkSdloXk7qFOFS4Pzc

- OBSERVATORIO DEL RACISMO (2008) *Racismo y regionalismo en el proceso autonómico*. La Paz: Defensor del Pueblo y la Universidad de la Cordillera
- OPINIÓN (2019a). “Entregan motocicletas a miembros de la Resistencia juvenil Cochala”. *Opinion*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/entregan-motocicletas-15-miembros-resistencia-juvenil-cochala/20191215154640741440.html>
- OPINIÓN (2019b) “Ministro del Gobierno de transición reivindica economía liberal y privatización”. *Opinión*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-desarrollo-gobierno-transicion-reivindica-economia-liberal/20191211192832740871.html>
- PÁGINA SIETE 2020. “Añez dice que se debe evitar que retornen los salvajes al poder”. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/4/anez-dice-que-se-debe-evitar-que-retornen-los-salvajes-al-poder-242435.html#!>
- PANDO, Amalia (2020). “La erupción de la corrupción en ENTEL”. *Cabildeo Digital*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde <http://www.cabildeodigital.com/2020/02/la-erupcion-de-la-corrupcion-en-entel.html>.
- POSTERO, Nancy (2017) *The Indigenous State*. Berkeley, Estados Unidos: University of California Press.
- POZAS, Luis Miguel (2017) Una década del gobierno del MAS en Bolivia: un balance global. *Barataria: revista castellano-manchega de ciencias sociales*, No 22, pp. 131-148.
- PRIMERA LÍNEA (2019). “Cochabamba: Grupos paramilitares utilizan bazucas y armas químicas”. *Primera línea*. Consultado el 12 de abril de 2020, desde https://www.primeralinea.info/cochabamba-grupos-paramilitares-utilizan-bazucas-y-armas-quimicas/?fbclid=IwAR10RWbXso2_OLapdNNTOR0Htf7A717AYfKmWsvFf0mbopf9BG9IQ1Bs9PE
- RADIO TV BARTOLINA SISA (2020). “Denuncian tortura brutal a trabajador de prensa de El Alto”. *Radio TV Bartolina Sisa*. Consultado el 12 de abril, desde <https://www.facebook.com/RadioTvBartolinaSisa/videos/504638950429339/>
- RAVINDRAN, Tathagatan (2020). Divergent identities: competing indigenous political currents in 21st-century Bolivia. En: *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, Vol 15 No 2.
- RAVINDRAN, Tathagatan (2019) Geographies of Indigenous Identity: Spatial Imaginaries and Racialised Power Struggles in Bolivia. *Antipode*, vol. 51, num 3: 949-967.

- RUSSIA TODAY (2019). “El Alto se levanta contra el gobierno interino autoproclamado de Bolivia”. En: *Russia Today*, Consultado el 12 de abril, desde https://www.facebook.com/watch/live/?v=2883040621706696&ref=watch_permalink.
- SOY COCHALO (2019). “Otro más de los violentos”. *Soy Cochalo*. Consultado el 12 de abril desde <https://www.facebook.com/watch/?v=468075457181236>.
- ROJA, Guacamaya (2019). Denuncian secuestros de dirigentes del MAS-IPSP. *Telegraph*, Consultado el 11 de abril 2020, desde <https://telegra.ph/La-fer%C3%B3z-cacer%C3%ADa-de-la-dictadura-boliviana-contr-la-disidencia-12-21?fbclid=IwAR3ddzZJeFLR36WhEsj4-eO5FhPHDQRftpgP856nXLB7Gp5pZSDGAutD1M>.
- TELESUR (2019a). “Gobierno de facto de Bolivia reprime manifestaciones contra el golpe de Estado”. *Telesur*, Consultado el 11 de abril 2020, desde <https://www.facebook.com/watch/?v=806942749745034>.
- TELESUR (2019b) “Gobierno de facto amenaza a periodistas” *Telesur*, Consultado el 11 de abril 2020, desde <https://www.telesurtv.net/news/gobierno-de-facto-boliviano-amenaza-periodistas-20191114-0040.html>
- TELESUR (2019c) “Bolivia: Realizan funeral para dirigentes cocaleros” *Telesur*, Consultado el 11 de abril 2020, desde <https://www.youtube.com/watch?v=teY4H1H-kV8&feature=youtu.be>

¿"BRASIL POR ENCIMA DE TODO"?: LOS NUEVOS
RUMBOS DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN AFIRMATIVA
EN BRASIL

Hildeberto Vieira Martins

Universidad Federal Fluminense | hvmartins@id.uff.br

Introducción

El artículo pretende discutir brevemente ciertos cambios políticos ocurridos recientemente en el Brasil, más específicamente en las políticas públicas de acción afirmativa, a partir del ascenso al poder de un modelo político conservador representado por la figura del nuevo presidente brasileño Jair Messías Bolsonaro, considerado por muchos analistas como defensor de un modelo político de derecha o de extrema derecha. La discusión se basará en un análisis histórico de las últimas décadas en torno a políticas de acción afirmativa dirigidas a la población negra en el Brasil. Pasaremos revista a algunos eventos que definieron y moldearon las políticas públicas de acción afirmativa brasileña y el contexto de la psicología brasileña en los últimos años, siendo pertinente mencionar ejemplos como la resolución CFP n° 018/2002, que tiene como prerrogativa el establecimiento de “normas de actuación para los psicólogos en relación al preconceito y la discriminación racial” y el manual técnico titulado “Relaciones raciales: referencias técnicas para la actuación de psicólogos/os”, de 2017. Esa resolución simboliza cuanto la temática racial ya estaba ocupando un significativo espacio en el debate nacional al inicio de los años 2000. Por otro lado, ese manual confirma la consolidación de ese debate en el ámbito de la psicología brasileña. No obstante, esas dos iniciativas del Consejo Federal de Psicología no serán objeto de análisis en este texto, sirviendo más como factor ilustrativo de la importancia y ampliación del debate racial en la psicología en Brasil, en los últimos años.

La discusión se inicia con un análisis comparativo entre las propuestas desarrolladas en el Brasil y Estados Unidos dirigidas a la creación de acciones afirmativas, con el objetivo de entender sus resultados (positivos y/o negativos) y a partir de esto comprender por qué tales políticas fueron promotoras de cambios sociales significativos con respecto a la cuestión racial y como aún hoy éstas son objeto de intenso debate en la sociedad brasileña y uno de los puntos de revisión en la política gubernamental de Jair Messías Bolsonaro.

La noción de políticas públicas o privadas dirigidas específicamente para la atención de un determinado sector de la población, que en razón de ciertos criterios (físicos, biológicos, sociales o culturales) haya sido discriminado en situaciones pretéritas, es un recurso que fue y es utilizado en varios países (Estados Unidos, Sudáfrica, India, etc.). Tal recurso es el resultado de la constatación histórica de que una determinada parte de la población (las llamadas “minorías”) sufrió o sufre algún tipo de discriminación, que la perjudica (social, psicológica, políticamente, etc.) y que exige formas de reparación o compensación política y/o social, o sea, las acciones afirmativas son categorizadas como una forma de discriminación positiva.

El objetivo principal de este artículo es ampliar la discusión de un tema tan relevante y actual para el campo de la psicología y reflexionar sobre los efectos negativos que el retroceso de tales políticas puede acarrear para una parte significativa de la sociedad brasileña en un momento de pérdida o disminución de derechos sociales y políticos.

Una breve revisión histórica de las políticas de acción afirmativa

En las últimas décadas vimos un creciente debate en torno al surgimiento de las políticas de acción afirmativa en el Brasil. Ese tema, que en la India, en los Estados Unidos o en Sudáfrica ya hacían parte de las discusiones políticas y sociales hacía mucho tiempo, viene siendo motivo de polémica por cuenta de las divergencias entre determinados sectores sociales brasileños sobre los posibles resultados (positivos y/o negativos) de su implementación como mecanismo de corrección de las distorsiones sociales producidas en razón de las evidentes desigualdades raciales brasileñas. Lo que se pretende con este trabajo es contribuir a una mayor comprensión de ese debate, y con esto auxiliar en la comprensión de los factores que determinan el motivo de que tales políticas sean objeto de intenso debate en la sociedad brasileña, siendo las más diversas críticas por cuenta de su implementación. Ese análisis preliminar se dará a partir de la revisión bibliográfica y documental (libros, artículos, relatorios, noticias de periódicos, etc.) sobre el tema.

El análisis del material analizado permitió comprender que la noción de políticas públicas o privadas dirigidas a la atención de una determinado sector de la población, que en razón de ciertos criterios (físicos, biológicos, sociales o culturales) haya sido discriminada en situaciones pretéritas, es un recurso que fue y es utilizado hace décadas en varios países (Estados Unidos, Sudáfrica, India, etc., como ya fue mencionado), pero que ese mismo artificio institucional presenta características singulares en lo que hace a su ejecución en la sociedad brasileña en función de nuestra definición de lo que es raza y racismo. Se constata que tal recurso institucional es el resultado de la movilización social y política que en las últimas décadas fue utilizada por una determinada parte de la población (las llamadas “minorías”) que sufrió o sufre algún tipo de discriminación, lo que provocó o provoca ciertos perjuicios (sociales, psicológicos, políticos, etc.) que exigen formas de reparación o compensación. En ese sentido, como fue dicho anteriormente, las acciones afirmativas son pensadas en este texto como una forma de discriminación positiva.

El debate en torno al tema de las políticas de acción afirmativa (la mayoría de ellas ejecutadas en Brasil por órganos públicos) parece polarizarse en la ya clásica dicotomía yo-otro, o sea, ese campo simbólico y subjetivo de disputa se constituye como un espacio privilegiado para el entendimiento de una discusión aún reciente en el área de las ciencias sociales y humanas: la construcción y afirmación identitaria y los valores y prácticas sociales que constituyen las identidades sociales de manera positiva o negativa. La pregunta “¿quienes son ellos?” resuena de las más variadas maneras, señalizando que el problema de la igualdad política y social entre los individuos (favorecedora de la garantía del ejercicio de una ciudadanía plena) continúa siendo un sueño romántico por ser aún distante para la gran mayoría de la sociedad, pero aún así se tornó un paradigma hegemónico en nuestra sociedad occidental moderna y capitalista, resultado de la herencia de los ideales iluministas y liberales y de la creencia burguesa en la igualdad y armonía entre sus participantes, marcados por la lógica de un contrato social normatizador, que sería garantizador del mantenimiento de los derechos y deberes políticos y sociales de esa sociedad. No obstante, lo que queremos apuntar más específicamente en este artículo de manera breve es la constitución histórica del concepto de acción afirmativa y como este se tornó bastante conocido y reconocido en las últimas décadas por la sociedad brasileña.

El modelo de acción afirmativa implantado en el Brasil fue criticado por algunos autores (Maggie, 2008; Fry et al., 2007), que consideran que tal política fue aplicada en el país sin el debido debate público por la sociedad brasileña y por eso siendo reconocida como una mera reproducción o importación del modelo norteamericano, siendo que según esos mismos autores, la forma en que la discusión fue tratada provocó una serie de distorsiones por cuenta de las diferencias entre esas dos sociedades y sus concepciones raciales (Maggie, 2008; Fry et al., 2007).

Una de las principales características de las políticas de acción afirmativa (públicas o privadas) es su carácter provisorio, que apunta a garantizar que grupos minoritarios que sufrían algún tipo de discriminación preserven la garantía de acceso a ciertos derechos de los cuales fueron privados en razón de su condición de desigualdad social, racial y/o política. Ese modelo fue conocido también por términos como “política de cuotas”, “acción compensatoria”, “reserva de puestos” o “cuota racial” (Feres Junior et. al., 2018; Moehlecke, 2002: 198). Ese término fue tomado de la *affirmative action* (acción afirmativa), que se origina en los Estados Unidos en la década de 1960, a partir de la Orden Ejecutiva nº 10.925, de 1961, propuesta en la gestión del presidente norteamericano John F. Kennedy.

Las acciones afirmativas son el resultado de luchas políticas de grupos llamados minoritarios y de su cuestionamiento al rol del Estado en establecer condiciones mínimas de igualdad entre sus participantes. Como las formas de discriminación varían de una sociedad a otra, existen acciones afirmativas de las más variadas¹ (leyes y orientaciones jurídicas, acciones voluntarias u obligatorias, programas de gobierno o privados etc.), así como un público al que se dirigen bastante heterogéneo y amplio (mujeres, negros, judíos, comunidad LGBTQ+, personas con necesidades especiales, etc.). No obstante, el modelo que en los últimos años es definitivamente el más conocido es el sistema de cuotas para el acceso a la enseñanza superior. Y es por eso que nuestro enfoque es direccionado al debate en torno al acceso de alumnos/as a la universidad. No obstante, es preciso señalar que nos interesa aún apuntar como ese movimiento está íntimamente vinculado a un debate recurrente en nuestra sociedad, y del cual la ciencia no escapa de dar su contribución, preocupada en responder a un dilema de interés para Brasil: ¿finalmente somos una “democracia racial” o perpetuamos un “racismo a la brasileña?” (IstoÉ, 2018; Maggie, 2008; Telles, 2003; Guimarães, 2001)?

La retomada de esa discusión, que a veces se desliza hacia un posicionamiento dicotómico, parece surgir en razón de una serie de estudios académicos que tuvieron como objetivo principal realizar la revisión de la cuestión de los varios sentidos de lo que es ser “negro” o “blanco” en la sociedad brasileña (Martins, 2018; Schucman, 2014; Reis, 2002; Ferreira, 2000). Ese debate no es reciente, y para algunos autores se remonta a los primeros movimientos de definición de nuestra identidad nacional (Martins, 2014; Lima, 2003; Mattos, 1998; Schwarcz, 1995).

En la elaboración de esa identidad (después de todo, “¿que es ser brasileño?”), se van produciendo estrategias y paradigmas (sociales, políticos, científicos, psicológicos) que permitieron la definición de un determinado lugar destinado a los agentes o grupos sociales considerados “problemáticos” y “peligrosos”. En Brasil, durante los primeros siglos de su formación, entre un momento de *espanto* sobre lo que era su “verdadera” población y la era de la *certeza* (el alcance de nuestro estado civilizatorio a la manera europea), la mirada respecto del “problema racial” cambia; lo que no se altera es la tentativa, siempre recurrente, de evitar el cambio y así garantizar la mantención del privilegio de unos pocos.

1. Un ejemplo de recurso legislativo de ese orden es la Ley 10.639, de 09 de enero de 2003, que torna obligatoria la enseñanza de la historia de África y de la Cultura Afro-Brasileña en los establecimientos de enseñanza fundamental y media, oficiales o particulares, en todo Brasil. Esa ley no fue la primera dirigida a construir la definición y afirmación de una identidad afrodescendiente. La misma se junta a otras políticas públicas colocadas en el *hall* de las políticas de acciones afirmativas en vigor en Brasil.

Las políticas de acción afirmativa: el modelo norteamericano y el modelo brasileño

En los Estados Unidos, el sistema de cuotas (reserva numérica) basado específicamente en el criterio racial pasó por una considerable revisión decorrente de decisiones tomadas por la Suprema Corte Norteamericana (Feres Junior et. al., 2018; Moehlecke, 2002). No obstante, varias universidades norteamericanas aún adoptan políticas de acción afirmativa con la intención de garantizar la mantención de la diversidad étnica y racial entre sus alumnos (Oliven, 2007). Utilizamos la noción de modelo en este artículo como un conjunto de ideas y prácticas que posibilitan un determinado funcionamiento estructural en una determinada sociedad, o sea, maneras de decir y hacer que definen lugares y papeles sociales para sus agentes. Por esto vamos a tratar aquí del modelo norteamericano como contrapunto al modelo brasileño y, por lo tanto, veremos a ambos como formas diferentes de abordaje de la cuestión racial y de los modos como esa cuestión afecta la vida de los miembros de esas sociedades.

Para entender el contexto histórico que posibilitó el surgimiento de acciones afirmativas en la sociedad norteamericana, es preciso considerar la realidad segregacionista y racista que marcó esa misma sociedad en el inicio de su proceso de construcción de una idea de nación supuestamente democrática e igualitaria. La división geográfica, política e ideológica entre “Norte” y “Sur” norteamericanos favoreció la creación de mecanismos legales de división de la sociedad norteamericana a partir de una polarización radical entre “blancos” y “negros”. Un ejemplo de ese proceso segregacionista puede ser verificado a partir de la decisión de la Suprema Corte Norteamericana, ya en 1896, sobre la constitucionalidad de la división de espacios entre “blancos” y “negros” en los transportes públicos (desde que hubiese la equiparación de lugares, o sea, el lema preconizado era “igual, más separado”) (Oliven, 2007: 31).

Ese movimiento estuvo presente durante décadas en algunos estados del Sur norteamericano y fue vulgarmente conocido por el término *Jim Crow*² (Brito, 2019). Las polémicas provocadas por ese modelo de exclusión o de limitación de determinados derechos a la población considerada negra sólo serían finalmente revisadas cuando el Congreso norteamericano, presionado por una serie de manifestaciones sociales,

2. El término *Jim Crow* se refiere a una serie de políticas de segregación racial que prohibían y criminalizaban la presencia negra en determinados espacios públicos, cercenando la libertad civil de los negros norteamericanos. Esas leyes substituyeron los “códigos negros” que estuvieron vigentes antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Ellas adquieren vigencia a partir de 1877 y sólo serán derogadas en la década de 1960.

aprobara el *Civil Rights Acts* (Ley de los Derechos Civiles), en 1964. No obstante, sus efectos reales sólo serán sentidos a lo largo de la década de 1960 en razón de una serie de eventos que se sucederán (los brutales asesinatos de Malcom X, en 1965; el de Martin Luther King, en 1968; el Plan Philadelphia, del Escritorio de Quejas de Contratos Federales, del Ministerio de Trabajo, en 1966; la creación del Partido Negro Revolucionário, llamado Panteras Negras, en 1966; las luchas de liberación de las colonias africanas, en las décadas de 1960) (Oliven, 2007). Y no podemos olvidar que el porcentaje de la población negra norteamericana (que gira en torno al 10% del total del país) actualmente es bien menor que la brasileña, que cuenta con 56,10% de personas que se declaran negras (“pretos” y pardos). En las últimas décadas, las investigaciones nacionales apuntan al crecimiento de la representatividad de la población negra en nuestro país, inclusive tornándose mayoría en esse período, y que se mantuvo constante en los últimos años (IBGE, 2010).³

Las políticas de acción afirmativa en los Estados Unidos se basan en la noción separada de raza, o sea, existe la presuposición *a priori* de que es posible distinguir nítidamente “blancos” y “negros” y por eso es también posible establecer de manera concreta una “línea de color” entre los miembros de esa sociedad. Por esto, en ese país aún se mantiene la idea de que si un individuo posee un ascendiente de origen africano, entonces él también es negro. Esa interpretación del “origen racial” de un afroamericano fue conocida como la regla de “una gota de sangre” (*one drop rule*). Podemos afirmar, de manera resumida, que las políticas de segregación racial existentes en los Estados Unidos difieren de las de Brasil en gran medida en función de esa interpretación de lo que los americanos entienden por “raza”, ou sea, para ellos el “origen racial” es un criterio objetivo y fundamental. Lo mismo no puede ser dicho do Brasil, en donde “raza” y color se mezclan para definir los lugares y papeles sociales de los brasileños. Siguiendo a Oracy Nogueira, podemos decir que en los Estados Unidos el preconceito es de “origen”, mientras que en Brasil el preconceito es de “marca” (Nogueira, 2007; 1998).

3. Según el Portal Brasil, la población brasileña estaba distribuída de esta manera en 2010: “En comparación con el Censo realizado en 2000, el porcentaje de “pardos” creció de 38,5% a 43,1% (82 millones de personas) en 2010. La proporción de “pretos” también subió de 6,2% a 7,6% (15 millones) en el mismo período. Ese resultado también señala que la población que se autodeclara blanca cayó de 53,7% para 47,7% (91 millones de brasileños)”. Cabe destacar que la población negra es compuesta de “pretos” y pardos en razón de los criterios de cuantificación del perfil étnico-racial brasileño. Retirado de: <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/07/02/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacao-brasileña>, visitado el 04/09/2018.

Veamos, com mais detalhes, como eso ocurre historicamente en Brasil. El tema de la cuestión racial en este país y su discusión por parte del Estado brasileño parece remontar al inicio de las primeras ideas sobre esa nación y la definición de cuales son los personajes de esa historia, o sea, cuales son los verdaderos ciudadanos brasileños (Martins, 2018; Ventura, 2000; Schwarcz, 1995). Ese debate, inicialmente político, contamina a toda una producción científica aún incipiente y que intentaba responder a los problemas que los intelectuales de la época consideraban fundamentales para que Brasil saliese de su condición de atraso en relación al Viejo Mundo y pudiese así tornarse un país “civilizado”.

La producción de una mirada científica sobre el africano (negro) y su cultura en Brasil está marcada por la preocupación de entender ese “otro” social. El discurso de la ciencia fue bastante utilizado como recurso para pensar las diferencias sociales y políticas surgidas a partir de la producción de la división, común en la época, entre “civilizados” y “primitivos”. Lo que parece estar en juego en ese movimiento de inclusión-exclusión es la construcción del “negro” en cuanto sinónimo de la alteridad, pasando a representar la parte más degenerada de esa misma sociedad en formación. Así, el “negro” sería visto como un signo de la imposibilidad de que Brasil alcanzase el éxito en tal proyecto civilizatorio. Esas visiones posibilitaron la formación de ideas pesimistas al respecto de ese “elemento” y de su papel junto a la sociedad brasileña. Esa “preocupación” demuestra como el papel del negro y su lugar social hace mucho es discutido por nuestra sociedad, sea para mostrar aspectos de una personalidad “peligrosa”, sea para “exaltar” sus características singulares. A pesar de todo esto, lo que no cambia es la necesidad de que esas prácticas sociales y culturales sean objeto de un discurso estigmatizador y segregacionista. La construcción de una visión negativa del “elemento negro” produjo y aún produce efectos sociales, más aquí no nos detendremos en el análisis de sus efectos en el debate de políticas afirmativas.

La elaboración de acciones afirmativas en Brasil es un fenómeno bastante reciente si comparado a la realidad norteamericana. Según Moehlecke (2002), el primer proyecto que puede ser considerado bajo esta rúbrica en el país fue la propuesta elaborada en 1968 por técnicos del Ministerio de Trabajo y del Tribunal Superior de Trabajo para la creación de una ley que obligase a la mantención de un porcentaje mínimo de empleados de color en las empresas privadas brasileñas (entre 10% y 20%, dependiendo del campo de trabajo), pero esa ley no llegó a ser finalizada o aprobada (Moehlecke, 2002: 204).

Ya en los años 1980 tenemos el proyecto de ley n. 1332, de 1983, de autoría del diputado federal Abdías Nascimento que proponía mecanismos de compensación para la población negra. Ese proyecto tampoco fue aprobado por el Congreso (idem:

204). Nuevas propuestas serían pensadas hasta que de hecho ocurra la implantación de la “política de cuotas” en la Universidad del estado de Río de Janeiro (UERJ) y en la Universidad Estadual del Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), siendo las primeras iniciativas de los años 2000 “a llamar la atención de la gran prensa y de la opinión pública” (Daflon, *et al.*, 2013).

El proceso político en Brasil en las últimas décadas

El proceso de redemocratización en la sociedad brasileña es un fenómeno bastante reciente en nuestra historia, ya que el aumento de la participación popular y política fue siendo retomado a finales de la década de 1970, lo que puede ser ejemplificado por la acción de determinados movimientos sociales, como las acciones sindicales ocurridas en el ABC paulista y también por el movimiento político dirigido a obtener la amnistía de los presos y exiliados políticos, y que acabó resultando en la aprobación de la Ley de Amnistía (Ley 6683/1979). Fruto de las luchas políticas perpetradas a finales de la década de 1970 y que avanzaron a lo largo de la década de 1980, el escenario nacional comenzó a cambiar, siendo posible vislumbrar la recuperación paulatina de derechos sociales y políticos que fueron anulados durante los 21 años de vigência de la dictadura civil-militar brasileña (1964-1985). Y en los últimos 35 años la sociedad brasileña fue elaborando y construyendo y consolidando un modelo democrático, aún frágil e incipiente, más necesario para dar continuidad al proceso de redemocratización en nuestro país.

No obstante, no es el objetivo de este artículo discutir la disputa entre las fuerzas progresistas y conservadoras en la búsqueda de un lugar de mayor representatividad en el poder Ejecutivo nacional (presidencia de la República), aún si esto viene a ser discutido indirectamente. Lo que nos interesa discutir aquí es como los últimos gobiernos presidenciales lidiaron con las políticas de acción afirmativa en lo que tiene que ver con el problema de las relaciones raciales brasileñas. Por esto, nuestra retomada del problema tendrá que ser breve y más dirigida a esa cuestión.

Muchos autores señalan que el hecho determinante para el cambio de postura del Estado brasileño sobre las relaciones raciales en el país fue la *III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas de Combate al Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intolerancia Correlata*, realizada en Durban, Sudáfrica, en 2001 (Feres Junior et. al., 2018; Maggie, 2008; Domingues, 2005), a pesar de que en 1996, durante el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, hubiese ocurrido el lanzamiento del Programa Nacional de los Derechos Humanos, que proponía “desarrollar acciones

afirmativas para el acceso de negros a los cursos profesionalizantes, a la universidad y a las áreas de tecnología de punta”. Según Sabrina Moehlecke, ese Programa incita a que el Estado brasileño formule “políticas compensatorias que promuevan social y económicamente a la comunidad negra”, así como a “apoyar las acciones de la iniciativa privada que realicen discriminación positiva” (Moehlecke, 2002: 207).

Es importante resaltar que siguieron a ese movimiento de discusión de los efectos sociales del racismo en Brasil otras conquistas significativas, como la creación de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, en 2003, que ganó *status* de ministerio en los primeros años de su gestión. También en el año de 2003 se produjo la promulgación de la ley que tornaba obligatoria la enseñanza sobre Historia y Cultura Afro-Brasileña en las escuelas (Ley nº 10.639/03); la Política Nacional de Salud Integral de la Población Negra, creada en 2009; el Estatuto de la Igualdad Racial (Ley nº 12.288/2010), en 2010 y la Ley de cuotas, en 2012 (Ley nº 12.711/2012). Toda esa legislación fue importante para consolidar el debate sobre el racismo y el papel del Estado brasileño en la eliminación de sus efectos negativos y excluyentes.

Para el desarrollo del análisis que formulamos en este artículo es importante discutir un poco más detenidamente la “Ley de cuotas”, o mejor, la Ley nº 12.711 de 2012, que instituyó la política de cuotas de cuño sociorracial en instituciones federales de enseñanza técnica de nivel medio y en las Instituciones de Enseñanza Superior, vinculadas al Ministerio de la Educación (MEC). Por ley, en su artículo 7º, esa política social prevé su revisión y sus efectos en el año de 2022. Ese artículo determina que será promovida la revisión del programa especial para el acceso a las instituciones de educación superior de estudiantes pretos, pardos e indígenas y de personas con deficiencia, así como de aquellos que hayan cursado integralmente la enseñanza media en escuelas públicas. Esa revisión fue implementada por la Ley nº 13.409/2016. Por cuenta de ese cronograma, la “Ley de cuotas” debe ser revisada aún en la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro.

Es en función de esto que es relevante preguntar cual es el proyecto político de ese gobierno para la cuestión de las relaciones sociorraciales y como esta será tratada en los próximos años. No podemos ignorar que fue el actual presidente brasileño quien durante su campaña presidencial definió la política de cuotas como “victimismo” o “coitadismo”,⁴ usando la expresión “Todo es coitadismo en el Brasil (sic)”. Por ese y otros comentarios preconceptuosos contra la población negra fue denunciado por la

4. Coitado se usa en relación a la lástima que inspira una persona, equivale al uso en español del término coloquial “pobrecito”.

Procuradoria General de la República (PGR) por crimen de racismo.⁵ Jair Bolsonaro no evitó repetir tales comentarios, aún frente a la crítica que recibió de varios sectores de la sociedad brasileña. Su visión sobre la cuestión racial parte del principio de que mantener políticas de cuotas raciales refuerza el preconceito, y por eso la misma sería equivocada al dividir a la sociedad en “blancos” y “negros”, y para él “Somos un sólo pueblo”. Esa concepción simplista de la realidad brasileña no hace nada más do que reproducir la vieja idea de “democracia racial”, idea ésta que já viene siendo descalificada desde la década de 1950 en trabajos de científicos sociales como Florestan Fernandes y Roger Bastide, por ejemplo (Maio, 2000).

Con el propósito de intentar comprender como las políticas sociorraciales son pensadas por el gobierno de Jair Bolsonaro haremos un análisis comparativo del documento “Propuesta de Plan de Gobierno” que presentaba en líneas generales el programa gubernamental de las dos listas electorales que disputaron el segundo turno de la elección presidencial brasileña de 2018, a saber, las propuestas de las listas “El Pueblo Feliz de Nuevo” (coalición de los partidos PT, PCdoB y PROS), representada por la candidatura de Fernando Haddad y Manuela D’ávila, respectivamente candidatos a la presidencia y vicepresidencia, y la Lista “Brasil encima de todo, Dios encima de todos”, de Jair Messias Bolsonaro, en esa época candidato por el PSL.

Breve análisis de las políticas sociales (acción afirmativa) en el gobierno de Jair Bolsonaro

La elección para el análisis del material de las dos candidaturas que disputaron en el Segundo turno electoral a la presidencia de la República fue una tentativa de comprender cuales serían las ideas-base dirigidas a las políticas sociales de la candidatura vencedora de la disputa electoral del 2018. Para esto, optamos por definir algunas palabras llave como forma de investigar cual sería el norte programático del gobierno electo

5. Esa forma peyorativa o despreciativa de discutir el asunto demuestra cuanto esa temática no es vista como relevante para el actual gobierno, siendo el objetivo su desmonte. Para una mayor comprensión de la repercusión de ese debate, ver las noticias vehiculizadas en las noticias, como las publicadas en sites como el <https://www.globo.com/> y <https://istoe.com.br/>: (<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/24/bolsonaro-diz-ser-contracotas-y-que-politica-de-combate-ao-preconceito-y-coitadismo.ghhtml>; <https://g1.globo.com/politica/noticia/pgr-denuncia-deputado-jair-bolsonaro-por-racismo.ghhtml>; <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/07/31/bolsonaro-diz-que-pretende-reduzir-cotas-nunca-escravizei-ninguem.htm>; <https://istoe.com.br/aqui-en-el-brasil-nao-existe-isso-de-racismo-diz-bolsonaro-en-fortaleza> 29/06/2018)

para el tratamiento de temas que involucrasen cuestiones de preservación de derechos sociales. Las propuestas de gobierno analizadas se encuentran disponibles en el site del Tribunal Superior Electoral (TSE).⁶

Para desarrollar nuestra investigación, utilizamos las siguientes palabras llave: derecho(s) humano(s); ciudadanía; negro(s) y negra(s); indígena(s); LGBTI+; cuota(s); quilombola(s); mujer(es); género(s). Tales palabras fueron seleccionadas en razón de su uso frecuente por parte de los militantes y participantes de los movimientos sociales, en trabajos académicos y en la legislación pertinente a los grupos minoritarios o para los acompañamientos sociales que fueron escogidos para el desarrollo de políticas compensatorias por cuenta de sus condiciones de vulnerabilidad de inasistencia política, económica y social.

El análisis que será hecho aquí no se adecúa, *strictu sensu*, a aquello que se caracteriza metodológicamente como análisis de contenido, sino que se trata básicamente de un análisis cuantitativo de determinadas palabras y de su ausencia, presencia y repetición en un documento específico (“Propuesta de Plan de Gobierno”) y que aquí es utilizado como forma de comprender los usos/no usos de esos términos como un índice explicativo-comprensivo de la relevancia/irrelevancia que las mismas ejercen y de la importancia que ocupan en la elaboración de una concepción programática o de “visión de mundo” relacionada a un determinado proyecto de gobierno. En el cuadro siguiente son presentadas la distribución y frecuencia de las referidas palabras.

Palabras clave	Fernando Haddad/Manuela D'ávila	Jair Messias Bolsonaro
Derechos humanos	26	1
Ciudadanía	14	1
Negros(as)	29	0
Indígena(s)	22	0
LGBTI+	20	0
Cuota(s)	3	0
Quilombola(s)	12	0
Mujer(es)	35	1
Género(s)	09	0

Elaboración propia

6. Ver <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propuestas-de-candidatos> , accesado en 12 de feb. 2019.

Es evidente, en una rápida verificación, la casi inexistencia de los términos seleccionados en la propuesta de gobierno de Jair Bolsonaro (Lista “Brasil encima de todo; Dios encima de todos”), tornándose ilustrativa, para una mejor comprensión de sus usos (relevancia, irrelevancia) discutir la mención de las palabras que aparecen en el documento analizado de esa candidatura. La palabra “derechos humanos” aparece una única vez, en el tópico “Conclusión” y sirve para elucidar como la cuestión de la violencia en el Brasil es ideológicamente distorsionada, ya que “la izquierda está preocupada con las muertes asociadas a las acciones policiales” y que “¡los números comprueban que el exterminio de brasileños es realizado por los criminales!”. En este sentido, esa palabra aparece como el octavo punto de la “Conclusión” de la siguiente manera: “Redireccionamiento de la política de derechos humanos, priorizando la defensa de las víctimas de la violencia.” (Brasil encima de todo, Dios encima de todos, 2018: 29-32).

La palabra “ciudadanía” aparece en el tópico “Para finalizar” vinculada a una visión más genérica de derechos humanos. Esa conclusión se debe al hecho de que la misma se menciona en el siguiente contexto “Todos esos objetivos [de la propuesta de gobierno] no valen sin rescatar la fraternidad, el respeto al prójimo, la ciudadanía, la responsabilidad con los más débiles y vulnerables.” (Brasil encima de todo, Dios encima de todos, 2018: 80). Y por fin, la última palabra mencionada es “mujer(es)” también sólo una única vez, cuando es discutido el porcentaje de víctimas de estupro en el Brasil y que es contextualizado de la siguiente manera: “Otro ejemplo de mudanza ideológica: ¡combatir el estupro de mujeres y niños/as!” (Brasil encima de todo, Dios encima de todos, 2018: 30). No obstante, como ocurre también con otras palabras, esa cuestión no es desarrollada ni problematizada de manera profunda, sin hacer un discernimiento del número de casos entre niños/as y adolescentes y que son mezclados de forma más general en la categoría universal de mujeres, sin considerar sus aspectos sociales y políticos.

El análisis del uso de las mismas palabras en el “Plan de gobierno” de la candidatura de Fernando Haddad y Manuela D’Ávila deja evidente el espacio que la cuestión de los derechos humanos ocupa en el “Plan” como un norte fundamental en el proyecto de gobierno futuro de esa lista. Veamos como los términos se presentan en el documento de la referida propuesta electoral

El término “derecho” es repetido diez veces a lo largo del “Plan”, apareciendo después en su “Sumario”, lo que demuestra su importancia para la organización de ese programa. Si sumamos las menciones de las palabras llave seleccionadas en nuestra investigación en el “Plan” de esa lista electoral, tenemos un total de 170 ocurrencias

com relación a las exiguas tres citaciones en el documento gubernamental presentado por la lista de Jair Bolsonaro. Es evidente, en este simple análisis cuantitativo, la importancia dada por una candidatura a las cuestiones relacionadas a los derechos humanos en perjuicio de la otra. No obstante, la intención de este artículo no es analizar exhaustivamente el programa de gobierno de la candidatura de Fernando Haddad y Manuela D'ávila sino señalar, aún de manera preliminar y que exigiría una profundización futura, el retroceso inherente a la llegada al poder de un gobierno ultraconservador y su evidente falta de compromiso político y social con las categorías sociales más vulnerables e insasistidas.

Es por esto que no se verifica ninguna mención sobre política de cuotas raciales en universidades y concursos públicos en el programa de gobierno de Jair Bolsonaro, a pesar de que él haya defendido cambios en esa política durante toda su campaña presidencial. En varias ocasiones el actual presidente se dijo a favor de la adopción de cuotas sociales para personas con menor poder adquisitivo, al contrario de las cuotas raciales, al menos disminuyendo el porcentaje que estaba siendo mantenido para éstas por los gobiernos anteriores.

Los avances históricos y sociales conquistados en los últimos años a través de las políticas afirmativas, más específicamente, las cuotas raciales fueron ignoradas o simplemente minimizadas en razón de la concepción de Jair Bolsonaro del papel del Estado brasileño y de la visión neoliberal que él deseaba implantar en el Brasil. Esa concepción está basada en una idealización de la realidad y que presupone que el individuo es poseedor por sí sólo de sus méritos o deficiencias, no incumbiendo al Estado interferir en como las relaciones entre esos individuos se dan, lo que también sustenta una visión económica privatista e individualista (“Estado mínimo”), que es de importancia para el rescate tan esperado del desarrollo del país y para el buen funcionamiento liberal de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.

Infelizmente, hasta la fecha de finalización del presente artículo (29/07/2020), el actual gobierno de Jair Mesías Bolsonaro no había producido aún un documento oficial sobre las acciones dirigidas a una política de promoción de la igualdad racial a pesar de mantener en el *Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos*, una secretaría que en su denominación se vincula en relación a la política racial, a la *Secretaría Nacional de Políticas de Igualdad Racial*, antigua *Secretaría Nacional de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial* (Seppir), y que actualmente es coordinada por la indígena Sandra Terena.

El *Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos* fue asumido por la ministra Damares Alves en el inicio de 2019, quien mantuvo la Secretaría bajo la tutela de ese Ministerio, ahora con su actual nombre. De esta forma, la Secretaría pasó a tener otro enfoque, más genérico, o como la propia ministra hizo cuestión de afirmar, ahora su enfoque sería “en la dignidad de la persona humana”⁷. Por lo que parece, ese argumento sólo corrobora el vaciamiento que la antigua Secretaría sufrió. Parece quedar evidente que no interesa más al actual gobierno debatir cuestiones dirigidas específicamente a los derechos y garantías sociales, políticos e individuales de los grupos considerados minoritarios (las “minorías sociales”), que históricamente fueron ignorados y excluidos por el Estado brasileño, pero que en las últimas décadas venían conquistando ciertas garantías sociales a través de la reivindicación que los movimientos sociales construyeron paulatinamente.

Lo que se vislumbra con la continuidad de esa línea gubernamental es el gradual abandono de esas políticas y del público a las que se dirige, tornando esas conquistas un recuerdo de la época de luchas y de los avances alcanzados por la sociedad brasileña cuando aún era posible confiar en que los derechos democráticos duramente conquistados no podrían sufrir nuevamente un retroceso.

Consideraciones finales

Lo que nos gustaría destacar en este breve relato histórico sobre las políticas de acción afirmativa es el repentino cambio en la dirección de su papel y de la importancia de la misma para el Estado brasileño. Aún es un poco temprano para afirmar categóricamente el fin de tales políticas, pero ya es posible constatar que ellas no son consideradas más por el actual gobierno brasileño como esenciales para comprender las vicisitudes inherentes a nuestra sociedad y, consecuentemente, formular los cambios capaces de tornar a nuestra sociedad menos preconceptuosa y racista.

Las observaciones aquí presentadas tuvieron el propósito de enfatizar el papel relevante que las políticas de acción afirmativa ocuparon como instrumentos capaces de transformar la manera en que la sociedad brasileña se ve y como de hecho ella realmente es, y es a partir de eso como poder cambiar la realidad social de determinada parte de su población. Esas políticas posibilitaron que paulatinamente la sociedad brasileña “se

7. Ese comentario fue presentado en un reportaje de la actual ministra el 17 de diciembre de 2018, antes de su asunción. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/secretaria-nacional-de-politicas-de-promocao-da-igualdade-racial>. Accedido el 12/09/2019.

acostase en el diván” y repensase su idea de “democracia racial” y cuanto esto favoreció la invisibilización del debate sobre los privilegios destinados a una parte de la población, que es vista y se define como “blancos” en nuestra sociedad. Si en este trabajo afirmamos la importancia y el papel de las políticas de acción afirmativa, esto se debe al hecho de comprender el mérito y el efecto histórico que tales políticas tuvieron para la minimización de los impactos negativos producidos por un Estado promotor de desigualdades sociales. Es por eso que se hace necesario acompañar sus desdoblamientos y avances a lo largo de la historia del país. El objetivo principal de este artículo es contribuir con ese debate y servir de incentivo para que nuevos trabajos puedan ser producidos y favorezcan una mayor discusión sobre sus efectos e impactos sociales.

Referencias bibliográficas

- BRASIL. Ministério da Educação. *Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003*. Brasília, DF. 2003. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Accesado el 20 de junio de 2019.
- BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS. *Propostas de governo dos candidatos ao cargo de Presidente da República. Candidatura de Jair Bolsonaro*. Recuperado de http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1534284632231.pdf. Accesado el 12 de feb. 2019.
- BRITO, Luciana da Cruz (2019). “Mr. Perpetual Motion” enfrenta o Jim Crow: André Rebouças e sua passagem pelos Estados Unidos no pós-abolição. *Estudos Históricos* (Rio de Janeiro), 32(66), 241-266. Epub 25 de abril de 2019. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.1590/s2178-14942019000100012>
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (2002). *Resolução CFP nº 018/2002*. Recuperado de https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2002/12/resolucao2002_18.PDF. Accesado el 13 de junio de 2019.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (2017). *Relações raciais: Referências Técnicas para a atuação de psicólogos/os*. Brasília: CFP. 147p.
- DOMINGUES, Petronio (2005). Ações afirmativas para negros no Brasil: o início de una reparação histórica. *Revista Brasileira de Educação*, (29), 164-176. <https://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782005000200013>. Accesado el 15 de mayo de 2019.

- FERES JUNIOR, Luiz Augusto (2018). *Ação afirmativa: conceito, história e debates*. Rio de Janeiro: EdUERJ. 208p.
- FERREIRA, Ricardo (2000). *Afro-descendente: identidade em construção*. São Paulo: EDUC; Rio de Janeiro: Pallas. 188p.
- FRY, Peter; M. y Maio, Marcos; Monteiro, Simone y Santos, Ricardo (orgs.) (2007). *Divisões perigosas: políticas raciais no brasil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. 363 pp.
- GUIMARÃES, Antonio Sergio (2001). *Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito*. Novos Estudos Cebrap, nº 2001(61), 147-162.
- ISTOÉ (2018). *Aqui no Brasil não existe isso de racismo*. Recuperado de <https://istoe.com.br/aqui-no-brasil-nao-existe-isso-de-racismo-diz-bolsonaro-en-fortaleza/> (29/06/2018). Accesado el 10 de junio de 2019.
- LIMA, Ivana Stolze (2003). *Cores, marcas e falas: sentidos da mestiçagem no Império do Brasil*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional.
- MAGGIE, Yvonne. Pela Igualdade. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, 16(3): 897-912, set-dez. 2008. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2008000300011/9143>. Accesado el 12 de mayo de 2019.
- MARCÍLIO, María Luiza (2002). *Prefácio*. In: O olhar Europeu: o Negro na iconografia brasileira do século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- MARTINS, Hildeberto. Vieira (2018). *Psicologia, raça e racismo: breve análise de suas bases históricas*. En F. T. Portugal; C. Facchinetti & A. C. Castro (Orgs.). *História Social da Psicologia*. Rio de Janeiro: NAU Editora.
- MARTINS, Hildeberto Vieira (2014). *Da África às faculdades de medicina: um estudo do elemento negro na sociedade brasileira*. In: *Identidade, branquitude e negritude - contribuições para a psicologia social no Brasil: novos ensaios, relatos de experiência e de pesquisa*. 1 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, v.1: 05-312.
- MATTOS, Hebe María (1998). *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil – Século XIX*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- MOEHLECKE, Sabrina (2002). *Ação afirmativa: História e debates no Brasil*. *Cadernos de Pesquisa*, (117), 197-217. <https://doi.org/10.1590/S0100-15742002000300011>. Accesado el 12 de mayo de 2019.

- OLIVEN, Arabale (2007). Ações afirmativas, relações raciais e política de cotas nas universidades: Uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. *Educação*, 30, 29-51. <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/539/375>. Acessado el 10 de mayo de 2019.
- RODRIGUES, Raimundo Nina (1935). *Os africanos no Brasil*. 2 ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional.
- RODRIGUES, Raimundo Nina (2006). *O animismo feticista dos negros baianos*. Apresentação e notas Yvonne Maggie, Peter Fry. Ed. fac-símile. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/Editora UFRJ.
- SCHWARCZ, Lilia (1995). *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil*. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras.
- SCHWARCZ, Lilia (2001) *Dando nomes às diferenças*. In: MESQUISA SAMARA, Eni: Racismo e racistas: trajetória do pensamento racista no Brasil. FFLCH/USP, 2001a.
- SCHWARZ, Roberto (2000). *Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro*. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34. 240 p. (Coleção Espírito Crítico).
- SCHUCMAN, Lia Vainer. *Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana*. Psicol. Soc., Belo Horizonte, v. 26, n. 1: 83-94, Apr. 2014. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822014000100010&lng=en&nrm=iso. Acessado el 17 abr. 2019. <https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000100010>.
- TELLES, Edward (2003). *Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica*. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Ford.
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. *Propostas de governo dos candidatos ao cargo de Presidente da República*. Recuperado de <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidato>. Acessado el 02 de feb 2019.
- VENTURA, Roberto (2000) *Estilo tropical: história cultural e polêmicas literárias no Brasil, 1870/1914*. São Paulo: Companhia das Letras.

SOBRE LOS AUTORES

Juan Guillermo Albarracin Dierolf

Formado en Ciencias políticas por la Universität Tübingen; PHD en Ciencia Política por la universidad de Notre Dame. Director del Programa de Ciencia Política. Universidad Icesi, Cali.

Correo electrónico: jgalbarracin@icesi.edu.co

Omar Alejandro Bravo

Psicólogo por la Universidad nacional de Rosario, Doctor en Psicología por la Universidad nacional de Brasilia. Director Maestría en Intervención Psicosocial, Universidad Icesi, Cali.

Correo electrónico: oabravo@icesi.edu.co

Mario Alberto Cajas Sarria

Graduación en derecho por la Universidad del Cauca, PHD en Derecho por la Universidad de Los Andes. Jefe Departamento de Estudios Jurídicos, Universidad Icesi, Cali.

Correo electrónico: mcajas@icesi.edu.co

Manuel Desviat

Psiquiatra, Universidad Complutense de Madrid y Hospital Universitario Marañón. Autor de numerosos libros y artículos acerca de la salud mental comunitaria y la reforma psiquiátrica. Consultor de numerosos organismos internacionales en este campo.

Correo electrónico: desviatm@gmail.com

Walter Omar Kohan

Filósofo por la Universidad de Buenos Aires; PHD en Filosofía en la Universidad Iberoamericana de México. Profesor titular de filosofía de la educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

Correo electrónico: wokohan@gmail.com

Maximiliano Lionel Duran

Filósofo por la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor Departamento de Filosofía, Universidad de Buenos Aires.

Correo electrónico: maximiliano1771@gmail.com

Tathagatan Ravindran

Economista por la Universidad de Calcuta; PHD en Antropología, University of Texas. Profesor Departamento de Estudios Sociales, Universidad Icesi, Cali.

Correo electrónico: travindran@icesi.edu.co

Tatiana Lizondo Díaz

Antropóloga de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz e integrante de la Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz, Bolivia.

Correo electrónico: tatichido@hotmail.com

Hildeberto Vieira Martins

Psicólogo, Universidad Federal Fluminense, Brasil; PHD en Psicología por la Universidad estadual de Río de Janeiro. Profesor Asociado de la Universidad Federal Fluminense, Brasil.

Correo electrónico: hvmartins@id.uff.br

OTROS TÍTULOS

- **Las Ciencias sociales: al otro lado del discurso neoliberal**
Jorge Mario Flores Osorio, Luis Huerta-Charles y Omar Alejandro Bravo (eds.)
DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/ee.5.2020>
- **9 propuestas de intervención psicosocial**
Omar Alejandro Bravo (ed.)
DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/bm.4.2020>
- **El Estado de la paz. Burocracias, memoria y afecto en el posconflicto colombiano**
Lina Fernanda Buchely
DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/tirant.2020.1>
- **Ensayos sobre la pandemia**
Ximena Castro-Sardi, Diego Cagüenías Rozo, Diana Patricia Quintero Mosquera, Juan José Fernández Dusso y Rafael Silva Vega (comps.)
DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/vc.4.2020>
- **Psicología política y procesos para la paz en Colombia**
Álvaro Díaz Gómez y Omar Alejandro Bravo (eds.)
DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/ee.2.2019>
- **Perspectivas multidisciplinares sobre las cárceles. Una aproximación desde Colombia y América Latina**
Omar Alejandro Bravo (ed.)
DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/escr.17.2018>
- **(In)seguridad, medios y miedos: una mirada desde las experiencias y las prácticas cotidianas en América Latina**
Brenda Focás y Omar Rincón (eds.)
DOI: <https://doi.org/10.18046/EUI/escr.12.2016>



Este libro se terminó de editar en noviembre de 2020. En su preparación, realizada desde la Editorial Universidad Icesi, se utilizaron tipos Adobe Garamond Pro en 12/15 y 11/14. La edición estuvo al cuidado de Adolfo A. Abadía.

Como reza el título de este libro, las nuevas derechas desafían gravemente las democracias actuales. En las páginas que siguen, un grupo de científicos sociales han sido capaces de analizar, a través de estudios de caso muy bien elegidos, algunas de las peligrosas consecuencias del ascenso de la extrema derecha y del (neo)fascismo en todo el mundo y, en el caso que nos ocupa, en América Latina. Solo así puede desenmascarse la falsa ambigüedad con que a veces se presenta, contribuyendo a un pensamiento crítico y a una conciencia crítica que resulta hoy de una necesidad imperiosa para sustentar y reforzar un imprescindible y militante sentimiento antifascista.

Rafael Huertas

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Madrid)

